

529

Juzgar a la Suprema Corte, VOLUMEN I

Eduardo José Torres Maldonado (Coordinador)



SERIE ESTUDIOS

BIBLIOTECA DE
CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Ciudad de México



Azcapotzalco



Alrededor de una decena de distinguidos y reconocidos profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana han escrito y ahora publican, con tenaz compromiso intelectual, un enjundioso estudio crítico y propositivo, en dos volúmenes o partes, al que han titulado *Juzgar a la Suprema Corte*. Los autores, la mayoría juristas, especialistas en el derecho, la sociología, el análisis político-jurídico y la economía y administración, han desarrollado una labor de investigación científica pionera en esta obra colectiva a todas luces veraz, significativa y trascendente para México y América Latina en el siglo xxi.

Elisur Arteaga Nava

Juzgar a la Suprema Corte

El caso de la Resolución sobre Anatocismo
y Sistema Financiero en México

Volumen I

COLECCIÓN DERECHO

SERIE ESTUDIOS

BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Juzgar a la Suprema Corte

El caso de la Resolución sobre Anatocismo
y Sistema Financiero en México

Volumen I

Eduardo José Torres Maldonado
(coordinador)

 **AZCAPOTZALCO**
COSEI BIBLIOTECA

Elisur Arteaga Nava
(presentación)

Gabriela Barrios Garrido, Carlos Durand Alcántara,
Mario Flores Lechuga, Guadalupe Huerta Moreno,
Agustín Pérez Carrillo, Rebeca F. Pujol Rosas
y Eduardo José Torres Maldonado,

2895841

UNIVERSIDAD
AUTONOMA
METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo



Universidad Autónoma Metropolitana

Rector General

Dr. José Lema Labadie

Secretario General

Mtro. Luis Javier Melgoza Valdivia

Unidad Azcapotzalco

Rector

Dr. Adrián de Garay Sánchez

Secretaria

Dra. Sylvie Turpin Marion

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Director

Dr. Roberto Gutiérrez López

Secretario Académico

Mtro. Gerardo González Ascencio

Jefe del Departamento de Derecho

Mtro. Antonio Salcedo Flores

Coordinadora de Difusión y Publicaciones

Dra. Elsa Muñiz García

Primera edición, 2008

Los derechos de reproducción de esta obra pertenecen al autor

© **Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco**

División de Ciencias Sociales y Humanidades

Coordinación de Difusión y Publicaciones

Av. San Pablo 180, Edif. E, Salón 004,

Col. Reynosa Tamaulipas, Deleg. Azcapotzalco,

C.P. 02200, México, D.F. Tel. 5318-9109

www.azc.uam.mx/socialesyhumanidades/link_publicaciones

ISBN de la obra completa: 978-970-31-1060-5

ISBN del volumen I: 978-970-31-1061-2

Se prohíbe la reproducción por cualquier medio
sin el consentimiento de los titulares de los derechos de la obra

Impreso en México/Printed in Mexico

Índice

Agradecimientos y comentarios generales.....	13
Síntesis curriculares.....	17
Presentación	
<i>Elisur Arteaga Nava</i>	25
Introducción. La resolución sobre Anatocismo de la SCJN: ¿Apertura de la Caja de Pandora? <i>Eduardo José Torres Maldonado, Gabriela Barrios Garrido</i> <i>y Carlos Durand Alcántara</i>	39
Capítulo I. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre anatocismo: ¿Realismo judicial o surrealismo político? Un análisis de los principios solemnes de la corte y la percepción social de los caricaturistas mexicanos. <i>Rebeca Florentina Pujol Rosas y</i> <i>Eduardo José Torres Maldonado</i>	67
Capítulo II. Justicia, derecho judicial y Humanismo. <i>Mario Flores Lechuga</i>	105
Capítulo III. Aplicación supletoria en el anatocismo. Improcedencia anticipada. Un análisis del modelo de Alchourón-Bulygin. <i>Agustín Pérez Carrillo</i>	121

ÍNDICE

Capítulo IV. El anatocismo visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿solución correcta? Aplicación de los modelos de argumentación de Stephen Toulmin y de la solución correcta de Ronald Dworkin. <i>Agustín Pérez Carrillo</i>	143
Capítulo V. Capitalización de intereses sobre intereses y sistema bancario. <i>Guadalupe Huerta Moreno</i>	167
Capítulo VI. Ética y justicia en el caso del anatocismo: un caso de neoliberalismo judicial. <i>Eduardo José Torres Maldonado</i> <i>y Rebeca Florentina Pujol Rosas</i>	205
Anexo 1, Volumen I. Propuesta legislativa para regular el anatocismo en el Código Civil del Distrito Federal, del año 2000. <i>Eduardo José Torres Maldonado</i> <i>y Rebeca Florentina Pujol</i>	255

In memoriam
Benito Pablo Juárez García



⇨ "*La verdad. Alarma: Lobo*", 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Agradecimientos y comentarios generales

EN MÉXICO, OCHO DE CADA DIEZ CIUDADANOS desconfía de los jueces, funcionarios y empleados encargados de procurar, impartir y administrar justicia; más de 80% de la población considera que los miembros del poder judicial son sobornables, y los vicios del sistema judicial en su conjunto provocan que 99 de cada 100 delitos cometidos queden en la impunidad, por un lado, a causa de la desconfianza y desesperanza ciudadana en la eficacia de las denuncias y, por otro, por el temor a las diversas irregularidades y peligros en la administración de justicia, prácticamente en todas las ramas del derecho, aunque algunas presentan situaciones más críticas, de acuerdo con estimaciones de las ONG y fuentes profesionales y académicas. La profunda e innegable crisis de la justicia y el poder judicial exige estudios serios y confiables, autónomos de los poderes públicos, sobre estos temas.

Durante los diez largos, vertiginosos y turbulentos años transcurridos a partir del 7 de octubre de 1998 hasta la fecha, muchas personas e instituciones brindaron apoyos para la realización de seminarios, conferencias, mesas redondas, cátedras y diálogos acerca del tema del anatocismo y el sistema financiero, así como sobre la crisis del poder judicial y la necesaria reforma del Estado en México. Agradezco a la UAM, mi *alma máter*, y, en especial a su Escuela o Departamento de Derecho, los apoyos parciales brindados; asimismo, agradezco a la UNAM, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre otras instituciones, la posibilidad de consultar material útil en

sus bibliotecas para la elaboración de esta investigación colectiva, de orientación crítica y constructiva.

Un reconocimiento al personal académico del Departamento de Derecho de la UAM, así como a los estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades y, en particular, a los alumnos y alumnas de la Licenciatura en Derecho de esta distinguida y bien amada universidad pública, por sus comentarios, críticas y opiniones interesantes y pertinentes acerca de los temas de esta obra.

Mi gratitud a las siguientes personas por su contribución para la realización de este libro: Aurora Torres Silva y Raquel Millán Montes de Oca, por su ayuda secretarial y técnica, en sus ratos libres; Alejandro García Maldonado, por su asistencia técnica parcial; Mayté Tamayo Diez Gutiérrez por su apoyo técnico; Daniela Herrera por la revisión técnica de los últimos borradores; por su asistencia técnica parcial, a la profesora Keyla Barrera García; por su bienintencionada y valiosa colaboración técnica y académica en el arreglo de las imágenes, fotos y presentaciones en seminarios sobre los temas de marras, mi reconocimiento para el licenciado Mario Loza Rodríguez así como para el ex diputado Pablo Franco González, quien como presidente del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, mostró siempre un activo interés institucional en la elaboración de investigaciones jurídicas novedosas, relacionadas con los temas contemporáneos del derecho y el cambio social.

Por último, *last but not least*, expreso mi sincero agradecimiento a los miembros de la Unión de Juristas de México, por su sincero y desinteresado apoyo parcial en los complejos procesos vinculados con los seminarios, mesas redondas y debates parlamentarios y ciudadanos, así como conferencias de prensa organizados para discutir los temas de esta investigación colectiva.

Obligado es también agradecer a todos los ciudadanos, profesionales, académicos, políticos, así como estudiosos del derecho y las ciencias sociales y las humanidades, que, a su vez, apoyaron en los trabajos, conferencias, seminarios académicos y profesionales del Comité Ciudadano Juzgar a la Suprema Corte, que tuve el honor de presidir y, a partir de entonces, adquirir públicamente el

compromiso de coordinar y publicar esta investigación colectiva como una obra crítica que, en su conjunto, implicó la colaboración directa e indirecta de más de un centenar de personas que me acompañaron amable y pacientemente en los diferentes sitios en los que se fueron exponiendo los resultados y avances de investigación durante la última década.

Durante el tiempo destinado al complejo proceso científico y administrativo de coordinación académica de esta investigación universitaria y los inevitables trámites administrativos y editoriales para que esta obra pudiera ver la luz, tuve tiempo para recordar los avatares de muchos científicos a lo largo de la historia —como Luis Pasteur, Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Albert Einstein y muchos otros—, y releí, con frecuencia, *El Quijote* de Miguel de Cervantes Saavedra; también releí, con fruición similar, *El viejo y el mar*, de Ernest Hemingway, el cual relata la pesca a mano limpia con cordel y anzuelo, y traslado de un gigantesco pez espada en una pequeña barca de altamar al puerto, cuya captura mereció una lucha brutal y sin cuartel entre el pescador y el pez, jugándose, ambos, la vida. Ya rumbo al puerto, remolcando al gigantesco pez, el viejo y curtido pescador observaba impotente cómo los *galanos* o tiburones se lanzaban a morder y depredar con ferocidad al monumental pez espada tan trabajosamente capturado, llevándose en sus hocicos grandes jirones de la carne del mismo, aprovechándose de la indefensión y remolque del pez, mientras las manos del pescador, desolladas por el cordel de pesca, aún latían con dolor recordando la tremenda lucha librada con el ente marino, verdadero titán de las profundidades. Finalmente, el viejo logra llegar inadvertido al puerto, con un magnífico, pero desnudo, esqueleto reluciente, amarrado a su frágil barca, aunque más grande el esqueleto que la embarcación y queriendo descansar para continuar con sus sueños, pensando, quizás, en la próxima pesca, después de tomar una taza de humeante café que le ofrece un compasivo muchacho y seguir por radio el próximo juego de béisbol.¹

¹ Esta investigación fue propuesta para su publicación en la UAM y en la Editorial Porrúa desde largo tiempo atrás, pero dado el contexto institucional ac-

A todos aquellos y aquellas que no menciono por la necesaria brevedad de estas líneas, pero que los tengo presentes, mil gracias por su aliento y apoyo valioso e indispensable en este largo y mítico laberinto y tenaz lucha por la verdad científica, la razón civilizatoria y la justicia social y democrática, que significó la elaboración de estos libros, con una reflexión final: al juzgar a la Suprema Corte estábamos seguros de que, al incursionar profesional, pionera y científicamente en este campo, al principio recibiríamos diversas críticas y la obra enfrentaría múltiples problemas para ser publicada, pero teníamos todavía confianza en el buen factor humano de las instituciones públicas y tenemos la certeza de que los tiempos cambiantes que vivimos nos dan y nos darán la razón, la oportunidad y la satisfacción de ver que nuestras luchas sociales comunes contra la corrupción y en defensa de la justicia, la verdad, la paz, la cohesión social, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, y el camino y la lucha conjunta por la libertad de expresión, contribuirán con un humilde granito de arena a la consolidación del Estado de Derecho y a la necesaria reforma del Estado y, en particular, a la reforma del Poder Judicial, piedra de toque de la transición democrática en nuestro amado país, continente y mundo, contribuyendo mínimamente a resolver una de las dos grandes mega crisis del nuevo siglo y milenio. Así sea. Y, parafraseando a Albert Einstein, diría, para concluir, lo siguiente: “Es imposible resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó”.

tual del país, así como trámites administrativos diversos y entendibles dificultades presupuestales y administrativas, la hicieron dormirse en la inercia laberíntica burocrático-política, además de diversos aspectos no académicos en los que no vale la pena detenerse más, no obstante que la obra fue aprobada y recomendada con elogios para su publicación. Al mismo tiempo, no faltaron oportunistas que, a sabiendas de que la obra estaba siendo demorada para su publicación, comenzaron a apropiarse de parte de los resultados parciales y conclusiones generales de esta investigación científica, cosa común, por cierto, en nuestra cultura. De cualquier modo, en este proceso científico, como en cualquier otro, lo importante era conducir la barca con la pesca obtenida al puerto de destino, con independencia de los peligros y obstáculos de la travesía.

Síntesis curriculares

GABRIELA BARRIOS GARRIDO

Es consultora jurídica independiente, enfocada al derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Coautora de *Internet y derecho en México*, McGraw Hill, 1998. Fue directora jurídica de PeopleSoft México, 2001-2003; socia fundadora de Juristel, Consultores Jurídicos en Telemática, 1998-2000; y gerente de Contratos Internacionales para Consorcio Red Uno, 1995-1998. Ha sido profesora en la Unidad de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM; Universidad Iberoamericana; Universidad del Mayab, Mérida, y Universidad Cristóbal Colón, Veracruz. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, de cuya Comisión de Derechos de la Mujer fue fundadora y presidenta; del Internet Society y del Consejo Editorial de Diario Reforma. Licenciada en Derecho por la UNAM, con especialidad en Derecho Norteamericano por la Universidad de Florida, Gainesville; diplomada en Arbitraje Comercial Internacional por la Escuela Libre de Derecho y la Cámara de Comercio Internacional. Ha realizado diversos estudios en redes y tecnologías de la información. Fellow del Americas Project, Universidad de Rice, Houston, y del Seminario de Salzburgo, Austria.

CARLOS DURAND ALCÁNTARA

Profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAM. Autor de diversos libros y artículos de investigación científica. Catedrático y conferencista en diversas universidades. Coordinador del Seminario de Investigación "Derechos humanos y marginalidad" del Departamento de Derecho de la UAM e investigador nacional nivel II del SNI-Conacyt.

MARIO FLORES LECHUGA

Licenciado en Derecho por la UAM-A, 1982. Master en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, 2000. Curso de especialización en Derecho Constitucional, Procesal Penal, Amparo Administrativo, Penal, Civil y Laboral, Administración de Recursos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, cómputo, redacción y gramática en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1992. Diplomado Universitario en Amparo con el título "La procedencia del juicio de garantías en contra de la determinación del ministerio público sobre el no ejercicio de la acción penal" como trabajo terminal por la Universidad Iberoamericana, 1993. Curso Taller "Tendencias actuales en la gestión del personal docente dentro de la educación personal" para coordinadores de estudios de la Unidad Azcapotzalco como curso de formación docente por la Universidad Autónoma Metropolitana, 2000. Curso de actualización "Formulación de objetivos y evaluación del aprendizaje" por la UAM-A, 1999. Curso de actualización "Introducción a los procesos de enseñanza y aprendizaje" por la UAM-A, 1999. "Aprender a aprender" por la UAM-A, 1996. Desempeñó el cargo de Jefe del Departamento de Derecho en la UAM-A, (2001-2005). Catedrático en la UAM-A en las materias de Amparo I y II y Garantías y Amparo en Materia Penal. Autor del capítulo "Justicia, derecho judicial y humanismo. Trascendencia jurídica y social de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del anatocismo". Colaborador de la *Revista Alegatos*.

MARÍA GUADALUPE HUERTA MORENO

Licenciada En Administración por la UAM-A. Graduada con la medalla al Mérito Académico. Maestra en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Graduada con Mención Honorífica, y Reconocimiento Especial por la realización de sus Estudios de Maestría, por parte del doctor Juan Ramón de la Fuente, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiante del Doctorado en Economía de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Diplomada en Econometría por el ITAM. Segundo lugar del Premio Nacional de Administración Pública 2000, del Instituto Nacional de Administración Pública.

Autora del libro *Reforma del Estado y modernización económica. La estrategia de privatización en el subsector eléctrico. El caso de la CFE*, editado por el INAP. Co-autora de diversos libros y artículos de divulgación; además, ha sido ponente en actos académicos nacionales e internacionales. Es profesora Titular C de tiempo completo, en el Departamento de Administración y jefa del Área de Estado, Gobierno y Políticas Públicas del mismo departamento, en la UAM-A.

AGUSTÍN PÉREZ CARRILLO

Profesor del Departamento de Derecho de la UAM. Exsecretario de Estudio y Cuenta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Publicación de artículos de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional. Ensayos y colección de artículos sobre prevención delictiva y política legislativa.

REBECA F. PUJOL ROSAS

Licenciada en Derecho por UAM-A, 1979. Maestría en Ciencias, con especialidad en medio ambiente y desarrollo en el CIIEMAD del IPN, 1995-1998. Especialidad en Amparo en el Instituto de

Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde obtuvo mención honorífica. Diplomada en Derecho Familiar, Universidad Iberoamericana, 1990. Diplomada en Derecho Civil, en el Instituto Superior de Ciencias Jurídicas. 1991. Diplomada en Comercio Internacional, UAM-A, 1992. Diplomada en Derecho Tributario, ITAM, 1993. Diplomada en Métodos de la Investigación Científica, 1997. Diplomada en Negociación internacional y diplomacia, UAM-A, 1998. Diplomada en Métodos Específicos de la Investigación Jurídica, UAM-A, 1999. Catedrática titular "B" por oposición de tiempo completo del Departamento de Derecho de la UAM-A, de las materias de Amparo I y II, Obligaciones civiles, Teoría del contrato, Garantías y amparo en materia penal, Pruebas en materia penal y Derecho procesal penal. Catedrática definitiva de la Maestría en Derecho fiscal en la Universidad del Valle de México, campus Tlalpan, en las materias de Derecho Procesal Fiscal, Amparo en materia fiscal, Introducción a la teoría jurídica, y Metodología de la investigación jurídica. Catedrática del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en los cursos que se imparten para candidatos a jueces. Fue abogada postulante, consultora y asesora jurídica en asuntos municipales. En la actualidad se desempeña como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de enero a agosto de 2000 en la 3ª Sala Civil y de septiembre de 2000 a la fecha, en la 3ª Sala Familiar de dicha institución. Autora de diversos artículos en revistas especializadas como *Alegatos*, *Anales de Jurisprudencia* y revista de UNICEF. Conferencista nacional e internacional.

EDUARDO JOSÉ TORRES MALDONADO

Abogado y sociólogo. Analista político en diversos medios de comunicación. Licenciado en Derecho por la UAM-A (1982) y Maestro en Derecho Económico por la UAM-X (1989). Doctor en Filosofía (Ph. D.) con especialización en Sociología por la Universidad de Texas en Austin (1997), con el apoyo de las becas y créditos Fulbright, Farmer, Banxico y Conacyt. Especialista en

Derecho Constitucional (1988) y especialista en Amparo (1986) por la Universidad Panamericana. Especialista en Negociación Internacional y Diplomacia por la UAM-A (1998). Especialista en Negociación (1993), Desarrollo Económico y Migración (1990-1997) por la Universidad de Texas en Austin. Becario en estudios de posgrado en el Doctorado en Ciencias Sociales, especialización en Ciencia Política, en la Universidad Iberoamericana (1988-1989). Becario Fulbright en estudios de doctorado en la Escuela de Relaciones Laborales e Industriales de la Universidad de Cornell, Ithaca, N.Y. (1989-1990). Especialista en Teoría y Práctica Parlamentaria por la UAM-I (1998). Investigador Nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Profesor investigador Titular "C" por oposición, de carrera, del Departamento de Derecho de la UAM-A, y académico desde 1980. Ex becario Fulbright, 1990-1993. Mención honorífica en Derecho Constitucional por la Universidad Panamericana, 1989. Medalla al Mérito Universitario 1989 por la UAM. Premio Nacional de Economía, Q. Roo, 1994. Reconocimiento honorífico binacional "Solidaridad" 1996-1997, por el Centro de Estudios México de la Universidad de Texas en Austin. Presidente del Comité Ciudadano "Juzgar a la Suprema Corte" (2004-2005). Candidato ciudadano independiente para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia (2003 y 2004), propuesto por grupos académicos y profesionales y ONG. Autor de más de media docena de libros y más de 40 artículos de investigación científica. Entre los libros se encuentran: *Tiempo compartido en México. Un estudio de derecho económico y política legislativa*, México, UAM; *Diacrónica del Caribe mexicano: Una historia de Q. Roo y Cancún*, México, UAM; con Jaime Ramírez (coords. y coautores) *Reforma del Estado, políticas públicas y problemas socioeconómicos del México contemporáneo*. México, UAM; con Octavio Loyzaga (coords. y coautores), *Reforma laboral y globalización en México: una visión in dubio pro operario*. México, Porrúa, 2007.



⇨ *"Puro Hueso"*, 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico
Torresagaton. Crestomatía.

Presentación

Elisur Arteaga Nava*

DE LA NATURALEZA DE ESTAS LÍNEAS

ALREDEDOR DE UNA DECENA de distinguidos y reconocidos profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo la acertada coordinación del doctor Eduardo José Torres Maldonado —abogado y sociólogo—, han escrito y ahora publican una obra científica, de investigación colectiva, en dos volúmenes, a la que han titulado *Juzgar a la Suprema Corte: el caso de la resolución sobre anatocismo y sistema financiero en México* (primer volumen) y *Juzgar a la Suprema Corte: estudios de dialéctica, jurisprudencia política y derecho económico acerca de la resolución de la Suprema Corte sobre anatocismo y la crisis del Poder Judicial* (segundo volumen).

Los autores, en su mayoría juristas, especialistas en el derecho, la sociología, el análisis político-jurídico y la economía y administración, han considerado pertinente que preceda a su obra una presentación y un apunte introductorio, ésa es la razón de estas notas. Estas líneas se limitan a hacer una breve presentación de sus autores y del material. Ciertamente, contienen algunas consideraciones jurídicas respecto del tema del anatocismo; ellas, por provenir de quien vienen, no tienen mayor valor, aunque se cues-

* Constitucionalista, catedrático en diversas instituciones y consultor jurídico en distintas ramas del Derecho.

tiona su constitucionalidad y legalidad; ellas, en el mejor de los casos, son, en realidad, intrascendentes: lo son desde el momento en que el más alto tribunal se ha pronunciado al respecto.

A primera vista hacer una presentación como nota introductoria de una investigación parecerá fácil. Sin embargo, ya adentrados en dicha tarea, la misma se torna difícil. No es para menos: por una parte, está el afecto y respeto que merecen los autores de la obra y, por la otra, la importancia que, en la vida y, en lo particular, en la economía de los mexicanos, tiene el tema objeto de ella.

Puesto que por algo hay que comenzar, en este —que no es un prólogo—, terminó por prevalecer la parte afectiva y profesional, es decir, la estimación que se guarda a sus autores como personas y el respeto que merecen como académicos e investigadores. La sustancia, a pesar de su trascendencia, terminó por ser preterida. La importancia de la materia como uno de los grandes problemas nacionales del México contemporáneo es, por otro lado, indiscutible; pero de eso se ocupan los autores de esta obra trascendental.

DE LOS AUTORES

En el primer volumen de esta obra colectiva, la meritoria introducción "Anatocismo, Estado de Derecho y gatopardismo judicial", es escrita por el doctor Eduardo José Torres Maldonado, la licenciada Gabriela Barrios Garrido y el doctor Carlos Durand Alcántara, académicos de reconocido prestigio. Gabriela Barrios es abogada independiente, catedrática, coautora del libro *Internet y derecho en México*, y especialista en varias ramas jurídicas, entre ellas, las de tecnologías de la información y las comunicaciones. Eduardo Torres es miembro del Seminario de Investigación "Derechos humanos y marginalidad" del Departamento de Derecho de la UAM, e investigador del Sistema Nacional de Investigadores-Conacyt. Carlos Durand es coordinador del Seminario de investigación "Derechos humanos y marginalidad", Profesor-investigador del Departamento de Derecho e investigador nacional del SNI-Conacyt.

La coautoría del primero y sexto capítulos de esta primera parte, titulados “La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre Anatocismo: ¿realismo judicial o surrealismo político? Un análisis de los principios solemnes de la Corte y la percepción social de los caricaturistas mexicanos” y “Ética y justicia en el caso del Anatocismo: un caso de Neoliberalismo Judicial”, respectivamente, es atribuible a la maestra y magistrada Rebeca Florentina Pujol Rosas y al licenciado y maestro en Derecho y doctor en Sociología Eduardo José Torres Maldonado, profesores investigadores del Departamento de Derecho, que, no obstante su juvenil madurez, ya gozan de un generalizado reconocimiento en el medio universitario y el foro. Ambos juristas son egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de posgrado en acreditadas instituciones de educación superior, nacionales y extranjeras en el caso del Dr. Torres.

Rebeca Pujol ha sido una extraordinaria, docta y aguerrida litigante en diversas materias jurídicas en el país y, hoy en día, es distinguida magistrada en materia civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Eduardo Torres, el jurista investigador del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido, además, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la UAM en 1985, coordinador del eje de estudios “México, economía, política y sociedad” de la UAM-A por un lustro, y asesor jurídico de la Presidencia de la República y director de Consultoría y Convenios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Sectur en el sexenio de Miguel de la Madrid, además de ex becario Fulbright y asesor parlamentario de los congresos federal y local del Distrito Federal. Cabe destacar, también, que recientemente ha sido propuesto, en los años 2003 y 2004, como digno candidato ciudadano independiente a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ONG y grupos profesionales y académicos. Asimismo, fue digno candidato a rector de Unidad de la UAM-A y pionero candidato independiente a rector general de la UAM durante el periodo 2005-2009.

Eduardo Torres y Rebeca Pujol han desempeñado importantes cargos en diversas instituciones y cuentan en su haber con la elaboración y publicación de importantes obras relacionadas con el derecho, ambos, y la sociología y la economía, el segundo.

El maestro Mario Flores Lechuga, quien se ha desempeñado como jefe del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, anteriormente actuó como coordinador del mismo Departamento; en ambos puestos, ha dado muestras de moderación; es un profesor e investigador que, desde hace ya algunos años, ha venido impartiendo la cátedra de Amparo. En respeto a su conocida modestia, no se abunda más respecto de su persona; él es el autor del apartado titulado: "Justicia, derecho judicial y humanismo. La trascendencia jurídica y social de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del 'anatocismo'".

De Agustín Pérez Carrillo, un acreditado maestro, investigador y alto funcionario de la Universidad Autónoma Metropolitana, mucho es lo que se puede decir; se trata de un reconocido miembro de la comunidad universitaria, a ella pertenece desde hace ya varias décadas. En el Departamento de Derecho se le tiene como uno de sus pilares más importantes. Ha publicado un sinnúmero de libros, estudios y ensayos. Ha pertenecido y pertenece a las comisiones y consejos editoriales más importantes. Sus opiniones son escuchadas con respeto. Su colaboración está referida a los capítulos titulados "Aplicación supletoria en el Anatocismo. Improcedencia Anticipada. Un análisis del modelo de Alchourrón-Bulygin", y "El Anatocismo visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿solución correcta? Aplicación de los modelos de argumentación de Stephen Toulmin y de la solución correcta de Ronald Dworkin", respectivamente, que constituyen —entre otros— dos de los más interesantes estudios modélicos técnico-jurídicos de estos libros.

La maestra María Guadalupe Huerta Moreno es profesora titular en el Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco; en él goza de un reconocimiento generalizado como docente e investigadora; es autora de un gran número de estudios sobre su especialidad, la economía y la administración; además ha recibido importantes reconocimientos a sus investigaciones, entre ellos un premio del INAP. Ella es la responsable del capítulo "Capitalización de intereses sobre intereses y sistema bancario".

Ahora bien, respecto del segundo volumen o segunda parte de esta obra, coordinada también por el doctor Eduardo Torres, éste es

coautor, con las investigadoras Susana Núñez y Gabriela Barrios, de la interesante introducción "Religión neoliberal, surrealismo financiero-jurídico y reforma judicial", así como autor del primer capítulo "La crisis del Estado de Derecho y el sistema de mercado debido a la aparición del fantasma del anatocismo y el imperio de la religión neoliberal. Reflexiones dialécticas, de jurisprudencia política y derecho económico para juzgar a la Suprema Corte de Justicia"; coautor del capítulo segundo "La resolución sobre anatocismo y la ruptura del contrato social"; coautor del capítulo tercero "El anatocismo como 'el mejor negocio del mundo' —léase fraude— y aspectos críticos de la justicia y los derechos humanos"; autor del capítulo cuarto "La increíble y triste historia de la cándida viuda Reyes y los políticos-financieros-jueces desalmados: la confianza en el Poder Judicial, el *Frankenstein* y *boomerang* jurídico— financiero del anatocismo y el litigio Celia Reyes vs. Bital", y autor del capítulo quinto y conclusivo de esta obra, titulado: "¿Elección o designación de los jueces? Rebasando a Rabasa: reflexiones sobre tres siglos de selección de las élites judiciales en el sistema jurídico político mexicano", así como coautor con Rebeca Pujol, de la "Propuesta legislativa sobre el anatocismo", presentada y aprobada en el foro convocado por los tres poderes públicos del Distrito Federal, para el Anteproyecto del Nuevo Código Civil para el Distrito Federal, en el año 2000.

Por otra parte, la doctora Susana Núñez, coautora también de la introducción del segundo volumen, se ha desempeñado como secretaria académica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-A, además de haber ocupado diversos cargos universitarios. Susana Núñez es doctora en Derecho por la UNAM, investigadora nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores, y distinguida catedrática y especialista en Derecho Internacional en el Departamento de Derecho de la UAM.

El maestro Luis Figueroa Díaz es coautor del segundo capítulo del segundo tomo, titulado "La resolución sobre anatocismo y la ruptura del contrato social". Ha sido jefe del Departamento de Derecho de la UAM, dedicado funcionario académico, maestro en Derecho y activo miembro de la comunidad jurídica universitaria, así como especialista en derecho económico.

El maestro Juan Antonio Castillo López es coautor del capítulo

tercero, “El anatocismo como ‘El mejor negocio del mundo’ —léase fraude— y aspectos críticos de la justicia y los derechos humanos”. Se ha desempeñado como profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAM, coordinador del Bufete Jurídico Popular de la UAM, y litigante y catedrático en derecho procesal, entre otras muchas actividades profesionales y académicas.

Los anexos de estos libros fueron producidos, coordinados y revisados por el doctor Eduardo Torres. Los anexos pretenden cumplir con un destino educativo y una información pedagógica respecto del tema investigado, excepcionalmente útil para los estudiosos del derecho y las ciencias sociales y humanidades. Por la naturaleza interdisciplinaria de esta obra, es indudable su utilidad académica, así como también es relevante su misión didáctica, cultural y educativa y su pionera visión progresista y pertinencia profesional y científica en el México del siglo XXI.

Como se observa, bajo la batuta, dirección y coordinación acertada del doctor Eduardo Torres, estos dos magníficos volúmenes o partes han visto la luz, después de más de prácticamente una década de titánicos esfuerzos académicos, producto de diversos seminarios *ad hoc* del departamento de Derecho y otras instituciones, coordinados también por este jurista, para producir una obra científica crítica que, con seguridad abrirá una necesarísima polémica, indispensable para provocar un cambio social, cultural y jurídico en la legislación y el Poder Judicial, y construir mejor el Estado de Derecho en México. Cabe añadir, como dato complementario a esta presentación, que el doctor Torres ha presidido más recientemente, en el último lustro, el Comité Ciudadano y profesional “Juzgar a la Suprema Corte”.

Esta obra jurídica es sin duda, una importante contribución científica pionera en los estudios críticos, mexicanos y latinoamericanos, de las resoluciones y sentencias de nuestros máximos tribunales y piedra de toque en la reforma del Estado y el Poder Judicial del siglo XXI.

DEL ANATOCISMO

El tema objeto de esta obra es una figura jurídica controvertida: el anatocismo, o, en otras palabras, la capitalización de los intereses

y, como consecuencia, el cobro de intereses sobre intereses; se trata de algo simple: la usura llevada a su máxima injusticia y mucho más cuando su consagración ha sido dispuesta por el más alto tribunal de la nación.

El artículo 363 del código de comercio, dispone: "Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos."

El legislador, mediante la norma, intentó poner equidad en una relación en la que, de inicio, hay desigualdad; partió del supuesto cierto de que, cuando está de por medio un contrato de crédito, existe una parte fuerte que, si no se le inhibe, puede abusar y una débil que, por no tener más alternativa, terminará por aceptar lo que se le imponga, aun cuando sea injusto. De esa manera, la norma, en principio, es clara y terminante, con vistas a establecer condiciones que permitan un equilibrio entre las partes; contiene una prohibición: no permite el pago de intereses sobre intereses vencidos no cubiertos.

El precepto entraña una segunda parte; la referida a un supuesto diferente; con posterioridad a la celebración del contrato de préstamo, una vez que hay intereses vencidos, si las partes así lo convienen, ellos podrán ser capitalizados; como consecuencia de ello, podrán causar intereses. Del precepto no se desprende que sea admisible pactar la capitalización de intereses al celebrarse el contrato inicial; en este momento, no puede hablarse de que existan intereses vencidos y no pagados. El verbo "podrán" contenido en el precepto sólo puede estar referido a un convenio posterior al acto inicial de préstamo, alude a un momento futuro y a una circunstancia concreta: uno, cuando ya existen intereses vencidos y otra, al común acuerdo al que llegan las partes en un momento posterior al contrato inicial. No puede darse o admitirse la capitalización previa al celebrarse el convenio de préstamo, pues, en ese momento, no hay intereses vencidos; mientras no existan intereses vencidos, no podrá darse acuerdo entre las partes.

Se dirá que, con este supuesto, ningún deudor aceptará la capitalización de los intereses; esto es cierto, como también lo es que, con tal de obtener un crédito, nadie se negará a aceptarlos de antemano. En ambos casos, se está frente a una posible injusticia.

Puesto que hay que optar por alguna de las posibilidades, habrá que hacerlo por la que cause menos perjuicio a los más y mengüe la utilidad de los menos.

Cuando se convierte en una generalidad, como lo fue en el caso mexicano, la capitalización de intereses termina por incidir en forma negativa en la economía ya que no crea riqueza, afecta a una generalidad y beneficia sólo a un reducido número de personas, quienes son las poseedoras del capital especulativo; por ello, es de concluir que el legislador, al exigir un nuevo acuerdo para convenir la capitalización, intentó más suprimir un elemento que distorsiona la economía, que consagrarlo legalmente. Esto es lo que va con la justicia y mucho más lo estará, cuando, como en el caso de los banqueros, la capitalización de intereses no repercutió en la misma proporción en los rendimientos de sus depositantes.

Ésa es la interpretación que corresponde dar a la norma con miras a que el legislador mexicano no ha establecido un rígido sistema de libre mercado: De la normatividad existente, se desprende que consagró un sistema por virtud del cual se fijaron las bases que permiten contratar, en condiciones de igualdad, a quienes, por razones económicas, son desiguales. Sobre este particular, debe tenerse presente que la constitución prohíbe "[...] en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social". (artículo 28).

En los términos admitidos por la Resolución de la Corte, el anatocismo es una ventaja indebida en favor de los banqueros, que perjudica al público en general y que termina por incidir de manera negativa en una clase social: la de los deudores.

Partiendo del supuesto de que la voluntad de las partes ha sido libremente expresada, se ha pretendido dar a ese consenso el carácter de ley. Nada más falso.

A pesar de estar permitido por la ley *a posteriori*, la capitalización de los intereses es un acto injusto carente de legitimidad; lo es desde el momento en que, de hecho, no hay partes contratantes, por cuanto a que una impone su voluntad a otra; no puede hablarse de libertad de las partes y de que ambas convienen en igualdad de condiciones ahí donde una está en estado de necesi-

dad y otra en posibilidad de hacer acatable su voluntad. No puede hablarse de que exista voluntad cuando, por una parte, hay sometimiento y, por la otra, imposición.

En la sentencia del alto tribunal ha prevalecido la letra sobre la justicia. El mexicano es un sistema que permite la explotación del débil. El anatocismo es inadmisibile; el que exista legalmente y que haya sido declarado legal sólo se explica en función de que hay un estado de cosas injusto; eso mismo lleva a comprender el que, en contra de lo que dispone el texto constitucional, se hayan usado y se usen fondos públicos para rescatar a los bancos. Los impuestos, que son el grueso de los fondos con que cuenta el Estado mexicano, únicamente pueden ser destinados a cubrir el gasto público. El Congreso de la Unión no está facultado para convertir en deuda pública créditos privados; la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, no puede distraer recursos oficiales y destinarlos a fines particulares; el presidente de la República legalmente no está autorizado para aplicar a su discreción las partidas presupuestales. Nada hay que funde el hecho de que se deba financiar a aquellos que han expoliado a la población y al erario público y de que los particulares deban contribuir al enriquecimiento de unos cuantos.

El que ello sea factible, el que los tribunales hayan declarado válido el anatocismo, el que no existan vías para impugnar esos ilícitos, el que no haya instancias para sancionar a sus autores, sólo se entiende en función de que el estado de cosas legales es tal, que permite a unos cuantos disponer a su antojo del Estado y de sus instrumentos, de que esto es así a pesar de que, formalmente, se ha producido un cambio en la titularidad del Poder Ejecutivo.

Ante un estado de cosas como el prevaleciente, no queda más que dar por explicable lo que no lo es: la violencia generalizada en que vive la sociedad mexicana, misma que ha terminado por destruir el supuesto Estado de Derecho. Sólo están sujetos al yugo de la ley y obligados a acatar las sentencias de los jueces, quienes no están dispuestos a recurrir a la fuerza.

La ley es negociable; las sentencias judiciales son acatables sólo en la medida en que conviene a quienes fueron parte en los proce-

2895841

PRESENTACIÓN

sos de los que derivaron. El presidente de la República no está en posibilidades de facilitar a los jueces los auxilios que ellos necesitan para hacer cumplir sus determinaciones.

DE LA OBRA

Esta obra, más que un mero análisis técnico unidisciplinario de la figura jurídica del anatocismo, es un vasto estudio intelectual interdisciplinario y colectivo de un número considerable de temas complejos relacionados con él, lo que hace más atractiva e interesante la investigación.

Se habla de una cronología de los hechos que llevaron a la Corte a emitir su sentencia; se alude a la contradicción de tesis que existía sobre el tema entre algunos tribunales federales, de las razones y la forma en que la Corte atrajo el conocimiento de la materia.

Se abordan con profundidad las presentes implicaciones sociales, económicas y políticas que la resolución sobre anatocismo tiene en la sociedad. Incluso, va más allá, pues también se consideran las consecuencias jurídicas de mediano y largo plazo que la sentencia de la Corte tiene, abundando en un análisis crítico del Poder Judicial en México.

Algo que se consideró como una victoria para los banqueros, con el tiempo ha quedado en evidencia que es una derrota; si bien, por virtud de la sentencia, se les permitió apropiarse de gran parte del patrimonio de la clase media, la reacción ha sido y es que éstos no cuentan con recursos qué depositar, tampoco recurren al crédito para adquirir satisfactores y, en general, no tienen confianza en las instituciones de crédito; como consecuencia de lo anterior, no existe demanda, la riqueza —si la hay— no circula, por lo que los bienes se han depreciado.

Esta obra constituye una ardua, metódica, honesta, valiente y visionaria combinación teórica, metodológica y técnica de esfuerzos profesionales y académicos, estudios de caso y aplicación práctica de teorías y doctrinas académicas, que permitió, acertadamente, unir los testimonios, imágenes y documentos más im-

portantes que se produjeron sobre el tema. Los interesados encontrarán en ella los elementos esenciales para formarse un juicio certero de la institución del anatocismo en México, su necesaria reforma legislativa y proponer elementos viables y valiosos para una reforma al Poder Judicial como parte de la reforma del Estado. Debe anotarse, también, que esta obra, estudiando el caso mexicano, representa una significativa contribución científica en los estudios críticos del Poder Judicial en Iberoamérica.

La investigación científica moderna, en especial en lo relacionado con las ciencias sociales y humanidades, es el producto de la sabia y afortunada combinación de esfuerzos interdisciplinarios; si bien muchos académicos intentan investigar y hacerlo en forma colectiva multidisciplinaria e interdisciplinaria, e incidir propositiva y positivamente en los grandes problemas nacionales que nos aquejan, no todos tienen éxito. Por fortuna, los autores de esta obra crítica científica sí lo tuvieron, atravesando y resolviendo con éxito laberintos institucionales y bloqueos burocráticos, impensables, muchos de ellos, para una universidad progresista y una sociedad moderna.

PALABRAS FINALES

Cuando en la *Eneida* Virgilio refiere las atenciones de que fue objeto Eneas de parte de la reina Dido, menciona que él, en agradecimiento dijo: "No está, Dido, en nuestras manos, darte las gracias que mereces[...]. Mientras corran los ríos a la mar, mientras las sombras giren por las laderas de los montes y el cielo siga apacentando estrellas, perdurará el honor que te debo [...]"¹

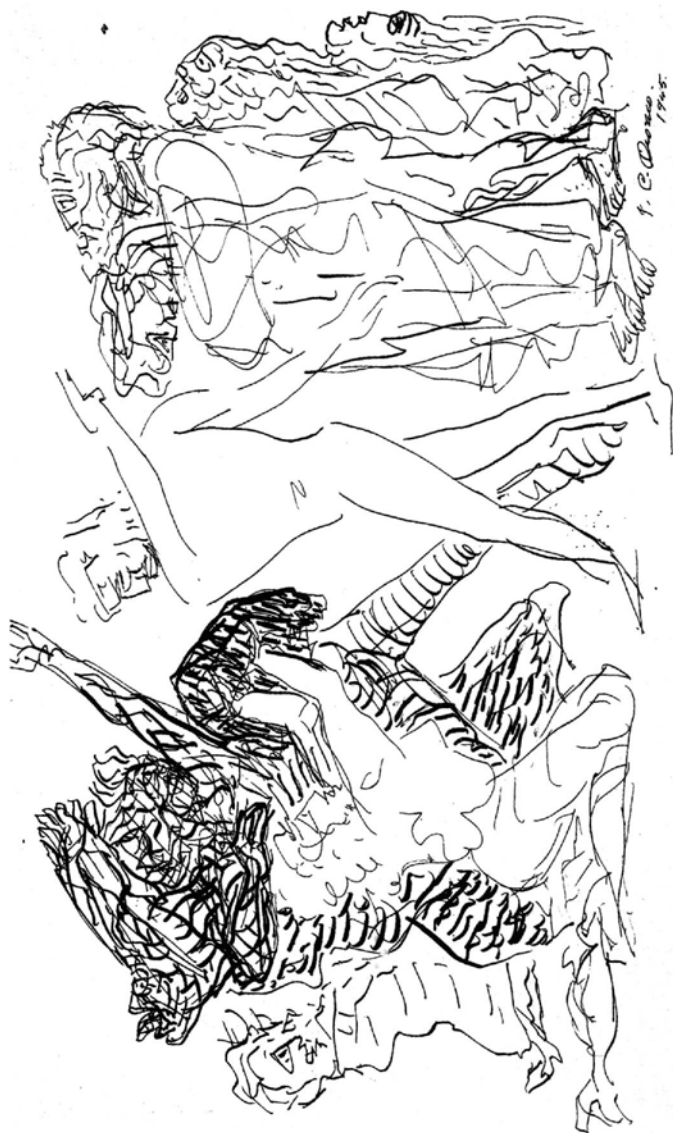
El anatocismo ha sido declarado constitucional, los tribunales han dicho la última palabra, se está frente a una verdad legal. En estricto derecho, nada se puede hacer; no obstante, con Virgilio, mientras corran los ríos a la mar, mientras las sombras giren por las laderas de los montes y el cielo siga apacentando estrellas, el anatocismo es y seguirá siendo una institución injusta e inconstitucional que perjudica y daña a los mexicanos; su legitimación por los tribunales, el hecho de que aún se conserve en las leyes y

¹ Virgilio, *Eneida*, libro I, 601 a 608, Madrid, Gredos, 1997, p. 159.

PRESENTACIÓN

de que no haya prosperado alguna iniciativa legislativa para eliminarlo, se explica sólo en función de que existió y existe un sistema de gobierno insensible e injusto que permite a unos pocos apropiarse del patrimonio de muchos.

A un siglo de distancia, se inicia, de nuevo, por una infeliz coincidencia, el ciclo injusticia-violencia que se vivió a principios del siglo XX y, como hemos asentado, y bien se precisa en estos dos volúmenes por el coordinador de esta obra, se acrecientan las posibilidades de una tercera Revolución Social en México.



⇨ *"Escena de drama"*, 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Introducción

La Resolución sobre Anatocismo de la SCJN: ¿Apertura de la Caja de Pandora?

Eduardo José Torres Maldonado*

Gabriela Barrios Garrido**

Carlos Durand Alcántara***

TODO INDICA QUE LA SCJN, con su Resolución sobre Anatocismo del 7 de octubre de 1998, abrió la Caja de Pandora del sistema jurídico y financiero en nuestro país. El anatocismo en México (además de representar una *avis raris* de las especies fraude penal y usura y lesión civil) se ha revelado como un gran negocio para los banqueros, y como la Suprema Corte de Justicia resolvió en favor de los mismos en la resolución del 7 de octubre de 1998, el mismo continúa vigente en nuestro sistema económico y en nuestro Estado de Derecho, al haber autorizado la SCJ *de iure* y *de facto* dicho ente jurídico-financiero.

Lo más asombroso es que la SCJ haya validado la comisión de estas prácticas ilegales y cuasidelictivas con pleno conocimiento de causa... no cabe duda. Pero, todavía, sin dejar de considerar obligadamente que estamos ante *cosa juzgada*, lo más impresionante es que los mexicanos, en términos políticos, culturales y sociales, notemos que se pretenda que aceptemos y respetemos acríticamente esta injusta decisión judicial.

Difícilmente se encuentra una profesión en la cual la realidad y

* Profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAM e investigador nacional del SNI-Conacyt.

** Abogada independiente, catedrática en diversas instituciones y consultora en tecnologías de la información y las comunicaciones.

*** Profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAM e investigador nacional del SNI-Conacyt.

la imaginación, el ser y el deber ser, la práctica y la teoría, se hallen más distanciados que la abogacía. El mundo del derecho y el mundo de los hechos guarda, por regla general, diferencias abismales.

Tal abismo es aún más profundo cuando comparamos el mundo de los tribunales y el mundo cotidiano. Bien se dice entre litigantes que “lo que no está en los autos, no está en el mundo”. Y es que, si uno reflexiona con cierta honestidad y sentido crítico, los litigantes, las partes y los jueces pueden crear historias fantásticas y diversas de una realidad única, basados en sus documentos, dichos, hechos, pruebas, alegatos, actuaciones, autos, acuerdos, resoluciones y sentencias que forman o deforman la realidad. En un juicio, la “verdad en los autos” es la que se puede o se quiere probar, con independencia, muchas veces, de la verdad y la realidad, en especial cuando en un país la corrupción define —a menudo— quién pierde o gana los litigios sometidos ante los tribunales.

Además, debe considerarse lo siguiente: una cosa muy distinta es cómo ven los jueces los productos de su trabajo, cómo aprecian su creación judicial, y otra, la apreciación e impacto de sus obras por parte de diversos actores y sectores sociales. Alguien diría: cuestión de perspectiva o cuestión de enfoques, o bien, más poéticamente, “en este mundo traidor, nada es verdad, nada es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”.

Desde un punto de vista científico, no puede negarse la importancia de las investigaciones que estudian el impacto social de las sentencias y resoluciones judiciales. Por supuesto, es normal que existan diversas apreciaciones acerca de una sentencia o resolución judicial, sobre todo cuando la misma es esencialmente polémica y se convierte en la decisión final que propone resolver un problema nacional trascendente.

No obstante, cuando el impacto de una resolución tipo cosa juzgada es masivo, intempestivo y lesivo de los intereses del conjunto de la sociedad, beneficiando sólo a una minúscula, pero, poderosa, elite, a pesar de desquiciar el sistema de mercado y vulnerar seriamente el Estado de Derecho, es de esperarse que surjan visiones, respuestas e interpretaciones sociales críticas e incluso —quizás como último recurso— humanísticas y literarias de dicha decisión judicial controvertida socialmente. Es también por

estas causas que pueden llegar a producirse grandes rebeliones y revoluciones sociales.

Las grandes revoluciones y conmociones sociales a lo largo de la historia nos muestran que, en los periodos previos a las grandes crisis sociales, como último recurso, cuando ya se ha perdido en apariencia todo ante los abusos del poder, históricamente los mexicanos recurrimos al buen humor, al muy buen humor, para superar con cierto ingenio y una sonrisa la arbitrariedad e impunidad de ciertos actos de poder. Reírse del infortunio y hasta de la muerte es una buena fórmula psicológica que los mexicanos hemos usado históricamente. Hagamos, ahora, una breve síntesis de los capítulos de esta obra.

Eduardo Torres (ET) y Rebeca Pujol (RP) contrastan, con profesionalismo académico y rigor científico, usando elementos metodológicos de la ciencia política, la sociología y el derecho, la autopercepción, declaraciones y principios solemnes de la SCJ respecto a la cosa juzgada del anatocismo (la resolución del 7 de octubre de 1998) y la percepción que de ella tienen varios caricaturistas mexicanos, en el primer capítulo de esta obra científica colectiva, denominado "La resolución de la SCJ sobre anatocismo: ¿realismo judicial o surrealismo político? Un análisis de los principios solemnes de la SCJ y la percepción social de los caricaturistas mexicanos".

Y, quizá, uno se preguntaría todavía: ¿Por qué hacer un estudio científico sobre la percepción de los caricaturistas mexicanos en este caso? Bueno, la mejor respuesta es que, dada la seriedad y complejidad del asunto de marras, debemos analizar plural e inteligentemente su impacto social, y las obras de los caricaturistas son un agudo y eficiente termómetro social para medir los impactos de las decisiones públicas en la sociedad mexicana.

Antes de entrar al análisis del tema, ET y RP analizan brevemente los fenómenos de la globalización y el neoliberalismo y algunas de sus principales manifestaciones en México, sobre todo a partir del "crack" financiero de 1994, con el fin de revisar el contexto general en que se produce la resolución sobre anatocismo de la SCJ.

En este contexto general se destaca, entre otros aspectos, que en México dos terceras partes de la población se encuentran en la po-

breza, incluyendo un tercio (más de 33 millones de personas) que están en la miseria. Es notorio, además, que la elite gubernamental ha privilegiado la protección del capital financiero especulativo, el rescate bancario, una política fiscal voraz e inequitativa, apuntalando como la “mejor” propaganda y estrategia laboral competitiva el hecho de que la fuerza de trabajo mexicana sea una de la menos costosas del mundo (y una de las más apreciadas en el exterior y más minusvaluadas en el interior, por cierto). En concreto, la resolución judicial sobre anatocismo debe situarse en contexto con el fin de apreciar mejor su trascendencia nacional e interés público.

Los autores establecen en forma documentada los antecedentes y principales características de la Resolución sobre Anatocismo de la SCJ del 7 de octubre de 1988. Toda vez que existía contradicción de criterios en litigios sobre anatocismo entre tribunales colegiados de circuito, se presentó la denuncia correspondiente ante la SCJ, turnándose los expedientes respectivos para su estudio a la primera sala, formándose los expedientes de contradicción de tesis 2/98 y 11/98. De inmediato, el 12 de mayo de 1998, el presidente de la SCJ solicitó a los tribunales colegiados de todos los circuitos el envío de todas las ejecutorias y tesis pronunciadas sobre el tema.¹

Una vez recibidas las ejecutorias, la SCJ formuló una propuesta de nueve categorías temáticas para analizar las *litis* en contradicción.

El ministro Juventino B. Castro, como ministro ponente de la primera sala, con fecha 2 de julio de 1988, elaboró un dictamen que solicitaba que la contradicción de tesis sobre anatocismo fuera turnada para su resolución al pleno de la SCJ por su trascendencia. El Pleno acordó que conocería finalmente de la contradicción de tesis 2/98 y 11/98, basado en el ejercicio de la facultad de atracción de la SCJ. No obstante, debe destacarse que la votación al res-

¹ Cabe destacar que, entre los juristas que asistimos a la reunión del Conapod del 6, 7, y 8 de octubre de 1998 en el Centro Médico Siglo XXI, se comentó que el inicio de las contradicciones de tesis, que permitirían a la SCJ atraer los casos de anatocismo, fue prefabricado para generar la posibilidad de una resolución judicial general que podría ser usado posteriormente como política pública en favor de los intereses de los banqueros (lo cual equivalía prácticamente a una acción inconstitucional de la SCJ que estaría legislando a través de una resolución judicial).

pecto fue polémica y dividida, pues seis ministros votaron en favor y cinco en contra.

Entre las principales razones del ejercicio de la facultad de atracción del pleno de la SCJ del 7 de julio de 1998, hallamos las siguientes: al no estar especificada la competencia de las salas, el pleno tiene la "competencia originaria" sobre toda clase de contradicciones; el pleno se manifiesta competente para conocer de la petición del ministro Juventino B. Castro para ejercer la facultad de atracción de la contradicción de tesis 2/98 de la primera sala, con base en el artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la constitución, y de la tesis jurisprudencial aplicable; la controversia sobre anatocismo debe ser conocida por el pleno debido a su interés y trascendencia, con el fin de otorgar certidumbre y seguridad jurídica en su interpretación, reconociendo que el anatocismo ha provocado "verdadera intranquilidad social" y es un "asunto jurídico complejo", con un "interés jurídico especial", pues se ha ampliado la denuncia de contradicción a nueve temas, que le otorgan un carácter "excepcional", y toda vez que la resolución sobre el problema del anatocismo se asocia de manera directa con el funcionamiento del sistema bancario nacional y existe un "número elevadísimo" de créditos basados en contratos estimados válidos por unos tribunales y nulos, por otros, el tribunal pleno considera que debe atender este importante "reclamo social" sin conceder que sea el factor económico el que motiva principalmente el ejercicio de la facultad de atracción, sino su "trascendencia" e "interés jurídico" y su carácter "excepcional".

Ahora bien, en atención a que, luego de que más de 100 juristas del país esperaban reunidos discutiendo el tema del anatocismo los días 6, 7 y 8 de octubre de 1998, en el seminario sobre anatocismo organizado por el Conapod en el Centro Médico Siglo XXI, y esperaban expectantes la Resolución de la SCJ sobre el tema, fue ampliamente difundido el hecho y tendencia de interpretación judicial de que, en realidad, la supuesta "contradicción" de tesis nunca había existido naturalmente (pues prácticamente todos los tribunales colegiados del país les estaban dando la razón a los "deudores" en sus litigios contra los bancos), sino que la misma fue provocada *ex profeso*, por indicaciones de cierta elite del Poder

Judicial vinculada, a su vez, a la elite financiera, y que, por lo tanto, dicha “contradicción” fue prefabricada para llevar el tema del anatocismo al conocimiento de la SCJ, con la finalidad de que se pudiera dictar una resolución favorable a la elite financiera y otorgarles a los bancos la facultad irrestricta de la aplicación de intereses sobre intereses, transformando al anatocismo en una forma de capitalización de las instituciones financieras, contando con la sanción y “bendición” de la SCJ.

Por supuesto, la Resolución sobre Anatocismo de la SCJ emitida el 7 de octubre de 1998, al darse a conocer en el día intermedio de la reunión en el Centro Médico Siglo XXI, cayó como un sorpresivo “balde de agua helada” para todos los asistentes, incluyendo a los representantes y abogados de los bancos, quienes con pena, declinaron participar en defensa de los intereses de los bancos debido a la unilateralidad y parcialidad evidente de la Resolución de la SCJ, pues nunca se había presenciado en la historia del Poder Judicial de México y el mundo una decisión judicial tan polémica, controvertida, parcial, unilateral e injusta en favor de los poderosos económicamente y que abatiera con un solo sablazo de interpretación judicial todas las estrategias litigiosas de defensa de los “deudores”, afectando de modo negativo los intereses de los “deudores” y de la enorme mayoría de la población así como la salud del sistema financiero en México.

La indignación, desconcierto, estupefacción y dudas sobre la función constitucional y legal de la SCJ al dictar esta resolución sobre anatocismo fue la que motivó a diferentes investigadores y profesionistas a realizar diversos estudios, seminarios, conferencias e investigaciones acerca del tema, incluyendo a los que escriben este libro.

En especial, la investigación de ET y RP contrasta las declaraciones formales y principios solemnes del presidente de la SCJ respecto del anatocismo y las percepciones sobre los mismos y la propia Resolución de la SCJ por los caricaturistas mexicanos.

El presidente de la SCJ, licenciado Vicente Aguinaco Alemán, en una obra maestra de teatralidad pomposa, solemne y demagógica, expresó lo siguiente en su “proclamación de principios”: a) resaltó que los poderes públicos y, en específico, el Poder Judicial,

ejercen sus funciones y toman sus decisiones en atención al principio de separación de poderes y en ejercicio y representación de la soberanía del pueblo; b) señaló que a la SCJ le corresponde:

manifestar con pulcritud y serenidad su ubicación política dentro de la estructura y articulación de los tres poderes de la unión; y, toda vez que al mismo tiempo le corresponde al Poder Judicial el deber de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial dentro de los procedimientos y plazos que establecen las leyes, fuerza es concluir que, como su nombre lo indica, el desempeño de esta atribución estatal debe impregnarse en la justicia, pues de otra suerte no se entenderían nuestros afanes para consolidar un estado democrático de derecho en la justicia.

Como el lector podrá percatarse, las declaraciones solemnes del presidente de la SCJ presentaban un discurso muy alejado de la realidad social, económica, política y jurídica, y encendían más la hoguera y agitaban la atmósfera de desencanto, desesperanza, frustración, inestabilidad social, agitación política, incertidumbre e inseguridad jurídica que la resolución sobre anatocismo había provocado en la población mexicana, sobre todo si consideramos que tal resolución ya tenía el carácter de cosa juzgada, y que, al parecer, ya nada podría hacerse (al menos en técnica jurídica) para combatir las *avis raris* de la usura civil y el fraude especial del anatocismo (legalizadas ahora por la Resolución de la SCJ). Al parecer, ante la arbitrariedad e impunidad del poder, no sólo restaban acciones y reacciones basadas en la crítica intelectual, científica y literaria, sino en el buen humor, ese escape secular artístico de los mexicanos en las situaciones políticas más difíciles y controvertidas.

Revisemos ahora, en forma breve, el análisis que hacen los autores sobre la reacción de los caricaturistas mexicanos ante la Resolución de la SCJ y los "principios" del presidente de la SCJ.

Notamos que, en la investigación de ET y RP, el estudio y clasificación de las caricaturas e imágenes estudiadas se ha dividido en cinco categorías: las que caracterizan a la política económica del país, las relacionadas directa con la decisión de la SCJ, las que representan a los actores político-sociales que provocan y padecen

la decisión de la SCJ, las que representan a otros actores y una propuesta legislativa, y un conjunto de fotografías alusivas a la reacción de grupos sociales y personas respecto de la resolución sobre anatocismo.

Entre las que caracterizan a la política económica del país se encuentran "Política económica" de Ahumada; "Lógica harvardiana" de Helguera; "Dos de noviembre" de Naranjo; "Ofrecimientos" de Helio Flores; y "Rapriña". Todas ellas reflejan diversos aspectos incongruentes y tragicómicos de la política neoliberal y sus efectos sobre la población mexicana, que señalan el contexto general en que se produce la resolución sobre anatocismo.

Las caricaturas descritas, que se refieren a la Resolución de la SCJ en comentario son: "Discusión en la SCJ" del Fisgón; "Suprema SCJ" de Helio Flores; "Anatocismother" de Magú; "Sigue la sangría" de Rocha; "Ningún conflicto, sólo intereses" de El Fisgón.

Estas caricaturas analizadas reflejan, aguda y sarcásticamente, las paradojas, incongruencias y bárbaras contradicciones técnicas, surrealistas, económicas, políticas, éticas y legales, en que cayeron los ministros de la SCJ al intentar justificar su resolución, así como su connivencia con los banqueros, y las consecuentes reacciones populares ante la injusticia palpable de esta resolución.

La tercer categoría, estrechamente ligada con las dos anteriores, que representa a los actores político-sociales que provocan y padecen la decisión de la SCJ, comprende el estudio de las siguientes caricaturas: "Suprema SCJ y banqueros" de Helguera; "Cáite cadáver" de El Fisgón; y "Banqueros" de Magú, que subrayan ácidamente la relación entre Poder Judicial y poder financiero, la relación entre pueblo y banqueros, y la decisión del Fobaproa que, con la resolución sobre anatocismo, perfilan con claridad los intereses de la política financiera y la situación de los "protegidos" del sistema económico-político y jurídico.

La cuarta categoría, que representa a otros actores y temáticas, abarca un conjunto de ironías múltiples sobre las redes y relaciones entre políticos, banqueros y jueces, y una última reflexión sobre una propuesta legislativa para regular el anatocismo, presentada por autores de este libro, caricaturas que a continuación se

señalan: "Chambeando duro", por Helguera; "Hacia un Estado de Derecho", por El Fisgón; "Fábulas de policías y ladrones", por Trino; "Corretiza", por Fabio.

La quinta categoría, que es un conjunto de fotografías alusivas a la reacción de grupos sociales y de la gente en general en relación con la resolución sobre anatocismo, es el colofón de este grupo de imágenes que se describen y analizan por los autores: "En el zócalo. Mujer indígena confrontando a la policía", foto de Jesús Quintanar; "En el zócalo. Mujeres indígenas repeliendo la intromisión policiaca", foto de Jesús Quintanar; "Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la nación donde se discutió la legalidad del anatocismo", foto de Frida Hartz; "Deudores de El Barzón", foto de Reuters; "Integrantes de El Barzón metropolitano, cantando y bailando frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de octubre de 1998", foto de Duilio Rodríguez; "Integrantes de El Barzón demandando 'basta a la usura' enfrente de la SCJ", foto de Duilio Rodríguez; "Miembros de El Barzón paseando un ataúd con las siglas de la Suprema Corte de Justicia", foto de Duilio Rodríguez.

En el segundo capítulo de esta obra, que lleva como título "Justicia, derecho judicial y humanismo. La trascendencia jurídica y social de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca del 'anatocismo'", MFL propone, iniciar una *cruzada* que rompa con los conceptos rígidos de impartición de justicia basados en la simple y exclusiva aplicación del marco normativo concentrándose ahora en los aspectos humanistas (además de en las técnicas jurídicas estrictamente hablando) y considerando las consecuencias políticas y sociales de las decisiones judiciales.

MFL sugiere que, con el fin de evitar la producción de más decisiones judiciales triviales y acartonadas que sólo toman en cuenta los aspectos técnico-jurídicos, se elija por medio del voto a nuevos miembros del Poder Judicial, con visión y formación humanista, aspectos coincidentes con las propuestas generales de esta investigación colectiva.

Mario Flores considera la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre anatocismo como una resolución judicial —en sus dimensiones social y humana— injusta, altamente

criticable; como una resolución judicial que vulnera los derechos fundamentados de los gobernados, en especial las garantías de igualdad, libertad, seguridad y acceso a la administración de justicia en un Estado de Derecho y un régimen democrático. MFL juzga a esta resolución como una decisión judicial que refleja una “falsa” interpretación de la legislación civil, mercantil, financiera y bancaria y como una resolución o sentencia judicial de integración jurídica parcial, toda vez que pretende ignorar los intereses de los ciudadanos para beneficiar al grupo en el poder en México.

En su investigación, MFL analiza en forma breve el conjunto de las garantías individuales de la constitución, en particular las afectadas por la Resolución de la SCJ sobre Anatocismo. Inmediatamente después reflexiona filosóficamente sobre el concepto de justicia, estableciendo algunas diferenciaciones sobre la libertad y la felicidad, siguiendo a pensadores como Aristóteles, Kelsen y Bentham, y continúa con el estudio de la resolución desde los puntos de vista político-constitucional (apoyándose en buena medida en las ideas del ilustre constitucionalista Elisur Arteaga) así como diversos aspectos técnico-jurídicos y sus consecuencias sociales.

El autor considera que la SCJ, en virtud de lo establecido en la fracción XIII del artículo 107 constitucional, tiene el poder y la facultad de resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia en los juicios de amparo, cuando existen diversas tesis controvertidas emitidas por tribunales colegiados de circuito. Tal poder sólo fijará la jurisprudencia respectiva para dar fin a dichas contradicciones de tesis, estableciendo el criterio judicial a seguir, como cosa juzgada. No obstante, dicho poder no es omnímodo: MFL sostiene que la SCJ está obligada a ejercer sus poderes constitucionales y legales respetando las garantías individuales de los gobernados y ejercitando sus poderes en beneficio del gobernado o ciudadano, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 constitucional.

En concreto, dice, debe considerarse este poder o facultad de la SCJ como una facultad ejercida en el contrato de la garantía de administración de justicia, que deberá ejercerse —se insiste— en beneficio y no en perjuicio de los ciudadanos.

Si bien no se puede negar que la SCJ aplicó el derecho existente conforme al criterio seleccionado por los integrantes del pleno, lo que es cierto es que la aplicación puede considerarse como parcial, errónea y deficiente, pues sólo benefició a la elite en el poder y olvidó aplicar de modo integral el derecho, con una hermenéutica más adecuada y regida por principios humanistas.

Más aún, puede presumirse que la SCJ, con pleno conocimiento de causa, desmanteló e invalidó toda probabilidad de defensa jurídica por parte de los “deudores”, generando antecedentes y precedentes históricos de alta y suma gravedad.

En el tercer capítulo del libro, titulado “Aplicación supletoria en el ‘anatocismo’”. Improcedencia anticipada. Un análisis de los modelos de Alchourón-Bulygin, Stephen Toulmin y Ronald Dworkin”, el profesor Agustín Pérez Carrillo (APC) recorre y desenmaraña la madeja de posibles hilos interpretativos que los ministros de la SCJ tuvieron que reconocer para intentar justificar la legalidad de su resolución sobre anatocismo.

Para APC, la SCJ evitó a toda costa y a cualquier precio —se presume que por compromisos políticos, económicos e ideológicos— inclinarse por la aplicación supletoria del artículo 363 del Código Mercantil y del 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal. Por el contrario, la SCJ no interpreta y sí usa —en términos técnico-jurídicos— el artículo 291 de la LTOC. Asimismo, con el modelo Alchourón-Bulygin encuentra y analiza determinadas lagunas normativas.

Con sobriedad analítica, APC sostiene en su juicio académico de esta Resolución sobre Anatocismo de la SCJ, que los ministros no sólo no pudieron justificar la legalidad de sus decisiones, sino que, incluso, abrieron la puerta para aprobar la usura y la lesión en los contratos, en materia civil, y dejaron abierta una posible ventana para la comisión de fraudes en los contratos de crédito, si se amplía la interpretación en materia penal.

De acuerdo con APC, la SCJ dejó a los “deudores” en una especie de estado de indefensión, posicionando una espada de Damocles sobre su cabeza en los pactos de anatocismo y permitiendo a sus acreedores cobrar intereses sobre intereses sin límite legal alguno.



Para enjuiciar la actuación de la SCJ en el caso, APC usa vastos pero prácticos conocimientos de filosofía jurídica, lógica deóntica y teoría general del derecho.

De acuerdo con la teoría de la interpretación jurídica, APC investiga si hay exceso o uso del texto legal, o bien, interpretación del artículo 291 de la LTOC. Asimismo, APC utiliza el modelo de Carlos Alchourón y Eugenio Bulygin para analizar el problema normativo del pago de intereses sobre intereses y para estudiar las lagunas en el derecho crítico recurriendo, además, como contraste, a la escuela crítica con algunas propuestas de Hans Kelsen. El objetivo es detectar si, en el caso del anatocismo, no existen lagunas jurídicas y, por lo tanto, sí se puede o no hablar de un sistema completo.

APC considera que, en los dilemas para decidir si se recurría a la aplicación supletoria del código civil o mercantil, o si se apelaba a la interpretación de la LTOC, los ministros se obsesionaron con esta última, produciendo una resolución judicial basada en una interpretación “demasiado artificial, inútil, pobre desde el punto de vista de una poderosa teoría constitucional integrada a partir de los criterios jurisprudenciales y ajena a la problemática social, psicológica, política y económica de la nación mexicana”.

El primer “cuerno” o punto crítico del dilema al que se enfrentaron los ministros de la SCJ fue considerar si la LTOC era un sistema normativo (o subsistema) que fuera necesario y suficiente para resolver los problemas de interpretación que planteaba el anatocismo. En este primer caso, habría también que determinar si se estaba en presencia de un caso fácil o difícil, en relación con la precisión o imprecisión de las expresiones legales, teniendo que aceptar, finalmente, una “indeterminación semántica” del concepto de intereses.

El segundo “cuerno” o punto crítico del dilema consistía en aceptar la posibilidad de la aplicación supletoria de la legislación civil y mercantil, y admitir deficiencias y lagunas en la LTOC, lo cual hubiera implicado una labor mucho más fina de interpretación jurídica.

Por último, la SCJ optó por el primer punto crítico del dilema, señalando que no hubo deficiencias, olvidos u omisiones del le-

gislador (en consecuencia, no habría lagunas) y que la “supresión” legal acerca de la discusión de los intereses sobre intereses “se dejara a la libre voluntad de las partes”.

Esto, por supuesto, resulta muy polémico y criticable, pues el anatocismo quedó sujeto, simplemente, al libre albedrío de los contratantes, haciendo caso omiso de disposiciones de orden público e interés social en nuestras leyes y de garantías individuales en la constitución. APC ejerce una decidida, consistente y sistemática crítica sobre esta opción de la Suprema Corte.

Con el modelo de Alchourón-Bulygin, APC determina el problema normativo, en este caso el del anatocismo. Posteriormente, define su universo de dinero (UD), su universo de acciones (UA) y su universo de propiedades (UP) y, con la fórmula $2n$, el universo de casos (UC), para de ahí derivar 4 casos posibles. Para éstos se aplica la interrogante relativa a la obligación de pagar intereses, e intereses sobre intereses. Finalmente, se analiza el universo de soluciones maximales (US max).

APC concluye, que existen lagunas normativas, por lo que sería necesario acudir al procedimiento de aplicación supletoria de la ley para resolver el problema en cuestión. Al final, los ministros de la SCJ optaron por el supuesto contrario y se quedaron con el uso del artículo 291 de la LTOC.

Aplicando principios de hermenéutica científica y lógica deóntica rigurosa, la *intentio operis* (retomando algunas ideas de Humberto Eco, que cita a San Agustín) de la SCJ, no aparece confirmada por ninguna parte normativa de la legislación mercantil, civil y financiera bancaria. La “interpretación” aislada del artículo 291 de la LTOC es, más bien, confusa cuando no inoperante por lo que la “interpretación” de la SCJ excede el texto, evidenciando lagunas y, por lo tanto, simplemente la SCJ “en vez de interpretar, usa el texto”. Pasemos ahora a analizar la segunda parte de este capítulo relativa a otros modelos aplicables al estudio del anatocismo y el sistema bancario y financiero.

El maestro Agustín Pérez Carrillo analiza críticamente uno de los argumentos principales de la SCJ en la resolución sobre anatocismo, en especial la permisón o prohibición del pacto de intereses sobre intereses.

En este sentido, Pérez Carrillo analiza diversas expresiones relevantes, especificando las contradicciones e irregularidades en que la Suprema Corte incurre en su propia resolución comentada.

Con el modelo de argumentación de Stephen Toulmin, tomando en cuenta el esquema de razones (*grounds*), pretensión (*claim*), garantía (*warrant*) y respaldo (*back*), el autor demuestra errores e inconsistencias del supremo tribunal al respecto.

Asimismo, Pérez Carrillo usa, instrumentalmente el modelo de Ronald Dworkin que postula la posibilidad de la “única solución correcta para los casos difíciles planteados en un orden jurídico determinado”, retomando, también, la distinción entre políticas y principios planteados por Dworkin, aplicándolos al estudio de la resolución sobre anatocismo. Así, los casos difíciles deberán ser analizados tomando en cuenta los principios del contexto histórico y del apego a la justicia y la equidad.

Agustín Pérez retoma del libro *Law's Empire* de Dworkin la concepción política del “derecho como integridad”. Los lectores encontrarán cómo el modelo de Ronald Dworkin contribuye a poner en evidencia los errores, inconsistencias e irregularidades en que incurrió la Suprema Corte de Justicia al pronunciarse, con carácter de cosa juzgada, sobre la permisión jurídica del anatocismo en México.

El profesor Pérez Carrillo concluye este capítulo afirmando, entre otros aspectos, lo siguiente: “El principio del Estado de Derecho no se clausura con las decisiones emitidas por las autoridades formales de última instancia, sino, precisamente, ha surgido por las arbitrariedades que ellas han cometido, sea el legislador constitucional, el legislador ordinario, las autoridades administrativas o los jueces”. Los lectores hallarán en la lectura de la contribución del investigador Pérez Carrillo una fina labor crítica científica de interpretación y argumentación jurídica de la temática de marras de este libro.

Por su parte, la maestra Guadalupe Huerta Moreno (GHM) desarrolla el capítulo cuarto, titulado “Capitalización de intereses sobre intereses y sistema bancario”, planteando un enfoque económico —y no jurídico— del problema, lo cual enriquece la naturaleza interdisciplinaria y rigor científico de esta obra colectiva.

La reforma financiera mexicana que arranca desde 1988, según GHM, al fracasar en sus objetivos de transformar el sistema financiero y bancario, intentando hacer más eficientes a los intermediarios financieros y propiciar mayores recursos para el crédito y financiamiento general de familias y empresas del país, aceleró la crisis económica del país, sobre todo a partir de 1994.

Al modificarse las condiciones financieras previas a 1994, dispersarse los intereses y evidenciarse la incapacidad e ineficiencia de los intermediarios financieros, la economía del país entró en un círculo vicioso de altos réditos, empresas en quiebra, "deudores" insolventes y créditos impagables.

Pronto, a partir de 1994 y 1995, todas las personas que adquirieron un crédito con el sistema de anatocismo, de la noche a la mañana, se volvieron "deudores" por un plumazo o una "decisión electrónica" de la elite teconoburocrática financiera neoliberal.

El frágil programa gubernamental de desregulación financiera, que en todo momento cuidó y defendió los intereses de los intermediarios financieros, se enfrentó a una crisis de pagos nacional. Obviamente, los "deudores", ante el abuso de los cobros de intereses sobre intereses, demandaron a sus acreedores y los acreedores se dieron el lujo de empezar a presionar, intimidar, demandar y desahuciar a sus "deudores".

La crisis de pagos provocó una serie masiva y aparentemente interminable de litigios en todo el país, cuyo tema o litis central era el anatocismo. Pronto, el asunto de los "deudores" se convirtió en un grave y profundo problema nacional de gran envergadura y consecuencias.

La SCJ intentó resolver este asunto con una decisión judicial sumamente controvertida y parcial. Fue evidente que la SCJ inclinó la balanza de la ley para favorecer los intereses de los grupos más poderosos: los banqueros.

Ante esta decisión judicial financiera, la población mexicana quedó desprotegida y en clara desventaja, mientras los protegidos por excelencia de la reforma financiera, los intermediarios financieros, continuaban su enriquecimiento constante y progresivo a costa del sacrificio de los ahorros e inversiones de los trabajadores, empresas y familias de México.

En los últimos 25 años, el objetivo central de la reforma financiera fue realizar una serie de modificaciones para eficientizar las instituciones financieras y los procesos de intermediación. Se apostaba a que los servicios financieros fueran más ágiles, eficaces y diferenciados, y a obtener una rápida expansión del crédito que revitalizara al sistema financiero en su conjunto.

Para asegurar el buen funcionamiento de la economía, se pretendía que la disparidad entre tasas activas y pasivas de interés se mantuviera baja, pues así el anatocismo, o “capitalización de intereses sobre intereses”, teóricamente, no representaría problema alguno para los intermediarios financieros ni los usuarios del crédito.

Es importante, destaca GHM —y en lo cual hay coincidencia plena con el coordinador y los demás autores de este libro—, señalar que el anatocismo no debe ser visto sólo como un problema jurídico, sino que debe ubicarse como uno de los elementos más importantes de las reformas al sistema financiero que los gobiernos neoliberales han impulsado en México. Si bien el anatocismo no es la reforma financiera más relevante, sí es uno de los elementos clave y más trascendentes junto con el Fobaproa y el IPAB, que apuntala los mecanismos especulativos y crediticios del sistema financiero de los últimos cinco lustros (en particular a partir de 1994) y la política general del “rescate bancario”.

Es decir, debe quedar claro que el anatocismo es, en esencia, un problema nodal del sistema financiero, central para la economía, con repercusiones políticas y sociales y no sólo un asunto jurídico. Por cierto, la crisis financiera neoliberal no es solamente un problema mexicano, sino un problema común para Latinoamérica y el mundo en general.

La autora se avoca a revisar, sucintamente, las principales características de las reformas financieras en América Latina, para después contextualizar y analizar el caso de México. Así, estudia cómo las tendencias de regionalización y globalización latinoamericanas van preparando las estructuras de los sistemas financieros nacionales para abrirse a una integración económica y financiera internacional, a través de las estrategias de desregulación y apertura, para permitir el libre movimiento de capitales y mercancías.

Destaca, además cómo, merced a estos procesos de reforma financiera neoliberal, el capital financiero especulativo se va imponiendo sobre el productivo.

Los primeros países que iniciaron la reforma financiera neoliberal fueron Chile y Uruguay en 1974, Argentina en 1977, Ecuador en 1984 y Bolivia en 1985. Los resultados de estas experiencias fueron variados, pero críticos, en todos ellos, pues se desató una serie de problemas del sistema financiero (ahorro, inversión, crédito) que culminó en una crisis de pagos, un descenso considerable del ahorro y la inversión, y la quiebra de diversas instituciones financieras. Esta primera oleada de reformas financieras neoliberales que dismantelaron los sistemas de protección estatal, dejaron experiencias muy amargas.

Curiosamente, los países desarrollados sí protegían sus sistemas financieros, mientras que recomendaban a los países en desarrollo desproteger y liberalizar sus economías y, en especial sus sistemas financieros. En concreto, el *laissez-faire* se recomendaba a los vecinos, pero no se aplicaba en casa.

No obstante, a pesar de que se pudo haber aprendido algo de los experimentos de los proyectos neoliberales de las décadas de 1970 y 1980, pronto nuevos países latinoamericanos se incorporaron a estas olas de moda de reformas financieras. México arrancó en 1988, Perú y Colombia, en 1990, y Brasil, en 1991.

Las políticas de desregulación financiera han sido promovidas y apoyadas desde el corazón de los organismos financieros internacionales, como el BM, el FMI la OCDE y la OMC. El neoliberalismo financiero es fuertemente impulsado y prohijado por estos organismos toda vez que uno de los objetivos centrales es permitir que el capital especulativo transnacional pueda penetrar y dominar los mercados nacionales sin barreras o limitaciones.

La reforma primera en México, que se consolida en el periodo 1988-1991, es una de las más profundas reformas estructurales en América Latina.

En concreto, la reforma financiera mexicana se propone dismantelar los "viejos" sistemas complejos de regularización y protección, basados en contratos sobre tasas de interés, encaje legal, cajones de crédito y control sobre operaciones de riesgo de la ban-

ca. La desregulación y liberalización financiera tiene como meta establecer la determinación de las tasas de interés por el mercado, la supresión de encajes legales y cajones de crédito, la supresión de restricciones sobre las actividades de los bancos y, en concreto, la apertura del mercado financiero.

En la visión neoliberal deben abrirse todos los candados nacionales a la participación del capital transnacional. El sistema financiero no podría seguir siendo protegido. De ahí la premura de De la Madrid y Salinas por lograr, pronto, la reforma financiera, para abrir las puertas gradualmente al capital extranjero en los bancos y casas de bolsa mexicanas.

Esta apertura gradual fue prevista, además, en el capítulo XIV (servicios financieros) del TLCAN. En este capítulo, se pactó una apertura gradual del sistema financiero hasta el año 2000, que podría ser supervisado. Sin embargo, la realidad pronto superó al pacto, y la desregulación financiera mexicana avanzó a pasos mucho más veloces de lo previsto.

Al inicio del sexenio 1988-1994, la reforma financiera ofrecía una apariencia optimista. Todo sugería que la desregulación y liberalización habían otorgado mayor libertad operativa y gestiona a los intermediarios financieros y existía un buen ambiente para las relaciones con sus clientes, además de que los primeros tenían mecanismos de información y supervisión para evaluar los tipos de riesgo que pudiera implicar el otorgar préstamos a los usuarios de sus servicios financieros.

Cierto, se sabía que era un tiempo en que podía haber ganancias extraordinarias. Pese a ello, poco se decía respecto de la muy alta posibilidad de riesgos extraordinarios.

Ante este panorama aparentemente optimista, los intermediarios financieros deciden que no hay razón para escatimar el crédito. Por el contrario, inician campañas muy agresivas, en donde ofrecen créditos "muy generosos" con muchas facilidades, con el fin de captar ahorradores e inversionistas en créditos que otorgan, con gran propaganda, publicitándolos como "accesibles" planes y atractivas ofertas hipotecarias.

Por lo tanto, puede observarse que existe una notable expansión del crédito a partir de esta etapa de gran oferta de créditos,

pero, al mismo tiempo, también se va generando una profunda y grave expansión del riesgo. Las amargas experiencias de otros países latinoamericanos de crisis financiera, quiebra de bancos y empresas, insolvencia de derechos y crisis económica general fueron hechos a un lado, ignorados maquiavélicamente por la elite neoliberal del gobierno mexicano.

GHM recurre al método de exponer un caso concreto para ilustrar el problema del anatocismo y la crisis financiera. Supone el caso de un trabajador que, en los tiempos de "bonanza" y optimismo sobrante cuando las maquiavélicas ofertas crediticias de los bancos, obtiene un crédito hipotecario en el año de 1994, por 176 mil pesos.

Ahora bien, para que el trabajador hubiera obtenido el crédito, primeramente debió cumplir con una serie amplia de requisitos y luego someterse a un severo examen de solvencia financiera (en el que se considerarían sus ingresos y gasto promedio y su capacidad para cumplir con los pagos y obligaciones crediticias). La institución financiera, además, en teoría, vincularía sus estudios sobre el usuario del crédito con sus estudios acerca de las tendencias económicas en el país.

El trabajador y la institución financiera firmarían un contrato de crédito con garantía hipotecaria, en el cual se fijaría una tasa de interés variable inicial de 24 por ciento, integrándose también un crédito adicional para el refinanciamiento de los intereses que no pudieran cubrirse con los pagos mensuales del acreditado. El contrato incluía, además, por parte de la institución financiera (no hay que olvidar que éstos eran contratos leoninos de adhesión) una fórmula matemática que prevenía el posible comportamiento de variables económicas no predecibles y de las cuales dependía el plazo para el pago, el monto de los intereses y la amortización del capital. El plazo normal para cubrir la deuda era de 30 años, pudiendo variar.

Para el cálculo de intereses se consideraría la tasa líder de mercado, atendiendo a la tasa mayor de las tasas brutas de interés de los instrumentos existentes o del mayor de los indicadores que el Banco de México señalara como elemento de referencia en la determinación de las tasas de interés activas y pasivas incluyendo el

costo porcentual promedio de captación (cpp) y la tasa de interés interbancaria promedio (TPI).

Los banqueros no permitirían —perversamente— que el acreditado realizara pagos anticipados, de manera parcial o total, porque precisamente el negocio de las instituciones financieras era el financiamiento a largo plazo, y la generación de intereses sobre intereses, o anatocismo. Por supuesto, al usuario del crédito nunca se le explicaba esta parte del contrato, que aparecía envuelta en fórmulas matemáticas y leyendas técnico-financieras ininteligibles para los neófitos en la materia, o ciudadanos comunes.

Si el usuario del crédito, el trabajador, o consumidor, como buen lego en la materia, hubiera insistido en hacer pagos anticipados y liberar cuanto antes su deuda, el banco simplemente se habría reservado el derecho de no aceptarlos y/o, aduciendo que se incumplía el contrato, podría rescindir el mismo y demandar el pago total más la cantidad resultante de intereses sobre intereses y la comisión por prepago. Es decir, no sólo estábamos en presencia de un contrato de adhesión, sino de un contrato claramente leonino (y por lo tanto de una usura civil y un fraude penal), hábilmente enmascarado con oscuras fórmulas matemáticas de financiamiento.

El famoso “error de diciembre” y la inmediata crisis financiera de 1994 hicieron que las tasas de interés —que antes se habían mantenido estables en un nivel razonable— subieran hasta niveles desmedidos. Para abril de 1994 —y sobre todo un año después—, el trabajador se veía ya en la imposibilidad de cubrir las crecientes mensualidades al banco.

Por lo tanto, el ciudadano que de buena fe había confiado en las ofertas crediticias de los bancos se enfrentaba a un laberinto con pocas salidas, a saber: 1. Reducía todos sus gastos familiares y personales y se descamisaba por seguirle pagando al banco. 2. Caía en carter vencida, pero para no perder su propiedad se incorporaba a los programas de “apoyo a “deudores” (que en realidad lo que buscaban es que se siguiera pagando el anatocismo a los bancos) y aceptaba propuestas leoninas de refinanciamiento. 3. Reestructuraba su préstamo en UDIs, y desconociendo lo anteriormente pagado, empezaba desde cero a pagarle de nuevo al

banco, con una renovación del contrato de adhesión original. 4. El ciudadano transformado en "deudor" por la alquimia financiera de los bancos reconocía que "debo no niego, pago no tengo", y se quedaba simplemente con la posesión mediante fórmulas de renta y con una especie de derecho difuso futuro a adquirir mediante un nuevo contrato de crédito y partiendo de cero, la misma propiedad. 5. El acreditado aceptaba perder todo por incumplimiento de los pagos, quizá por desempleo o por incapacidad de pagar los altos costos financieros de las fórmulas usurarias de anatocismo. 6. El acreditado asumía que no podía o no quería seguir pagando y, a pesar de lo pagado previamente (y en muchas ocasiones ya había cubierto con creces el préstamo original), otorgaba el inmueble en "dación en pago" para librarse de la deuda con el banco perdiendo lo pagado, y la propiedad, y sus sueños de adquirir una casa habitación para él y su familia. Cabe aclarar que, legalmente, el banco podría, incluso, reclamar el pago anticipado de todo lo debido y el "deudor" se podría ver obligado a responder con todo su patrimonio de la deuda por anatocismo contraída con el banco.

Una séptima posibilidad, nos dice GH, era depositar su mensualidad en la "banca de desarrollo" y demandar al banco, y tratar de que se cumpliera la máxima de "debo, no niego, pago lo justo". En la demanda argüiría que el anatocismo o capitalización de intereses sobre intereses era una práctica usuraria prohibida en la legislación financiera, civil y mercantil, y una vez iniciada la acción judicial, intentar confiar en que su derecho humano y constitucional a la impartición y administración de justicia se respetara.

Ése fue el caso de miles de personas en México: millones de ciudadanos que se vieron defraudados en sus expectativas e inversión de ahorros, casos que se fueron incrementando con el paso del tiempo, en particular cuando las empresas que solicitaron créditos se vieron sujetas a los mismos casos de una especie de "fraudes" maquinados por parte de las instituciones bancarias. Ante este desquiciamiento del sistema crediticio, ya no quedó más remedio que acudir ante los tribunales para intentar detener la voracidad, rapacidad y felonía financiera pseudolegal de los bancos.

Ante este panorama, nos dice GHM, respecto del trabajador del caso de estudio: ¿Cómo habría visto evolucionar su crédito original de \$176 000.00 pesos, de 1994? Con estimaciones muy conservadoras, para 1998 su “deuda” se habría incrementado alrededor de 429%, pues habría subido hasta \$755 570.00 pesos. Para agosto de 1999 debería alrededor de \$1 101 715.00 pesos y para el año 2003 (de mantener vivo el litigio) su deuda ya habría rebasado con facilidad el millón y medio de pesos... ¿y todo esto, sólo por un préstamo original de \$176 ,000.00 pesos? Como se observa, los pactos leoninos de intereses sobre intereses pasaron a ser “el negocio del siglo” para los banqueros, a escala mundial.

En el quinto y último capítulo de la primera parte de esta obra, titulado “Ética y justicia en el caso del anatocismo: un caso de neoliberalismo judicial” se presenta uno de los estudios más complejos y delicados sobre el tema de marras. Eduardo Torres y Rebeca Pujol, coautores también de este capítulo, analizan y sintetizan las aristas más críticas del debate que la resolución sobre anatocismo generó, revisando y contrastando las diferentes posturas y argumentos de las partes más importantes en el debate.

Así, se analizan las posiciones de los bancos, de la propia SCJ, de juristas e intelectuales, y las posturas y estrategias de negociación de los “deudores” y sus organizaciones.

ET y RP estudian la vinculación del contexto socioeconómico y político de la resolución con el sentido y finalidad de la misma, que no es otro que el de adaptarse a las modas de la globalización y las tendencias del neoliberalismo. Es decir, se destaca que la resolución sobre anatocismo es uno de los más notorios ejemplos de neoliberalismo judicial en México y el mundo.

Los autores critican de manera aguda el equilibrio de poderes actual, resultante del mexicanísimo modo de entender el sistema de división-distribución de poderes, reflexionando sobre las razones que la SCJ tuvo para convertirse en “el abogado defensor” de la elite financiera del país, la vinculación estrecha del presidente de la SCJ y el presidente de la República, y la política económica neoliberal que rige al país desde 1982.

Eduardo Torres y Rebeca Pujol señalan que, ante la injusticia, sinrazón e incongruencia de la resolución sobre anatocismo, y

toda vez que se confrontaba el contexto de cambio y renovación de los poderes públicos, debería exhortarse al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a tomar acciones en la esfera de su competencia para resolver la inestabilidad y desequilibrio que dicha resolución ha provocado al Estado de Derecho, al sistema de mercado, a la economía y bienestar de los ciudadanos “deudores” y al sistema financiero en su conjunto.

Eduardo Torres y Rebeca Pujol reflexionan acerca de la pertinencia o adecuación de la resolución en comento, señalando que no era el único camino que la SCJ podía tomar para resolver los conflictos de anatocismo. Asimismo, discurren objetivamente sobre las presunciones de parcialidad o imparcialidad implícitas y explícitas en la decisión de la Suprema Corte.

Lo anterior, los lleva a replantear, de hecho y de derecho, algunas consideraciones de fondo y forma sobre las funciones jurisdiccionales y políticas de la SCJ, analizando la posible responsabilidad jurídica y política de los ministros de la SCJ y las funciones jurisdiccionales y políticas del más alto tribunal de México.

Para estos fines, ubican la resolución sobre anatocismo en el marco de la división de poderes y la autonomía judicial, revisando el sistema de nombramiento en 1994 de los actuales ministros de la SCJ (considerando la discusión sobre el posible “golpe de estado” de 1994), la posibilidad de que los ministros se excusaran de conocer acerca de los asuntos de anatocismo (toda vez que ellos se habían beneficiado de pactos privados con los bancos), la relación estrechísima del presidente de la SCJ, Vicente Aguinaco Alemán, con la elite bancaria y financiera (ya que junto con el abogado Sánchez Medal fungió como principal defensor de los bancos expropiados por José López Portillo en 1982 e hizo su prestigio como litigante como asesor y acérrimo defensor de los banqueros),² y las solicitudes de juicio político que algunos actores sociales sugirieron en contra de los ministros de la SCJ. Asimismo, cuestionan el sistema de votación seguido para la resolución y la posible responsabilidad de los ministros, ya sea que

² Cf. Ramón Sánchez Medal, *El fraude a la Constitución y el único amparo en México contra una reforma demolitoria de la Constitución*, México, Porrúa, 1988.

hayan votado en sentido positivo o negativo respecto de tal resolución.

Eduardo Torres y Rebeca Pujol estudian, en el contexto socioeconómico y político del neoliberalismo en México, las posturas de las instituciones financieras, así como sus estrategias y/o tácticas de presión y negociación en contra de los "deudores" y sus familias, señalando que el abuso y prepotencia en muchas de las políticas y/o prácticas de los bancos en muchas ocasiones los llevaron a asumir posturas gangsteriles y de muy bajo nivel y poco respeto para los ciudadanos "deudores".

Además, investigan y precisan, con todo detalle, la situación, postura y estrategia de negociación y defensa desesperada de los "deudores" y las organizaciones de "deudores", vinculando los problemas y dilemas financieros del anatocismo y el Fobaproa.

Una vez sintetizado lo anterior, señalan un abanico de posibles soluciones alternativas a los conflictos que la resolución sobre anatocismo ha generado.

Una aportación muy interesante la constituyen las reflexiones efectuadas sobre las dimensiones no sólo jurídicas y políticas, sino filosóficas, éticas y literarias que emergen de la resolución de la SCJ. Así, ET y RP exponen que la ética y la filosofía que los críticos de la resolución han señalado más insistentemente, es en esencia, neoliberal, mercantilista y disciplinada a los intereses del presidente de la República y la pequeña elite tecnoburocrática neoliberal que controla el gobierno mexicano y las instituciones financieras y bancarias.

Asimismo, ET y RP explican que los principales personajes literarios usados para referirse a la actitud de los ministros de la SCJ (incluyendo a la *Biblia* como literatura) que los críticos han mencionado son el Caín bíblico, el Tartufo de Molière, la abuela desalmada de la Cándida Eréndira de García Márquez, el Mr. Hyde de Stevenson, el Fausto y el zorro Reineke de Goethe, los perversos ancianos portadores de los espejos negros de Tezcatlipoca, el Mr. Scrooge de Dickens y los mercaderes que Cristo expulsara del templo, entre otros personajes literarios, personajes más interesados en la aplicación de otras leyes (del mercado, del encaje y de la selva) antes que en la aplicación de las leyes del Estado de Derecho.

Al final, ET y RP expresan su opinión personal acerca de la resolución sobre anatocismo e invitan a los lectores a formular la suya. Además, en la primera parte de esta investigación colectiva se incluye un anexo muy interesante que contiene una propuesta legislativa realizada por ambos autores en el año 2000, de manera ejemplificativa, para regular al anatocismo.

Los autores admiten que no todas las resoluciones y decisiones de la SCJ son equiparables a la resolución sobre anatocismo, y reconocen que la SCJ, a partir de 1994, ha emitido un sinnúmero de sentencias y decisiones, muchas de ellas laudables y, todas ellas, respetables.

Sin embargo, ET y RP coinciden —en este estudio— con las posturas críticas, objetivas, propositivas y constructivas, en que la resolución del 7 de octubre de 1998 es uno de los casos más deplorables e injustos en los anales judiciales nacionales y mundiales.

Por lo tanto, Eduardo Torres y Rebeca Pujol exhortan a la población y a los poderes constituidos, así como a los juristas, estudiosos e interesados en el tema, a revisar cuidadosamente las diferentes opciones que puedan generarse para atender los problemas del anatocismo y a defender, corregir y mejorar los dilemas consecuentes del Estado de Derecho y el sistema de mercado, los derechos humanos y la justicia en México.



⇒ *"La verdad: exhibición de equilibrio"*, 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Capítulo I

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿Realismo Judicial o Surrealismo Político? Un análisis de los principios solemnes de la Corte y la percepción social de los caricaturistas mexicanos

*Rebeca Florentina Pujol Rosas**
*Eduardo José Torres Maldonado***

SUMARIO

I. Introducción. Antecedentes de la resolución. II. Razones de la facultad de atracción del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III. La "Proclamación de principios" del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IV. La percepción de la "Proclamación de principios" de la SCJ por los caricaturistas mexicanos. V. División de las caricaturas e imágenes descritas y analizadas: A: Las que caracterizan a la política económica del país. B: Las relacionadas más directamente con la decisión de la corte. C: Las que representan a los actores políticos sociales que protagonizan y padecen la decisión de la corte. D: Las que representan a otros actores y una propuesta legislativa. E: Análisis de fotografías relacionadas con la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre anatocismo. VI. Bibliografía.

* Profesora en diversas instituciones académicas y funcionaria judicial.

** Profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAM e investigador nacional del SNI-Conacyt.

INTRODUCCIÓN

EL 7 DE OCTUBRE DE 1998 fue emitida una resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), para efecto de resolver las controversias suscitadas entre deudores de créditos hipotecarios, de tarjetas de crédito y de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa y los bancos. La resolución causó una gran expectación en el país, ya que la decisión del máximo tribunal tenía por objeto resolver la situación de millones de deudores cuyos créditos se habían al menos duplicado y triplicado, cuando no quintuplicado, volviéndose impagables, por lo que la cartera vencida bancaria se registró, para el año de 1996, como la más elevada de todos los tiempos, no obstante diversos programas y planes que se propusieron por parte de las entidades financieras y bancarias, y por el propio gobierno.

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de tal trascendencia que, dados sus efectos, debe ser analizada desde diversas aristas. Consideramos que, aunque la propia Corte ha sostenido que en la decisión relativa sólo se limitó a interpretar la ley y a "...dar el derecho a quien lo tiene y negarlo a quien no lo tiene", el método jurídico resulta limitado e insuficiente para alcanzar una explicación integral del problema y se requiere analizar decisiones tan importantes y trascendentes como ésta, abordando plurimetódicamente su complejidad. En este orden de ideas, debemos y necesitamos hacer un alto y acudir al contexto actual en el que se pronuncia esa resolución, si efectivamente la misma responde a la complejidad social, política y económica de nuestro país, desde luego financiera y, asimismo, estudiar hasta qué punto el fenómeno globalizante ha venido a influir e incidir en el sentido de tal resolución.

Sin pretender hacer un estudio exhaustivo de la llamada globalización y el neoliberalismo, diremos que la misma se ha convertido en la tendencia predominante en la economía mundial, cuyo liderazgo descansa en los países industrializados. Por su parte, los países no industrializados como el nuestro, se van incorporando de manera paulatina a la economía mundial mediante comercio, la inversión directa, el flujo de capital y el "intercambio" de tecnología.

Ante este fenómeno globalizante, los países no industrializados se han visto obligados a instrumentar reformas fiscales, monetarias y comerciales, así como a implementar leyes sobre competencia, con objeto de alcanzar la eficiencia, adaptabilidad y flexibilidad necesarias para responder a los retos no sólo regionales, sino globales, que este fenómeno les ha impuesto. La política prioritaria es la económica, su fundamento: la máxima ganancia, con el mínimo esfuerzo. ¿Las políticas sociales? pasan a un segundo término y se determinan de manera dependiente de la política económica.

Cabe decir que el fenómeno de la globalización no descuida del todo la parte social, pero con una base de carácter económico; por ejemplo, tenemos programas como el llamado combate a la pobreza, que se aplica en países del tercer mundo. Así pues, la llamada globalización establece y define las bases del desarrollo, es decir, los países "subdesarrollados" (no industrializados, para nosotros) deben alcanzar el desarrollo, desde luego, siguiendo las políticas establecidas por los países "desarrollados" (industrializados) y, si los países "subdesarrollados" no se apegan a las políticas y directrices impuestas por los países "desarrollados", simplemente no pueden ser sujetos de los créditos y financiamientos que otorgan los organismos económicos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros, para que los países "subdesarrollados" se desarrollen. De esta forma, la globalización homogeniza las reglas y normas a partir de las cuales los países del tercer mundo deben alcanzar el desarrollo, ¿cuál desarrollo? el que delinean y establecen los países más poderosos. Sabemos que este fenómeno de la globalización responde al modelo neoliberal impuesto por esos países.

Esta política globalizante y neoliberal se ve implementada de modo total en nuestro país el de 1 enero de 1994, en que México pasa a formar parte del "primer mundo", asociándose comercialmente con dos países industrializados, los Estados Unidos y Canadá, en franca desventaja de competitividad, negociación y condiciones de beneficio nacional. Paralelamente, en ese mismo año, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), declarando la guerra al gobierno salinista.

Por su parte, el entorno nacional en el que se pronuncia la resolución de la Corte presenta un escenario poco halagador, le preceden problemas sin solución; de manera enunciativa, más no limitativa, citaremos: la situación de Chiapas, en torno del problema indígena, sus derechos y su autonomía; la matanza de Acteal, también en Chiapas; el caso Aguas Blancas en el estado de Guerrero; los archivos del movimiento estudiantil de 1968; el rescate carretero; el Fobaproa; la sucesión presidencial, entre muchos otros.

Asimismo, existe una acelerada pauperización de la población: junto a la pobreza (dos tercios de la población), surge la extrema pobreza y la extrema miseria (un tercio de la población). Los índices de desempleo y de delincuencia alcanzan los porcentajes más altos en la historia de nuestro país. El poder adquisitivo de la población disminuye de modo alarmante. Se carece de una planta productiva sólida, la existente es incipiente y nacional, y descansa en la micro, pequeña y mediana industria, sustentada para su creación y crecimiento en créditos y financiamientos bancarios. De igual forma, aunque en la micro, pequeña y mediana industria es en donde se concentran las mayores fuentes de empleo en nuestro país, las Pyme atraviesan por una severa crisis. El capital internacional que se invierte en el país es de carácter especulativo —se invierte en la bolsa— y, en su gran mayoría, no tiene relación con la incipiente planta productiva. El campo, a raíz de las reformas a la ley agraria en 1992, en el periodo salinista, se ha convertido en un rubro preferente de inversión de capital trasnacional financiero especulativo que, a su vez, ha provocado un desplazamiento gradual de las capas campesinas y un deterioro ambiental severo. Se explota y maneja una agricultura de exportación para el mercado externo, o bien, prolifera el cultivo de drogas y enervantes, en razón de una economía de mercado, creándose circuitos comerciales que sólo dan cabida a los productos derivados ya sea de esa agricultura de exportación, o bien, de drogas y enervantes. Presenciamos situaciones como las siguientes: en la actualidad, nuestro país importa maíz de ínfima calidad de África, cuando el maíz es originario del estado de Jalisco, es decir, mexicano, lo que resulta un absurdo. Podemos citar, además el ejemplo del petróleo y la gasolina: siendo México un país produc-

tor de petróleo y gasolina, por poseer los recursos (de acuerdo con fuentes de Petróleos Mexicanos), señalan que en Campeche existe un pozo petrolero que puede surtir a toda América durante muchos años y no se agotaría su producción; sin embargo, es el país de América donde más costosa es la gasolina: aumenta mensualmente y se paga un impuesto excesivo, resultando que en otros países que no tienen el recurso natural y no producen la gasolina, el precio de la misma es más barata. No obstante, la falta de una adecuada planificación y administración de recursos, por parte de la elite gobernante, es lo que nos conduce a situaciones tan contradictorias como la mencionada.

Por otra parte, el sistema tributario y fiscal del país es excesivo y nos encontramos ante un fisco voraz que pretende resolver todos los problemas de índole económica mediante la recaudación y aumento de impuestos, ante la falta de una correcta y mesurada planeación. Así, la tasa impositiva nacional es de las más altas del mundo, con los menores beneficios para el contribuyente. La situación tributaria y fiscal va acompañada de un proceso inflacionario que siempre rebasa los índices anuales previstos y calculados por el gobierno.

En forma paradójica, México posee recursos, tanto humanos como naturales, que le permitirían afrontar de una manera planificada los retos que le impone el fenómeno globalizante y, si bien no puede aislarse de ese fenómeno mundial, sí podría sobrellevarlo y adecuarlo a las necesidades internas del país de un modo ventajoso. Si tomamos en consideración que la población de nuestro país se considera la mejor mano de obra del mundo (de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo) y que México ocupa el primer lugar mundial de fuga de cerebros a los Estados Unidos, aunada esta situación al hecho de que nuestro país es rico en recursos naturales, tales como petróleo, uranio, maderas preciosas, fauna endémica (tan sólo Oaxaca y Chiapas ocupan el tercero y el sexto lugar mundial en ese rubro), surge la interrogante: **¿Por qué nos encontramos en una situación tan crítica y en el subdesarrollo más indignante la gran mayoría de los mexicanos?** Son sólo algunas reflexiones que invitan al análisis del contexto de la resolución de la corte, que a continuación analizamos.

Es en este contexto que el día 7 de octubre de 1998 se pronuncia la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tuvo en su mano la oportunidad histórica de demostrar su función como poder republicano independiente del Poder Ejecutivo en una decisión cuyos efectos son de trascendencia nacional y de interés público debido a la gran cantidad de mexicanos que afecta. El maestro Mario Melgar Adalid señala:

En sistemas como el nuestro, en que los jueces, además de su elevada tarea de decir el derecho, tienen a su cargo buena parte del gobierno y hasta de la política, en tanto sus decisiones afectan cuestiones de constitucionalidad, el asunto de la selección de juzgadores resulta fundamental para la vida del Estado y para el equilibrio social. El juez tiene a su cargo, además de las consideraciones jurídico-políticas que puedan hacerse, la elevada tarea de propiciar que impere en el grupo social al que pertenecen y sirven los valores fundamentales de una sociedad: justicia, solidaridad, paz, orden, colaboración social y certeza jurídica.

ANTECEDENTES DE LA RESOLUCIÓN

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciada el 7 de octubre de 1998 —conocida como la “Resolución sobre Anatocismo”, y que se anexa a esta obra—, tiene como antecedentes, por un lado, la contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, tribunales que respectivamente sustentaron las siguientes tesis: “crédito adicional o refinanciamiento, sistema de. Es un acto simulado que encierra un pacto de anatocismo”, y “anatocismo, pacto de. No lo constituye el convenio celebrado entre los contratantes a fin de que el acreditado disponga discrecionalmente, en su caso, de un crédito adicional para cubrir intereses devengados e insolutos”. Por otro lado, la contradicción de criterios suscitada entre el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Cir-

cuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. En virtud de la posible contradicción de criterios entre los tribunales colegiados de circuito mencionados con anterioridad, se formuló la denuncia respectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, turnándose para su estudio a la Primera Sala y formándose, en el primer caso, el expediente de contradicción de tesis número 2/98; y, en el segundo, el expediente de contradicción de tesis número 11/98.

El Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Humberto Román Palacios menciona en el informe rendido ante el pleno de la corte:

La presidencia de esta sala solicitó a los tribunales colegiados de todos los circuitos el envío de copias de las ejecutorias y de las tesis que hubieren pronunciado y sustentado en relación con la temática mencionada:

1. Se pidió informe a 62 tribunales colegiados.
2. 27 tribunales colegiados NO remitieron ejecutoria y manifestaron que NO se han pronunciado sobre el tema.
3. En 89 ejecutorias recibidas NO se aborda el tema.
4. En 118 ejecutorias sí se abordó el tema.

La solicitud a los tribunales colegiados de circuito para efecto de que remitieran a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ejecutorias citadas, se llevó a cabo mediante el auto de fecha 12 de mayo de 1998, "...para requerir a los tribunales colegiados con competencia en materia civil de todos los circuitos, a efecto de que remitieran copias certificadas y, de ser posible, disquetes de sentencias pronunciadas sobre temas similares. La respuesta de todos los tribunales colegiados fue oportuna y, de los que consideraron haber abordado el tema, se recibieron 207 ejecutorias".

Una vez recabada la información de las ejecutorias enviadas por los tribunales colegiados de circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formuló una propuesta temática relativa al tema:

Tema I: Contrato de apertura de crédito adicional para cobertura de intereses. ¿Constituye anatocismo?

Tema II: Proyecto de viabilidad económica del acreditado en apertura de crédito con línea adicional para aplicación de intereses. (Imprevisión). ¿Es nula la cláusula por falta de proyecto de viabilidad económica?

Tema III: Cláusula de crédito adicional para pago de intereses en un contrato de apertura de crédito. ¿Constituye una transgresión a la prohibición de financiamiento para pago de pasivos?

Tema IV: Apertura de crédito. línea adicional de crédito al acreditado para pago de intereses. ¿Existe falsedad ideológica para encubrir la capitalización de intereses? (Simulación)

Tema V: Contrato de apertura de crédito. capitalización de intereses. ¿es aplicable supletoriamente el código civil artículo 2397, a dichos contratos mercantiles?

Tema VI: Cláusula adicional para pago de intereses vencidos. Las amortizaciones implican consentimiento y convalidan nulidad pretendida.

Tema VII: Cláusula de crédito adicional. la falta de aviso al banco acreditante sobre no disposición del crédito adicional implica aceptar la aplicación a pago de intereses.

Tema VIII: Mora. Está condicionada al aviso del banco acreditante.

Tema IX: Intereses. Ante la imprecisión de la tasa aplicable para su cuantificación debe estarse al tipo legal.¹

En su calidad de ministro ponente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Juventino V. Castro y Castro elaboró un dictamen de fecha 2 de julio de 1998, por el cual solicitaba que la contradicción de tesis contenida en los expedientes 2/98 fuera turnada al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conocimiento y resolución, petición que formula con fundamento en los artículos 25, fracción, V y 11, fracción V, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El ministro Castro y Castro solicitó la intervención del tribunal pleno, en los siguientes términos:

¹ Cf. La resolución del 7 de octubre de 1998 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resuelve la contradicción de tesis 31/98.

Con fundamento en los artículos 25, fracción V y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito se sirva plantear al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el conocimiento y resolución de las contradicciones de tesis citadas al rubro sean sometidas al conocimiento del tribunal pleno de conformidad con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 10 de la citada Ley Orgánica, así como en términos de las fracciones V y VI del acuerdo 1/1997, emitido por el pleno el 27 de mayo de ese año..."²

Los artículos 25, fracción V y 11, fracción V, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que sirvieron de sustento a la petición del ministro Juventino V. Castro y Castro para que el asunto de la contradicción de tesis citadas fuera turnado al tribunal pleno para su conocimiento, dada su trascendencia jurídica, señalan textualmente:

Artículo 10, fracción VIII: La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en pleno: Fr. VIII: De las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas de la Suprema Corte de Justicia, o por los tribunales colegiados de circuito cuando se trate de asuntos que por razón de la materia no sean de la competencia exclusiva de alguna de las salas, o por el Tribunal Electoral en los términos de los artículos 236 y 237 de esta ley.

Artículo 11, fracción V: El pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus miembros y tendrá las siguientes atribuciones: Fr. V: Remitir para su resolución los asuntos de su competencia a las salas a través de acuerdos generales. Sí alguna de las salas estima que el asunto remitido debe ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno, lo hará del conocimiento de este último para que determine lo que corresponda.

Artículo 25, fracción V: Son atribuciones de los presidentes de las salas: Fr. V: Despachar la correspondencia oficial de la sala.

² Para mayor ampliación de esta información, véase el libro de Juventino V. Castro, *La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta. Un fallo histórico respecto al llamado "anatocismo"*, México, Porrúa, 1998.

De esta forma, ante la propuesta hecha por el ministro Juvenio V. Castro y Castro, se llevó a cabo una sesión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolviéndose al respecto que el tribunal pleno conocería de la contradicción de tesis números 2/98 y 11/98. El conocimiento de la contradicción de tesis anterior se basaba en el ejercicio de la facultad de atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la sesión en que se acordó que la denuncia de contradicción de tesis planteada fuese del conocimiento del tribunal pleno, por ejercicio de la facultad de atracción, fue muy discutida y la votación muy estrecha: 6 votos a favor y 5 en contra. Los votos a favor fueron de los ministros: Mariano Azuela Güitrón, Juvenio V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Con voto en contra de los ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, quienes estimaban que tal competencia se surte por reasunción de competencia original.

RAZONES DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

En consecuencia, el tribunal pleno estableció las razones por las cuales consideró que se debía ejercer la facultad de atracción, dictando al efecto el siguiente acuerdo:

ACUERDO DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR EL QUE SE ACOGE EL PLANTEAMIENTO PARA QUE SEA ÉSTE EL QUE SE OCUPE DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 2/98, QUE PASO A SER LA 31/98. (EJERCICIO DE FACULTAD DE ATRACCIÓN) (7 DE JULIO DE 1998).

ACUERDO:

"México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de julio

de mil novecientos noventa y ocho. —VISTOS;” y RESULTANDO: PRIMERO.- ... — “SEGUNDO.- ... — TERCERO.- ... — CUARTO.- ... -” — QUINTO.- ... — SEXTO.- ... — SÉPTIMO.- “Mediante dictamen de dos de julio de mil “novecientos noventa y ocho, el Señor Ministro “Juventino V. Castro y Castro solicitó del “Presidente de la Primera Sala, fundamentando su “petición, remitir el expediente al Tribunal Pleno “para que sea éste el que se avoque a su “conocimiento, lo que fue ordenado así en acuerdo “de la misma fecha, obsequiando la petición del “ponente. —El Presidente de la Suprema Corte por “auto de dos de julio de mil novecientos noventa y “ocho, determinó dar de baja el expediente 2/98 del “índice de la Primera Sala para continuar su trámite “bajo el número 31/98 del índice del Tribunal Pleno, “y ordenó su devolución al Ministro Juventino V. “Castro y Castro. — OCTAVO.- En sesión pública “de siete de julio de mil novecientos noventa y “ocho, el Ministro Juventino V. Castro y Castro “reiteró ante el Tribunal Pleno de esta Suprema “Corte, la propuesta para que éste se avocara al “conocimiento de la presente contradicción, la cual “es del tenor siguiente: — Con fundamento en los “artículos 25, fracción V, y 11, fracción V, de la Ley “Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solicito “se sirva plantear al Presidente de la Suprema “Corte de Justicia de la Nación, que el “conocimiento y resolución de las contradicciones “de tesis citadas al rubro sean sometidas al “conocimiento del Tribunal Pleno de conformidad “con lo dispuesto en la fracción VIII del artículo 10 “de la citada Ley Orgánica, así como en términos “de las fracciones V y VI del acuerdo 1/1997, “emitido por el Pleno el veintisiete de mayo de ese “año; por las siguientes razones: — 1.- Que es de “explorado derecho el que la finalidad fundamental “de la denuncia de las contradicciones de criterios “que sustentan las Salas de la Suprema Corte de “Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados “de Circuito y las consecuentes determinaciones “sobre las tesis que deben prevalecer, reguladas “en los artículos 197 y 197-A de la Ley de Amparo -“según antecedentes históricos consultables- tiene “como fundamento el lograr seguridad y certeza “jurídicas, como valor esencial de una adecuada “administración e impartición de justicia. — 2.- Que “la interpretación conjunta de los artículos 94, “párrafos tercero y sexto, y 107, fracción XIII, de la “Constitución Federal y de los preceptos 10, “fracción VIII, 11, fracciones IV y V, y 21, fracción “VIII, de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la "Federación, en las fracciones precitadas, nos lleva "a la conclusión de que la Suprema Corte de "Justicia ejerce las atribuciones del Poder Judicial "de la Federación en el ámbito de la competencia "original que le fije la Constitución Federal; que su "funcionamiento y competencia en Pleno y Salas "se regirá por lo dispuesto en las leyes, de "conformidad con las bases que establece la "propia Constitución; que el Pleno está facultado "para expedir acuerdos generales, a fin de "distribuir adecuadamente entre las Salas los "asuntos de que compete conocer a la propia "Corte, entre los cuales se encuentran, "precisamente, las contradicciones de tesis entre "Tribunales Colegiados. — 3.- Del contenido de los "párrafos tercero y sexto del artículo 94 "constitucional, se advierte que la competencia de "la Suprema Corte y la de los demás tribunales "federales deben regirse por lo que dispongan las "leyes conforme a las bases que establece la "Constitución, y que ésta faculta al Pleno para "expedir acuerdos generales mediante los cuales "distribuya entre las Salas los asuntos que "compete conocer a la propia Corte, lo cual, *prima "facie*, limita su competencia, pero al propio tiempo "no la extingue; por lo tanto, el tribunal pleno "conserva plena competencia, quien la fracciona y "delega a otros órganos del Poder Judicial de la "Federación, para conocer en general de los "asuntos que corresponden a la Suprema Corte de "Justicia. Por ello, la propia Corte está facultada "para distribuir, entre las Salas, mediante acuerdos "generales, los asuntos que estime pertinentes, es "decir puede delegar en éstas su propia "competencia original, puesto que la Suprema "Corte debe funcionar en Pleno y en Salas. — 4.- "Las fracciones IV y V del artículo 11 de la Ley "Orgánica del Poder Judicial de la Federación "establecen claramente las atribuciones que tiene "el Pleno para determinar la competencia por "materia de cada una de las Salas, para establecer "el sistema de distribución de los asuntos a que "éstas correspondan, y para remitirles los asuntos "de su competencia. — 5.- En tales condiciones, es "entendible que el Tribunal Pleno fije la "competencia de las Salas y determine la "distribución y remisión de los asuntos, "competencia de éstas. — 6.- Por, lo tanto, debe "concluirse que el Pleno tiene jurisdicción sobre "todos los asuntos que sean de la competencia de "la Suprema Corte; y también, que tiene facultades "para fijar la competencia de las Salas y para "determinar los asuntos propios de esa "competencia, delegando en ellas parte de la "jurisdic-

ción que tiene sobre todos los asuntos “correspondientes a la Suprema Corte. — 7.- Se “confirma además este aspecto, con lo previsto en “la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del “Poder Judicial de la Federación, puesto que en “dicha disposición se concede al Pleno la facultad “de dirimir cualquier controversia que surja entre “las Salas de la Suprema Corte y dentro del Poder “Judicial de la Federación, con motivo de “aplicación de lo dispuesto en el artículo 94 y otros “de la Constitución Federal, o de los preceptos “correlativos de la Ley Orgánica mencionada. — “8.- Respecto a las contradicciones de tesis, debe “tomarse en cuenta lo dispuesto por los artículos “8º, fracción VIII, y 21, fracción VIII, de la misma “Ley Orgánica, que establecen, respectivamente, la “competencia del Pleno y de las Salas para “conocer de las denuncias de aquellas “contradicción de criterios que surjan entre dos o “más Tribunales Colegiados de Circuito. Además, “la fracción VIII del artículo 10 del ordenamiento “orgánico invocado, concede al Pleno la “competencia para conocer de las contradicciones “de tesis, cuando no sean de la competencia “exclusiva de alguna Sala por razón de la materia; “lo cual significa que se da competencia al Pleno “para conocer de las denuncias de contradicción “de tesis que por cualquier motivo no “correspondan a las Salas, ya que no se limita la “competencia del Pleno por razón de la materia o “en función de las cuestiones que se controviertan “en las contradicciones. — 9.- Por otra parte, la “fracción VIII del artículo 21 dispone que “corresponde a las Salas conocer de las “contradicciones de tesis que sustenten dos o más “Tribunales Colegiados de Circuito para los efectos “a que se refiere la Ley de Amparo; pero es “evidente que no especifica cuál es la competencia “de las Salas en estos aspectos; por lo tanto, es al “Tribunal Pleno al que corresponde fijar la “competencia en esas cuestiones. — 10.- En “síntesis, la Ley Orgánica no fija la competencia “propia del Pleno, ni de las Salas, en virtud de que “se limita a establecer que corresponde conocer al “Tribunal Pleno de aquellas contradicciones de las “que no conozcan las Salas; por lo tanto, “corresponde al Pleno la competencia originaria “sobre toda clase de contradicciones de tesis, y a “este máximo órgano corresponde señalar la “competencia de las Salas en estos asuntos. — “11.- Al respecto, debe tenerse en cuenta que en la “fracción V del artículo 11 de la Ley Orgánica del “Poder Judicial de la Federación se contempla que “si alguna de las Salas estima que

algún asunto "que le haya sido remitido debe ser resuelto por el "Pleno, lo hará del conocimiento de éste para que "determine lo que corresponda. En este contexto, "como lo sostuvo el Tribunal Pleno, en el fallo "emitido con motivo del expediente varios número "631/96, resuelto por unanimidad de votos, en "sesión de veintiocho de octubre de mil "novecientos noventa y seis. — '...ha de "considerarse que la petición del ministro ponente "de que este Tribunal Pleno, ejerza la facultad de "atracción constituye uno de los medios idóneos, "para que los integrantes de la Suprema Corte de "Justicia de la Nación estén en posibilidad de "determinar si se trata de un asunto de elevada "entidad, que amerite su ejercicio lo que desde "luego, finalmente, corresponderá decidir a este "órgano colegiado...". — 12.- En tal virtud, con "fundamento en dicha disposición orgánica, "procede plantear al Tribunal Pleno, que conozca "de las contradicciones al rubro citadas, puesto "que, a pesar de la competencia por materia de las "Salas, fijada por el propio Pleno, este último tiene "facultades para conocer de ellas, cuando lo estime "pertinente y alguna de éstas considere que la "resolución del asunto corresponde al Pleno. — "13.- Es pertinente tomar en cuenta que la figura de "la atracción que puede ejercer el Tribunal Pleno, a "fin de reasumir la competencia originaria que le "corresponde, para conocer de los asuntos de "contradicción de tesis citados al rubro, tiene su "origen mediato en la reforma constitucional que "se produjo a los artículos 104 y 107 de nuestra "Carta Fundamental; pues en esa reforma y otras "posteriores sobre el mismo tema, se desprende "que el ejercicio de esta facultad discrecional, se "justifica, precisamente, con las diversas "expresiones que se han utilizado en las referidas "reformas, tales como: que se trate de asuntos de "'interés', 'importancia', de 'especial entidad', o de "'particular trascendencia para la vida jurídica de la "Nación', entre otras; las cuales denotan la "finalidad de reservar el conocimiento de los "asuntos más relevantes, al máximo Tribunal de la "República. — 14.- En este orden de ideas, la "importancia intrínseca de los asuntos es factor "determinante para que se ejerza por el Tribunal "Pleno la facultad de atracción, y se funda en la "temática jurídica compleja que en ellos se "abordará, relativa al pacto del anatocismo, su "licitud o ilicitud; a los intereses compuestos; a la "viabilidad o inviabilidad de los contratos "celebrados; a la naturaleza de los mismos; a la "existencia o inexistencia de

simulación en las "operaciones crediticias, cuando se haya "autorizado al deudor una línea de crédito adicional "y esté así en posibilidad de pagar los intereses "que sean mayores que los pagos mensuales de "capital; que los nuevos adeudos se sumen al "capital y sobre ambos se causen otros intereses; "así como a la interpretación que se lleva a cabo de "la legislación federal y local relacionada en el "ámbito mercantil y civil. — Si bien la cuestión del "anatocismo, planteado en los casos que se "analizan, es propia de la materia mercantil, debe "tomarse en consideración también que los "tribunales colegiados opositores han abordado en "sus resoluciones aspectos referentes a la nulidad "de dichos contratos por ilicitud o simulación; "incluso, se aborda el tema de la nulidad de los "contratos sobre préstamos adicionales para el "pago de intereses por violencia moral ejercida "sobre los deudores, quienes se ven obligados a "aceptar las condiciones impuestas por los "bancos; y que la mencionada nulidad puede "provenir también de la lesión que sufran los "acreedores porque los bancos, explotando su "inexperiencia o extrema necesidad, obtienen un "lucro excesivo y desproporcionado. Además, debe "tomarse en cuenta que se plantea la nulidad de los "créditos, debido a que los bancos obligan a los "deudores a contraer obligaciones impagables, en "las que es inviable o imposible el pago de la "deuda. — De esta manera, los criterios "contradictorios de los tribunales colegiados "también plantean cuestiones de nulidad de "obligaciones que ocurren en otros campos del "derecho; además, resulta obligado examinar —y "deberán por tanto resolverse—, temas como la "normatividad reguladora de las actividades de las "instituciones de crédito, que comprende aspectos "tales como la capitalización de intereses, "inviabilidad del proyecto económico de apertura "de crédito y nuevos préstamos para capitalizar "intereses; y, eventualmente, podrían abordarse "temas como la intervención del Banco de México y "la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la "aprobación de los referidos contratos y su "clausulado; y la regulación y funcionamiento de "esos organismos administrativos. — 15.- A mayor "abundamiento, atendiendo a la trascendencia de "estos asuntos, en auto de trece de mayo del año "en curso la Presidencia de esta Sala solicitó a los "Tribunales Colegiados de todos los Circuitos el "envío de copias de las ejecutorias y de las tesis "que hubieren pronunciado y sustentado en "relación con la temática mencio-

nada. — El “examen de los informes recabados arroja el “siguiente resultado temático preliminar: — TEMA “I: — CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO “ADICIONAL PARA COBERTURA DE INTERESES “¿CONSTITUYE ANATOCISMO? — TEMA II: — “PROYECTO DE VIABILIDAD ECONÓMICA DEL “ACREDITADO EN APERTURA DE CRÉDITO CON “LÍNEA ADICIONAL PARA APLICACIÓN DE “INTERESES. (IMPREVISIÓN). ¿ES NULA LA “CLÁUSULA POR FALTA DE PROYECTO DE “VIABILIDAD ECONÓMICA? — TEMA III — “CLÁUSULA DE CRÉDITO ADICIONAL PARA PAGO “DE INTERESES EN UN CONTRATO DE APERTURA “DE CRÉDITO. ¿CONSTITUYE UNA “TRANSGRESIÓN A LA PROHIBICIÓN DE “FINANCIAMIENTO PARA PAGO DE PASIVOS? — “TEMA IV — APERTURA DE CRÉDITO. LÍNEA “ADICIONAL DE CRÉDITO AL ACREDITADO PARA “PAGO DE INTERESES ¿EXISTE FALSEDADE “IDEOLÓGICA PARA ENCUBRIR LA “CAPITALIZACIÓN DE INTERESES? (SIMULACIÓN) — TEMA V — CONTRATO DE APERTURA DE “CRÉDITO. CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. ¿ES “APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO “CIVIL ARTÍCULO 2397, A DICHS CONTRATOS “MERCANTILES? — TEMA VI — CLÁUSULA “ADICIONAL PARA PAGO DE INTERESES “VENCIDOS. LAS AMORTIZACIONES IMPLICAN “CONSENTIMIENTO Y CONVALIDAN NULIDAD “PRETENDIDA — TEMA VII — CLÁUSULA DE “CRÉDITO ADICIONAL. LA FALTA DE AVISO AL “BANCO ACREDITANTE SOBRE NO DISPOSICIÓN “DEL CRÉDITO ADICIONAL IMPLICA ACEPTAR LA “APLICACIÓN A PAGO DE INTERESES — TEMA VIII “— MORA. ESTÁ CONDICIONADA AL AVISO DEL “BANCO ACREDITANTE — TEMA IX — INTERESES. “ANTE LA IMPRECISIÓN DE LA TASA APLICABLE “PARA SU CUANTIFICACIÓN, DEBE ESTARSE AL “TIPO LEGAL. — Con apoyo en las diversas “consideraciones jurídicas que se han expuesto, “solicito que, por su conducto, se remitan los “expedientes de estas contradicciones de tesis al “Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, para que “determine si lo estima pertinente, que por la “trascendencia jurídica de los criterios en los que “deba establecerse certidumbre jurídica, debe “asumir su competencia originaria para conocer de “las citadas contradicciones de tesis, de “conformidad con lo establecido en la mencionada “fracción VIII del artículo 10 de la Ley Orgánica del “Poder Judicial de la Federación, y además se “prevea la posibilidad de que se conozcan otras “contradicciones de tesis con temas cercanos a las “dos que ahora preciso. —”

CONSIDERANDO: — Este Tribunal Pleno “de la Suprema Corte es competente para “conocer de la petición que formuló el Ministro “Ju-

ventino V. Castro y Castro, de ejercer la facultad "de atracción respecto de la contradicción de tesis "2/98 del índice de la Primera Sala, con fundamento "en el artículo 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, "de la Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos y en aplicación de la tesis CXLVIII/96 "consultable en el *Semanario Judicial de la "Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo IV "correspondiente a diciembre de mil novecientos "noventa y seis, página ciento nueve, por razones "de similitud con la contradicción que ahora se "plantea, y cuyo texto es como sigue: — "ATRACCIÓN, FACULTAD DE. SU EJERCICIO "PUEDE SOLICITARSE OFICIOSAMENTE POR LOS "MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE "JUSTICIA.- De acuerdo con lo establecido por el "artículo 107, fracciones VI, último párrafo y VIII, "penúltimo párrafo, de la Constitución Política de "los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte "de Justicia de oficio, puede conocer de los "amparos directos y de los amparos en revisión "que no correspondan a su competencia ordinaria "pero que por su interés y trascendencia así lo "ameriten (disposiciones que se reiteran en los "artículos 84, fracción III y 182 de la Ley de "Amparo, y 10, fracción II, inciso b), de la Ley "Orgánica del Poder Judicial de la Federación), de "lo que se infiere que para que este alto tribunal "pueda oficiosamente ejercer dicha facultad, "requiere que, por lo menos, en uno de sus "miembros surja la inquietud acerca del interés y "trascendencia de un asunto y formule la petición "de atraerlo al conocimiento del órgano colegiado, "lo que implica que cualquiera de los Ministros que "integran la Suprema Corte está facultado para "realizar la mencionada solicitud. — El asunto cuya "atracción se propone, versa sobre aspectos que "en principio son de la exclusiva competencia de la "Primera Sala por referirse al análisis de "cuestiones en materia de contratos; sin embargo, "dado el interés y trascendencia que revela la "temática del problema planteado ante los diversos "Tribunales Colegiados de Circuito de la República, "que ha motivado la emisión de sentencias en "sentido contradictorio, que precisan ser "analizadas por el Máximo Tribunal a fin de "determinar, con miras al establecimiento de la "certidumbre y seguridad jurídica en la "interpretación y aplicación de disposiciones "legales, cuál debe ser el criterio a seguir de "manera uniforme ante este tipo de problemas, "pues resulta un hecho notorio el que este asunto "justificada o injustificadamente, identificado en el "entorno social del país como el asun-

to del "anatocismo, ha despertado verdadera "intranquilidad social lo cual constituye ya una "razón de importancia y trascendencia; además, se "pone de manifiesto el interés de la presente "contradicción pues se trata de un asunto jurídico "complejo; tanto es así, que se ha ampliado la "denuncia de contradicción inicialmente formulada, "a nueve temas que emergen de la revisión "detallada de los múltiples casos que se han "presentado en los diversos Tribunales Colegiados "de la República, en los que se advierte la "interpretación de contratos con similares "características, que atienden a las circunstancias "que rodearon la celebración de los mismos, por lo "que este asunto se encuentra revestido de un "interés jurídico especial, que lo distingue de otras "contradicciones de tesis y le da el carácter "excepcional que amerita y justifica el ejercicio de "la facultad de atracción que tiene el Tribunal Pleno "de la Suprema Corte para atraer a su "conocimiento asuntos como el que nos ocupa. "Asimismo se justifica la atracción, por la "trascendencia de la resolución que habrá de "emitirse pues es inconcuso que el problema "planteado tiene que ver de manera muy directa "con el sistema bancario en todo el país y está en "juego, en alguna medida, el destino de un número "elevadísimo de créditos concertados al amparo de "contratos cuya validez reconocen algunos "Tribunales Colegiados de Circuito y que otros han "considerado nulos. Por todo ello, este Tribunal "Pleno no puede permanecer ajeno a ese reclamo "social, sin que ello implique, forzosamente, que "sea el impacto económico el factor determinante "para el ejercicio de esa facultad.

— Lo expuesto "conlleva a este Tribunal Pleno a considerar que el "asunto reviste características especiales que "justifican ampliamente su conocimiento directo "por el Máximo Tribunal del país, motivo por el cual "se estima procedente la solicitud que al respecto "formuló el Ministro Ponente y, en consecuencia, de "oficio se decide ejercer la facultad de atracción "para conocer y resolver de la contradicción de "tesis originalmente registrada en el expediente "2/98 del índice de la Primera Sala, cuyo ingreso al "Tribunal Pleno se registró con el número 31/98, "con fundamento en el referido artículo 107, "fracción VIII, penúltimo párrafo del pacto federal y "en aplicación analógica del criterio que emerge de "la jurisprudencia 30/91, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo VII "correspondiente a

junio de mil novecientos “noventa y uno, página cuarenta y siete, que es del “tenor siguiente: — ATRACCIÓN. EL PLENO DE LA “SUPREMA CORTE PUEDE EJERCER ESA “FACULTAD RESPECTO DEL ASUNTO DE LA “COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANOS DEL “PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.-“(transcrita). — Por lo expuesto este Tribunal Pleno “emite los siguientes puntos de acuerdo: — “PRIMERO.- En virtud de la trascendencia e interés “jurídico que representa el problema planteado en “la contradicción de tesis que originalmente se “radicó en la Primera Sala con el número 2/98, este “Tribunal Pleno asume el conocimiento del mismo “para continuar su trámite en los autos del toca “31/98. — SEGUNDO.- Para tal efecto se ejerce la “facultad de atracción en virtud del carácter “excepcional que reviste la problemática planteada “en la referida contradicción de tesis, por las “razones expuestas en el considerando único del “presente acuerdo. Notifíquese.”

Unanimidad de votos para que sea el Pleno el que se ocupe de este asunto; mayoría de seis votos de los Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán, en el sentido de que la competencia de dicho Máximo Tribunal se actualiza por ejercicio de facultad de atracción, en contra del voto de los Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Humberto Román Palacios, Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza, quienes estiman de que tal competencia se surte por reasunción de competencia original.”

Una vez ejercida la facultad de atracción por el Pleno de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, se asignaron a las denuncias de contradicción de tesis, los números 31/98 y 32/98 y se llevaron a cabo diversas sesiones para efecto de estudiar las denuncias presentadas, con el resultado de las tesis que sobre el tema, resolvió el Pleno de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN y que se anexan de manera resumida al final del presente trabajo. Son estos, pues, los trabajos y antecedentes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al anatocismo.³

³ Cf. Los expedientes de las denuncias 31/98 y 32/98 correspondientes.

LA "PROCLAMACIÓN DE PRINCIPIOS" DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Para los efectos de nuestro tema, es importante sobre todo reflexionando respecto del papel desempeñado por nuestro máximo tribunal, presentar un documento del ministro José Vicente Aguinaco Aguilar, denominado Proclamación de principios. Hemos querido mencionar este documento precisamente para comparar el papel que la propia corte, a través del discurso de su presidente, maneja, propone y reflexiona en relación a la actuación del máximo tribunal. Mientras que, por otra parte, hemos analizado una serie de caricaturas y fotografías de diversos caricaturistas y fotógrafos las cuales reflejan el sentir y la forma como perciben éstos la resolución del 7 de octubre de 1998 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al anatocismo y, por lo tanto, la actuación de la misma. El contraste de ambos es sorprendente. Dice, literalmente, el documento del ministro Aguinaco Alemán, en la parte conducente relacionada con el tema que nos ocupa:

"PROCLAMACIÓN DE PRINCIPIOS"

Por último, permítaseme hacer hincapié en que nuestras resoluciones tienden y tenderán a consolidar un ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA JUSTICIA, porque sus raíces se nutren en los principios rectores de un federalismo armónico, donde los tres poderes de la Unión, en ejercicio y representación de la soberanía del pueblo en el cual reside originariamente la soberanía nacional, desarrollan sus atribuciones político-gubernativas con la separación, respeto recíproco, autonomía e independencia en el libramiento de decisiones, que señalan los artículos 39, 40, 41, primer párrafo, y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estas ideas van de la mano con el postulado de que al Poder Judicial de la Federación le incumbe la facultad y la obligación a través del órgano colegiado de mayor jerarquía, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manifestar con pulcritud y serenidad su ubicación política dentro de la estructura y articulación de los tres poderes de la Unión; y, toda vez que al mismo tiempo le corre al Poder Judicial el

deber de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial dentro de los procedimientos y plazos que establecen las leyes, fuerza es concluir que, como su nombre lo indica, el desempeño de esta atribución estatal debe impregnarse en la JUSTICIA, pues de otra suerte no se entenderían nuestros afanes para consolidar un ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO EN LA JUSTICIA.

Difícilmente podríamos pensar en un Estado sin Derecho, sin leyes, sin jueces; por lo que si bien es cierto que todo Estado de Derecho supone la producción de normas jurídicas, buenas o malas, justas o injustas, y la posibilidad de hacerlas cumplir para organizar política y socialmente determinados asentamientos de personas y resolver los conflictos que emerjan entre sus componentes; sin embargo, la realidad imperante y su entorno sociopolítico exigen como principio legitimador del Estado, que éste, junto con su aparato autoritario y sus leyes, surjan democráticamente, y por necesidad axio-ontológica, que han de estar embebidos en la JUSTICIA. Así lo entendemos por la concatenación de las normas organizativas, de un lado, y por el otro, de los derechos y libertades fundamentales con sus garantías, que la Carta Suprema de la República establece en sus artículos 40, 41, 49, 50, 73, 80, 89, 94, 99, 105, 107, 124 y 133, referentes al primer grupo, y lo. a 28, especialmente el 17, 31, fracción IV y 123, referidos a la segunda conglobación.⁴

LA PERCEPCIÓN DE LA "PROCLAMACIÓN DE PRINCIPIOS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN",
Y DE LA RESOLUCION SOBRE ANATOCISMO
DE LA SUPREMA CORTE, REALIZADA
POR LOS CARICATURISTAS MEXICANOS

A través de la selección, descripción y análisis de una serie de caricaturas e imágenes sobre valores fundamentales como la justicia, la democracia, el derecho, el Estado de Derecho, entre otros, que-remos presentar la manera en que se aprecia e interpreta, por par-

⁴ Cf. El documento originalmente interno del ministro Vicente Aguinaco Alemán, que posteriormente circuló también en diferentes medios de comunicación.

te de caricaturistas, moneros y fotógrafos de nuestro país, una decisión tan trascendente para el pueblo de México. Recordemos que desde los tiempos del Porfiriato, con el maestro Posada, la caricatura es un vehículo y medio de expresión que permite conocer de un modo agudo e irónico la compleja realidad de nuestro país para una mejor comprensión de la población.

Figura de indudable tradición en la caricatura política mexicana, José Guadalupe Posada constituye una de las fuentes de herencia e influencia en la evolución de la ironía y sátira gráfica política y social del arte y pensamiento mexicanos. Posada (1852-1913), hidrocálido de nacimiento, fue desde niño dibujante precoz y, ya como artista, uno de los mejores exponentes de la herencia europea del romanticismo litográfico y tipográfico que diversas imprentas cultivaron a mediados del siglo XIX y principios del XX. Durante el porfirismo, los talleres de litografía se convirtieron no sólo en centros artísticos, sino en centros de reunión donde se discutían y escenificaban gráficamente los principales problemas económicos, políticos, sociales y culturales del país. De este modo, los artistas gráficos de esa época fueron originales y fieles representantes y traductores de la vida y las percepciones populares de México. El buen humor a través de la ironía política muchas veces fue pintado con sangre revolucionaria. La caricaturización de la dictadura fue, quizás, el mejor, último y más desesperado recurso a que el pueblo pudo recurrir para expresar su legítima inconformidad con la dictadura. Asimismo, la ironía y la sátira gráfica representaron una válvula de escape indispensable de las angustias y miserias del pueblo. Ante el brutal y crudo realismo positivista de la dictadura, se interpuso el idealismo romántico de la ridiculización artística de los excesos y abusos del poder y sus representantes. La impotencia del pueblo ante la implantación forzosa y violenta del modelo liberal del capitalismo por los "científicos" fue transformada en potencial creativo artístico. Ante la intolerancia, la violencia y la "paz" porfiriana, se interpuso la carcajada democrática y popular. No obstante, la ridiculización de los abusos del poder de la elite de los científicos y la recreación satírica de diversos personajes populares que actuaban como comparsas y servidores tragicómicos de los distintos factores de

poder de la época enfrentaría perversos y crueles castigos por los esbirros y tecnócratas de la dictadura. Es conocido que la represión también se extendió sobre los dibujantes e intelectuales que caricaturizaban artísticamente la dictadura porfirista, por lo que las litografías políticas fueron, en muchas ocasiones, teñidas con tinta multicolor de las imprentas y con la sangre de los perseguidos, reprimidos y ejecutados por dicha dictadura.

Prácticamente, no hubo asunto o tema social que escapara al ácido lápiz litográfico de Posada. Formado en el taller litográfico de Pedroza y otras escuelas artísticas, Posada fue representante fiel del romanticismo litográfico nacional y extranjero, y usó este andamiaje cultural europeo para expresar los pesares populares ante los grandes problemas nacionales. Mezcló, en un sincretismo cultural admirable, el arsenal artístico europeo con técnicas locales e ideas propias, representando nuestros problemas populares y sociales con tal vigor y maestría que creó una nueva tradición mexicana de crítica gráfica, y podríamos decir mexicanísima, a la par que muchos otros ilustradores. Las ilustraciones de Posada son una de las mejores representaciones de los problemas sociales (y de las mejores escuelas artísticas y políticas mexicanas futuras, como señalara Diego Rivera) que condujeron, finalmente, al pueblo a la revolución armada de 1910. Como se comenta en el libro *José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana*:

A Posada le tocó en suerte ser el cronista del mundo finisecular que agonizaba. Lo que iba muriendo, recibió nueva vida en sus manos. Logró aprisionar un retal del tiempo con todas sus inquietudes, miserias y esperanzas. El artista se convirtió en el albacea de un México que naufragó irremisiblemente en el pasado y que, merced a su conjuro, se nos aparece a horcadas sobre dos siglos, haciéndonos señales enigmáticas, enviándonos fragmentos de mensajes del pasado y atisbos del porvenir, y de un México nuevo que pugna por nacer: es el cronista de un pasado que no quiere morir y de un porvenir que reclama la vida. De sus grabados se destaca con fuerza viril el protagonista del gran drama que se avecina, el pueblo, cuya epopeya llevarían a los muros nuestros grandes pintores. Por eso la obra de Posada semeja una aurora boreal que desconcierta y pasma, pero que, al final, acaba

por conquistarnos. Sus creaciones educaron y prepararon a nuestros ojos para la obra que más tarde habría de venir. Nos enseñaron a contemplar a Rivera, a Siqueiros y, sobre todo, a Orozco.⁵

Posada reproduce el culto mexicanísimo a los muertos por medio de sus célebres calaveras y otros arquetipos gráficos retomando la tradición popular de reírse de la vida y, sobre todo, de la muerte, de recordar las injusticias y los sacrificios y la necesidad de tomar alguna *vendetta* popular y colectiva por parte de los familiares y amigos de aquellos que se atrevieron a criticar la dictadura y acabaron salvajemente reprimidos. La burla de la violencia brutal de la dictadura y el tornar a los poderosos en el hazmerreír del pueblo requería, para su sublimación, de la representación artístico-litográfica, que se convertiría en agudo e infalible termómetro político y social para anticipar los cambios revolucionarios.

Sin duda, los moneros mexicanos actuales constituyen, en su característico estilo gráfico contemporáneo de sátira "burla burlando" los excesos del poder en otros niveles y escalas, la continuación de la herencia cultural y artística de Posada y otros ilustradores.

Los ilustradores del tiempo de Posada fueron la fuente y termómetro de expresión popular más importante contra la dictadura liberal. Nuestros moneros de fines del siglo xx y principios del siglo xxi representan, indudablemente, en la continuación de una tradición cultural y política, una de las expresiones populares más significativas y uno de los termómetros sociales más representativos del impacto social de medidas políticas, y de reacciones y acciones sociales específicas contra la imposición del modelo neoliberal. De aquí entonces se deriva la importancia de su estudio académico y social.

Las caricaturas, así como algunas fotografías, representan imágenes, situaciones, percepción de realidades, códigos sobreentendidos que muestran y dicen más que mil palabras y que reflejan las conductas de los principales actores políticos y sociales de nuestro país, por lo que su estudio es un ejercicio muy importante del impacto social, cultural y político de una decisión jurídica.

⁵ Véase Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, *José Guadalupe Posada. Ilustrador de la vida mexicana*. México, Banco Nacional de Comercio Exterior, 1992, p. 70.

DIVISIÓN DE LAS CARICATURAS E IMÁGENES DESCRITAS Y ANALIZADAS

Las caricaturas e imágenes que se describen y analizan las hemos clasificado como:

- Las que caracterizan a la política económica del país.
- Las relacionadas directamente con la decisión de la corte.
- Las que representan a los actores político-sociales que intervienen y padecen la decisión de la corte.
- Las que representan a otros actores y una propuesta legislativa.
- Análisis de fotografías relacionadas con la Resolución sobre Anatocismo de la Suprema Corte de Justicia.

Las que caracterizan a la política económica del país

“Lógica harvardiana”, de Helguera. Se critica no sólo la política económica, sino la posición de los tecnócratas, egresados de Harvard, que junto con los banqueros forman parte de la misma elite en el poder, congruente con los intereses de los grupos gobernantes de los países poderosos o desarrollados. Por eso, el compendio del presupuesto de egresos, donde mediante la ley, como instrumento de dominio ideologizante, se legitima el destino de recursos públicos en favor de los banqueros, dejándose de lado las necesidades primarias de la población.

“2 de noviembre”, de Naranjo. Se refiere a la condena de muerte de la población, la cual ha sido condenada por el grupo en el poder, debido a situaciones como los errores de diciembre y la “disciplina financiera” que pomposamente maneja en su doble discurso el Ejecutivo federal. En contraste, se representa un sector bancario-financiero sólido y fortalecido a expensas de los recursos de la población.

“Ofrecimientos”, de Helioflores. Esta caricatura puede interpretarse de diversas formas: una, que, de todos los ofrecimientos hechos por el Ejecutivo, ninguno se cumplió y todo quedó en pro-

mesas, con una realidad económica falaz y carente de veracidad; la otra, el doble discurso que siempre utilizan los políticos que han gobernado el país para que el pueblo de México tenga credibilidad en lo que dicen y vuelva a votar por ellos.

"Rapriña". Esta caricatura nos presenta a los artífices de la política económica del país, que intervinieron en la constitución del Fobaproa y, desde luego, en la omisión de los reglamentos de instituciones como la Comisión Nacional de Valores, que le permitió actuar de manera totalmente discrecional, en cuanto a la operación y actividades de los bancos.

Las relacionadas directamente con la decisión de la Corte

"Discusión en la corte", de El Fisgón. La imagen permite apreciar a dos ministros de la corte reducidos al papel de "interpretes de la ley", sin sensibilidad social alguna, sin tomar en cuenta los valores fundamentales de la sociedad, sino, por el contrario, adoptando una actitud reduccionista y legaloide ante un problema de trascendencia nacional, favoreciendo con toda parcialidad a una de las partes de la controversia: los banqueros.

"Suprema Corte", de Helioflores. La caricatura alude al entonces gobernador de Chiapas, Albores Guillén, quien ocupaba el lugar del gobernador interino anterior que, de manera simultánea, presenta como un código sobreentendido y práctica común del sistema el no respetar el Estado de Derecho, por lo que no existe el menor prurito en tomar una decisión de la magnitud que tomó la corte, sin la menor sensibilidad social y sin considerar los perjuicios que se crearían a los deudores de la banca, que son una inmensa mayoría de la población. Es decir, —sugiere el caricaturista—, si nunca se ha respetado el Estado de Derecho, ¿por qué esta vez tampoco?

"Anatocismother", de Magú. Magú nos expresa el repudio popular y de rechazo a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sentir de la población a una decisión tan insensible en el aspecto social y la actitud reduccionista de los ministros de la corte, que a todo conflicto socioeconómico de gran trascen-

dencia pretenden otorgarle sólo un sentir técnico-jurídico, ajenos a todo sentir humano, de justicia y equilibrio social.

"Sigue la sangría", de Rocha. La elocuencia de la imagen lo dice todo. Un vampiro que sangra a su víctima, en este caso la justicia —que se encarga de impartir la Suprema Corte de Justicia de la Nación—, una justicia complaciente, sometida y con una sonrisa de Gioconda, que legitima la usura y se encuentra al servicio del capital.

"Ningún conflicto, sólo intereses", de El Fisgón. La caricatura indica la complicidad pactada entre los banqueros y el máximo tribunal, que terminó en el desenlace de la decisión de la corte en favor de los banqueros, en relación a la previa renegociación que se dice tuvo el presidente Aguinaco con las instituciones bancarias respecto de los intereses de los créditos bancarios otorgados a los empleados del Poder Judicial federal.

*Las que representan a los actores político-sociales que intervienen
y padecen la decisión de la Corte*

"Suprema Corte y banqueros", de Helguera. En esta caricatura, el autor nos presenta a dos de los principales actores intelectuales de la resolución sobre anatocismo: la Suprema Corte y los banqueros, quienes, en contubernio, celebran jubilosos la resolución. El concepto de justicia se ve reducido a trizas, al representar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una prostituta jacarandosa (pero, no obstante, arrepentida de que la sesión fuera pública). El pueblo, aunque no se representa gráficamente, deja sentir su presencia con los deseos expresados de su parte, en el ángulo superior derecho, tanto a la corte como a los banqueros.

"Café cadáver", de El Fisgón. Aquí, aparecen dos personajes: el pueblo y el banquero, la imagen de cada uno revela la opinión que de cada uno tiene el caricaturista. Un banquero que, además de ser indemnizado y premiado con el Fobaproa, se ve fortalecido en su negocio con la decisión de la Suprema Corte de Justicia, a tal grado que inclusive su participación se vuelve decisiva en los destinos de los recursos públicos.

"Banqueros", de Magú. Dos banqueros reconociendo el favoritismo de la Corte hacia su actividad y mostrando su preocupación porque, con ese beneficio, se ven en deuda con el máximo tribunal. Metafóricamente, se maneja la suma de intereses sobre intereses, lo que demuestra la agudeza del caricaturista para dejar claro el contubernio entre la corte y los banqueros.

*Las que representan a otros actores
y una propuesta legislativa*

"Chambeando duro", de Helguera. Helguera parece hacer alusión a la frase "poderoso caballero es don Dinero", toda vez que muestra a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el "bolero" de un obeso y poderoso banquero. El gordo financiero le recomienda, paternalísticamente, al subordinado bolero, en virtud de la resolución sobre anatocismo, que abra una "cuentita" en su banco, para incrementar sus ingresos, seguramente ganando intereses sobre intereses.

"Hacia un Estado de Derecho", de El Fisgón. En esta caricatura, el Fisgón demuestra cómo algunas actividades criminales, usando el aparato del poder y la influencia política de los líderes de dichas actividades antisociales, intentan legalizar y legitimar los delitos fraguados y cometidos a la sombra del poder de sus actores intelectuales y materiales.

La inclusión del anatocismo y los ministros de la Suprema Corte en este cartón, es procedente, toda vez que el anatocismo debería ser un ilícito civil y un delito penal, pues la usura y el fraude son sancionados civil y penalmente, respectivamente, en el sistema jurídico mexicano.

"Fábulas de policías y ladrones", de Trino. Ingeniosamente, Trino recoge la confusión popular que existe sobre el termino técnico del anatocismo, su significado y el desconcierto de un preso frente a su juzgador. El juez, al aplicarle una condena de anatocismo en "udis" al reo (sentencia que resulta, obviamente, excesiva) provoca el resentimiento del reo, el cual, según el caricaturista, promete venganza personal contra los ministros de la Suprema Corte.

“Corretiza”, de Fabio. Este cartón muestra a un parlamentario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) persiguiendo a un banquero-financiero (una enorme y obesa rata), que representa a la usura bancaria del anatocismo, que pone pies en polvorosa en agitada y frenética carrera, ante la evidente intención del legislador de aplastarla con un voluminoso “Nuevo Código Civil para el Distrito Federal”. Este cartón se origina por la propuesta legislativa que para regular al anatocismo, presentaron el doctor Eduardo Torres y la maestra Rebeca Pujol ante la ALDF, debido a la convocatoria que formulara este parlamento local para la elaboración de un nuevo código civil y un nuevo código de procedimientos civiles. La propuesta legislativa presentada por Torres y Pujol tuvo amplia difusión en los medios de comunicación, incluso en entrevistas en la televisión (*v. gr.*, el noticiero de Ricardo Rocha) y diversos periódicos. Sin embargo, ante las amenazas de los banqueros a los legisladores, en el sentido de que si se aprobaba tal propuesta no otorgarían un sólo crédito bancario para construir viviendas en el Distrito Federal, los parlamentarios decidieron recular en la instrumentación legislativa de la propuesta de marras, a pesar de que la misma fue aprobada por unanimidad en el foro avalado por los tres poderes públicos del Distrito Federal.

*Análisis de fotografías relacionadas con la resolución
de la Suprema Corte de Justicia sobre anatocismo*

“En el Zócalo. Mujer indígena confrontando a la policía”, foto de Jesús Quintanar. Las decisiones políticas, económicas y jurídicas, producto del modelo neoliberal, que causan agravio moral a la población, encuentran necesariamente la manifestación de la inconformidad social, individual y colectiva. El Zócalo de la ciudad de México se ha convertido en un foro natural para la manifestación popular contra las medidas políticas autoritarias y antisociales, como la resolución sobre anatocismo (octubre de 1998). Quizás otras decisiones judiciales (y políticas) han sido también muy controvertidas (aunque en contextos, significados y alcances distintos) como la decisión judicial previa a la expropiación petrolera

durante el cardenismo, el genocidio y masacre estudiantil de 1968 (enero de 2002), el aborto (enero de 2002), la relativa al Fobaproa (agosto de 2000), y Aguas Blancas (abril de 1996), así como la interpretación política y jurídica en el caso del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la controversia constitucional sobre el presupuesto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo 2004-2005, y la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al calificar la elección presidencial del año 2006, por señalar algunos ejemplos.

“En el Zócalo. Mujeres indígenas repeliendo la intromisión Policiaca”, foto de Jesús Quintanar. Las decisiones político-jurídicas emanadas de los poderes públicos, no deben ser sólo legales, sino también legítimas, puesto que no es derecho lo que sólo es ley, ni es legítimo lo que se impone autoritariamente, abusando del poder público, en contra del bienestar de la población. El respeto a la constitución, y más específicamente, a la Ley Suprema de la Unión (artículo 133 constitucional) y, en consecuencia, al Estado de Derecho, debería ser principio fundamental para la actuación de los poderes públicos. El aumento y la intensidad de los movimientos sociales en México auguran, por desgracia, que nos aproximamos —si es que no estamos ya en los inicios— a la tercera gran revolución social secular en México: ¿1810-1910-2010?

“Sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se discutió la legalidad del anatocismo”, foto de Frida Hartz. Quizás ninguna otra resolución judicial en la historia del México moderno ha sido motivo de tanta expectación como la resolución sobre anatocismo. En los anales judiciales mundiales, la resolución sobre anatocismo es registrada ya como una de las decisiones judiciales más injustas y demolitorias del Estado de Derecho. Prácticamente, todo el país quedó en suspenso el 7 de octubre de 1998, cuando en el salón del pleno de la Suprema Corte de Justicia, se deliberaba y comunicaba la resolución sobre anatocismo. Cuando se supo que el sentido de esta resolución era evidentemente parcial, en defensa de los intereses de los banqueros y financieros, la respuesta no se hizo esperar: en el mismo salón del pleno, los ciudadanos asistentes se pusieron de pie y dieron la espalda a los ministros de la Suprema Corte, en clara alusión al hecho de que, al

favorecer a los banqueros, los ministros le habían dado la espalda al pueblo.

"Deudores de El Barzón", foto de Reuters. "Deudores de la banca e integrantes de El Barzón gritan consignas en las afueras del edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el centro de esta capital, ayer, mientras los ministros dictaminaban la legitimidad del cobro de intereses sobre intereses". (Reuters). Con independencia de las máscaras y disfraces técnico-jurídicos, así como de la mala pirotecnia lingüística que los ministros de la Suprema Corte de Justicia utilizaban para intentar confundir el entendimiento del pueblo y del ciudadano común, e incluso de los profesionistas y expertos en el tema, lo que es cierto es que se presentía en el aire el sentido parcial de la resolución sobre anatocismo. Por eso, simultánea a la deliberación sobre el anatocismo en el pleno, los deudores se manifestaban en el exterior de la Suprema Corte, mostrando su oposición a la inminentemente injusta e inconstitucional decisión judicial sobre anatocismo.

"Integrantes de El Barzón metropolitano, cantando y bailando frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 7 de octubre de 1998", foto de Duilio Rodríguez. Así como el pueblo mexicano ha usado valientemente el buen humor para confrontar la injusticia y el infortunio, y burlarse del abuso del poder, e incluso luchar e ironizar vitalmente (aferrándose a Eros, la vida) contra la violencia, el autoritarismo y la muerte (jugando y bailando con Tanatos, la muerte), así el recurso del baile y de la fiesta popular, como instrumentos de protesta civil y reafirmación de los valores culturales, sociales y comunitarios, es, también, parte de la idiosincracia mexicana. En esta foto, se observa cómo el pueblo canta y baila a las afueras de la Suprema Corte, en el momento en que en el salón del pleno se comunica la perversa resolución sobre anatocismo. El baile y el canto aquí observados son la respuesta cultural, festiva y popular para sobrevivir y trascender la prepotencia política y la arbitrariedad jurídica de la Suprema Corte de Justicia, representante judicial e integrante de la elite política neoliberal.

"Integrantes de El Barzón demandando 'Basta a la usura' enfrente de la SCN", foto de Duilio Rodríguez. A pesar de que los

ministros de la Suprema Corte de Justicia declararon, cantinflescamamente, en la resolución del 7 de octubre de 1998, que el anatocismo no existía ni jurídica ni lingüísticamente en la legislación mexicana, al final produjeron una absurda, confusa, contradictoria, aberrante, falaz, injusta, errónea, ignominiosa, maquiavélica, tartufiana, extensísima (cerca de 700 páginas) y *sui generis* resolución judicial sobre el anatocismo. Lo que es cierto es que, después de todo, los ministros no lograron engañar a nadie, ni siquiera a ellos mismos. El pueblo, los deudores, los profesionales, los intelectuales, los ciudadanos, supieron, sufrieron y vivieron el anatocismo en carne propia, al perder sus casas, departamentos, bienes muebles a crédito, su salud y algunos, incluso, la vida (diversos suicidios), por lo que llamaban y proclamaban en las calles y en los juzgados el verdadero nombre jurídico y lingüístico del anatocismo o cobro desmesurado ilegal e inconstitucional de intereses sobre intereses, como lo que era: *usura* (ilícito civil) y *fraude* (delito con las tres agravantes: premeditación, alevosía y ventaja).

“Miembros de El Barzón paseando un ataúd con las siglas de la Suprema Corte de Justicia”, foto de Duilio Rodríguez. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la resolución sobre anatocismo, crearon, además monstruos jurídicos y financieros con efectos negativos para el bienestar, la salud, la prosperidad y la felicidad de los ciudadanos e inversionistas en México. **Más de dos millones de deudores fueron afectados por esta resolución judicial. Un monto similar al Plan Marshall (usado para reconstruir Europa después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial) pudo haber sido financiado, en México, con las ganancias que la resolución sobre anatocismo ha producido para los banqueros y financieros, como analiza el doctor Eduardo Torres.** La pérdida de la confianza en los jueces y la deslegitimación virtual de la Suprema Corte como poder público, provocaron la muerte política y social del máximo tribunal, según sentencia ciudadana. Ésta es la razón por la cual las personas que se manifestaban con dignidad a las afueras del recinto de la Suprema Corte, mientras se simulaba que se discutía la resolución sobre anatocismo en el pleno, paseaban un ataúd con las iniciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en alusión metafórica clara a la defunción social del máximo

tribunal. Éste fue el veredicto final, ciudadano y social, respecto de la actuación de la Suprema Corte, en virtud de la expedición de la resolución sobre anatocismo.⁶

Por último, queremos reproducir un fragmento de derecho azteca, citado en el libro *El derecho precolonial* del maestro Lucio Mendieta y Nuñez, acerca de la conducta de los jueces:

Los reyes castigaban severamente a los jueces que no cumplían con su deber. Los jueces ninguna cosa recibían, ni tomaban presente alguno, ni aceptaban persona, ni hacían diferencia del chico al grande en cosa de pleito, como lo deberían hacer los jueces cristianos; porque en verdad, los dones y dádivas ciegan los ojos de los sabios y mudan las palabras y sentencias de los justos como lo dice Dios, y es muy gran verdad. Si se hallaba que algún juez por respeto de alguna persona iba contra la verdad y rectitud de la justicia, o recibía alguna cosa de los pleitantes, o sí sabían que se embeodaba, si la culpa era leve, una y dos veces, los otros jueces lo reprendían ásperamente, y sí no se enmendaba, a la tercera vez lo trasquilaban (entre ellos era cosa de gran ignominia), y lo privaban con gran confusión, del oficio. En Texcoco acaeció, poco antes de que los españoles viniesen, mandar el señor a ahorcar un juez porque por favorecer un principal contra un plebeyo dio injusta sentencia, y había informado siniestramente al mismo señor sobre el caso; y después sabida la verdad, mandó ejecutar en él la pena de muerte.⁷

BIBLIOGRAFÍA

- Anda, Gutiérrez Cuauhtémoc, *Entorno socioeconómico de México*, 1ª. reimp., México, Limusa, Noriega Editores, 1996.
- Aron, Nan, *Libertad y justicia para todos. El derecho de interés público en 1980 y su futuro cercano*, Washington, D.C., Alliance for Justice, 1989.

⁶ Nota aclaratoria: el anexo que incluía todas las imágenes (caricaturas, cartoons y fotografías) no pudo ser incluido en esta edición, debido a limitaciones presupuestales y decisiones administrativas de la UAM, ajenas al coordinador y autores de esta obra.

⁷ Lucio Mendieta y Nuñez, *El derecho precolonial*, 2ª reimp. México, Porrúa, 1989, 78 pp.

- Acuerdos del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1998.
- Aguinaco Aguilar, José Vicente, "Proclamación de principios", Informe del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 1995.
- Castro, Juventino V., *La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta. Un fallo histórico respecto al llamado "anatocismo"*, Porrúa, México, 1998.
- EZLN, *Documentos y comunicados*, 1 de enero-8 de agosto de 1994. 2ª reimp., México, Era, 1994.
- Glender, Alberto y Víctor Lightinger, *La diplomacia ambiental. México y la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo*. México, Secretaría de Relaciones Exteriores/FCE, 1994.
- Guzmán Ferrer, Martín Luis, *Aspectos de la teoría del desarrollo económico*. Tesis profesional, Universidad Nacional Autónoma de México-Escuela Nacional de Economía.
- "Informe del Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de La Nación", México, 1999.
- Melgar Adalid, Mario, "Comentarios al artículo 97 Constitucional", en *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada*, t. II, México, Porrúa/unam, 1995.
- Mendieta y Núñez, Lucio, *El derecho precolonial*, 2ª reimp., México, Porrúa, 1989.
- Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, José Guadalupe Posada. *Ilustrador de la vida mexicana*, México, Banco Nacional de Comercio Exterior, 1992.
- Soberanes Fernández, José Luis, *Evolución de la Ley de Amparo*, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Universidad Nacional Autónoma de México, Serie C, Estudios Históricos, núm. 40, 1994.
- Yúnez Naude, Antonio (comp.), *Medio ambiente. Problemas y soluciones*, 1ª reimp., México, Centro de Estudios Económicos/El Colegio de México, 1994.

JUZGAR A LA SUPREMA CORTE

Legislación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
Ley de Amparo.

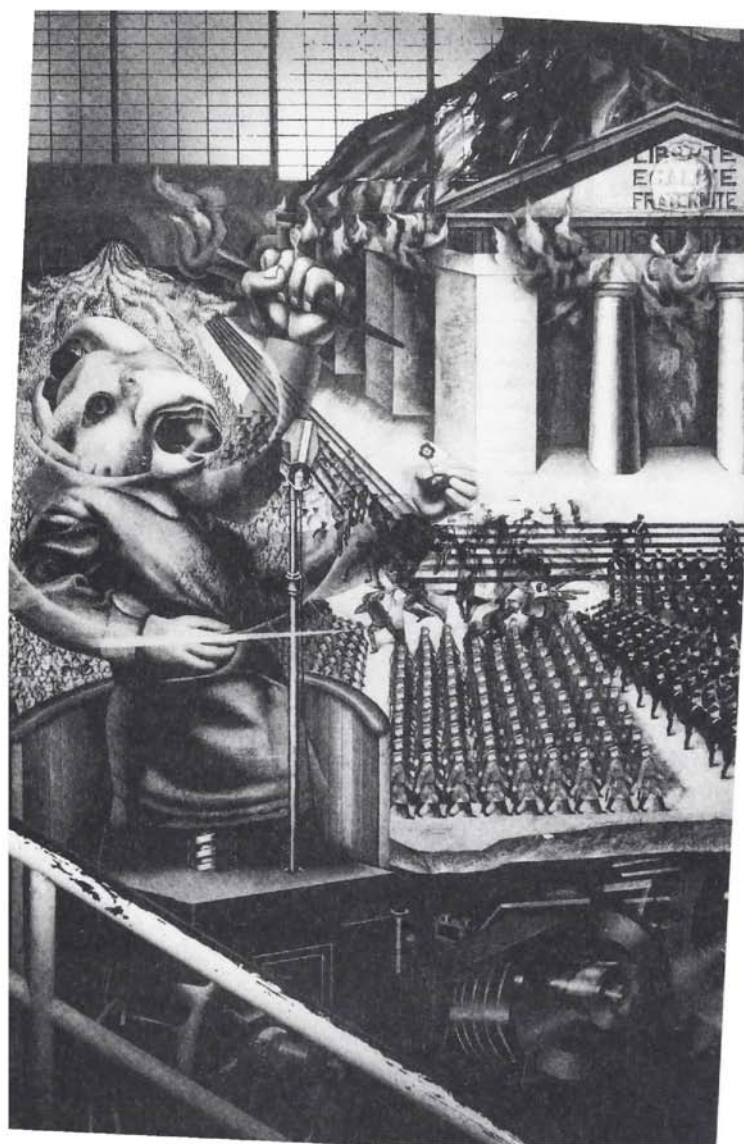
Hemerografía

Periódicos:

La Jornada, septiembre-noviembre de 1998, México.
El Heraldo de México, noviembre de 1998, México.
El Universal, septiembre-diciembre de 1998, México.
Excelsior, octubre-noviembre de 1998, México.
La Prensa, marzo de 1999.

Revistas:

Proceso, México, 1998, Artículo de Agustín Ambriz: "Vicente Aguinaco hace un balance de su cuatrienio en la Suprema Corte de Justicia", México, octubre-noviembre de 1998, pp. 26-30.
El Chamuco, año 3, núm 63, México, Grijalbo, noviembre de 1998.
Portada de la revista con la caricatura "Rapriña".



- ⇒ *"El retrato de la burguesía"*, 1940. David Alfaro Siqueiros. Mural en el Sindicato Mexicano de Electricistas, México, D.F. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Capítulo II

Justicia, Derecho Judicial y Humanismo¹

*Mario Flores Lechuga**

SUMARIO

I. Introducción. II. Las garantías individuales como marco conceptual de la justicia. III. Justicia. IV. La aplicación de la justicia en el sistema constitucional mexicano. V. Conclusión. VI. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

BAJO EL MARCO DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO, todas las acciones de órganos estatales deberán ceñir su actuación a través de los poderes constituidos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), respetando en todo momento los derechos fundamentales del gobernado, consagrados en la constitución política y atendiendo a los principios de legalidad y seguridad jurídica, entre otros, cuando se trate de litigios del orden civil entre particulares y el Estado ejerza su facultad jurisdiccional.

Así pues, la instancia judicial deberá respetar por lo menos los principios supracitados en aras de una mejor administración de la

¹ En todos y cada uno de los capítulos de los distintos apartados de esta obra, es responsabilidad individual de los autores, en un marco de libertad y responsabilidad, elegir la forma de las citas, notas y bibliografía usadas. El coordinador, respetuosamente, se ha limitado a la revisión y armonía general de la obra colectiva en su conjunto.

* Profesor-investigador del Departamento de Derecho de la UAM.

justicia, de tal manera que, cuando no sea así, el gobernado pueda demandar el cumplimiento de sus garantías individuales acudiendo ante una instancia judicial federal encargada de interpretar la constitución, que velará porque siempre imperen la legalidad, la seguridad y la certeza jurídicas en todo acto emanado de una autoridad en ejercicio de sus funciones, ya sean éstas de carácter legislativo, ejecutivo o judicial; caso este último en el que resolverá lo conducente de acuerdo a las constancias del expediente en materia de la controversia y razonando en forma pormenorizada la interpretación de normas y su aplicación, ya sean éstas de carácter sustantivo o adjetivo, en su caso, salvaguardando en todo momento las garantías individuales del gobernado y atendiendo a los principios dogmáticos constitucionales.

En ese sentido, el 7 de octubre de 1998, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ o SCJN), emitió catorce tesis jurisprudenciales como resultado de la Contradicción de tesis 31/98, relativa a la figura denominada por la doctrina como "anatocismo", que en lo esencial se refiere al cobro de "intereses sobre intereses" pactados por particulares y las instituciones bancarias y financieras en los contratos de préstamo mercantil, mutuo y de apertura de crédito.

La trascendencia de las jurisprudencias emitidas por el órgano máximo de control constitucional mexicano, sobre todo en una época de crisis económica, imputable a errores de política estatal y sus consecuencias políticas y sociales, nos motivó a realizar un análisis respecto de la actuación de la Suprema Corte en el asunto relativo al anatocismo, en especial por la injusticia social y humana que generó tal resolución.

Iniciaremos el análisis con un breve bosquejo de las garantías individuales contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), para después dar paso al conocimiento del concepto de justicia desde un plano filosófico y continuar el análisis sobre la actuación de la SCJ en el caso del anatocismo en el plano jurídico, social y político finalizando con propuestas relativas a la integración de los miembros de la SCJ.

LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES COMO MARCO CONCEPTUAL DE LA JUSTICIA

De conformidad con el primer párrafo del artículo 1 de la CPEUM: "En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga la presente Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y en las condiciones que la misma establece", norma general de trascendente alcance, toda vez que la misma ha sido considerada por algunos juristas como la "garantía de las garantías individuales" porque asegura que ningún derecho subjetivo público contemplado en los siguientes 27 artículos podrá ser restringido o suspendido por norma secundaria alguna. Esto es, que la Carta Magna establece que los derechos subjetivos públicos incorporados en el Título Primero, Capítulo I, siempre deberán estar protegidos por la autoridad estatal.

Con el contexto anterior, se puede establecer que nuestra constitución protege, entre otras garantías, las siguientes: *a)* el derecho de educar en la justicia (art. 3, p. 2);² *b)* el principio de igualdad de las personas ante la ley (arts. 1, 4, p. 2 y 13, así como en: *i)* La Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 1, 2, 7, 10), *ii)* El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 3 y 14.1) y *iii)* La Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1 y 24); *c)* el principio de legalidad y garantía de audiencia (arts. 14, p. 2, y 16, p. 10) *d)* el principio de certeza jurídica en materia civil (14, p. 4); la prohibición de "hacerse justicia por propia mano"; el derecho a la jurisdicción y la independencia judicial (17. ps. 1, 2 y 4), esta última considerada como una garantía tendiente a garantizar la impartición de la justicia por tribunales independientes e imparciales.

El conjunto de las garantías supracitadas constituye, en forma breve, el marco conceptual mínimo que toda autoridad deberá observar en la aplicación de la justicia en cualquier ámbito de su

² El autor utiliza "p." para abreviar párrafo, y "ps." para abreviar el plural "párrafos", así como "art." para abreviar "artículo", y "arts." para "artículos" (nota del coordinador).

competencia dentro de la que se encuentran los litigios de carácter civil y mercantil, materias que sirven de apoyo para contextualizar nuestro objeto de estudio.

JUSTICIA

Históricamente, la palabra justicia ha tenido diferentes acepciones, siendo la más utilizada la que se refiere a la idea sobre la cual debe basarse el derecho.

Lo anterior, nos motiva a analizar el concepto de justicia desde un plano aristotélico³ en donde Aristóteles clasifica la justicia como un bien deseable junto con las demás virtudes y son dignos de ser deseados en todos sus aspectos y de manera absoluta,⁴ y que puede ser fin y siempre está por delante lo perfecto, entendiendo por éste, aquel que, una vez conseguido, no sentimos la necesidad de ninguna otra cosa y lo imperfecto, aquello que, aunque lo haya-

³ En su obra *La gran ética* Aristóteles entiende que la ética se relaciona con la actuación, con la praxis. Intenta detectar la esencia del bien moral partiendo de una jerarquía de valores acordada por la experiencia, más allá de los hábitos y conductas cambiantes del individuo y de las transformaciones operadas en las instituciones de un Estado. En la cúspide de esta jerarquía, Aristóteles constata que se halla la felicidad (eudaimonía), el más grande de los bienes.

Pero esta felicidad, este sumo bien, no consiste en los placeres, honores o riquezas, sino que se fundamenta en la realización de aquello que es más característicamente humano.

De hecho, para Aristóteles la felicidad está constituida por el ensamblaje de dos tipos de virtudes: las éticas, que, como la justicia, la prudencia o la templanza poseen un carácter eminentemente práctico, y los deanoéticos, cuyo carácter es intelectual y consiste en el recto ejercicio de la actividad racional. Cada una de estas virtudes ocupa el justo medio entre el exceso y el defecto.

La tesis central de Aristóteles es la de que la felicidad no se puede alcanzar fuera de la sociedad. Las virtudes, su realización, están, en consecuencia, asociadas con los medios que la colectividad pone a disposición del individuo, quien, para Aristóteles, posee una naturaleza social, es decir, que su personalidad no puede verificarse sobre la base de la ignorancia o de la indiferencia con respecto a la familia, la ciudad o el Estado. El bien social, encarnado en el Estado, es superior al bien individual.

⁴ Aristóteles: 2.

mos conseguido, seguimos, no obstante, en la necesidad o deseo de otra cosa; *v.gr.*, "si conseguimos tan sólo la justicia, deseamos aún muchas otras cosas más; mientras que si conseguimos la felicidad ya no tenemos necesidad de otra cosa. La felicidad es, entonces, el mejor de los bienes humanos. Es un fin perfecto. Y el fin perfecto es el bien, y el fin o término de todos los bienes".⁵

Identifica a la felicidad con el "bien obrar y bien viril"⁶ en donde "vivir bien" consiste en vivir de acuerdo con la virtud que es el fin, la felicidad cuyo objetivo consiste en el uso y en la acción de alguna cosa.⁷

Desde esta perspectiva, Jeremías Bentham, citado por Hans Kelsen en "¿Qué es la justicia?", considera que:

Si la justicia es la felicidad, es imposible que exista un orden social justo si por justicia se entiende la felicidad individual. Pero un orden social justo es también imposible aun en el caso de que éste procure lograr, no ya la felicidad individual de todos, sino la mayor felicidad posible del mayor número posible.

Sin embargo, Kelsen estipula que:

[...] por felicidad sólo puede entenderse la satisfacción de ciertas necesidades que son reconocidas como tales por la autoridad social o el legislador y que son dignas de ser satisfechas. Tal es, por ejemplo, la necesidad de alimentos, de vestido, habitación y otras del mismo estilo.⁸ No cabe duda alguna que la satisfacción de necesidades socialmente reconocidas es algo que no tiene que ver con el sentido originario de la palabra felicidad que es profunda y esencialmente subjetiva. El deseo de justicia es tan elemental y está tan hondamente arraigado en el corazón del hombre, por ser precisamente la expresión de su inextinguible deseo de subjetiva y propia felicidad.

La idea de felicidad debe sufrir un cambio radical de significación para que la felicidad y la justicia puedan llegar a ser una categoría so-

⁵ *Ibid.*, p. 36.

⁶ *Ibid.*, p. 39.

⁷ *Ibid.*, p. 40.

⁸ Hans Kelsen *¿Qué es la justicia?*, México, Fontamara, 7ª ed., p. 14.

cial. La metamorfosis que experimenta la felicidad individual y subjetiva al transformarse en la satisfacción de necesidades socialmente reconocidas, es igual a aquella que debe sufrir la idea de libertad para convertirse en principio social. La idea de libertad es, a menudo, identificada con la idea de justicia y, así, un orden social es justo cuando garantiza la libertad individual [...]. El concepto de libertad debe aceptar la importancia que tiene una determinada forma de gobierno. Libertad debe significar gobierno de la mayoría y, en caso necesario, contra la minoría de los súbditos. La libertad de la anarquía se transforma así en la autodeterminación de la democracia. De la misma manera, se transforma la idea de justicia, de un principio que garantiza la libertad individual de todos en un orden social que protege determinados intereses, precisamente aquellos que la mayoría de los sometidos a dicho orden reconoce como valiosos y dignos de protección.

Pero, ¿qué intereses humanos tienen ese valor y cuál es la jerarquía de esos valores? tal es el problema que surge cuando se plantean conflictos de intereses y solamente donde existen esos conflictos aparece la justicia como problema. Cuando no hay conflictos de intereses, no hay tampoco necesidad de justicia. El conflicto de intereses aparece cuando un interés encuentra su satisfacción sólo a costa de otro o, lo que es lo mismo, cuando entran en oposición dos valores y no es posible hacer efectivos ambos, o cuando el uno puede ser realizado únicamente en la medida en que el otro es pospuesto, o cuando es inevitable el tener que preferir la realización del uno a la del otro y decidir cuál de ambos valores es el más importante y, por último, establecer cuál es el valor supremo.

El problema de los valores es, ante todo, un problema de conflictos de valores. Y este problema no puede ser resuelto por medio del conocimiento racional. La respuesta al problema aquí planteado es siempre un juicio que, a última hora, está determinado por factores emocionales y, por consiguiente, tiene un carácter eminentemente subjetivo. Esto significa que es válido únicamente para el sujeto que formula el juicio y, en este sentido es relativo".⁹ También, explica que, si hay algo que podemos aprender de la experiencia espiritual del pasado es que la razón humana sólo puede concebir valores relativos, esto, es, que el

⁹ *Ibid.*, p. 16.

juicio con el que juzgamos algo como justo no puede pretender jamás excluir la posibilidad de un juicio de valor opuesto. La justicia absoluta es un ideal irracional. Desde el punto de vista del conocimiento racional, existen sólo intereses humanos y, por lo tanto, conflicto de intereses. Para la solución de los mismos, existen sólo dos soluciones: o satisfacer el uno a costa del otro o establecer un compromiso entre ambos. No es posible demostrar que ésta y no aquélla es la solución justa. Si se supone que la paz social es el valor supremo, el compromiso aparecerá como la solución justa. Pero también la justicia de la paz es sólo una justicia relativa y, en ningún caso absoluta. (Jerarquía de valores vida y libertad, libertad e igualdad, libertad y seguridad, verdad y justicia, verdad y compasión, individuo y nación,)¹⁰

En resumen, Kelsen efectúa un análisis de las diversas concepciones filosóficas sobre la justicia desde los griegos hasta el siglo XX, concluyendo en no dar un concepto de lo que es la justicia absoluta y, en lo que se refiere a la justicia relativa, considera que es “aquella bajo cuya protección puede florecer la ciencia y, con la ciencia, la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la democracia, la justicia de la tolerancia”.¹¹

En ese sentido, estimamos que la idea de la justicia denota la existencia de igualdad y dignidad entre todos los seres humanos con el objeto de mantener una sana convivencia entre éstos con su entorno social. Compromiso que deberán asumir con responsabilidad los integrantes de los poderes estatales constituidos constitucionalmente, evitando transgredir con su actuación los principios de legalidad y seguridad jurídica.

LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL MEXICANO

Al entrar al estudio de la aplicación de la justicia en el sistema constitucional mexicano, resalta la importancia del contenido de

¹⁰ *Idem.*

¹¹ *Idem.* p. 83.

los artículos: 39, 40, 41 y 49 de la Constitución General de la República que, en esencia, regulan lo relativo a la soberanía popular ya que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, pues es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos unidos en una federación y que el pueblo ejercerá su soberanía por medio de los poderes de la unión, siendo éstos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial sin que puedan reunirse dos o más de ellos en una sola persona o corporación.

Por otro lado, los artículos del 94 al 107 constitucionales establecen en su conjunto la integración, competencia y atribuciones del Poder Judicial federal, encabezado éste por la SCJ, quien, de acuerdo al contenido del artículo 107, fracción décimo tercera, establece la facultad para resolver la contradicción de tesis de jurisprudencia en los juicios de amparo cuando sean sustentadas dichas tesis por diversos tribunales colegiados de circuito. Y la resolución que dicte el supremo tribunal sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia,¹² y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción, es decir, que, independientemente del fallo emitido en la sentencia de contradicción, éste no repercutirá ni modificará el sentido de las sentencias dictadas por los tribunales colegiados de circuito en los asuntos que dieron origen a la contradicción.

Bajo este orden de ideas, apreciamos que, si la Suprema Corte pertenece al Poder Judicial federal y éste es un poder constituido en términos constitucionales, en consecuencia, está obligado constitucionalmente a ejercitar sus facultades y atribuciones en beneficio del gobernado según lo establece el artículo 39 constitucional, por lo cual todos sus actos deberán estar apegados a dicho principio y bajo un plano de un Estado democrático.

La facultad que le otorga la Constitución a la Suprema Corte de Justicia para conocer de cuestiones relativas a contradicciones de

¹² Alfonso Noriega, *Lecciones de amparo*, t. II, 5ª ed., México, Porrúa, 1997, p. 1119.

tesis jurisprudenciales sostenidas por los tribunales colegiados de circuito, debe entenderse como una facultad constitucional enmarcada en el ámbito de la justicia, misma que, como hemos visto, está plenamente protegida como un derecho subjetivo público. Así, el máximo tribunal deberá atender con puntualidad a la justicia; más aún cuando el referido cuerpo colegiado es el intérprete de la constitución y en esa calidad deberá ceñir sus actos en beneficio de los ciudadanos.

De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis que es objeto de estudio del presente trabajo, incumplió con sus obligaciones constitucionales puesto que emitió una resolución, a todas luces, injusta, en razón de que al momento de decidir sobre la capitalización de intereses sobre intereses (anatocismo) no consideró la realidad social, económica y política en que se desenvuelve la sociedad mexicana, como lo es el hecho de que su resolución genera perjuicio, aproximadamente, a 9 o 10 millones de deudores de la banca, contándose, entre ellos, a pensionados, jubilados, asalariados, indígenas y ejidatarios;¹³ es decir, al momento de dictar su resolución, realiza una falsa interpretación de las normas sustantivas contenidas en el Código Civil y del Código de Comercio, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Banco de México, ordenamientos que contemplan vínculos jurídicos de diversa naturaleza que van desde el ámbito civil, mercantil y hasta el relacionado con las instituciones de crédito o bancarias, ya que lleva a cabo una interpretación sin tomar en cuenta la intención original del legislador respecto de las normas a estudio porque, de haber efectuado dicho análisis, la conclusión sería similar a la que llegaron los señores ministros Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios y Juventino V. Castro y Castro en su voto de minoría al momento de someter a votación al proyecto de la jurisprudencia 48/1998 (pleno), 49/1998 (pleno) y 50/1998 (pleno) bajo los siguientes rubros:

¹³ Álvaro Delgado, "La decisión de la Suprema Corte puede dañar la estabilidad política, advierten dirigentes de deudores y legisladores". *Proceso*, p. 10.

CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO; CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. EL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE AL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, PERO SÍ PUDE SERLO COMO NORMA CONTRACTUAL, POR VOLUNTAD DE LAS PARTES; CAPITALIZACIÓN DE INTERESES. CUANDO SE PACTA EN UN CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA DETERMINAR SUS ALCANCES NO DEBE ACUDIRSE A LA SUPLETORIEDAD DEL ARTÍCULO 2397 DEL CÓDIGO CIVIL APLICABLE EN MATERIA FEDERAL, SINO A LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Si bien conforme a una interpretación restrictiva de una norma especial, pudiera considerarse que la supresión que hace el legislador de ciertos requisitos que impone con otros contratos, implica que deja a la libertad de las partes la forma y términos de la convención, tal libertad no puede conducir a la conclusión de que la voluntad como norma suprema, en ese pacto, pueda transgredir el marco legal, al grado de que por no existir limitante en la reglamentación especial, se llegare a convenir hasta la transgresión de normas prohibitivas de orden público.

Las leyes prohibitivas son el medio que utiliza el legislador para fijar los límites a la voluntad de los individuos; y, según la importancia del interés que pretende proteger, varía la intensidad de su sanción, contra el acto ilícito; así, esta ley que es impulsada por un interés general de orden público asume un carácter rígido e inflexible; imponiendo la nulidad de los actos cuando la transgresión a los límites legales es considerada sumamente lesiva.

El legislador, aun cuando reconoce en el artículo 78 del Código de Comercio la autonomía de la voluntad, para la celebración de los contratos mercantiles, ante todo, advierte que las convenciones ilícitas no tienen eficacia jurídica, y de ahí se concluye que tampoco en la materia mercantil las partes puedan realizar cualquier acto sin limitación alguna.

Por todo lo anterior, estamos en contra del criterio sostenido en esta tesis, sobre todo porque se insiste, de aceptarse, no habría limitación alguna para la regulación del tema cobro de interés sobre interés, capi-

talización ilícita de intereses, pues al considerarse *suprimida* esa regulación, como se propone interpretar y dejarse a la libre voluntad de las partes, podría pensarse que se estableció una zona libre jurídica para unos actos de comercio: los contratos de apertura de crédito y, desde ese punto de vista, entonces, tal vez, los demás temas de contradicción deberían declararse sin materia.

Por esto, no compartimos todos los criterios y tesis propuestas para este primer punto.¹⁴

De lo anterior, se desprende que, si bien es cierto que el máximo tribunal aplica el derecho, también lo es que, al momento de emitir su resolución, se aparta de considerar el verdadero entorno social, económico y político en que su resolución va a surtir efectos.

La Suprema Corte, lejos de omitir una interpretación original de las normas sustantivas relacionadas con la capitalización de intereses, realiza una deficiente interpretación creadora,¹⁵ porque se olvida por completo de aplicar los llamados “criterios” científicos de orden “hermenéutico” como serían entre otros: “[...] el espíritu y la finalidad de la norma, su sentido histórico, los intereses en juego, el entorno vital del juez, el sentido valorativo que le haya dado a la historia que le narraron [los litigantes], no se trata de ajustar o adecuar el caso a la norma, sino, al revés, al interpretar la norma, ajustarla o adecuarla al caso”.¹⁶

Es evidente que, si entendemos por justicia la aplicación de la ley, también debemos considerar que al impartirla se deberá dar su verdadera razón y justificación, y deberá ser siempre aplicando el derecho sin pasar por alto el entorno social, político y económico en que se aplicará, en virtud de que, al negar esta relación podría causar problemas sociales, económicos y políticos de gran trascendencia (movilizaciones, resistencia civil, quiebras, suicidios, pérdidas de hogares, de bienes, de negocios, calumnias, malos arreglos, reparación parcial de daños, favoritismos, injusticias y abusos).

Con la actuación del máximo órgano judicial federal, se generó un precedente histórico que hace pensar que dicho tribunal aten-

¹⁴ Al respecto, véanse las opiniones de Juventino Castro.

¹⁵ A. Noriega, op. cit., p. 1143.

¹⁶ *Loc. cit.*

dió y legitimó los intereses del grupo del poder actuando en perjuicio de los gobernados deudores, haciendo nugatoria toda posibilidad de defensa —propia de un Estado democrático— porque se antepuso la ley escrita frente al espíritu de la justicia; ello, conlleva a centrar la atención respecto del actuar de las autoridades judiciales federales en el sentido de que al ejercer sus atribuciones constitucionales como lo es la creación de jurisprudencia, al mismo tiempo están creando el *derecho judicial*, denominado así por el ilustre jurista Alfonso Noriega y ejercitando funciones materialmente legislativas, como lo considera el maestro don Elisur Arteaga Nava.¹⁷

Derecho judicial que, si bien entraña un imperativo para las autoridades judiciales inferiores a quienes lo crean, también deberá ser establecido con verdadero sentido humanitario, según lo propone el jurista de referencia en su obra *Lecciones de amparo* y que a continuación se refiere:

La primera de estas fases consiste en la fijación de los hechos sobre los cuales debe recaer la decisión. Estos hechos forman parte de la vida real y, por su propia naturaleza, implican un conflicto que se realizó en época pretérita y que se refiere a un verdadero drama vital, o bien, humano. Esta circunstancia peculiar de que los hechos son materia de la cuestión que el encargado de aplicar la ley debe resolver, diciendo el derecho, no es algo que está aconteciendo en el momento, sino algo que se realizó en el pasado, de tal manera que al llegar al conocimiento del juzgador estos hechos han debido pasar por una serie de tramos que no sólo los decantan, sino que terminan por transformarlos radicalmente y, lo que es más significativo, por deshumanizarlos.

Así pues, el juez no tiene un conocimiento directo de los hechos, sino que, necesariamente, tiene que ser informado de ellos. En esa situación continúa el proceso de deshumanización y el litigio se transforma —también— en una simple historia que unas determinadas personas —los propios litigantes, o más bien, sus abogados— le cuentan al juez.

¹⁷ Elisur Arteaga Nava, *Derecho constitucional*, México, Oxford University Press/Harla, 1998, p. 446.

CONCLUSIÓN

En conclusión, podemos afirmar que, para lograr el objetivo de la justicia, debemos atender, en primer lugar, a la generación en el juzgador de criterios que lo hagan considerar una realidad social, económica y política al momento de dictar sus resoluciones; es decir que, al aplicar el derecho, también aplique el espíritu de la justicia social entendiendo por ésta el bien común (libertad, igualdad y solidaridad social), y hacernos la misma pregunta que se formula el ilustre maestro Elisur Arteaga Nava sobre:

¿Cuál es el papel de un abogado en la sociedad mexicana? La respuesta pudiera ser, quieran o no esta: en defensa de sus clientes un abogado debe, con todos los elementos jurídicos y humanos a su alcance, procurar forzar al grupo en el poder, cuando actúa como juzgador, a respetar su ficción de imparcialidad y neutralidad y obligarlo a dictar sus resoluciones más de acuerdo con la ley que con sus propios intereses. El grupo en el poder, según la presión que sobre él se ejerza y los intereses en juego, resolverá en los términos que sean menos perjudiciales, es obvio, por más claro y convincente que sea un argumento, si están en juego sus intereses, que lo que terminará por prevalecer es la razón de Estado.¹⁸

De igual manera, proponemos que, para que exista una real y verdadera independencia y autonomía de la justicia, se deberá seleccionar a los administradores de justicia con perfiles idóneos y con sensibilidad humanista.

Para lograr la integración de los órganos administradores de justicia y reafirmar su independencia y autonomía, se sugiere que sus miembros sean elegidos a través del voto universal y secreto, como es costumbre en la elección del representante del Poder Ejecutivo y los miembros que integran el Poder Legislativo, coincidiendo con las propuestas finales y conclusiones de esta obra.

¹⁸ *Ibid.*, p. 437.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez Ledesma, Mario I., *Acerca del concepto derechos humanos*, México, Mc Graw Hill, 1998.
- Ambríz, Agustín, "Con su fallo, la Suprema Corte se propone 'permitir todo' a los bancos, tras disfrutar de intereses congelados", en *Proceso*. Semanario de Información y Análisis, núm. 1145, México, CISA, 11 de octubre de 1998.
- Aristóteles, *Gran ética*, Col. Los Grandes Pensadores, núm. 20, España, 1984.
- Arteaga Nava, Elisur, *Derecho constitucional*, México, Oxford University Press/Harla, 1998.
- Castro y Castro, Juventino V. *La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta. Un fallo histórico respecto del llamado anatocismo*, México, Porrúa, 1998.
- Del Palacio Díaz, Alejandro, *Logos-Diké. Razón y justicia en Grecia Antigua*, Mexico, Claves Latinoamericanas, 1998.
- Kelsen, Hans, *¿Qué es la justicia?*, 7ª ed., México, Fontamara.
- López Narváez, Froylán N., "El supremo juez de la Suprema Corte", en *Proceso*. Semanario de Información y Análisis, núm. 1145, México, CISA, 11 de octubre de 1998.
- Noriega, Alfonso, *Lecciones de amparo*, 5ª ed., t. II, México, Porrúa, 1997.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Comunicados de prensa. Comunicado núm. 138, 7 de octubre de 1998, Dir. Gral. De Com. Soc.



⇒ *"La verdad torcida, deformada, alterada, mutilada, pintarrajeada"*, 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Capítulo III

Aplicación supletoria en el “anatocismo”. Improcedencia anticipada. Un análisis del modelo de Alchourón-Bulygin

*Agustín Pérez Carrillo**

SUMARIO

I. Introducción. II. Circunstancias de la solución de la SCJN. III. Posibles dilemas de los ministros de la SCJN. IV. La aplicación supletoria en la teoría general del derecho. V. Modelo Alchourón-Bulygin. VI. Interpretación jurídica o uso de textos legales. VII. Solución de los otros dos casos. VIII. Juicio acerca de la actuación de la SCJN. IX. Reflexiones generales. X. Expresiones relevantes en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. XI. Modelo de argumentación de Stephen Toulmin. XII. El modelo de Ronald Dworkin de la solución correcta. XIII. Función de las teorías y evaluación. XIV. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

EN LA PRIMERA PARTE de este artículo, analizo la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN o SCJ) definida con motivo de la contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito sobre si procedía la aplicación supletoria de la ley en los contratos de apertura de crédito en los que se acuerda un crédito

* Profesor-Investigador del Departamento de Derecho.

adicional para cubrir los intereses vencidos y no pagados correspondientes a la suma puesta originalmente a disposición del acreditado. En el caso concreto, el problema planteado es si conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LTOC) es válido el pacto de intereses sobre intereses antes del vencimiento y no pago de los mismos o si, al respecto, nada prescribe dicha ley.

La SCJN ventila el problema en función de si la LTOC adolece de algún "defecto" sobre la legalidad de pactar la capitalización de intereses en los contratos de apertura de crédito y, en particular, si la citada ley contiene una laguna jurídica en virtud de la cual sea obligatoria la aplicación supletoria de acuerdo con las prioridades establecidas en su artículo 2.

Ubico la decisión de la SCJN en el marco de la teoría de la interpretación jurídica con el fin de indagar si se trata de la interpretación del artículo 291 de la LTOC o si hay exceso o uso del texto legal; asimismo, aplico el modelo de Alchourrón-Bulygin acerca del concepto de sistema jurídico y la detección de lagunas en el derecho. Con estos avances de teoría general del derecho, pretendo tener bases para descubrir si, en el caso particular, se trata de un sistema completo, es decir, sin lagunas jurídicas.

Presento conjeturas sobre algunos dilemas que, quizá, tuvieron los ministros de la SCJN para decidir si procedía la interpretación de la LTOC o la aplicación supletoria y advierto un esfuerzo extremo para sostener la primera de las opciones, así como que su construcción resulta muy artificial, inútil y pobre desde el punto de vista de una poderosa teoría constitucional integrada a partir de los criterios jurisprudenciales y ajena a la problemática social, psicológica, política y económica de la nación mexicana.

En el análisis del problema, concluyo que no se interpreta el artículo 291 de la LTOC, sino que se usa y, con el modelo de Alchourrón-Bulygin, detecto la existencia de lagunas normativas; como consecuencia, en este escenario, la SCJN tenía que haber procedido a la aplicación supletoria del artículo 363 del Código de Comercio y del artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal, en materia común, y para toda la República en materia federal (Código Civil), aplicación supletoria que evitó "costara lo que costara".

CIRCUNSTANCIAS DE LA SOLUCIÓN DE LA SCJN

La contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito resuelta por la SCJN surgió porque en los contratos de apertura de crédito se han venido pactando intereses sobre el importe de la suma puesta a disposición del acreditado y se ha incorporado una cláusula conforme a la cual el acreditado puede disponer de un crédito adicional para cubrir los intereses vencidos y no pagados sobre el monto de dinero puesto inicialmente a su disposición.

En el artículo 291 de la LTOC, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 26 de agosto de 1932, se dispone:

En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, **y en todo caso a pagarle los intereses**, prestaciones, gastos y comisiones **que se estipulen** [Las letras resaltadas son del autor].

Una síntesis de lo dispuesto en el numeral de referencia es la siguiente: es válido el contrato de apertura de crédito conforme al cual el acreditado tiene la obligación de restituir al acreditante las sumas de que disponga y, en todo caso, a pagarle los intereses que se estipulen.

Otros preceptos relacionados con el problema de la aplicación supletoria de la ley son los siguientes:

En el artículo 2 de la LTOC se establece que las operaciones de crédito se registrarán:

- I. Por lo dispuesto en esta ley y en las demás leyes especiales relativas; en su defecto;
- II. Por la legislación mercantil general; en su defecto;
- III. Por los usos bancarios y mercantiles y, en defecto de éstos;

IV. Por el derecho común, declarándose aplicable en toda la República, para los fines de esta ley el Código Civil del Distrito Federal.

En el artículo 363 del Código de Comercio se establece:

Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.

En el artículo 2397 del Código Civil se prescribe:

Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y produzcan intereses.

En su resolución, la SCJN planteó los siguientes problemas respecto de la aplicación supletoria de las leyes:

Existen tres diferentes puntos de oposición, a saber:

i. Si el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal es aplicable supletoriamente o no a las disposiciones que regulan el contrato de apertura de crédito;

ii. Si el artículo 363 del Código de Comercio tiene o no aplicación supletoria a la normatividad que se establece para el referido contrato; y,

iii. Si cuando se pacta en un contrato de apertura de crédito la capitalización de intereses en términos del artículo 363 del citado código mercantil, para determinar los alcances de tal convención, debe o no acudirse a la aplicación supletoria del Código Civil antes referido.¹

En términos generales, la aplicación supletoria de las leyes se presenta cuando la ley que regula una figura o institución jurídica prescribe a la autoridad aplicadora, por lo común a los jueces, recurrir a una ley distinta para que resuelva los casos no susceptibles de ser resueltos de acuerdo con la primera ley porque su reglamentación es defectuosa (incompleta o inconsistente).

¹ Expedientes números 31/98 y 32/98. Denuncia de contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito.

Una opinión diferente se sostiene en el *Diccionario jurídico mexicano* conforme al cual “la supletoriedad sólo se aplica para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integren con principios generales contenidos en otras leyes.”²

Sostengo una opinión divergente a la anterior en virtud de que cuando se trata de interpretación jurídica se reconoce que la ley de la materia ofrece solución al caso planteado y, por ende, se está en presencia de un problema de interpretación sintáctico, lógico, semántico o pragmático. Cabe destacar esta diferencia respecto de las situaciones en las cuales la ley que reglamenta la institución de referencia no indica solución alguna al caso. La tesis que no distingue entre casos de laguna normativa y problemas de interpretación jurídica debilita el concepto de aplicación supletoria de la ley. Una consecuencia de esta tesis, con la cual difícilmente podría contender, es que todo problema de interpretación jurídica requiere de la aplicación supletoria de la ley.

POSIBLES DILEMAS DE LOS MINISTROS DE LA SCJN

El principal dilema de los ministros de la SCJN consistió en determinar que la LTOC contenía las disposiciones necesarias y suficientes para resolver el problema y que procedía interpretar su artículo 291 o asumir la aplicación supletoria de esa ley y, en consecuencia, recurrir a las leyes referidas en la LTOC respecto del problema consistente en el pago de intereses sobre intereses.

Si se decidía por la primera opción —el primer cuerno del dilema—, evitaba la aplicación supletoria de la ley con todas sus consecuencias y enfrentaba los problemas de interpretación del artículo 291 de la LTOC, en la parte correspondiente. Esta decisión los conducía a otro dilema: podrían considerar que, o bien se trataba de un caso fácil porque las expresiones de la ley eran suficientemente precisas y no dejaban lugar a dudas sobre cuál era la solución obvia, o se trataba de un caso difícil en el cual el registro tex-

² *Diccionario Jurídico Mexicano*, México, UNAM, “voz Ley supletoria”, p. 57.

tual no era suficiente y requería de otras referencias para determinar si y cómo el precepto era aplicable al caso de pacto de intereses sobre intereses.³

Como, al parecer, no era un caso fácil, tenía que asumir la indeterminación semántica del término “intereses” en el texto del artículo 291 de la LTOC. En esta tarea, los ministros de la SCJN era muy probable que tendrían presente la definición legal de intereses expresada en el artículo 893 del Código Civil de la siguiente manera: “frutos civiles como réditos de los capitales en tanto no son producidos por la cosa directamente, [pero] vienen de ella” y advertirían, por lo tanto, la dificultad y riesgos de interpretar la expresión:

obligación de pagar los intereses que se estipulen como obligaciones de pagar los intereses por la suma pactada inicialmente y de pagar los intereses causados por los intereses vencidos y no cubiertos por la suma objeto del contrato de apertura de crédito, pactados en una cláusula adicional en el contrato principal”.

Si se decidían por la segunda opción o por el segundo cuerno del dilema —la aplicación supletoria— admitían el defecto de la LTOC manifestado en una laguna porque en la ley no se hallaba la solución para el caso planteado; así, deberían dedicar sus virtudes intelectuales a la interpretación jurídica del artículo 363 del Código de Comercio o del artículo 2397 del Código Civil —transcritos con anterioridad— y encontrar la solución al caso en los términos de alguno de dichos artículos.

La SCJN se decidió por la primera opción —uno de los cuernos del dilema— y, respecto del primer problema planteado, emitió una tesis jurisprudencial en la cual, en síntesis, sostuvo el siguiente criterio:

El legislador **no incurrió en olvido u omisión** en cuanto a la potestad de las partes para pactar que los intereses vencidos y no pagados puedan, a su vez, generar nuevos intereses o la capitalización de intereses en este tipo de contratos.

³ Ronald Dworkin, “Hard Cases” en *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1978.

La supresión realizada en la ley sobre esos puntos se debe interpretar en el sentido de que se dejaron a la libre voluntad de las partes, excepto que, si el acreditante es una institución de banca múltiple debe cumplir las regulaciones del Banco de México, en cuanto a las tasas de interés y demás características de las operaciones activas, pasivas y de servicios que celebren, emitidas con el propósito, entre otros, de proteger los intereses del público.

Las normas legales especiales que regulan el contrato de apertura de crédito no adolecen de deficiencia alguna sobre el punto que se trata, motivo por el cual el artículo 2397 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, no es aplicable supletoriamente a dichas disposiciones [Las letras negritas son mías].

La super tesis es:

se dejó a la libre voluntad de las partes pactar que los intereses vencidos y no pagados puedan, a su vez, generar nuevos intereses o la capitalización de intereses en los contratos de apertura de crédito.

La SCJN afirma que el alcance del pacto de intereses se deja a la libre voluntad de las partes; es decir, el significado del término “intereses”, para efectos de pactarlos, lo determinan las partes y una posibilidad es pactar intereses sobre intereses o, en otras palabras, para celebrar contratos de “anatocismo”.

Como un argumento en relación con la retórica de la resolución analizada, menciono el lenguaje comprometedor desde un enfoque epistémico. En efecto, al introducir premisas básicas en su razonamiento, se afirma que el legislador no incurrió en olvido al no especificar algo respecto del pacto de intereses sobre intereses y que hubo una supresión realizada en la ley libre y consciente para dejar a los contratantes la libertad de pactar los intereses de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo demostrar que el legislador no incurrió en olvido? y ¿cómo demostrar que hubo supresión en una ley que previamente no existía?

LA APLICACIÓN SUPLETORIA EN LA TEORÍA GENERAL DEL DERECHO

El problema de la aplicación supletoria de las leyes en la teoría general del derecho se ubica en el ámbito de las llamadas lagunas en el derecho. Aludiré, de manera panorámica, a la teoría pura del derecho sostenida por Hans Kelsen acerca de este problema.

Una aportación de Kelsen sobre el particular fue la crítica a las teorías de corte jusnaturalista que sostenían la existencia de lagunas en el derecho; otro avance se manifestó en la precisión de algunos conceptos de lagunas y en las críticas presentadas para llegar a la conclusión de que no existían lagunas en el derecho.⁴

Alchourrón y Bulygin⁵ construyen un modelo lógico novedoso sobre la detección de lagunas normativas y presentan críticas a la teoría de Kelsen en cuanto sostiene la inexistencia de lagunas en el orden jurídico. La observación más fuerte es la dirigida en contra de la afirmación de Kelsen de que no existen lagunas porque el órgano encargado de resolver los conflictos sometidos a su consideración tiene la obligación de colmarlas. En efecto, resulta que no hay lagunas porque se pueden colmar con principios de clausura como son los dos siguientes:

- a) Cuando una conducta no se encuentra prohibida por alguna norma del orden jurídico, entonces está permitida; y
- b) Cuando una conducta no está permitida expresamente por alguna norma del orden jurídico, entonces se encuentra prohibida.

Con referencia a la teoría acerca de lagunas normativas antes señalada, analizaré y evaluaré las tesis de la SCJN sobre el llamado "anatocismo" en cuanto al problema central de la aplicación supletoria de la ley para resolver la legalidad o ilegalidad de pactar

⁴ Hans Kelsen, *Teoría pura del derecho*, Roberto Vernengo [trad.], México, UNAM, 1981, especialmente pp. 254-258.

⁵ Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin, *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales*, Argentina, Editorial Astrea de Rodolfo de Palma y Hnos., S. C. A., 1974.

intereses sobre intereses en cualquiera de las modalidades posibles que tienen el mismo o similar resultado.

MODELO ALCHOURRÓN-BULYGIN

El modelo de Alchourrón-Bulygin se inicia con la determinación de un problema normativo, como los usuales en el ambiente del derecho. En el análisis de la SCJN, el problema es acerca del pago de intereses.

Esta acción siempre debe tener como marco de referencia un universo de discurso (UD) definido como “el conjunto de situaciones o estados de cosas” identificado por una propiedad definitoria y sobre el cual se emiten una serie de enunciados.⁶

El conjunto de situaciones o de estados de cosas, o sea el UD al cual se alude es el siguiente:

los contratos de apertura de crédito en los cuales se han pactado intereses.

Respecto del UD, interesan, fundamentalmente, dos acciones básicas en relación con las cuales se inquiere sobre su caracterización deóntica; en este análisis, el universo de acciones (UA)⁷ está constituido por las siguientes acciones:

A1) Pagar las sumas de dinero correspondientes a los intereses sobre el capital.

A2) Pagar las sumas de dinero por haberse dispuesto del crédito adicional pactado para pagar los intereses vencidos y no pagados sobre la cantidad de dinero puesta a disposición del acreditado.

Las acciones determinadas excluyen la posibilidad de considerar otras en el análisis y solución del problema. No me refiero, por ejemplo, a la acción consistente en el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento del contrato o a la de pagar impuestos por el dinero recibido. El UD y el UA antes precisados delimitan el ám-

⁶ *Ibid.*, p. 32.

⁷ *Idem.*

bito del problema jurídico; así, si alguno de ellos o ambos tienen variación, también cambia el problema.⁸ Por estas consideraciones, el análisis se hará con la idea de que el problema normativo está determinado y que no cambiarán el UD ni el UA.

En lo que se refiere al UD, se requiere identificar en forma valorativa algunas características relevantes con el fin de determinar el conjunto de casos posibles en virtud de la presencia o ausencia de esas características. A éstas se le denomina propiedades y cada una de ellas o compuesto veritativo funcional de ellas, siempre que no sean tautológicos ni contradictorios, define un caso posible. El conjunto de estas características integra el universo de propiedades (UP).⁹

En principio, se irá en la búsqueda de los casos elementales; o sea, de aquellos que unen a todas las propiedades o sus negaciones.

Para la comprensión del problema, indicaré dos características que constituyen el universo de propiedades (UP):

- a) Pacto de intereses sobre la cantidad de dinero puesta a disposición del acreditado en el contrato de apertura de crédito (PI).
- b) Pacto de un crédito adicional en un contrato de apertura de crédito para pagar los intereses vencidos y no cubiertos correspondientes a la suma de dinero puesta a disposición del acreditado en el acuerdo principal (PICA).

Así, de acuerdo con la fórmula $2n$, donde n es el número de propiedades, se obtiene lógicamente el universo de casos (UC) y, en el desarrollo del modelo, en virtud de contar con dos propiedades, se derivan los siguientes cuatro casos posibles:¹⁰

	UP	
	PI	PICA
1.	+	+
2.	-	+

⁸ *Ibid.*, p. 33.

⁹ *Ibid.*, p. 34.

¹⁰ *Ibid.*, p. 35.

UC

3.	+	-
4.	-	-

Tales casos se leen de la siguiente manera:

- En el caso 1 se pactan intereses y la cláusula adicional.
- En el caso 2 no se pactan intereses y se pacta la cláusula adicional.
- En el caso 3 se pactan intereses y no se pacta la cláusula adicional.
- En el caso 4 no se pactan intereses ni cláusula adicional.

En relación con estos cuatro casos, procede la pregunta acerca de si existen las obligaciones de pagar intereses y de pagar intereses sobre intereses. Las respuestas a la interrogación constituirán el universo de soluciones; éstas se darán con respecto a las acciones básicas ya indicadas. **Las caracterizaciones normativas de los temas de las normas son: obligación, prohibición y facultad;** por ello, las acciones pueden estar prohibidas o facultadas o ser obligatorias. Si en un caso se establece la obligación de pagar los intereses ordinarios, se está en presencia de una solución.

Una solución será maximal si determina todos los contenidos normativos que corresponden a un UA y será parcial, si no lo hace. Así, permitido pagar intereses (Pp) es solución parcial, porque nada dice de $-p$; en cambio, Op , Php y Fp son soluciones maximales.¹¹ El conjunto de soluciones maximales integra el Universo de Soluciones maximales (US_{max}).

Para encontrar las soluciones a los cuatro casos posibles, procede identificar el sistema de normas previsto en la legislación que reglamente el UC surgido de acuerdo con las propiedades descritas con antelación.

Una norma es un enunciado que correlaciona un caso con una solución y un conjunto de normas integran un sistema normativo.¹² Así, procede ahora buscar las normas del derecho positivo

¹¹ *Ibid.*, p. 36.

¹² *Ibid.*, pp. 37-38.

mexicano que constituyen el sistema normativo referido a los cuatro casos que resultan de la presencia o ausencia de las propiedades relevantes.

En esta indagación es identificado el artículo 291 de la LTOC en el cual se establece en forma expresa que queda obligado el acreditado, en todo caso, a pagar los intereses que se estipulen en los contratos de apertura de crédito. Es decir, se prescribe la obligación de pagar los intereses estipulados en los contratos de apertura de crédito. Existe la Op , donde p es igual a alguna de las acciones básicas. Es muy importante advertir que no existe otra norma que se pudiera incorporar al sistema de normas ni, por tanto, al universo de soluciones maximales (US_{max}).

En el caso en estudio, el $US_{max} = N1$ / obligatorio pagar los intereses que se estipulen. Así, es el momento de regresar al UC y buscar las soluciones normativas proporcionadas a cada uno de los casos posibles.

UP			
	PI	PICA	$N1/Op$
1.	+	+	No hay solución expresa.
2.	-	+	No hay solución expresa.
UC			
3.	+	-	Op
4.	-	-	No hay solución expresa.

Este sistema de normas es incompleto, consistente e independiente. Hasta este momento, sólo me ha interesado determinar las características del sistema de normas y la conclusión es que tal sistema no resuelve los casos 1, 2 y 4 y, por ello, tiene lagunas.

Con el modelo de Alchourrón-Bulygin se detecta la existencia de lagunas normativas; es decir, no existe solución en el sistema de normas relacionadas con los casos 1, 2 y 4.

La consecuencia de la derivación anterior es que habría que recurrir a las prioridades de aplicación supletoria de la ley para resolver el problema. Con la aplicación de los conceptos anteriores, la SCJN debería haber recurrido al Código Civil y al Código de Co-

mercio y ser consistente en la construcción de su teoría constitucional acerca de esta materia.

Si hubiera apelado a la aplicación supletoria del Código Civil, no hubiera tenido mucho margen de acción, pues el texto del artículo 2397 no permite capitalizar intereses antes de que se causen y, si el Código de Comercio fuera el supletorio, el artículo 363 tiene problemas sintácticos considerables de los cuales es difícil salir airoso si se pretende que autoriza a las partes a pactar de antemano la capitalización de intereses. Además, si llegara a las dos conclusiones, que el Código Civil lo prohíbe y que el Código de Comercio lo permite, su construcción sería contradictoria.

Entonces, preguntaron los ministros: ¿Cómo quitarme a estos dos enemigos? y contestaron: no peleando con ellos, no procede la aplicación supletoria y nos quedamos con el artículo 291 de la LTOC.

INTERPRETACIÓN JURÍDICA O USO DE TEXTOS LEGALES

Con la interpretación jurídica, se pretende ver mundos posibles a través del texto legal, texto como entidad lingüística autónoma y cerrada; en una palabra, con la actividad de la interpretación jurídica se intenta la mejora de los textos.¹³ Uno de esos mundos posibles es el que vio la SCJN. La predicción o la imaginación de impactos en ese mundo posible de la SCJN se pueden describir de modo independiente de que se den o no o lo que se haga para evitarlos.

La SCJN interpretó el artículo 291 de la LTOC en la parte relativa a la obligación del acreditado de pagar los intereses estipulados, en el sentido de que la supresión realizada en dicha ley sobre si los intereses generan nuevos intereses o si se capitalizan en ese tipo de contratos, dejó a la libre potestad de los contratantes la determinación y alcance de esos asuntos.

En teoría de la interpretación jurídica, el problema inicial es establecer, en el escenario de los contratos de apertura de crédito, si

¹³ Paul Ricoeur, *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*, Graciela Monges Nicolau [trad.], México, Siglo XIX/ UIA, 1995, pp. 104-106.

el texto **"obligatorio pagar los intereses"** permite la interpretación **"obligatorio pagar los intereses que se causen por el no pago de los intereses sobre el préstamo principal."**

Una interpretación lleva a sostener que la palabra intereses, en el contexto del artículo 291 de la LTOC, ha de considerar, como ya se dejó entrever, la definición legal del término intereses del artículo 893 del Código Civil como: "réditos de los capitales en tanto no siendo producidos por la cosa directamente, vienen de ella." Para comprender la palabra intereses se advierte que se trata de una relación entre capital y réditos dentro del género frutos civiles, definición que alude originalmente a las situaciones ordinarias de los frutos civiles producidos por el capital y no a que los intereses vencidos y no pagados produzcan intereses.

Figura jurídica distinta a los intereses como réditos del capital es la capitalización de intereses consistente en la metamorfosis de los intereses vencidos y no pagados en capital, por acuerdo de las partes; figura regulada de manera expresa y caracterizada deónticamente en el Código de Comercio y en el Código Civil de la siguiente manera.

En el artículo 363 del Código de Comercio se establece:

Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos.

En el artículo 2397 del Código Civil se prescribe:

Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y produzcan intereses.

La LTOC no contiene disposición expresa sobre la metamorfosis de los intereses en capital, como sí sucede en el Código de Comercio y en el Código Civil. En la citada LTOC, sí se estipula la obligación de pagar los intereses, pero ésta se relaciona con las situaciones ordinarias de los frutos producidos por el capital. El texto "obligación de pagar los intereses estipulados" no permite la lectura de que se está autorizado el pacto de intereses sobre intereses cuando aún no se causan, no se venzan y no se paguen.

En relación con el criterio de la SCJN relativo a que el artículo 291 de la LTOC autoriza la modalidad de referencia del anatocismo, surgen dos observaciones: la primera referida a los principios

de clausura de los sistemas normativos y la segunda, a la sospecha de que tal tribunal no interpreta, sino que usa el texto legal.

En cuanto a la primera observación, se advierte que la SCJN resolvió el caso con un principio de clausura que no pertenece al conjunto de normas que ofrecen soluciones a los casos posibles de acuerdo con el UC; es decir, cerró el sistema normativo con un principio general del derecho positivo y así "negó" la existencia de lagunas normativas.¹⁴

Este modo de proceder encierra una paradoja: parte de que no hay laguna, porque se colma con un principio de clausura del derecho positivo mexicano que se ha expresado en la resolución de la SCJN de las siguientes maneras: a) Queda a la voluntad de las partes la celebración del contrato de apertura de crédito y la fijación de cualquier modalidad para la capitalización de intereses o b) Si en el orden jurídico no está prohibida alguna conducta para los particulares, entonces, está permitida.

Lo cierto, según mi forma de comprender, es que en el artículo 291 de la LTOC que se interpreta por la SCJN no se concede expresamente el derecho de las partes a pactar intereses sobre intereses en el contrato de apertura de crédito. Cuando se afirma la existencia de un derecho de pactar un determinado contenido en favor de alguien, es necesario señalar una norma jurídica, distinta al artículo 291 de la LTOC, cuya función consista en otorgar esa capacidad.¹⁵ Tal norma podría disponer, por ejemplo: "La voluntad de las partes es ley en la celebración de contratos" o "la conducta no prohibida expresamente a los particulares está permitida".

Estas normas, en caso de existir, no se refieren al anatocismo de manera particular; es decir, no tienen por tema de la norma el propósito de autorizar los pactos de anatocismo; en tal virtud, no se refieren al UD ni al UA del problema normativo planteado ni, en consecuencia, a alguno de los casos del UC.

¹⁴ C. E. Alchourón y E. Bulgin, *op. cit.*, principalmente el capítulo VII. "El problema de la clausura".

¹⁵ Consúltase de Hans Kelsen, *Teoría pura del derecho*, los diferentes conceptos de derecho subjetivo en los cuales se supone que se trata de una función de las normas en relación con la conducta de los seres humanos. Capítulo IV "Estática jurídica", núm. 29 referido a "El derecho subjetivo: tener derecho y estar facultado".

Si la SCJN recurrió a esos principios del derecho positivo para solucionar el conflicto entre tesis contradictorias de tribunales colegiados de circuito, implícitamente, admitió la existencia de lagunas en la LTOC; es decir, aceptó que no había solución deóntica expresa para el caso del pacto de intereses sobre intereses.

Una consecuencia de la actitud de la SCJN es que deja presente el riesgo de considerar autorizada la usura o la lesión en los contratos.

Los ministros de la SCJN pudieron haber pensado —y una conjetura es que sí lo pensaron— que no eran aplicables los principios de clausura señalados y haber argumentado en favor de ese pensamiento en el sentido de que la usura está sancionada en el Código Penal —delito de fraude en el artículo 387, fracción VIII— y la lesión es un vicio de la voluntad en los contratos de acuerdo con el Código Civil —artículo 17, en particular el artículo 2392—. Si la conjetura es exitosa, desde el punto de vista legal, actuaron en forma diversa.

Respecto de la segunda observación referida a la sospecha acerca de si la decisión de la SCJN fue un exceso en la interpretación, es decir, de una "interpretación" que el texto no autoriza y que sólo fue el uso del texto y no la interpretación del mismo, lo considerará por medio de algunas ideas de Umberto Eco.

Según Eco, San Agustín afirma "que si una interpretación parece plausible en un determinado punto del texto, sólo puede ser aceptada si es confirmada —o al menos, si no es puesta en tela de juicio— por otro punto del texto". Esto, dice Eco, es lo que entiendo por *intentio operis*.¹⁶

¹⁶ Umberto Eco, *Los límites de la interpretación*, Helena Lozano [trad.], México, Lumen, 1992, pp. 39-40. Ya he citado en otro artículo el siguiente pasaje de Eco y lo reproduzco ahora por su poder teórico en la comprensión del problema que ahora me ocupa:

"Si Jack el Destripador nos viniera a decir que hizo lo que hizo por inspiración recibida leyendo el Evangelio, nosotros nos inclinaríamos a pensar que había leído el Nuevo Testamento de una manera, por lo menos, inusual. Creo que lo dirían los más indulgentes asertores del principio de que, en la lectura, todo está permitido. Diríamos que Jack usó los Evangelios a su manera, diríamos, quizá, que debemos respetar su lectura; aunque, siendo éstos los resultados de su *misreading*, yo prefe-

Puedo sostener que la “interpretación” de la SCJN no aparece confirmada por algún otro punto del texto del artículo 291 de la LTOC que se “interpreta”; si la expresión pagar los intereses estipulados en el contrato de apertura de crédito se “interpreta” de tal manera que comprenda también pagar intereses sobre los intereses vencidos y no cubiertos correspondientes a la suma de dinero puesta a disposición del acreditado, tal interpretación no está soportada en algún otro punto del texto.

Si el texto se amplía al Código de Comercio, al Código Civil y al Código Penal, por mencionar los ordenamientos relacionados en este trabajo, existen otros puntos textuales que no abonan en favor de la tesis de la SCJN, sino que hacen no plausible la derivación de pactar intereses sobre intereses, antes de que se causen, se venzan y no se paguen.

Si la “interpretación” excede el texto, entonces la LTOC tiene una laguna porque no resuelve el caso. En vez de interpretar, se usa el texto.

SOLUCIÓN DE LOS OTROS DOS CASOS

El segundo caso tratado por la SCJN se refiere a si el artículo 363 del Código de Comercio es aplicable supletoriamente en el contrato de apertura de crédito previsto en la LTOC. La SCJN sostuvo las mismas consideraciones para resolver este problema que las

ría que Jack no siguiera leyendo. Pero no diríamos que es un modelo que podríamos proponer a los chicos de una escuela para explicarles lo que se puede hacer con un texto.

“El ejemplo —continúa Eco— no quiere ser meramente “gracioso”: nos dice que al menos existen casos en los cuales todos convendríamos en que una determinada interpretación es insostenible. Como prueba de falsación, es suficiente. Basta con que se pueda decir que existe por lo menos una lectura inaceptable para que nazca el problema de cuál es el parámetro que nos permite discernir entre lecturas distintas. [...] Hay un sentido de los textos, o hay muchos sentidos, pero no se puede decir que no hay ninguno, o que todos son igualmente buenos”.

Para advertir la potencialidad del pasaje, sugiero que se lea sustituyendo a Jack por la SCJN, el Evangelio por la constitución y a otros personajes o situaciones según el ingenio del lector.

planteadas respecto de la procedencia de la aplicación supletoria del artículo 2397 del Código Civil.

En esta situación problemática, se plantea la variable consistente en que, en el contrato de apertura de crédito, las partes pactan intereses con fundamento en el artículo 363 del Código de Comercio, sobre los intereses que en el futuro se vayan a vencer y no pagar. He citado la prescripción del artículo en varias ocasiones y de nuevo la transcribo: "Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos".

La tesis de la SCJN, similar a la anterior, en la parte diferente indica expresamente:

El artículo 363 del Código de Comercio no resulta aplicable supletoriamente a dichas disposiciones; sin embargo, cuando en el propio contrato de apertura de crédito las partes convienen la capitalización de intereses e invocan para ello el referido precepto legal, entonces sí adquiere aplicabilidad, pero esto sucede en observancia del principio de que la libre voluntad de las partes es ley para ellas y no porque fuera necesario acudir a esa disposición, ni a ninguna otra, como norma supletoria.

En las consideraciones de la decisión aparece la siguiente afirmación:

Conclusión que tiene su origen en el principio general que rige en derecho privado, conforme al cual en las convenciones cuyos efectos se limiten al ámbito personal de las partes que las celebran, por no trascender al terreno público, lo que no está prohibido por la ley, está permitido.

Respecto del segundo problema, en el quehacer judicial de la SCJN, se presenta en forma más precisa y clara la referencia al principio de clausura consistente en que si una conducta no está prohibida en el orden jurídico correspondiente, entonces, está permitida.

De esta manera, evitó incursionar en la tarea de interpretación jurídica de un precepto —el artículo 363 del Código de Comer-

cio— que pudiera ser de aplicación supletoria a la LTOC en el caso del pacto y obligación de pagar intereses sobre intereses.

El tercer problema analizado por la SCJN se refiere a si debe o no acudir a la aplicación supletoria del Código Civil antes referido, para determinar los alcances de tal disposición cuando por voluntad de las partes se pacta en el contrato de apertura de crédito la capitalización de intereses en términos del artículo 363 del Código de Comercio.

Se trata, afirma la SCJN, de la incorporación de una disposición del Código de Comercio en un contrato de apertura de crédito, pero no significa que tal disposición rija el citado contrato; adquiere rango contractual y no por ello se autoriza la supletoriedad del artículo 2397 del Código Civil para el caso en que los términos del contrato no sean claros o precisos, pues, en tal situación, se podrá acudir a las reglas de interpretación de los contratos de acuerdo con el artículo 2 de la LTOC.

En este caso, la conclusión es que si las partes pactaron la capitalización de intereses haciendo suyo lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Comercio, procede la interpretación de tal precepto y no la aplicación supletoria del Código Civil.

JUICIO ACERCA DE LA ACTUACIÓN DE LA SCJN

Son muchos los vericuetos que tuvieron que andar los ministros de la SCJN para sostener la legalidad del anatocismo en cualquiera de las modalidades que pudiera tener y dejaron algunas puertas para permitir la usura y la lesión en los contratos. Creo que éstos son las consecuencias legales de mayor severidad que surgen en la situación de pobreza de un elevado número de familias en la nación mexicana.

Lo más acorde con la LTOC es sostener que no prescribe nada sobre anatocismo y que no existe texto alguno que confirme lo contrario. Si se admite esta afirmación, el resultado es que existe una laguna en la LTOC y procede colmarla de acuerdo con las normas supletorias indicadas en la misma ley.

Una interpretación más razonable indicaría la existencia de límites en la posibilidad de pactar intereses; un límite sería que al menos no haya usura o lesión en los contratos. Habría casos ilegales en el pacto de intereses, de acuerdo con la interpretación de la norma correspondiente y las directivas de interpretación vigentes en el derecho positivo mexicano.

Conforme a la validación consagrada por la SCJN de la práctica, principalmente de la banca, de pactar intereses sobre intereses, se colocó la espada de Damocles sobre la cabeza de los deudores en la celebración de tales contratos de adhesión, pues el acreditante pretende asegurarse de que el acreditado cumplirá el contrato de apertura de crédito o hará todo lo posible para cumplirlo y evitar daños y perjuicios en su patrimonio y, si no puede cumplirlo, creará una deuda impagable.

BIBLIOGRAFÍA

- Alchourón, Carlos, E., Bulygin, Eugenio, *Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales*, Editorial Astrea de Rodolfo de Palma y Hnos, S. C.A., Argentina, 1974.
- Diccionario Jurídico Mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1984, México,
- Dworkin, Ronald, "Hard Cases", en *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1978.
- Eco, Umberto, *Los límites de la interpretación*, traducción de Helena Lozano, Editorial Lumen, México, 1992.
- Kelsen, Hans, *Teoría pura del derecho*, traducción de Roberto Ver-nengo, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1980.
- Ricoeur, Paul, *Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido*, trad. Graciela Monges Nicolau, Siglo XXI Editores/Universidad Iberoamericana, 1995.



⇒ *"La verdad torcida, deformada, alterada, mutilada, pintarrajeada"*, 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Capítulo IV

El anatocismo visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Solución correcta? Aplicación de los modelos de argumentación de Stephen Toulmin y de la solución correcta de Ronald Dworkin

*Agustín Pérez Carrillo**

SUMARIO

I. Introducción. II. Expresiones relevantes en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. III. Modelo de argumentación de Stephen Toulmin. IV. El modelo de Ronald Dworkin de la solución correcta. V. Función de las teorías y evaluación. VI. Bibliografía.

INTRODUCCIÓN

EL PROPÓSITO ESPECÍFICO de este capítulo es analizar críticamente uno de los argumentos fundamentales de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 7 de octubre de 1998 en el expediente 31/98 sobre contradicción de tesis respecto del llamado anatocismo. En esencia, tal análisis lo practico con base en una teoría sobre el razonamiento jurídico y otra respecto de la interpretación jurídica. Para este fin, considero que la parte central de la resolución es la que responde a la pregunta sobre si está prohibido el pacto de intereses sobre intereses, conocido como "anatocismo", con referencia especial a que en algunos

* Profesor-Investigador del Departamento de Derecho.

contratos de apertura de crédito se acuerda, en forma simultánea, un crédito adicional para cubrir, cuando suceda el supuesto, intereses vencidos y no pagados. Según sea la solución a este problema, asumo, *prima facie*, que todas las demás cuestiones planteadas en la contradicción de tesis se resolverán de acuerdo con la orientación fundamental de que está prohibido o permitido el anatocismo en los términos formulados. En efecto, se trata de un cuestionamiento eminentemente teórico que muestra dos formas de ver el mundo jurídico en estas condiciones iniciales, de tal manera que la solución a otras interrogantes como nulidad, simulación y supletoriedad se orientarán por el sentido de la solución al problema principal.

EXPRESIONES RELEVANTES EN LA SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Según lo afirmó expresamente, la SCJN practicó una interpretación literal de las normas jurídicas al resolver la contradicción de tesis entre tribunales colegiados sobre el anatocismo. Con esta actitud, desdeñó la actividad creadora en la interpretación jurídica que corresponde a los jueces; tal estilo de interpretación equivale a decir que es suficiente la lectura de la ley para resolver cualquier problema jurídico: lean los textos y se percatarán del sentido de las prescripciones legales. La remisión constante al texto legal es una rutina estéril y demuestra poca inquietud por problemas jurídicos interesantes.

Existen avances considerables en la teoría de la interpretación y del razonamiento jurídico para elaborar y, en su caso, evaluar, las decisiones judiciales; en la contradicción de tesis resuelta por la SCJN, es escaso el recurso a la teoría general del derecho en los rubros indicados.

El planteamiento principal abordado por la SCJN fue establecer si las cláusulas incluidas en un contrato de apertura de crédito conforme a las cuales se pacta un crédito adicional para cubrir intereses originados por el crédito principal constituye pacto de intereses sobre intereses prohibido por la legislación civil y mercantil (el más

alto tribunal del país prefirió no utilizar el término anatocismo en virtud de que no pertenece al lenguaje del derecho positivo mexicano). La última afirmación —previa a los paréntesis— es sustentada por la SCJN con fundamento en los artículos 2397 del Código Civil y 363 del Código de Comercio en los cuales se prescribe, respectivamente: “Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses” y “Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos”.

La SCJN construyó el escenario a partir de una respuesta negativa rotunda y categórica al problema planteado; es decir, indicó la conclusión, y las premisas fueron buscadas en una constante remisión a las leyes y, repito, en un escaso desarrollo de interpretación jurídica.

Aludiré a algunas expresiones de la SCJN acerca de la forma en que abordó esta problemática, las cuales sostienen el sentido de su resolución.

i. Expresó:

[...] no cabe hablar de anatocismo, sino de intereses sobre **intereses prohibidos por ambos preceptos** (artículo 2397 del Código Civil y 363 del Código de Comercio) y de capitalización de intereses, expresamente autorizado a condición de que sea pactado entre las partes, en el primer caso, con posterioridad a que los intereses se causen; y en el segundo, sin hacer manifestación en cuanto a la temporalidad de ese convenio. [Las negritas son mías].

ii. Al abordar el tema de la “naturaleza” del contrato de apertura de crédito y de la capitalización de intereses, el propósito manifiesto fue hallar la “esencia” de cada uno de ellos para, con referencia a la naturaleza y a la esencia, justificar una decisión.

En efecto [se expresa en la resolución], **la capitalización de intereses implica la acción de agregar al capital originario de un préstamo o crédito los intereses devengados, vencidos y no pagados** para computar sobre la suma resultante réditos ulteriores. Esa capitalización no

se presenta en el **convenio celebrado entre las partes de un contrato de apertura de crédito** a fin de que el acreditado disponga discrecionalmente, en su caso, de un **crédito adicional para cubrir intereses devengados en otro crédito distinto**. [Las negritas son mías]

Alude a las siguientes diferencias especiales entre las dos figuras:

La capitalización supone que haya intereses vencidos y no pagados. En el contrato de apertura de crédito, llegado el momento de vencimiento de pago de intereses devengados, el deudor se ve legalmente en situación de pagar al acreedor las sumas en cuestión, lo cual podrá hacer con recursos propios o con los recursos de que puede disponer por virtud del crédito adicional. En este supuesto, los recursos del crédito adicional se utilizan para el pago de los intereses vencidos, por lo que no ha lugar al incumplimiento por parte del deudor. [Las negritas son mías.]

Otra diferencia es que “mientras que los intereses, por regla general, siguen la suerte de la obligación principal, el refinanciamiento se logra a través de un contrato de apertura de crédito, **diverso al originalmente pactado**, con el destino específico de pagar total o parcialmente los intereses vencidos”. [Las negritas son mías.] Esta última afirmación es parcialmente verdadera, pues el auténtico problema se presenta cuando el refinanciamiento se efectúa en el mismo contrato de apertura de crédito, antes de que se venzan y no se paguen los intereses.

Una ulterior diferencia es que:

en el contrato de apertura de crédito para cobertura de intereses, el acreditante tiene **una obligación de hacer** y el acreditado asume la obligación de pagar intereses por las sumas dispuestas, o sea, una **obligación de dar**. Corrobora lo anterior, la circunstancia de que el referido contrato se puede celebrar en el mismo instrumento en que consta el diverso acto jurídico, o en otro, y con el primer acreditante o con uno diferente, lo que permite visualizar que las deudas derivadas de esos actos jurídicos son diversas e independientes... Esto es incon-

cebible en la capitalización de intereses, toda vez que, como se apuntó, la misma consiste en la acción de agregar al capital originario de un préstamo a crédito, los intereses devengados vencidos y no pagados. De esta diferencia resulta que en la capitalización, **los intereses se incorporan al capital**, lo que no acontece en la apertura de crédito para cobertura de intereses, donde **el capital dispuesto produce sus propios intereses**. [Las negritas son mías.]

Esta afirmación de la SCJN deja de tomar en consideración las consecuencias jurídicas del contrato de apertura de crédito con cláusulas relativas al otorgamiento de un crédito adicional para el pago de intereses en caso de que no se cubra el aumento del capital adeudado sobre cuyo total se cobrarán nuevos intereses, en virtud de la capitalización de los intereses como resultado del empleo del crédito adicional.

Posteriormente, sostiene:

La conclusión obtenida no se desvirtúa por el hecho de que, en algunos casos, se observe que en los **contratos de apertura de crédito** las partes convengan la capitalización de intereses e invoquen para ello el artículo 363 del Código de Comercio, toda vez que **aun cuando es innegable que en estas hipótesis sí existe pacto de capitalización de intereses** [recordar que en la misma resolución se asumió insistentemente que la capitalización de intereses suponía intereses vencidos y no pagados], la misma deriva del convenio expreso de las partes en ese sentido, que se celebra con fundamento en el artículo 78 del Código de Comercio, y en razón de que en esa materia los contratantes gozan de plena libertad para acordar lo que les convenga, con la limitante, desde luego, de que no se contravengan disposiciones de orden público. [Las negritas son mías]

Conclusión: “**el contrato de apertura de crédito para cobertura de intereses** es un acto autorizado por la ley, diferente a la capitalización de intereses, y por tanto, aquél no es una forma de disfrutar u ocultar ésta”. Éste es un argumento incorrecto que corre de la siguiente manera: si ambas figuras son diferentes, entonces la

primera no es una forma de disfrazar a la segunda. Hay contraejemplos: así, si el contrato de compraventa está autorizado y el fraude está prohibido, entonces el contrato de compraventa no puede ser una forma de disfrazar el fraude. En efecto, se sabe que por medio de contratos de compraventa se comete el delito de fraude.

La escritura de la SCJN sobre la "naturaleza" de las dos figuras busca y encuentra diferencias no fundamentales en cuanto a los hechos condicionantes y a las consecuencias condicionadas de ambos casos, hechos y consecuencias que son lo relevante en las apreciaciones jurídicas. Una de las consecuencias en los dos casos es que se aumenta el capital que se adeuda, incremento sobre el cual se calcula el monto de los intereses a pagar: en la capitalización se aumenta el capital originario y en el refinanciamiento el efecto es igual: se pagan con el crédito adicional los intereses originados por el préstamo del capital originario y el monto del crédito adicional se suma al mismo capital y sobre la suma se calculan y se cobran los nuevos intereses.¹

¹ Eugenio Bulygin, *Naturaleza jurídica de la letra de cambio*, Argentina, Abeledo-Perrot, 1961, con motivación intelectual en el artículo de Alf Ross titulado "Tu-tu", elabora un análisis acerca de la naturaleza o esencia de la letra de cambio y concluye con las siguientes palabras: "La situación que reina en la ciencia comercialista es verdaderamente curiosa: todos los autores están de acuerdo sobre las consecuencias que acarrea la obligación cambiaria, tampoco se discute sobre los hechos que hacen surgir la misma. Y a pesar de saber todo lo que puede saberse sobre la materia, siguen buscando una mítica fuente de una palabra que no nombra absolutamente nada. La búsqueda de la inexistente sustancia designada por el nombre de 'obligación cambiaria', se basa en la vieja creencia de que detrás de toda palabra debe haber un ente, creencia cuyos resultados han sido por demás perniciosos, tanto en la filosofía, como en la jurisprudencia". pp. 50-51.

Al respecto, resulta importante la consulta del texto de investigación *Estado de derecho y jurisprudencia* de Rogelio Larios, Universidad de Hermosillo, 1998, en el cual el autor manifiesta una actitud crítica hacia algunas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y destaca la necesidad de análisis racionales y objetivos respecto de las decisiones legales. Asimismo, exige un diálogo más claro y audaz con los jueces, lo que considera que no se logra y va en demérito del principio del Estado de Derecho.

MODELO DE ARGUMENTACIÓN
DE STEPHEN TOULMIN

Toulmin presenta un modelo elemental para justificar las argumentaciones. Se inicia con el establecimiento de una pretensión (*claim*), la cual puede estimarse como una conclusión respecto de una situación planteada; se requiere la presentación de razones (*grounds*) relevantes y suficientes en virtud de las cuales se tiene la pretensión; posteriormente, se exige algún principio, criterio o ley que permita el paso de las razones a la pretensión, cuya presencia constituye la garantía (*warrant*) y, por último, se exige la fundamentación de la garantía que es ofrecida por el respaldo (*back*).²

Este modelo sencillo y exigente se esquematiza y lo ejemplifico en los siguientes términos:

Razones (<i>Grounds</i>)	Pretensión (<i>Claim</i>)
X tiene 18 años, un modo honesto de vivir y goza de plena capacidad de ejercicio	X tiene derecho a votar
Garantía (<i>Warrant</i>)	
El artículo 35 constitucional establece que los ciudadanos tienen derecho a votar	
Respaldo (<i>Back</i>)	
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento normativo que determina todos los aspectos políticos del sistema democrático	

² Manuel Atienza, *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991. Para la explicación de la teoría de Stephen Toulmin, me orienté en la exposición que efectúa Atienza.

La presentación de la parte de la sentencia de la SCJN sobre el llamado problema del anatocismo se realizó como sigue:

Pretensión

(Claim):

Se permite al momento de celebrar un contrato de apertura de crédito pactar un crédito adicional para el pago de intereses que en el futuro se venzan y no se paguen. Este acuerdo no constituye pacto de intereses sobre intereses prohibido legalmente, pues aun cuando es innegable que en esta hipótesis existe pacto de capitalización de intereses, la misma deriva de convenio expreso de las partes celebrado con plena libertad de acordar lo que les convenga, con la limitante de que no se contravengan disposiciones de orden público.

Razones

(Grounds)

Es diferente la “naturaleza” del contrato de apertura de crédito para el pago de intereses y la capitalización de intereses: ésta implica agregar, al capital originario de un préstamo o crédito, los intereses vencidos y no pagados para computar sobre la suma de réditos ulteriores. Esa capitalización no se presenta en un contrato de apertura de crédito con el fin de que el acreditado disponga discrecionalmente, en su caso, de un crédito adicional para cubrir intereses devengados en un crédito distinto.

La capitalización supone intereses vencidos y no pagados. En el contrato de apertura de crédito llegado el vencimiento de pago de intereses, el deudor puede pagar con los recursos del crédito adicional y si los usa con ese propósito, no incumple.

Por otra parte, mientras que los intereses, por regla general, siguen la suerte de la obligación principal, el refinanciamiento se logra a través de un contrato de apertura de crédito, diverso al originalmente pactado, con el destino específico de pagar intereses vencidos.

Además, en el contrato de apertura de crédito para cobertura de intereses, el acreditante tiene una obligación de hacer y el acreditado una obligación de dar: pagar intereses por las sumas dispuestas. El

contrato puede celebrarse en el mismo instrumento en que consta el diverso acto jurídico, o en otro, y con el primer acreditante o con uno diferente, lo que permite ver que las deudas derivadas de esos actos jurídicos son diversas e independientes. Esto es inconcebible en la capitalización de intereses, pues la misma consiste en agregar al capital originario de un préstamo los intereses vencidos y no pagados. De esta diferencia, resulta que en la capitalización los intereses se incorporan al capital, lo que no acontece en la apertura de crédito para cubrir intereses, donde el capital dispuesto produce intereses propios.

Garantía (*Warrant*):

El artículo 363 del Código de Comercio prescribe que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses, pero que los contratantes podrán capitalizarlos antes de su vencimiento y no pago; por otra parte el artículo 78 del mismo ordenamiento legal dispone que las partes tienen libertad para contratar con el límite de que no se transgredan normas de orden público.

Respaldo (*Back*):

Ninguna interpretación jurídica puede derogar el principio general de libertad contractual entre los particulares; además, debe permanecer incólume el principio de interpretación según el cual en donde la ley no distingue al intérprete no le corresponde distinguir. Por ello, el acuerdo para la capitalización de intereses en un contrato de apertura de crédito puede ser previo a la causación de los mismos o posterior.

De acuerdo con el modelo de Toulmin, puedo sostener que la sentencia de la SCJN presenta como respaldo de las disposiciones aplicadas dos principios jurídicos formales y que son artificialmente aplicados en virtud de las "interpretaciones literales" que practicó.

Considero que un error de la SCJN está indicado en forma expresa en la misma resolución. Se trata de la introducción de premisas contradictorias: afirmar que **la capitalización de intereses** supone que se han vencido y no pagado y, al final de la parte de

la resolución en estudio, sostener que la **capitalización de intereses** puede pactarse, previamente al vencimiento y no pago, cuando las partes lo hacen en ejercicio de la libertad de contratación; es decir, la SCJN admite que la capitalización de intereses procede cuando han sido causados y no pagados y que también procede capitalizar intereses no causados y no pagados.³ Estas afirmaciones vuelven estéril la búsqueda de la SCJN de diferencias entre la capitalización de intereses y el contrato de apertura de crédito en el cual se pacta un crédito adicional para el pago de intereses no vencidos y no pagados, pues admite que, en ambos, se da la capitalización de intereses.

Por otra parte —y es una crítica a la forma de razonar en la resolución—, la relación entre prohibición y permiso adquiere sentido cuando la prohibición se establece como una regla general, es decir para todos los casos y todas las personas, y existen razones por las

³ Con este proceder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación existen buenos argumentos para hacerse cargo de la paradoja presentada por L. Wittgenstein sobre el significado de “seguir una regla”. Analizar en *Investigaciones filosóficas*, Alfonso García Suárez y Ulises Moulines [trads.], Barcelona, Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM/Editorial Crítica, Grijalbo, 1986. En el párrafo 201 de las *Investigaciones filosóficas* se lee lo siguiente:

Nuestra paradoja era esta: una regla no podía determinar ningún curso de acción porque todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. La respuesta era: Si todo puede hacerse concordar con la regla, entonces también puede hacerse discordar. De donde no habría ni concordancia ni desacuerdo. El planteamiento de la paradoja es claro: si es posible que cualquier comportamiento coincida y no coincida con la regla, entonces no existe base firme para decidir si una conducta cumple o vulnera la regla.

La cuestión es si Wittgenstein, de acuerdo con su filosofía del lenguaje, acepta la paradoja: si la acepta y no la resuelve, las reglas pierden su sentido; si no la acepta y expone las razones de la negativa o la acepta y la resuelve, entonces se mantiene el sentido de las reglas. Cualquiera de las dos situaciones y las respuestas ofrecidas, extrapoladas al conocimiento jurídico, tiene repercusión sobre la vigencia del principio de Estado de Derecho y la justificación de los comportamientos de las autoridades estatales.

Ésta es una base para el análisis de las decisiones de las autoridades de última instancia y entrar al debate acerca de la significatividad del lenguaje jurídico. Por ahora, sólo señalo la importancia para el derecho y la ciencia jurídica de enfrentar la citada paradoja e intentar darle solución.

cuales se prohíbe una determinada conducta. En el caso, se trata de un contenido económico y de la norma se derivan derechos; se pretende por el legislador la existencia de relaciones económicas en las cuales se presente un equilibrio, igualdad entre los contratantes y lograr certeza en cuanto a las cargas y beneficios económicos, y no propiciar la creación de desventajas para los deudores. Es absolutamente distinta la deuda asumida al pactar un crédito adicional para cubrir intereses no causados y no pagados en forma anticipada, que pactar su capitalización una vez causados y no pagados. En esta diferencia, se manifiesta el sentido de la prohibición y tiene consecuencias económicas y jurídicas importantes.

Por lo común, la permisón se establece como excepción a una regla y existen razones poderosas que la justifican. En el caso planteado, en realidad no se está en presencia de una excepción a la regla general de prohibición. La prohibición de capitalizar previamente los intereses vencidos y no pagados no tiene excepciones; por ello, se confirma el sentido de la prohibición.

En ciertos supuestos, existen razones para cancelar la prohibición; por ejemplo, se prohíbe matar, pero se permite hacerlo en legítima defensa; es obligatorio pagar la renta, pero se puede retener si no se practican las mejoras necesarias al bien arrendado, etcétera. La SCJN no entendió así el significado de la prohibición, sino como que una conducta está prohibida, pero la misma se permite si las partes lo deciden; prácticamente, la consideró como libertad de hacer o no hacer.

Además, la SCJN no atendió de modo adecuado la sintaxis del artículo 363 del Código de Comercio y lo transforma en un problema sintáctico de interpretación jurídica.⁴ En dicho numeral se

⁴ Alf Ross, *Sobre el derecho y la justicia*, Genaro Carrió [trad.], 5ª edición, Buenos aires, Editorial Universitaria, 1994; en especial, el capítulo destinado a "Método jurídico" en el cual construye una clasificación de los problemas de interpretación jurídica, y entre ellos, señala los sintácticos, o sea aquellos que atienden a la estructura gramatical de los enunciados normativos. Detectado un problema sintáctico —indica—, no es posible obtener la interpretación "natural" y es necesario acudir a otras instancias como valores, principios o estándares de conducta para sostener una interpretación jurídica. Valga como un ejemplo el siguiente: "Los hombres y mujeres que hayan cumplido la mayoría de edad tienen derecho a cruzar la fronte-

prescribe: "Los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos."

El término "capitalizarlos", en virtud de la sílaba "los", alude a los intereses vencidos y no pagados, en relación con los cuales se establece el imperativo de que, en esa situación, no devengarán intereses. En consecuencia, se permite que se puedan capitalizar una vez que estén vencidos y no pagados. Por lo tanto, es razonable sostener que la ley sí distingue ambas situaciones: la primera de que no se pueden capitalizar los intereses antes de su vencimiento y no pago y la segunda de que se pueden capitalizar una vez que se vencen y no se pagan.

De acuerdo con el modelo de Stephen Toulmin, no está justificada la parte fundamental de la sentencia de la SCJN al exceder del marco normativo al que recurre e introducir premisas contradictorias en su razonamiento.

EL MODELO DE RONALD DWORKIN DE LA SOLUCIÓN CORRECTA

Dworkin es un teórico del derecho que sostiene la existencia de la única solución correcta para los casos difíciles planteados en un orden jurídico determinado. Como orientación fundamental en el desarrollo de la teoría de Dworkin, se encuentra la distinción entre casos claros y casos difíciles (*hard cases*); los primeros son susceptibles de ser resueltos por medio de un silogismo en el cual la premisa mayor tiene una referencia objetiva e indudable en las normas jurídicas aplicables, se conocen los hechos y se deriva la conclusión. Los casos difíciles se caracterizan porque el registro de la norma o conjunto de normas jurídicas no es suficiente para obtener la solución correcta y se debe recurrir a otras varia-

ra"; en esta disposición, la palabra "que", sintácticamente no se sabe si califica a mujeres o a la cópula lógica "y", pues, en este último caso, se refiere tanto a hombres como a mujeres que hayan cumplido la mayoría de edad, mientras que, en el primero, sólo a las mujeres.

En el caso del artículo 363 del Código de Comercio, ni siquiera surge un problema sintáctico de interpretación jurídica.

bles para lograrla, sin violentar el derecho positivo en el cual surge el caso.

Asimismo, en el pensamiento de Dworkin es importante la distinción entre políticas y principios: "Los argumentos de políticas justifican una decisión política al mostrar que la decisión promueve o protege algún fin colectivo de la comunidad en su conjunto[...]. Los argumentos de principio justifican una decisión política al mostrar que la decisión respeta o asegura algún derecho individual o de grupo".⁵ Un derecho se vulnera en un caso difícil si la decisión se basa en un argumento de políticas; por ejemplo, si se resuelve que no se tiene derecho a realizar marchas porque perturban el orden público. Los casos difíciles deben ser resueltos por principios para poder decir que los derechos se toman en serio.

De acuerdo con Dworkin, la decisión de los casos difíciles debe satisfacer dos principios: conforme al primero, se exige coherencia con el material histórico-jurídico que atañe al caso, ya sea la práctica judicial, las disposiciones legales o los preceptos constitucionales y, con base en el segundo, se requiere que la decisión esté apegada a la justicia y la equidad.

En el artículo "Retorno al derecho natural", Dworkin se declara afín a una posición de filosofía del derecho que denomina naturalismo. De acuerdo con dicha posición,

[...] los jueces deben decidir los casos difíciles interpretando la estructura política de su comunidad de la siguiente, quizá especial, manera: deben intentar encontrar la mejor justificación que puedan hallar, entre los principios de la moral política, de la estructura en su conjunto, desde las normas y acuerdos constitucionales más básicos hasta los detalles, por ejemplo del derecho privado de daños o contratos.⁶

Tal actitud exige a los jueces que continúen en la escritura del derecho y no sólo atiendan el caso particular como aislado de la

⁵ R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*; en especial el capítulo "Hard Cases", Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1978, pp. 82-83.

⁶ R. Dworkin, "Retorno al derecho natural", en *Derecho y moral. Ensayos analíticos*, Jerónimo Betegón y Juan Ramón de Páramo (dir. y coord.), Barcelona, Editorial Ariel, 1990, p. 24.

historia de un orden jurídico; implica la búsqueda de los principios en las acciones judiciales, legislativas y constitucionales que son la base para la solución correcta; por ello, no es justo que la respuesta de un juez se acepte como definitiva cuando no tiene forma de probar, frente a los que discrepan, que su posición es mejor. Éste es parte del argumento de la democracia que fundamenta algunas de las decisiones como correctas.⁷

Como un requisito general de justicia, indica que el gobierno "debe tratar a sus ciudadanos como iguales, como titulares de un derecho a igual consideración y respeto".⁸ De este principio, deriva dos responsabilidades independientes: respetar, al **crear** un orden político, los derechos políticos y morales que puedan tener los ciudadanos en nombre de la igualdad y, la segunda, la de **aplicar** igual y consistentemente a todos cualquier orden político creado.⁹

En el libro *Law's Empire*, Dworkin amplía su concepción política a lo que denomina el derecho como integridad. Respecto de tal concepción, destacaré algunas consideraciones que tienden a justificar la respuesta correcta a los casos difíciles. "El derecho como integridad requiere que los jueces asuman, hasta donde sea posible, que el derecho está estructurado por un conjunto de principios sobre justicia, equidad y debido proceso y que los hagan cumplir en los nuevos casos que se les presentan de modo que la situación de cada persona sea justa y equitativa según las mismas normas".¹⁰ "La justicia —que tiene especial influencia en la solución correcta— se preocupa por las decisiones que las instituciones políticas deben tomar y que la distribución de recursos materiales y protección de las libertades aseguren un resultado defendible moralmente".¹¹ En todo caso, se exige al Estado que actúe con una base de principios coherentes y únicos, en relación con la equidad, la justicia y el debido proceso legal: "Los jueces

⁷ *Ibid.*, p. 35.

⁸ *Ibid.*, p. 42.

⁹ *Idem.*

¹⁰ R. Dworkin, *Law's Empire*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1986, p. 243.

¹¹ p. 165.

—continúa el autor— que aceptan el ideal interpretativo de integridad deciden casos difíciles tratando de hallar, en un grupo de principios coherentes sobre los derechos y deberes de las personas, la mejor interpretación constructiva de la estructura política y la doctrina legal de su comunidad”.¹²

Para conseguir un comportamiento de los jueces como el descrito anteriormente, Dworkin afirma que se requiere un juicio interpretativo que tome en cuenta la justicia, la equidad y el debido proceso legal, y “si no lo hace, es incompetente o una política ordinaria disfrazada” y “debe fusionar estas dimensiones en una opinión general sobre qué interpretación, tomando todo en cuenta, hace que los antecedentes legales de la comunidad sean mejores desde el punto de vista de la moralidad política”.¹³

La tesis de la solución correcta que Dworkin sostiene posee dos exigencias fundamentales la primera de ellas es la de adecuación de cada una de las posibles interpretaciones al texto o a la práctica legal del pasado. La adecuación se refiere a una correspondencia entre dos términos de una relación, en este caso entre las posibles soluciones y los textos o las prácticas legales. El test de la adecuación no queda satisfecho cuando alguna de las posibles interpretaciones no concuerda con el texto legal o con la práctica jurídica.

El otro requerimiento, es descubrir, de entre las soluciones posibles, cuál de ellas es la que satisface las exigencias de la justicia en general o de la moral política de una sociedad. Mediante este requisito, se despliega toda la teoría política de Dworkin y, si se preguntara acerca de su contenido, de los principios esenciales o de su núcleo, se presentaría la consideración del derecho como integridad y la exigencia al gobierno de respetar la igualdad y dignidad de los gobernados. Se buscaría el sistema de principios, o sea una serie de argumentos que justifican las decisiones en los casos difíciles porque sostienen derechos de los individuos o grupos.

Si se estima que la contradicción de tesis planteada a la SCJN es un caso difícil en el sentido de Dworkin, el debate se plantearía

¹² *Ibid.*, p. 255.

¹³ *Ibid.*, pp. 410-411.

entre derechos e interés social y los argumentos de principio y de políticas serían los adecuados para dirimir el conflicto y determinar el sentido de la resolución. En el caso planteado, el derecho se refiere a no ser sujeto de abusos económicos al prohibirse que los intereses sobre un préstamo aumenten el capital original por falta de pago oportuno o, en otras palabras, que los intereses causen intereses. El interés social estaría representado por el propósito de no descapitalizar al conjunto de instituciones de crédito y financiamiento con el fin de que pueda seguir prestando el servicio en aras del desarrollo de la vida económica de la nación mexicana.

Si es un caso difícil, entonces deben protegerse los derechos de las personas y, por ello, estimar que la solución correcta es que la capitalización de intereses en los contratos de apertura de crédito, antes de que se venzan y no se paguen, constituye pacto de intereses sobre intereses prohibido por la legislación mercantil y por la legislación civil. En terminología no aceptada por la SCJN, constituyen anatocismo.

Tal interpretación está de acuerdo con la práctica legislativa y judicial del sistema jurídico mexicano y la moralidad pública vislumbrada a través de esas prácticas; la primera se analizará a continuación y la práctica judicial se constata con un cúmulo amplio de decisiones de tribunales colegiados de circuito que expresan buenos argumentos en el tema de la contradicción de tesis sobre anatocismo y que son mencionados en la resolución de la SCJN.

En la práctica legislativa, se encuentran buenos motivos para considerar y defender la idea de que quien solicita un préstamo o la apertura de un crédito tiene un derecho: el de no ser lesionado en la celebración de un contrato. Los demás, en este caso, los acreedores tienen la obligación de no aprovechar situaciones tales como la extrema miseria, la urgente necesidad o la notoria inexperiencia de los deudores para obtener un lucro excesivo.

Este principio está contenido en el artículo 17 del Código Civil para el Distrito Federal conforme al cual la explotación de la suma ignorancia, la notoria inexperiencia o la extrema miseria, que produce un lucro excesivo evidentemente desproporcionado a lo que una de las partes se obliga, otorga el derecho al perjudicado de

pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios.

Con idéntica orientación de principios —no de políticas— el artículo 2397 del mismo código establece: “Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses”. De dicho precepto, se deriva una prohibición expresa en la cual se advierte el derecho a no pactar la capitalización de intereses, previamente a su causación.

En el artículo 8 del mismo ordenamiento legal se prescribe: “Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario”, de donde se puede derivar el carácter irrenunciable del derecho antes relacionado en favor de uno de los contratantes.

Otra orientación convergente con la descrita se deriva de los artículos 1840, 1843 y 1847 del mismo Código Civil relacionada con el incumplimiento de los contratos: si se pacta cláusula penal, no puede hacerse efectiva conjuntamente con el pago de daños y perjuicios ni cuando el obligado a ella no haya podido cumplir con el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable.

Uno de los principios que se advierte en el contenido de las disposiciones legales aludidas es no permitir que en la distribución de la riqueza se pacte la posibilidad de que los deudores queden en situaciones desventajosas y, mucho menos, en la ruina.

En la práctica legislativa, en un nivel constitucional, se advierte, además, la orientación antes expresada, aun cuando con un alcance mayor de generalidad; así, en el artículo 28 constitucional se determina que el Estado castigará, entre otras actividades, “todo lo que constituya una **ventaja exclusiva indebida** a favor de una o varias personas determinadas y **con perjuicio** del público en general o **de alguna clase social**.” (Las negritas son mías.) Precepto constitucional que tiende a proteger a clases sociales; es decir, existe la preocupación de que no se perjudique a los integrantes de la población en el territorio nacional.

Otra orientación similar se encuentra en el artículo 26 constitucional en cuanto dispone:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y **una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.** [Las negritas son mías.]

Estas disposiciones constitucionales son parte del derecho como integridad que justifica el derecho de los particulares al contratar.

Asimismo en la legislación penal se tiende a la protección de las personas en su patrimonio a través de ciertos tipos penales; un tipo del delito de fraude es muy preciso en esta proyección, pues sanciona a quien “valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen rédito o lucros superiores a los usuales en el mercado”. En este caso, la decisión legislativa consiste en prohibir el abuso en las relaciones económicas que se desarrollan por medio de acuerdos de voluntades; es decir, se sanciona la usura, y por ello, los posibles deudores tienen el derecho a no ser lesionados.

De los principios derivados de las disposiciones constitucionales y legales antes referidas, se puede concluir la existencia del derecho de los particulares, cuando contratan, a no ser explotados económicamente.

Por otra parte, en el terreno de la práctica judicial, aparecen buenas razones en sentencias de los tribunales colegiados de circuito para sustentar la conclusión de que son ilegales las cláusulas en las cuales se otorga un crédito adicional para el pago de intereses en los contratos de apertura de crédito, pactadas antes de su vencimiento y no pago.

Una de estas razones es que la *ratio legis* del artículo 363 del Código de Comercio es prohibir la usura y proteger la justicia distributiva. Amparo 189/97 del Segundo Tribunal del Décimo Circuito. En términos expresados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en el amparo 674/98: “[...]la finalidad del precitado artículo 363, no es otra que la de impedir una conducta por parte de

los acreedores que pueda ser ruinoso para los deudores, consistente en el cobro de intereses sobre intereses vencidos y no pagados". Ambas sentencias están citadas en la resolución de la SCJN.

Otra buena razón, contenida en el primero de los amparos aludidos, se orienta al valor del conocimiento que debe tener el contratante que acepta un crédito para pagar los intereses que al momento de contratar ya están vencidos y no pagados. Al respecto se expresa:

En materia mercantil, se permite la capitalización de intereses generados y no pagados[...] previo convenio de las partes y sobre réditos causados y debidamente cuantificados, **con el pleno conocimiento de los contratantes** [...]lo cual es posible legalmente, puesto que las partes conocen plena y fehacientemente el monto del interés vencido y no pagado que conviene capitalizar, lo cual no ocurre[...] cuando al contratarse el crédito se conviene la capitalización de intereses que habrán de devengarse a futuro a tasas variables, cuando el deudor desconoce el monto de los réditos que habrá de pagar, precisamente por lo variable del interés. [Las negritas son mías.]

Este tipo de argumentos de principio fue ignorado por la SCJN y, por ello, se cerró la posibilidad de contribuir a la comprensión de la problemática planteada y a la búsqueda de razones en la práctica jurídica, legislativa y judicial. Optó, como la misma SCJN expresó, por abordar un problema de textos legales mediante la interpretación literal de la ley; se atrincheró en el texto y trató el problema como cualquiera otro sin trascendencia jurídica, social, política y económica en la sociedad mexicana.

Advierto que la SCJN no manifestó argumentos de políticas, es decir, de los que protegen un interés colectivo y se limitó a dirimir el interrogante de si se encuentra prohibido o permitido el pacto de intereses sobre intereses; si bien tampoco aludió a principios, o sea, a argumentos que protegen un derecho, implícitamente negó el derecho de los contratantes de no ser explotados económicamente. El único derecho referido fue el de la autonomía de la voluntad y, prácticamente, recurrió a él para indicar que, si se pactan intereses sobre intereses en cualquier tiempo, el derecho está bien ejercido, aun cuando quien impugne sea el propio contratante deudor.

En los términos de los principales conceptos de la teoría de Dworkin la solución de la SCJN es incorrecta. La única solución correcta es la que argumente con base en principios en los cuales se protejan los derechos de los contratantes a no ser explotados económicamente.

FUNCIÓN DE LAS TEORÍAS Y EVALUACIÓN

Las teorías sobre interpretación y razonamiento jurídico proporcionan conceptos, modelos, criterios, aclaraciones, etcétera, para el planteamiento y comprensión de problemas y la búsqueda de soluciones. Existe una gran distancia entre indicar simplemente que las normas tienen diferentes posibilidades de ser interpretadas y sostener que hay una solución correcta a los problemas de interpretación surgidos en el derecho o en la ciencia jurídica. También, en sostener que es válida la sentencia emitida por el órgano competente y que la ciencia jurídica nada puede ofrecer en relación con ella y admitir que una función de la ciencia jurídica es la de evaluación y crítica de las sentencias de las autoridades de última instancia.

El principio del Estado de Derecho no se clausura con las decisiones emitidas por las autoridades formales de última instancia, sino, precisamente, ha surgido por las arbitrariedades que ellas han cometido, sea el legislador constitucional, el legislador ordinario, las autoridades administrativas o los jueces. El principio del Estado de Derecho no se circunscribe a la observancia de la legalidad practicada como mención de las normas de competencia. Tal principio tiene racionalidades más prometedoras en relación con los derechos humanos y las teorías sobre la moralidad pública y privada y la justicia, una vez desacralizado el derecho; asimismo, tiene exigencias mayores de carácter formal como es el libre juego de argumentos y objeciones para procurar consensos racionales, por convencimiento o por compromiso, en un ambiente sin violencia en el cual se desempeñen los dialogantes o contendientes.

BIBLIOGRAFÍA

- Atienza, Manuel, *Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
- Bulygin, Eugenio, *Naturaleza jurídica de la letra de cambio*, Argentina, Abeledo-Perrot, 1961.
- Dworkin, Ronald, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1978.
- , "Retorno al derecho 'natural'", en *Derecho y moral. Ensayos analíticos*, Jerónimo Betegón y Juan Ramón de Páramo [coords. y dir.], Barcelona, Editorial Ariel, 1990.
- , *Law's Empire*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1986.
- Larios, Rogelio, *Estado de derecho y jurisprudencia*, Textos de Investigación núm. 2, México, Universidad de Hermosillo, 1998.
- Ross, Alf, *Sobre el derecho y la justicia*, Genaro Carrió [trad.], 5a. ed., Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1994.
- , "Tu-tu", Genaro Carrió [trad.], Argentina, Abeledo-Perrot, 1976.
- Wittgenstein, Ludwig, *Investigaciones filosóficas*, Alfonso García Suárez y Ulises Moulines [trads.], Barcelona, Instituto de Investigaciones Filosóficas-UNAM/Editorial Crítica, Grijalbo, 1986.



⇒ *"La verdad. Símbolos"*, 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Capítulo V

Capitalización de intereses sobre intereses y sistema bancario

*María Guadalupe Huerta Moreno**

SUMARIO

I. Introducción. II. De los procesos de regionalización a los mercados financieros globales. III. Las distorsiones en el sistema financiero desregulado y liberalizado. IV. El funcionamiento de la banca después de 1994. V. Conclusiones. VI. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

EL SISTEMA FINANCIERO reviste una función primordial en el desarrollo de cualquier economía, ya que provee recursos que constituyen la base sobre la cual se va a establecer una parte importante de los flujos financieros con los cuales se realizan los procesos de inversión, los planes de consumo, la creación de infraestructura, las actividades comerciales con el exterior, entre otros. Además, a través del sistema financiero, específicamente la banca, se opera el sistema de pagos que permite los intercambios entre los diferentes agentes, y se instrumenta, en buena medida, la política monetaria. En ese sentido, el sistema financiero es una pieza fundamental del funcionamiento de las economías modernas.

Ahora bien, durante los últimos cinco lustros, el sistema financiero mexicano ha pasado por una serie de reformas con las cuales

* Profesora-investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A.

se buscó hacer más “eficientes” las instituciones financieras y los procesos de intermediación. Es decir, tendría que darse una mayor profundización financiera, la ampliación de servicios financieros diferenciados y una rápida expansión del crédito. Sin embargo, para que esta última sea funcional al desarrollo, se deben cumplir tres condiciones:

- a) Que los créditos se otorguen sobre la base de costo adecuados, lo que pasa, necesariamente, por la reducción del margen financiero, es decir, la disminución de la diferencia entre las tasas de interés activas y pasivas.
- b) Que en los contratos de crédito se establezcan condiciones que faciliten a los deudores la amortización de los montos del principal y los intereses.
- c) Que las operaciones financieras estén sujetas a una estricta supervisión bancaria con el objetivo de que se garantice la menor exposición al riesgo de crédito que se origina cuando aumentan los préstamos.

Tener en cuenta estos aspectos es esencial para asegurar el óptimo funcionamiento de la economía porque cuando la disparidad entre las tasas activas y pasivas es baja, la “capitalización de intereses sobre intereses” no representa mayor problema ni para los bancos ni para los usuarios de los servicios financieros y del crédito. Se pagan las obligaciones que los diferentes agentes económicos tienen con los bancos y se mantiene el flujo circular de recursos que bajo la figura de un fondo revolvente permite el incremento del financiamiento y fondeo que mueve a la economía. Por el contrario, cuando existe una amplia discrepancia entre tasas de interés, sucederá lo inverso, la economía de las familias y las empresas se verá seriamente deteriorada y, como se reduce la capacidad de pago, ya pueden validar la estructura de deudas adquiridas en periodos previos. Ello favorece el desarrollo de una crisis económico-financiera que terminará afectando la operación del propio sistema financiero.

En los términos antes descritos, nos parece importante que el análisis del problema de “capitalización de intereses sobre intere-

ses” no sólo se ubique en términos jurídicos, sino en el contexto de las transformaciones financieras que el sistema financiero mexicano ha experimentado en algo más de dos lustros. Sin embargo, hacer tal reflexión requiere, en un primer apartado, revisar de manera general las primeras reformas financieras en América latina y sus resultados más acabados. Una vez cubierta esta parte, en un segundo apartado, se puede analizar la reforma en el sistema financiero mexicano, sus avances y principales limitaciones como una etapa más hacia la creación de mercados financieros globales. Con esto, tenemos el marco preciso para, en un tercer apartado, entender la “capitalización de intereses sobre intereses” en relación con los cambios que en las formas de operar de los intermediarios financieros trajo la reforma financiera. Posteriormente, en un cuarto apartado, se revisan algunas de los problemas que enfrenta el sistema financiero y que han conducido a un proceso de racionamiento del crédito. En la parte final, se presentan algunas reflexiones a manera de conclusión.

Aquí, es necesario admitir que tal situación se vincula de modo parcial con el fenómeno de la “capitalización de intereses sobre intereses” debido a la operación poco rigurosa, en materia de evaluación crediticia, de las instituciones bancarias, y a la instrumentación de una política económica que, en su afán de lograr el equilibrio de los agregados macroeconómicos, ha sido central en el retraso de la recuperación de las instituciones de crédito y del financiamiento.

DE LOS PROCESOS DE REGIONALIZACIÓN A LOS MERCADOS FINANCIEROS GLOBALES

La apertura de las economías y la liberalización de los sistemas financieros

En la década de 1980, los fenómenos económicos más importantes estuvieron ligados a las tendencias de regionalización y globalización. Entendidas éstas como procesos a través de los cuales los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional,

el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio —bajo la influencia de los países de mayor desarrollo, las grandes compañías transnacionales y el capital financiero internacional— van establecer formas de internacionalización, en las que la integración económica y financiera está precedida por la aplicación de estrategias de desregulación y apertura con las que se pretende acelerar el libre movimiento de mercancías y capitales. En otras palabras, ello quiere decir remover las fronteras que impiden el libre comercio y eliminar los controles que limitan los diferentes tipos de actividades realizadas en los sistemas bancarios y en los mercados de capitales, pero conservando siempre la posición hegemónica de los países desarrollados (Chomsky y Dieterich, 1995; Mantey, 2000).

Esto tiene que ver con el hecho de que los grandes capitales que están transitando en los circuitos comerciales y financieros internacionales son propiedad de los grandes conglomerados industriales y de los inversionistas institucionales —compañías de seguros, sociedades de inversión, fondos de pensiones, etcétera— de los países más ricos: los Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia y Alemania, por mencionar algunos. Los mismos que no sólo han determinado históricamente el contenido de las relaciones del intercambio internacional de mercancías, y que ahora señalan el sentido de los movimientos de capital alrededor del mundo, sino, también, los que han pugnado por la aplicación de políticas económicas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, para crear mercados globales. La lógica que se sigue es que, a partir de la integración de los diferentes tipos de empresas en los grandes conglomerados industriales-financieros, se produzca una valorización diferenciada del capital que asegure ganancias extraordinarias.

Este tipo de fenómenos donde el capital financiero se superpone al capital productivo, se reforzó en la medida en que la ruptura de las relaciones monetarias y financieras que se habían creado en Bretton Woods (1948-1973) dio como resultado una evidente inestabilidad en los tipos de cambio y las tasas de interés internacionales que dejó en condiciones de vulnerabilidad a las economías de los países de menor desarrollo. En sus mercados internos, las

expresiones de la crisis del sistema financiero internacional fueron altos índices inflacionarios, menores ritmos de inversión pública y privada, crecientes déficits en las cuentas con el exterior y un gran endeudamiento público externo. En esas condiciones, su incorporación a las tendencias de la globalización se dio con el objetivo principal de atraer recursos frescos del exterior.

Entonces, podemos decir que es en función de su debilidad económica y del convencimiento de los encargados de los asuntos públicos, en su mayoría economistas formados en las universidades estadounidenses, de que el mercado es el mecanismo de asignación óptimo de recursos, que se acepta la aplicación de medidas económicas orientadas a promover cambios estructurales radicales entre los cuales estaban la redefinición del papel del Estado en la economía y la articulación de una estrategia de desarrollo vinculada a los mercados de exportación. Con la mira puesta en esos objetivos, se instrumentaron, entre otras, las siguientes medidas:

- a) Se dismantelaron los esquemas de protección comercial con el propósito de incrementar la competitividad de las empresas nacionales y alinear los precios domésticos a los internacionales.
- b) Se impusieron tipos de cambio flotantes con los cuales prevenir la apreciación de las divisas domésticas.
- c) Se establecieron políticas monetarias altamente restrictivas¹ centradas en el combate a la inflación.
- d) Se realizaron reformas fiscales que, mediante la venta de los activos públicos y la transformación de las formas tradicionales de financiamiento gubernamental, buscan reducir el déficit público y los niveles de endeudamiento externo.
- e) Se desregularon y se abrieron los mercados financieros para favorecer la movilidad de los flujos de capitales entre países.

¹ Esto se hace con el objetivo de reducir los niveles de inflación y, de esa forma, sostener los tipos de cambio nominales para garantizar la valorización de los activos financieros.

Una de las principales justificaciones esgrimidas respecto de los posibles beneficios de las medidas antes mencionadas era que con su aplicación se crearía un nuevo esquema institucional que serviría como puente en la introducción de los fundamentos económicos requeridos para fortalecer el capitalismo del libre mercado. La apuesta era conseguir la estabilidad macroeconómica, condición esencial para atraer mayores volúmenes de ahorro externo, incrementar la acumulación de beneficios desarrollados y acelerar el desarrollo del sector privado (Holden y Rajapatirana, 1995). No obstante, este cuadro sólo estaría completo en la medida en que se diera el libre movimiento de capitales financieros.

Por ello, en el caso particular de las actividades financieras, la esencia de las propuestas de desregulación financiera, más allá de los objetivos microeconómicos del logro de la eficiencia en la intermediación, está en la necesidad de reproducción de capital financiero internacional en un marco ampliado, pues, en la medida en que desaparecen las regulaciones que impiden la libre movilidad de recursos entre una plaza financiera y otra, se pueden realizar las expectativas de ganancia que resultan de las variaciones en las tasas de interés y/o los tipos de cambio,² lo cual es particularmente importante cuando se están moviendo cifras de alrededor de 24.4 billones de dólares en los mercados financieros internacionales (Correa, 2000).

Las reformas financieras en América Latina

En América Latina, los primeros experimentos de reforma financiera se dieron en Chile y Uruguay en 1974, en Argentina en 1977, en Ecuador en 1984 y en Bolivia en 1985. Estas reformas se dieron bajo el cobijo de gobiernos, que, comandados por neoliberales a ultranza, pensaban que la carencia de inversiones podía solucionarse dejando al sistema financiero en manos del mercado. Cabe señalar que cada país imprimió un matiz y un ritmo particular a la apertura financiera; algunos la desarrollaron de manera acele-

² En lo que se conoce como operaciones de arbitraje internacional.

rada mientras mantenían cierto nivel de protección comercial; otros, dismantelaron primero sus barreras al comercio y, después, abrieron sus cuentas de capitales (Ramos, 1989).

Los resultados de esos primeros experimentos neoliberales fueron pobres en el sentido de que, una vez que se dismantelaron los esquemas de control y de regulación financiera —controles sobre el movimiento de capitales y tasas de interés, encajes legales, cajones de crédito y seguros de depósito— y se suprimieron algunas instituciones de banca de desarrollo, se produjo un rápido incremento en las tasas reales de interés domésticas. Esto afectó severamente los niveles de apalancamiento de los agentes económicos ya que con tasas de interés “promedio en términos reales de 41% anual en Chile, 17% en Argentina y 15% en Uruguay” (Ramos, 1989:166) aumentó el monto de los pagos que debían hacerse para cubrir tanto el principal como los intereses. Lo contradictorio de esta situación es que las altas tasas ni estimularon el ahorro ni mejoraron la rentabilidad de las inversiones y, en cambio, sí se encareció el crédito. Esto llevó a una cadena de crisis de pagos que contribuyó no sólo al descenso del ahorro y la inversión,³ sino al aumento de la desintermediación y a la quiebra de diversas instituciones financieras (Díaz-Alejandro, 1985). Para países como Chile, Bolivia y Uruguay, el panorama no podía ser peor, pues cuando “la participación del crédito denominada en dólares fue de cerca de 75% del crédito total” (Holden y Rajapatirana, 1995: 61), el creciente riesgo cambiario había hecho que sus economías se dolarizaran.

Tal estado de cosas ejemplificaba que, en las condiciones de la estructura económica y de los mercados existentes en la región, la operación de los sistemas financieros latinoamericanos no podía ser sujeta de una desregulación financiera acelerada, porque los grandes grupos económicos a los cuales están ligadas las instituciones financieras tienden a concentrar sus inversiones y sus recursos en actividades especulativas que comprometen el buen funcionamiento del sistema financiero y son un impedimento para la acumulación interna.

³ Lo que confirma el postulado keynesiano de que la inversión es el antecedente del ahorro y, mientras ésta no se realiza, no hay ahorro adicional en la economía.

La solución que se propuso para remediar los problemas derivados del colapso financiero fue reintroducir, bajo la forma de nuevas intervenciones gubernamentales, controles al funcionamiento en el sistema financiero⁴ y esquemas de supervisión más estrictos con los cuales monitorear de forma más precisa la calidad de los activos de las instituciones financieras y de sus inversiones de riesgo. Además, en algunos casos, se optó por imponer controles al movimiento de capitales de corto plazo, como lo hizo Chile en los primeros años de la década de 1980.

A pesar de que en la década de 1980 los primeros experimentos neoliberales de desregulación y liberalización financiera habían dejado amargas lecciones —que mostraban la necesidad de reorganizar la regulación prudencial, establecer mínimos de capital de reserva y una estricta vigilancia sobre el manejo de las actividades financieras en un marco de transparencia de la información— y de que los países desarrollados estaban lejos de aplicar en sus economías los modelos de *laissez-faire* que tanto recomendaban, frente a la expectativa de poder contar con recursos de largo plazo para financiar los cambios económicos e institucionales que harían del sector privado el eje del crecimiento económico, el resto de América Latina no tardó en incorporarse a la “ola” de las reformas financieras. México lo hizo en 1988, Perú y Colombia en 1990 y Brasil en 1991.

De esta forma, los países latinoamericanos que no habían entrado en la primera etapa de las reformas financieras de la década de 1970, también trataban de hacer frente a su carencia de recursos para inversión y a las deficiencias de sus mercados de capital muy pequeños, segmentados o inexistentes, sin poner la suficiente atención al hecho de que la interacción entre el sector financiero y real de la economía en nuestros países es diferente a la de los países desarrollados, y de que muchos de los problemas de financiamiento y fondeo en los países de la región están ligados, por una parte, a la concentración del ingreso entre unas cuantas empresas y grupos de poder económico y, por otra, a las característi-

⁴ Como en el caso de Perú, cuando, en 1987, las autoridades tuvieron que nacionalizar los bancos y establecer controles a las tasas de interés.

cas oligopólicas en el mercado financiero y a la estructura temporal de los depósitos donde a una captación de corto plazo corresponde una estructura de préstamos preferentemente de corto plazo, lo que limita la disponibilidad de recursos para financiar proyectos de inversión de largo plazo, pero que, además, muestra que la demanda de crédito se hace sobre la base de las expectativas de mayores ingresos en lo inmediato (Quijano, 1981; Tavares, 1973). Cuando tales expectativas no se cumplen, se reducen los ingresos disponibles, hay problemas para el pago de las deudas y cae la demanda de crédito.

*La reforma financiera en México.
El proceso de desregulación y liberalización financiera*

En el caso mexicano, este proceso se da entre 1988-1991 cuando se inicia lo que sería una de las más profundas reformas financieras. Ésta se daría en la línea de los postulados de lo que se conoce como la teoría de la represión financiera (McKinnon 1973; Shaw, 1973). En tal propuesta, que tiene un claro mensaje antiestatista, la introducción de los mecanismos de mercado en el sistema financiero hace más eficientes los procesos de intermediación.⁵ Su argumento central es que los controles a las tasas de interés, la existencia de los cajones de crédito y de los esquemas de encaje legal impiden el buen funcionamiento del sistema financiero, produciendo distorsiones en la asignación de los recursos financieros, bajas tasas de ahorro y malas inversiones.

A partir de un diagnóstico de esa naturaleza, lo que debería hacerse es mejorar la eficiencia de la intermediación financiera, des-

⁵ Una cuestión importante es que las políticas de desregulación financiera han estado apoyadas en todo momento por los organismos financieros multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues, como señalan Chomsky y Dieterich: "dichos organismos juegan un papel importante en la regulación de la economía capitalista mundial" (1995: 68). Y en ésta, la desregulación financiera es el medio actual idóneo que permite a las multinacionales y a los grandes inversionistas institucionales la obtención de grandes ganancias por sus inversiones especulativas en los mercados financieros alrededor del mundo.

regular las operaciones financieras y crear un ambiente más flexible que favoreciera el incremento del ahorro, interno y externo, y elevara la calidad de las inversiones. La apuesta central era modificar la estructura del mercado financiero, pasando de un sistema de regulación complejo a uno más flexible donde la competencia, la integración en grupos de los distintos intermediarios, y la mayor libertad operativa permitieran reducir la segmentación existente en el sistema financiero. De esta forma, se podría mejorar la calidad de los servicios y hacer más eficiente el funcionamiento de los intermediarios financieros en términos de la canalización de recursos hacia los proyectos de mayor productividad de capital (véase el cuadro 1).

En esa perspectiva, en 1988 comenzó la reforma financiera en México. Lo primero que se hizo fue eliminar los controles a las tasas de interés.⁶ A esta medida, siguió la supresión del encaje⁷ y la desaparición de los cajones de crédito. Así, pasaba a segundo término el hecho de que el encaje legal se había utilizado como un mecanismo para garantizar la solvencia de los intermediarios y que los cajones de crédito y los toques a las tasas de interés se habían manejado como instrumentos de fomento para el desarrollo de actividades que no eran bien atendidas por la banca comercial y que, por su importancia en mercados regionales y en el empleo, debían apoyarse.

Para avanzar en la desregulación de operaciones y en la liberalización y apertura del mercado, se hicieron adecuaciones y reformas adicionales al marco normativo del sistema financiero.⁸ De ese modo, mediante la venta al capital privado de los bancos que

⁶ La liberalización de las tasas de interés se produjo entre 1988 y 1989. Se comenzó con las de las aceptaciones bancarias, y después se incluyeron las de los demás instrumentos de captación. Así, los bancos pudieron determinar las tasas de interés pasivas. Posteriormente, en el año siguiente, se liberaron las tasas de interés de las operaciones activas de la banca.

⁷ El encaje legal fue sustituido por un coeficiente de liquidez, mismo que fue eliminado en 1991.

⁸ Éstas comenzaron con las reformas de 1990 a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley del Mercado de Valores. En este mismo paquete, quedó incluida la creación de la Ley para Regular a las Agrupaciones Financieras.

CUADRO 1
Operación del sistema financiero

<i>Antes de la desregulación</i>	<i>Sistemas complejos de regulación</i>	<i>Comportamiento</i>	<i>Funcionamiento</i>
		<i>Estructura rígida</i>	<i>Funcionamiento</i>
Control sobre tasas de interés	Encaje legal	Bancos múltiples	Altos márgenes financieros
Cajones de crédito		Riesgos mínimos	Altos costos
		Alta concentración del mercado	Concentración de operaciones en el corto plazo
Control sobre operaciones de riesgo de la banca			
	<i>Liberalización</i>	<i>Estructura flexible</i>	<i>Funcionamiento (como objetivo)</i>
Después de la desregulación	Determinación de las tasas de interés por el mercado	Banca universal	Menores costos
	Supresión de encajes legales	Grupos financieros	Mayores volúmenes de crédito
	Eliminación de cajones de crédito	Desarrollo de nuevos productos	Inversiones de alta rentabilidad
	Eliminación de restricciones sobre las actividades de los bancos	Pertilas de riesgo más altos en las operaciones financieras	
	Apertura del mercado financiero	Mayor competencia entre intermediarios	
		Diversificación de actividades de inversión	

FUENTE: elaboración propia.

se habían nacionalizado en 1982, se restableció el régimen mixto de la banca bajo la forma de la banca universal y, además, se formalizó la existencia de los grupos financieros. Esto se complementó con la creación de intermediarios y figuras financieras innovadas para el ahorro y la inversión. Entre éstos, podemos mencionar las sociedades financieras de objeto limitado y el manejo de productos derivados. Conforme se aceleraba la reforma financiera, las funciones tradicionales de crédito se iban mezclando con aquellas que antes sólo podían desarrollarse en los mercados de valores o que estaban reservadas a las compañías de inversión.

Como en la lógica de la globalización no puede haber sectores protegidos, la apertura del mercado financiero representó otro de los pilares de la reforma financiera y un cambio histórico en la evolución del mismo ya que las modificaciones institucionales y patrimoniales que la apertura traería romperían con la prohibición que se había establecido en 1929 para que el capital extranjero pudiera participar como intermediario financiero nacional. La propuesta de apertura se hizo efectiva a partir de 1991 cuando se inició la reprivatización bancaria y se autorizó la participación de la inversión extranjera en el capital social de bancos y casas de bolsa.

Más adelante, en 1994, y siguiendo las tendencias de integración regional, se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) que incluyó en su capítulo XIV una apartado en materia de servicios financieros.⁹ En este documento, se proponía una apertura gradual que en el año 2000 podría ser revisada dependiendo de las condiciones en que se encontraran los intermediarios locales. No obstante, la situación que éstos han enfrentado desde hace algunos años ha ocasionado que los límites que se establecieron originalmente en el TLC para limitar la inversión extranjera en el sistema financiero hayan quedado rebasados.¹⁰

⁹ Para mayor detalle, consúltese el Capítulo XIV del Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte.

¹⁰ En estos momentos, la participación minoritaria ya es cosa del pasado, porque la banca extranjera ha ido incrementando rápidamente su participación en el sistema financiero doméstico. Esto como resultado de la absorción de bancos na-

Se consideraba que la concurrencia de diversos capitales que traería la apertura se reflejaría en la prestación de mejores servicios financieros. En tanto que, con la desregulación operativa, las instituciones financieras estarían en posibilidad de diversificar sus portafolios, reducir los costos de su operación y aumentar el financiamiento. En última instancia, “todas estas reformas buscaban propiciar una estructura financiera más sólida, moderna y competitiva, acorde con los nuevos tiempos de la globalización que se vivían” (Solís, 1998: 139), aunque se dejara de lado que, en las condiciones de concentración del sistema financiero mexicano, la regulación había estado orientada, como afirma Calva, a:

[...]cuidar la solvencia de los bancos, a proteger el ahorro financiero de los mexicanos y a procurar el financiamiento de las actividades económicas consideradas como prioritarias [2000: 228].

La estrategia de política económica y la reforma financiera

Por otra parte, la política económica que acompañó la reforma financiera se dirigió a establecer los fundamentos para reducir, en la lógica del modelo neoliberal, la vulnerabilidad de la economía. Ello entrañaba alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas, para lo cual había que reducir el gasto público y continuar con la venta de activos gubernamentales —Teléfonos de México, los bancos, las empresas acereras, los ingenios azucareros, las compañías de aviación, entre otros—. El esfuerzo fiscal se complementaba con una política monetaria muy restrictiva que, sumada a una férrea restricción salarial, permitió reducir la demanda agregada y, por tanto, la inflación.

cionales pequeños por parte del capital extranjero y de las fusiones entre bancos nacionales y bancos del exterior. Los casos más importantes a considerar son el de Bancomer con el Banco Bilbao Vizcaya, el de Serfin con Banco Santander y la propuesta del Citigroup para adquirir el control de Banamex. En caso de que efectivamente se dé esta última operación, el capital extranjero controlaría por lo menos 80 por ciento de los activos totales del sistema bancario mexicano.

Con la inflación a la baja y nuevas oportunidades de inversión, que se originaron de la continuación del programa de privatizaciones, se atrajo el interés de los inversionistas nacionales y extranjeros. Y, en la medida en que el control de las principales variables macroeconómicas garantizaba la valorización de las inversiones especulativas, México pudo ubicarse durante el auge de los llamados "mercados emergentes" entre los destinos predilectos de los "capitales golondrinos". Así, aunque entre 1992 y 1993 la inversión extranjera directa alcanzó 4 392.8 y 4 388.8 millones de dólares, ingresaron al país por concepto de inversión de cartera 18 041.1 y 28 919.3 millones de dólares, respectivamente.

Un beneficio adicional que se tenía por la entrada de capitales era el fortalecimiento del tipo de cambio. El cual "pasó de los 2.54 pesos por dólar en 1989 a 3.05 pesos por dólar en 1993" (Huerta, 2000: 12). En ese contexto, el panorama económico parecía inmejorable: el PIB había tenido una variación promedio anual entre 1991 y 1993 de 2.7%, mientras¹¹ que los réditos y la inflación se habían reducido de manera considerable (véase el cuadro 2).

Dichos datos revelaban que el comportamiento de la economía en los primeros años de la década de 1990 parecía estar alejado de las premisas de desequilibrios en las finanzas gubernamentales y en el sector externo que había precedido a las crisis recurrentes desde la devaluación de 1976.

Reforma financiera, crédito y riesgo

La solidez económica se apuntalaba con un sistema financiero que parecía estable y capaz de enfrentar cualquier choque externo que pudiera derivarse de las turbulencias que acompañan a los movimientos de capitales internacionales. De ahí que los banqueros tuvieran la disposición de aumentar, aun a costa de un mayor riesgo, la derrama crediticia. Por otra parte, las expectativas de crecimiento que se generaron en el periodo de estabilidad econó-

¹¹ A precios de 1980.

CUADRO 2
Evolución de la economía

Concepto	1991	1992	1993
PIB	3.7	1.3	3.1
Tipo de cambio	3.071.0	3.115.41	3.1059
Tasa de interés (Cetes a 28 días)	16.65	16.88	11.78
Inflación (Índice Nacional de Precios al Consumidor)	18.79	11.94	8.01

FUENTE: Elaboración propia con datos de los informes anuales del Banco de México y el Sistema de Cuentas Nacionales del INEGI.

mica llevaron a las familias y a las empresas a incrementar su consumo y a realizar sus planes de inversión.

El aumento en el financiamiento parecía no ser un problema, pues el crecimiento económico y la introducción de mecanismos de mercado en la asignación de fondos prestables garantizaban, por sí mismos, como supone la teoría económica convencional, la viabilidad de los créditos y las inversiones. La incertidumbre en cuanto a la generación de flujos necesarios para validar las deudas era mínima además de que las buenas relaciones entre los intermediarios financieros y sus clientes y la libertad operativa y de gestión de que gozaban después de la desregulación y liberalización les permitía tener a su alcance la información requerida para hacer una evaluación eficiente de los distintos tipos de riesgo en que podían incurrir en las operaciones de préstamos, a saber:

- El riesgo de crédito. Riesgo referido a la probabilidad de que los prestatarios no puedan amortizar sus deudas. En función de que la mayor parte de activos de los bancos están compuestos por créditos, éste representa el mayor riesgo que tienen que enfrentar.
- El riesgo de liquidez. Riesgo referido a la incapacidad de la banca para hacer frente al retiro de depósitos o a la demanda de préstamos.

- El riesgo de tasa de interés. Riesgo que se desprende de la exposición a movimientos adversos en las tasas de interés.

La gran confianza que los intermediarios tenían en sí mismos y que, con seguridad, se desprendía de la eficiencia y profesionalismo de los que manejaban las instituciones financieras una vez que el Estado flexibilizó la supervisión y el control sobre sus operaciones, no dejó lugar a la reflexión acerca de cómo el sesgo hacia la realización de operaciones especulativas y el incremento en el financiamiento efectivamente podían significar ganancias extraordinarias, pero, también, mayores riesgos (Sinkey, 1992); sobre todo, considerando que, en un mundo globalizado, la transacciones económicas y financieras que se producen en respuesta al arbitraje financiero internacional se manifiestan en cambios abruptos en los destinos de las inversiones internacionales. Y una vez que se producen salidas masivas de capital de una determinada plaza, el sistema financiero se vuelve frágil, pues la calidad de sus activos disminuye en forma acelerada.

En esas condiciones, cuando el sistema financiero no es funcional al crecimiento, es decir, cuando no aporta los recursos para financiar las inversiones, es imposible instrumentar políticas de crecimiento de largo plazo que aseguren la estabilidad económica, el crecimiento de los ingresos reales y la capacidad de pago de todos los agentes económicos (Huerta, 2000).

Esto es particularmente relevante puesto que la economía capitalista es inherentemente inestable —en el transcurso del ciclo económico, se pasa de una estructura de financiamiento tipo *hedge*, o cubierta, en la que las deudas son validadas y se pagan el principal y los intereses; posteriormente, conforme se avanza del auge a la crisis, se produce un financiamiento *especulativo*, en el que sólo es posible refinanciar los intereses; y por último, en la depresión, la estructura financiera se vuelve de tipo *ponzi*, donde ya no es posible cubrir ni las deudas ni los intereses— y, cuando se presenta la incapacidad de pago, se produce una deflación de activos en la medida en que se venden los bienes para hacer frente a las obligaciones financieras (Minsky, 1982; 1986). En consecuencia, se rompen los flujos de financiamiento en la economía y la crisis financiera deviene en crisis económica.

A pesar de lo anterior, la dinámica económica que se produjo como resultado del dinamismo en los mercados internacionales de capital, de las oportunidades de inversión domésticas, derivadas de la reestructuración del sector público y del ajuste económico interno, creó una visión optimista¹² respecto del comportamiento futuro de la economía. Si el futuro era promisorio, no había razón para racionar el crédito. Los banqueros percibieron que podían incrementar sus operaciones y sus ganancias si acrecentaban el financiamiento al sector privado. Los empresarios demandaron más deuda ya que consideraban que la expansión económica iba para largo y que ello les permitiría tener ingresos suficientes para pagar las obligaciones financieras que adquirieran. Las familias se vieron en condiciones propicias para mejorar su consumo personal y adquirir bienes de consumo duradero.

En ese panorama, promisorio para todos, los intermediarios empezaron a aumentar el financiamiento a la economía. Es entonces que

mientras el ahorro financiero¹³ registró un crecimiento real anual de 14.5 en promedio y el agregado monetario M2 alcanzaba un incremento real del saldo de 26.8 en promedio entre 1989 y 1993, el financiamiento de la banca comercial al sector privado como porcentaje del PIB pasó de 14% en 1988 a 40% en 1994. Otro tanto sucedió con el crédito otorgado por la banca de desarrollo, que pasó de 15.6% en 1991 a 16.4% en 1992 y a 19.4 % en 1993, respecto del PIB" (Huerta, 2000:13).

La expansión del crédito se había consumado a costa de una mayor exposición al riesgo por parte de las instituciones financie-

¹² Visión que debería no haber sido tan optimista considerando que el déficit en la balanza comercial pasó de -882 millones de dólares en 1990 a -13 481 millones de dólares en 1993.

¹³ Definido como el agregado monetario más amplio M4 menos billetes y monedas en poder del público, que además indica el tamaño relativo del sistema financiero, ya que especifica el volumen de servicios prestados por el sistema financiero. Los otros indicadores de la profundización financiera son los agregados monetarios M2 y M3.

ras. Ya nadie se acordaba, ni se osaba mencionar, las amargas experiencias que habían seguido a la desregulación de las décadas de 1970 y 1980 en varios países de América Latina y que habían demostrado que, al auge crediticio, necesariamente, seguiría la crisis financiera, la insolvencia de los intermediarios financieros y el quebranto de los agentes económicos; de tal manera que, como atinadamente señala Calva:

“[...] las evidencias empíricas y los análisis científicos que aconsejaban una sensata y pragmática reformulación de las estrategias de modernización financiera, simplemente fueron ignorados y la experiencia neoliberal se realizó en México como si [...*antes...*] nada hubiera pasado” [2000: 237; las cursivas son nuestras].

LAS DISTORSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO DESREGULADO Y LIBERALIZADO

En camino de la crisis financiera

De lo expuesto hasta aquí, se desprende que la reforma y la desregulación del sistema financiero produjeron un sinnúmero de transformaciones en materia financiera, pero sobresalen por su importancia: el cambio en la estructura del mercado financiero que se produjo con la nueva composición patrimonial, derivada de la asociación entre capitales nacionales y extranjeros; la privatización de los procesos de financiamiento y fondeo, que se dio cuando esos mismos capitales toman el control de la intermediación a partir de que se establece la banca universal¹⁴ y se articulan los grupos financieros y las empresas no financieras más poderosas del país; y la pérdida de participación del sector público en las actividades financieras (en lo sucesivo, su participación en el sistema financiero quedó reducida a la banca de desarrollo, cuyas

¹⁴ Esta nueva forma de concebir la operación bancaria rebasa las operaciones tradicionales de ahorro y crédito para abarcar las relacionadas con el manejo y la operación de valores.

operaciones se vinculan a las políticas gubernamentales de financiamiento del desarrollo).

La política de ajuste económico había sido exitosa para garantizar la valorización de las inversiones financieras, en tanto que el buen comportamiento de las variables macroeconómicas —control de la inflación, un tipo de cambio estable, bajas tasas de interés nominales y un menor déficit público— y las oportunidades de inversión internas favorecieron la entrada de capitales y la expansión del crédito (éste es un factor fundamental para la inversión y el consumo, que son los que estimulan la demanda efectiva).

No obstante, la complicación viene de las condiciones en las cuales dicho incremento se produce, es decir, en términos, primero, de una economía que para mantener su estabilidad dependía, con todo y sus efectos perniciosos, de los capitales del exterior¹⁵ y, segundo, que se da en el marco de una estructura bancaria oligopólica articulada a los nuevos grupos de poder financiero que se fortalecieron en el salinato y que, en general, carecían de cultura bancaria (Basave, 1996) la cual sólo se adquiere con la experiencia y representa el conocimiento de las actividades de banca y crédito y de los riesgos que están incorporados en toda actividad de intermediación financiera, pues, si los créditos son la parte más importante de los activos bancarios, también son la fuente principal de riesgos, lo que vuelve necesario que, para mantener dentro de parámetros aceptables la exposición de la banca a la posibilidad de que sus clientes no puedan cumplir con lo pactado en los contratos de financiamiento, se realice una gestión eficaz del riesgo crediticio.

¹⁵ Ya que cuando ingresan divisas al país el gobierno tiene que esterilizarlas. La mecánica del proceso es la siguiente: parte de las mismas es comprada por el banco central, pero para evitar los efectos inflacionarios del incremento en el circulante que conlleva esa operación, el banco central retira ese circulante mediante la colocación de deuda pública en lo que se conoce como operaciones de mercado abierto. Para hacer atractiva esa colocación, el gobierno debe ofrecer tasas de interés competitivas con las existentes en los mercados internacionales, lo que se traduce en altas tasas de interés reales. De este modo los requerimientos financieros del gobierno se van a incrementar, al mismo tiempo que se estimula el incremento de los réditos.

La expansión del crédito y los contratos de financiamiento

La expansión del crédito que se dio después de haberse iniciado la reforma financiera de 1988-1991 llevó, en un primer momento, al sobreendeudamiento de las empresas y las familias. Posteriormente, cuando estalló la crisis de finales de 1994 y se manifestaron sus efectos en el cierre de empresas y la pérdida de empleos, la "capitalización de intereses sobre intereses" abultó las deudas a tal grado que la gente se vio imposibilitada para cubrir sus deudas. La dinámica de esta situación se comprende mejor si partimos de un ejemplo práctico.

En este caso, vamos a suponer que un trabajador, que en el periodo de auge vislumbraba mejores condiciones en su economía familiar, decidió solicitar un crédito por 176 mil pesos en abril de 1994, para lo cual estableció un contrato de crédito con garantía hipotecaria con una institución financiera. La base de negociación del crédito se efectuó a partir de una tasa de interés variable inicial de 24% y, además, se incluyó un crédito adicional para refinanciar los intereses que no se alcanzaran a cubrir con los pagos mensuales que se hicieran al banco.

Antes de proceder a realizar la operación crediticia, la institución financiera efectuó una *concienzuda* evaluación para conocer en forma exacta los ingresos del solicitante, su gasto promedio y, lo más importante, su capacidad para cubrir sus obligaciones financieras. A este análisis, se añadirían los estudios de prospectiva elaborados por los departamentos especializados en estudios económicos de la institución financiera. La información de ambos estudios reveló la capacidad de pago del demandante del crédito y la posible tendencia que seguiría la economía. Con tales datos, se procedió a conceder el préstamo.

No obstante, con el objetivo de proteger al máximo sus recursos, el intermediario diseñó e incorporó en el contrato de apertura de crédito una fórmula matemática en la que se supondrían el comportamiento futuro de las variables económicas que pudieran estar fuera del control de las partes involucradas en la operación financiera y de las cuales, en última instancia, dependía:

- El plazo para el pago del crédito
- El monto de los intereses
- La amortización del capital

El esquema de financiamiento estaba diseñado para que el importe del crédito fuera cubierto en su totalidad en un plazo no mayor de 30 años, lapso que podría ser menor en caso de que se mantuviera la tenencia a la baja, que hasta ese momento se observaba, de las tasas de interés nominales.¹⁶ Este mismo esquema tenía incorporada una propuesta de forma de pago dividida en dos etapas. Mientras en la primera etapa el acreditado compensaría, a través de pagos mensuales, a la banca por las bajas tasas de interés cobradas durante los primeros años de vida del crédito, en la segunda, el acreditado haría pagos mensuales que representarían el pago de intereses respectivos y su remanente sería aplicado a la amortización del principal.

Para el cálculo de los intereses, se consideraría la tasa de mercado. Ésta sería aquella que resultara de multiplicar por 1.31 o de añadir 5.5 puntos porcentuales a la tasa líder correspondiente en el mes inmediato anterior, que, como ya se mencionó, era una tasa variable por su ajuste permanente a la tasa líder, siendo esta última la que resultara mayor de las tasas brutas de interés de los instrumentos existentes —del instrumento de captación de mayor rendimiento, del instrumento de mayor rendimiento que emitiera el gobierno federal o del mayor de los indicadores que el Banco de México diera a conocer como elemento de referencia en la determinación de las tasas de interés activas y pasivas incluyendo el costo porcentual promedio de captación (CPP) y la tasa de interés interbancaria promedio (TIIP)—. En estos términos, las tasas de interés y los costos que las mismas representarían para los acreditados quedaban amarradas a la evolución de la economía.

Dado que, ante todo, los intermediarios querían garantizar sus ganancias ¡no fuera a suceder que hubiera una crisis y no pudieran recuperar sus recursos!, no se aceptaban pagos anticipados ni

¹⁶ Por ejemplo, el costo porcentual promedio (CPP) había pasado de 16.65 por ciento en 1991 a 11.78 por ciento en 1993.

parciales ni totales, y se obligaba al acreditado a liquidar los pagos en las fechas establecidas y por los montos convenidos en el contrato respectivo, bajo los esquemas de cálculo financiero aplicados por el banco.

En caso de que el acreditado tratara de reducir la carga del crédito y quisiera hacer pagos anticipados, el banco, argumentando la ruptura del esquema financiero incorporado en el contrato de crédito, podría dar por vencido el contrato y, de esa forma, estaba en libertad de exigir el pago del total del crédito más la cantidad que se derivara de los intereses calculados sobre la base de la comisión por prepago.¹⁷ Ésta era una forma de “amarrar” al acredi-

¹⁷ Para el cálculo de la comisión por prepago se estableció la siguiente fórmula:

$$MDt = Imt - Idt.$$

$$MDAt = MDA_{t-ix}(1+Cat) + MDt - Ct$$

$$CPt = MDA_{t/St}$$

Donde:

- MDt = Margen diferencial del mes correspondiente.
- IMt = Intereses de mercado del mes correspondiente.
- IDt = Intereses devengados en el mes correspondiente
- MDAt = Margen diferencial acumulado en el mes correspondiente.
- MDAt-1 = Margen diferencial acumulado en el mes anterior.
- Cat = Tasa de actualización al mes correspondiente.
- Ct = Comisión cubierta en caso de pago parcial.
- CPt = Comisión por prepago al mes correspondiente.
- St = Saldo del crédito al mes correspondiente.

En función de las variables anteriores, la comisión por prepago se calcularía por cada mes entre los intereses devengados —cuyo monto resultaría de multiplicar el saldo del crédito por la tasa de interés correspondiente al mes en cuestión— y los intereses del mercado —cuyo monto se calcularía con base en la multiplicación de la tasa de mercado definida como tal— por el saldo del crédito. El resultado de esta primera operación sería el margen diferencial del mes correspondiente.

En un segundo paso, al margen diferencial del mes correspondiente se añadiría el margen diferencial acumulado hasta el mes inmediato anterior previa actualización de este último, lo cual se haría a través de la multiplicación del mismo por el factor resultante de sumarle 1 a la tasa de actualización mensual del mes correspondiente. En este caso, la tasa de actualización anual se calcularía a partir de la que resultara mayor de multiplicar la tasa líder por 1.31, o bien, de sumar

tado a mantener la vigencia temporal del crédito ya que, para el banco, la ganancia principal del préstamo se generaba en la parte de los intereses, la cual siempre sería mayor al monto del crédito pactado en principio.

Mientras la economía creciera, el tipo de cambio estuviera estable y las tasas de interés estuvieran a la baja, no habría mayor problema. El prestatario pagaría con puntualidad su crédito; ingresarían de manera permanente recursos a los bancos, y el sistema financiero podría seguir operando de modo regular.

El problema de la capitalización de intereses sobre intereses

La sobrevaluación que fue acumulando el peso, los problemas del déficit de la balanza de pagos y el endeudamiento público, vía tesobonos, se habían convertido, a finales de 1994, en un obstáculo para mantener los ritmos de crecimiento que la economía había experimentado desde principios de la década de 1990. A esta situación se añadía que las condiciones de acumulación en los países desarrollados estaban cambiando¹⁸ y, por tanto, tarde o tem-

5.5 puntos. Este resultado se dividiría entre 12 para obtener la tasa de actualización mensual.

De la suma del margen diferencial del mes correspondiente y el margen diferencial acumulado al mes anterior actualizado, se obtendría el margen diferencial acumulado del mes correspondiente.

Así, el resultado de la división del monto equivalente al margen diferencial acumulado del mes correspondiente entre el saldo del crédito a la fecha relevante para su cálculo —en el momento en que el acreditado decidiera hacer un pago anticipado— sería la comisión por prepago.

Como puede desprenderse de lo anterior, para cualquier mortal que hubiera solicitado crédito en la época del auge financiero, hasta 1994, entender de manera exacta el cálculo de la comisión por prepago implicaba ser especialista en matemáticas o contratar los servicios de un actuario.

¹⁸ En el caso de los Estados Unidos, el peligro de que aumentara la inflación como resultado de la expansión económica, provocó que la Reserva Federal incrementara sus tasas de interés. Las cuales se ubicaron en términos anuales en 3.35 por ciento, 2.84 por ciento y 5.53 por ciento a finales de 1992, 1993 y 1994 respectivamente.

prano se revertirían los flujos de recursos que habían ingresado al país desde 1991. Esto se hizo realidad a partir de los primeros meses de 1994 cuando empiezan a salir los capitales del país. Situación que empeoró en forma sustancial hacia finales de ese mismo año cuando las reservas internacionales se ubican en 6 mil 100 millones de dólares, 19 mil 100 millones de dólares menos que en 1993. La economía entraba en crisis y el ajuste cambiario era inminente. Las secuelas serían las esperadas: se redujo el ritmo de la actividad económica y la inflación repuntó. Las tasas de interés, que a partir de la liberalización se establecían mediante los mecanismos de mercado, se fueron al cielo.

En esas condiciones, el deudor que había solicitado un crédito en abril de 1994 vio cómo se incrementaban los pagos que mes con mes tenía que hacer al banco. Ante esta situación, se le presentaban ante sí varios escenarios:

1. El acreditado hacía un esfuerzo para cubrir de manera puntual sus pagos, reduciendo sus gastos en educación, alimentación, vestido, salud, etcétera.¹⁹
2. El acreditado caía en cartera vencida, pero para no perder su propiedad se incorporaba a los programas de apoyo a deudores que creó el gobierno federal para evitar que la población dejara de pagar al banco y, como le ofrecían una ligera reducción en sus pagos mensuales, aceptaba efectuar una operación de refinanciamiento por medio de la cual se incrementaba en el monto de su crédito original.
3. El acreditado reestructuraba su préstamo en unidades de inversión (UDIS), rehacía su contrato de crédito y aceptaba, independientemente de lo que hubiera cubierto antes, empezar a pagar de cero y con una tasa que se iba modificando conforme se incrementara —o disminuyera— la inflación.
4. El acreditado no estaba dispuesto a reconocer el incremento en su deuda, pero aceptaba que, aunque no podía pagar, le

¹⁹ Este escenario era el más improbable porque el acreditado había hecho sus planes de pago en función de sus ingresos, mismos que estaban siendo erosionados por la crisis.

interesaba mantener la posesión del bien inmueble. De ahí que el banco le ofreciera incorporarse a un esquema de rentas, comenzaba a pagar sus mensualidades y, después de varios años, podría establecer un nuevo crédito con el banco. En este caso, lo que se hubiera pagado previamente se perdía.

5. El acreditado no tenía la capacidad económica para pagar las mensualidades de su préstamo, porque, a consecuencia de la crisis, podría haber quedado sin empleo; en este caso, perdería lo que hubiera pagado al banco y la propiedad en hipoteca.
6. El acreditado sabía que no podía pagar y regresaba el inmueble en una operación conocida como "dación en pago". Aquí, perdía el inmueble y los pagos realizados con anterioridad.

Enfrentado a estos posibles escenarios, bien podía suceder que el deudor pensara que el banco lo había engañado, que había introducido una forma de cálculo que, con una tasa variable, cuando las tasas de mercado habían crecido más del 100%, le hacía imposible pagar su crédito. Además de que la inestabilidad en las tasas de interés no se le podía atribuir a él. Su razonamiento se reforzaba porque sabía que, antes de que el banco le otorgara el crédito, había analizado su nivel de ingreso, conocía a la perfección su capacidad de pago y los expertos analistas bancarios habían hecho los estudios pertinentes acerca de la posible tendencia que seguiría la economía.

Si lo que señalamos es correcto, el deudor tendría la certeza de que la razón estaba de su lado y buscaría el amparo de la ley ante lo que quizá percibiría como un atropello o un robo: querer cobrarle lo que sabían que no podía pagar, o bien, que habiendo reconocido de manera honesta su deuda se negaba a pagar lo que el banco le exigía. Tal vez en ese momento lo que estaba en la mente de millones de deudores era aquella máxima de: *¡debo no niego, pago lo justo!*

En ese momento, el deudor empezaría a depositar el equivalente a su mensualidad en la institución de banca de desarrollo

que desempeña esas funciones (Nafin) e interpondría una demanda legal en contra del banco bajo el argumento de que el anatocismo —la capitalización o refinanciamiento de intereses era una práctica de usura bancaria prohibida en las leyes civiles y mercantiles mexicanas.

El banco, por su parte, y bajo el supuesto de que otorgó un crédito de tipo hipotecario, después de considerar la disposición del crédito original, el margen diferencial, el margen diferencial acumulado, las mensualidades no cubiertas, las primas de seguro no pagado, los gastos de cobranza y todo lo demás que pudiera acumularse, para octubre de 1998, podría estar demandando al deudor²⁰ por la cantidad de 755 mil 570 pesos.²¹

¿Cómo resolver esta situación en donde la diferencia entre el préstamo original y la cantidad exigida posteriormente por el banco se incrementó en cerca de 429% en un lapso de sólo cuatro años? ¿Era culpable el deudor del mal manejo de la economía? ¿Dónde había quedado la capacitación, el análisis y la evaluación bancaria de los riesgos de las operaciones crediticias? ¿Por qué se permitió la introducción de esquemas de refinanciamiento cuando se sabía que en una situación de crisis podía redundar en una cartera de alto riesgo? ¿A quién dar la razón: al banco o al deudor, y bajo qué consideraciones? ¿Cómo enfrentar desde un punto de vista ético y social el grave conflicto entre los intereses de los banqueros y de la población?

Resolver estas preguntas no iba a ser una tarea fácil ya que había muchos intereses de por medio en un problema que, en apariencia, era sólo económico-financiero, pero que, en realidad, perfilaba un conflicto social de grandes magnitudes que sólo podría ser resuelto con el imperio de la ley.

²⁰ Por la vía especial hipotecaria.

²¹ Suponiendo que se mantuviera la demanda entre el acreditado y el banco, el primero adeudaría al banco en agosto de 1999 la cantidad de 1 millón 101 mil 715 pesos.

*La solución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
al problema de la capitalización de intereses sobre intereses*

La respuesta a las interrogantes antes planteadas se dio el 7 de octubre de 1988. En esa fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió sobre las contradicciones de tesis 31/98 y 31/92 respecto del llamado anatocismo o capitalización de intereses sobre intereses.²² Como en su momento señalaron los especialistas (Pérez, 1999; Torres y Pujol, 1999; Delgado, 1998) lo que se hizo fue una lectura e interpretación acrítica de las normas jurídicas²³ y se llegó a la conclusión de que los esquemas de refinanciamiento de intereses incorporados en los contratos de apertura de crédito eran actos que no violaban la ley y, por tanto, válidos. Para llegar a esa conclusión la Suprema Corte consideró, entre otros aspectos, que:

- La apertura de un crédito adicional, pactada en el mismo instrumento o en otro —el contrato de crédito— para el pago de intereses causados no podía ser considerada por una simulación.
- La apertura de un crédito adicional para el pago de intereses causados, pactada en un instrumento o en otro, no esconde un proceso ilícito de capitalización de intereses.
- La apertura de un crédito adicional para el pago de intereses causados, en el mismo instrumento o en otro, no implica engaño o la falsedad.
- Las tasas de interés variables de los contratos de crédito son calculables y, por tanto, no están indeterminadas.
- La exclusión de estudios de viabilidad económica para el otorgamiento de los financiamientos, no anula el contrato de crédito.

²² Aquí se trata claramente de lo que se conoce como “anatocismo”, es decir, la práctica de cobrar intereses sobre intereses que se agregan al capital original, dando lugar a un interés compuesto. Donde los intereses devengados se convierten en nuevo capital que, a su vez, genera los suyos.

²³ Entre éstas estaban la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Amparo, el Código de Comercio y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

- El vocablo anatocismo no existe en el lenguaje del sistema jurídico mexicano.

En realidad, la validación legal de la capitalización de intereses sobre intereses también se basó en el supuesto central de que la misma se pactaba de común acuerdo entre las partes involucradas en la apertura de un crédito. Supuesto incorrecto porque la introducción de los esquemas de refinanciamiento en los contratos de apertura de crédito se presentaba en el momento de la firma de los contratos como un requisito más para poder acceder al financiamiento. Nótese que, en esas condiciones, los posibles acreditados no tenían la oportunidad de auxiliarse de un experto, un actuario, que les asesorara en cuanto a las variaciones que un cambio abrupto de las tasas de interés podría tener sobre el monto del crédito y sus intereses. Claramente, el deudor estaba en desventaja frente al intermediario.

Para completar el panorama anterior, la Suprema Corte eximió de cualquier responsabilidad a las instituciones de crédito por no haber efectuado los estudios de viabilidad económica de los esquemas de refinanciamiento. Al parecer, desde el punto de vista legal, todo era culpa del deudor. Si la economía había entrado en crisis era su culpa, si las tasas de interés se habían incrementado era su culpa, tenía la culpa, además, de no haber previsto el incremento en las tasas de interés y, por último, era culpable de que los banqueros no hubieran hecho su trabajo y sus análisis económicos de manera correcta y precisa.

En una decisión tan difícil, donde la resolución de las controversias entre los intermediarios iba a tener enormes implicaciones sociales, no se reconoció que "la falta de capacidad de pago de los acreditados de la banca puso en evidencia la fragilidad de sus carteras de créditos, así como también hizo evidente la grave problemática derivada del manejo descuidado y hasta negligente de la operación crediticia" (Gutiérrez, 1998:134).

Pero lo más grave fue que en la resolución de la Suprema Corte no se ofreció una solución que respondiera a "las exigencias de la justicia en general o de la moral política de una sociedad" (Pérez, 1999: 93) y por moral política queremos decir que, en la solución

de problemas sociales, frente a las instituciones que como nación nos hemos dado, habría de prevalecer el hecho de que la ley debe ubicar a cada actor social en una situación justa y equitativa frente a los demás. Cuando esto no se da, el interés colectivo se sacrifica en función de las necesidades de un interés particular. Esto último fue exactamente lo que sucedió con la resolución de la Suprema Corte: se hicieron valer los derechos y el poder de un grupo que representa al capital financiero por sobre los derechos del resto de la sociedad.

Entonces, cabe pensar que en el trabajo de análisis y reflexión jurídica que se hizo en cuanto a la capitalización de intereses sobre intereses, la Suprema Corte, como bien afirma Pérez: “[...]se atrincheró en el texto y trató el problema como cualquier otro sin trascendencia jurídica, social, política y económica en la sociedad mexicana”(1999: 95).

Esto se demuestra en la medida en que en la resolución que se dio no aparece un argumento ético y socialmente válido que la sustente. Aún en un caso extremo podría argumentarse en descargo de la Suprema Corte que la capitalización de intereses sobre intereses es una práctica común en los países desarrollados, no obstante, ni siquiera una explicación de esta naturaleza soporta el mínimo escrutinio porque, en esos países, las tasas de interés reales son reducidas y los diferenciales entre las tasas de interés activas y pasivas son muy pequeños, dos o tres puntos porcentuales, lo que hace que la capitalización de intereses sobre intereses no represente mayor problema ni para las instituciones financieras ni para los deudores.

Incluso, podría decirse —lo cual es cierto— que el sistema financiero es vital para una economía, pues a través del mismo opera el sistema de pago, se instrumenta la política monetaria, se cubren las necesidades de recursos para la inversión, etcétera, y, en consecuencia, una resolución distinta a la que dio la Suprema Corte hubiera sido catastrófica. Sin embargo, al proteger a los accionistas de los bancos con el manto legal que les brindó la resolución y evitar que los banqueros enfrentaran plenamente su responsabilidad por el mal manejo de la banca, lo que se hizo fue trasladar el costo económico de ineficiencia a las finanzas públicas

y a la economía —ya de por sí deteriorada— de la gran mayoría de la población. Esto se expresa en la cantidad de fondos públicos que tendrán que asignarse en los próximos treinta años para hacer frente a las obligaciones que el gobierno federal²⁴ adquirió con los banqueros al momento del rescate bancario. La magnitud real de este problema se comprende mejor al considerar que:

A mediados de 1999, el costo fiscal del rescate bancario estimado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) ascendió a 871 miles de millones de pesos, equivalentes al 21.8% del producto interno bruto estimado para 1999[...], lo cual equivale a más de 7 veces el ingreso fiscal obtenido por la venta de los bancos a valor presente". [Calva, 2000: 241.]

Lo anterior, pone de manifiesto que una resolución legal, para ser justa y equitativa, no puede basarse sólo en la mera interpretación de las leyes porque en una controversia de dimensiones nacionales también debería considerarse que, desde el punto de vista ético y político, un problema jurídico que es aparentemente entre particulares, un banco y un deudor, tiene efectos que rebasan con mucho el ámbito privado para ubicarse en la dimensión de lo público como una faceta de lo social-colectivo. Un aspecto particular de la resolución de octubre de 1998 de la Suprema Corte fue que mostró que en el mercado no todos los agentes económicos son iguales y que, en última instancia, la ley se inclinaría del lado del más fuerte; en este caso, del lado del capital financiero.

²⁴ En los momentos en los que se estaba discutiendo la propuesta de reforma fiscal del gobierno foxista, tenemos uno de los más claros ejemplos de cómo ha afectado el rescate financiero a las finanzas públicas, pues la propuesta de incremento del 15 por ciento de IVA (impuesto al valor agregado) generalizado tiene que ver con las obligaciones que el gobierno federal debe cubrir en términos del pago de intereses y principal de los pagarés del rescate bancario en el IPAB (Instituto Bancario de Protección al Ahorro).

EL FUNCIONAMIENTO DE LA BANCA DESPUÉS DE 1994

El deterioro de la operación de la banca

Los problemas de la banca no pueden atribuirse de modo exclusivo a la resolución de 1998 que sobre la capitalización de intereses sobre intereses hizo la Suprema Corte, pues el deterioro en las operaciones financieras está influido por la carencia de esquemas de evaluación y administración del riesgo apropiado y por la ausencia de controles a las operaciones de riesgo que las instituciones bancarias empezaron a realizar después de la desregulación y la apertura financiera. A esto hay que añadir que las medidas de estabilización económica —el ajuste fiscal del balance primario, la reducción de la inflación y la imposición de altas tasas de interés— profundizadas después de 1994 y que se han encaminado a mantener bajo control las principales variables macroeconómicas, sobre todo la inflación, han contribuido, asimismo, al deterioro de los indicadores de operación de la banca. Esto es particularmente importante ya que, después de la crisis de diciembre de 1994, uno de los mecanismos más socorridos en el actual esquema de política económica para atraer capitales ha sido el incremento de las tasas de interés. Las mismas que en términos de tasas activas reales se mantuvieron en niveles de 20% entre 1994 y 1999.²⁵ Lo que sólo favorece a las actividades especulativas, al tiempo que desalienta la inversión productiva, incrementa los costos financieros de las empresas y reduce la capacidad de pago en la economía.

En esencia podemos afirmar que si la situación del sistema financiero —en el caso específico de la banca— después de 1994 era precaria, la resolución de la Suprema Corte en la controversia referida al problema de la capitalización de intereses sobre intereses lo único que hizo fue validar las malas prácticas bancarias y generalizar la desconfianza respecto del mal funcionamiento de los intermediarios financieros. Quien en estas condiciones quisiera acceder

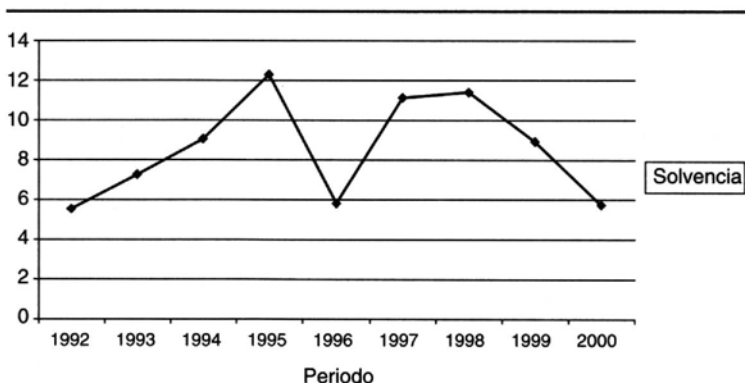
²⁵ En contraste, las tasas pasivas reales, las que paga el banco a los ahorradores, promediaron, en el mismo periodo, niveles de 6 por ciento. Esta disparidad entre las tasas activas y pasivas muestra la ineficiencia de la banca.

al financiamiento tendría que pagar altos costos. Así, a la incapacidad de pago de los agentes económicos no financieros y el incremento en las carteras vencidas que se venía dando desde antes de 1994, se sumó la menor demanda de crédito. Y como la banca es rentable en la medida en que intermedia los recursos de una sociedad entre las unidades económicas deficitarias y las superavitarias, con el incremento en las carteras vencidas se deterioraron los niveles solvencia de las instituciones de crédito (véase la gráfica 1).

La explicación a esto es muy sencilla: la desregulación financiera, que había dado un amplio margen de discrecionalidad en la gestión y las prácticas financieras, sin un esquema de supervisión prudencial adecuado, lejos de mejorar la eficiencia de la intermediación financiera produjo, como antes se mencionó, una expansión crediticia en un contexto de altos riesgos de tipo de cambio y de tasas de interés que desembocó en la quiebra técnica de la banca. En esa situación, el índice de rentabilidad bancaria, que en 1992 alcanzaba el 0.33%, en 1996 se ubicaba en -0.17%, para situarse en un modesto 0.07% a finales del año 2000 (véase la gráfica 2).

GRÁFICA 1

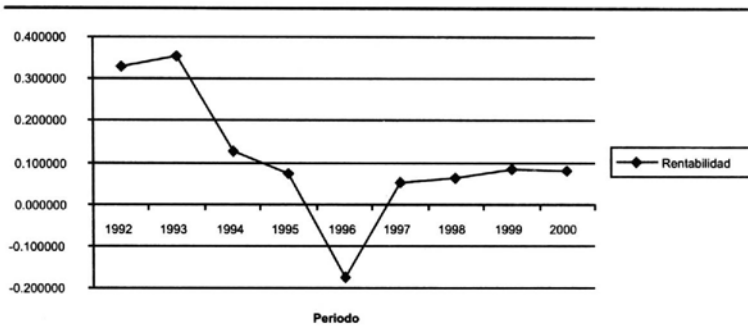
Solvencia = Cartera de crédito vencida / cartera de crédito total



FUENTE: elaboración propia con datos de Boletines Estadísticos de la CNBV. Varios años.

GRÁFICA 2

Rentabilidad = utilidad neta / capital contable sin revaluaciones



FUENTE: elaboración propia con base en boletines estadísticos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Varios años.

El otro gran impacto de la disfuncionalidad del sistema financiero fue la caída del financiamiento al sector privado el cual está relacionado con la cartera vencida y el racionamiento del crédito en la economía. Así, el financiamiento al sector privado pasó de 490 205 millones de pesos en 1995 a 347 615 millones de pesos. En términos reales, esto constituye una variación real anual promedio de -9.37% en el periodo en cuestión (véase el cuadro 3).

CUADRO 3

Cartera vencida y financiamiento de la banca comercial al sector privado

Año	Cartera vencida	Financiamiento de la banca comercial al sector privado
		(millones de pesos)
1995	36 326	490 205
1996	43 001	437 049
1997	84 581	410 120
1998	88 306	397 988
1999	68 660	347 615

FUENTE: elaboración propia con datos de Banco de México y boletines estadísticos de la CNBV.

Esto es sólo una manifestación más de las posiciones que asumieron banqueros y deudores después de 1994. Los primeros, ya no estuvieron dispuestos a prestar en las condiciones de riesgo de tasas de interés imperantes en la economía y, los últimos, ya no consideraron como una opción viable solicitar nuevos préstamos, pues sabían que un deterioro económico mayor podría empeorar sus dificultades de sobreendeudamiento.

Si partimos de una perspectiva global e histórica, podemos decir que las condiciones en que se encuentra en la actualidad la intermediación financiera y el financiamiento en México confirman las lecciones que las primeras experiencias de reforma financiera habían dejado en los países de América del Sur y que mostraban que la desregulación y liberalización financiera sin los esquemas de supervisión y vigilancia adecuados llevarían del *boom* del crédito, al incremento en las tasas de interés, lo cual resultaría en el problema de la capitalización de intereses sobre intereses y, por último, en la crisis del propio sistema financiero.

CONCLUSIONES

Con las medidas incluidas en la reforma financiera se pretendía configurar una nueva estructura que debería caracterizarse no sólo por la operación más eficiente de los intermediarios financieros, sino por el incremento en los recursos para satisfacer la demanda de financiamiento y fondeo de las familias y las empresas. Pero esto necesariamente pasaba por la expansión de la economía y la existencia de tasas de interés bajas que permitieran la validación de la estructura de deudas que se iba generando en la etapa del auge económico. No obstante, una vez que las condiciones de estabilidad se modifican y se disparan los créditos, las deudas se volverán impagables. Ya instalados en plena desregulación financiera, el problema de crisis de pagos que generó la capitalización de intereses sobre intereses se volvió inmanejable y socialmente nos ubicó en un terreno en donde, por una parte, estaban los intereses de los intermediarios y su forma displicente de operar el negocio bancario y, por otra, el interés del resto de la sociedad.

La resolución en favor de los banqueros, que desde el ámbito legal dió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con la controversia generada por la capitalización de intereses sobre intereses o anatocismo rebasó con mucho el ámbito de las relaciones entre particulares: la banca y sus deudores. Esta resolución colocó en el plano social a la población en una posición de clara desventaja frente al capital financiero, mientras que en el terreno estrictamente económico se ignoraron los efectos que esa resolución iba a tener en las finanzas públicas, en la economía de la población y sobre el funcionamiento del propio sistema financiero. Lo que en última instancia había dejado en claro la resolución era que en materia financiera la ley había hecho valer los intereses de los más poderosos: los banqueros.

BIBLIOGRAFÍA

- Basave, J., *Los grupos internacionales de capital financiero en México (1974-1995)*, México, IIE-Ediciones El Caballito, 1996.
- Calva, J., *México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global*, México, Plaza y Janés, 2000.
- Chomsky, N. y H. Dieterich, *La sociedad global. Educación, mercado y democracia*, México, Joaquín Mortiz, 1995.
- Correa, E., "Inversionistas institucionales en un mercado financiero global", en *De la desregulación financiera a la crisis cambiaria: experiencias en América Latina y el Sudeste asiático*, México, UNAM, 2000.
- Delgado, A., "La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede dañar la estabilidad política advierten dirigentes de deudores y legisladores", en revista *Proceso*, núm. 1145, México, CISA, 1998.
- Díaz- Alejandro, C., "Goodbye financial repression, Hello financial crash", Estados Unidos, *Journal of Development Economics*, 1993.
- Gutiérrez, A., "Los orígenes de la crisis de la crisis bancaria mexicana", en *Bancos y crisis bancarias. Las experiencias de México, Francia y Japón*, México, UAM-I, 1998.
- Hermes, N. y R. Lensink, *Financial development and economic*

- growth. Theory and experiences from developing countries*, Londres, Routledge, 1996.
- Holden, P. y S. Rajapatirana, *Unshackling the private sector. A Latin America story*, Washington, D.C., The World Bank, 1995.
- Huerta, A. *Carteras vencidas e inestabilidad financiera. Propuestas de solución*, México, Diana, 1997.
- Huerta, G., "La estabilización económica y su impacto sobre el funcionamiento del sistema financiero", en revista *Gestión y Estrategia*, México, UAM-A, 2000.
- Mackinnon, R., *Money and Capital*, Washington, Brookings Institution, 1973.
- Mantey, G., "Desregulación financiera en el sudeste de Asia y en América latina, crisis bancarias y vulnerabilidad a los programas del FMI", en *De la desregulación financiera a la crisis cambiaria: experiencias en América Latina y el Sudeste asiático*, México, UNAM, 2000.
- Minsky, H., *Can it happen again. Essays on instability and finance*, New Haven, Yale University Press, 1982.
- Pérez, A., "El anatocismo visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ¿solución correcta?", en revista *Alegatos*, núm. 41, México, UAM-A, enero / abril de 1999.
- Quijano, J., *Estado y banca privada*, México, Ensayos-CIDE, 1981.
- Ramos, J., *Políticas económicas neoliberales en los países del cono sur de América Latina*, México, FCE, 1989.
- Shaw, E., *Financial deeping in economic development*, Londres, Oxford University Press, 1973.
- Sinkey, J., *Commercial bank financial management. In the financial-services industry*, Nueva York, Macmillan, 1992.
- Solís, R., "La crisis bancaria en México", en *Bancos y crisis bancarias. Las experiencias de México, Francia y Japón*, México, UAM-I, 1998.
- Tavares, M. C., *De la sustitución de importaciones al capital financiero*. México, FCE, 1972.



P. C. DIXON

⇒ *"La verdad. Ícaro"*, 1945. José Clemente Orozco. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Capítulo VI

Ética y justicia en el caso del anatocismo: Un caso de neoliberalismo judicial en México. Análisis interdisciplinario crítico de las consecuencias jurídicas y sociales de la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de octubre de 1998

*Eduardo José Torres Maldonado**
*Rebeca Florentina Pujol Rosas***

El problema central de la filosofía política clásica es, al mismo tiempo, el problema fundamental del mundo político: la legitimación de los principios de la justicia política. Pues los principios de la justicia política indican de acuerdo con qué condiciones y criterios un orden jurídico y constitucional es obligatorio para todos, un orden político fundamental es racional y, en este sentido, justo. Y que sea justo es la exigencia más alta que formulamos con respecto a un orden político.

Otfried Hoffel¹

“...de pensamiento es la guerra que se nos libra, ganémosla a fuerza de pensamiento”.

José Martí²

* Profesor-Investigador del Departamento de Derecho de la UAM e Investigador Nacional del SNI-Conacyt.

** Profesora en diversas instituciones académicas y funcionaria judicial.

¹ Otfried Hoffe, *Estudios sobre teoría del derecho y la justicia* (Biblioteca de Ética, Filosofía del Derecho y Política, 19), Barcelona, Fontamara, 1997.

² Alfonso Sastre, *La batalla de los intelectuales. Nuevo discurso de las armas y las letras*, p. 26, Buenos Aires, Clacso, 2005.

SUMARIO

I. Introducción. II. Diálogo de preguntas y respuestas sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 7 de octubre de 1998. III. Ética, justicia y "neoliberalismo" judicial. IV. Epílogo V. Bibliografía.

SÍNTESIS

EL PRESENTE ESTUDIO JURÍDICO-POLÍTICO y socioeconómico analiza el debate generado por la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida el 7 de octubre de 1998, relativa al anatocismo y otras cuestiones. Contrastamos las diferentes posturas de distintos actores en esta polémica de trascendencia nacional: la postura crítica de diversos juristas y académicos, las posiciones institucionales de los bancos, las posturas defensivas y estrategias de negociación de los "deudores" y sus organizaciones. Destacamos también el contexto socio-económico y político en el cual los Ministros de la Suprema Corte decidieron la resolución sobre anatocismo, y señalamos su correspondencia con la globalización y adopción de políticas neoliberales en México. Reflexionamos sobre diferentes aspectos jurídicos, políticos, económicos, éticos, literarios y filosóficos derivados del debate sobre la resolución citada, considerando al unísono sus diversas consecuencias sociales. Finalmente, acotamos críticamente el sistema actual de división-distribución de poderes en México, exhortando al Poder Legislativo a actuar en consecuencia, motivando a otros actores a considerar diversas alternativas posibles de solución a los conflictos generados por la controvertida Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

INTRODUCCIÓN

De la libertad de opinión

Comenzaremos ofreciendo nuestras sinceras disculpas a otros juristas y estudiosos del tema, quienes han declarado su incondicional apoyo a la Resolución Sobre Anatocismo de la Suprema Corte de Justicia y otras cuestiones relacionadas. Pese a nuestro profundo respeto por el Poder Judicial como institución y a nuestra admiración profesional por sus integrantes, en esta ocasión nuestra opinión difiere de los criterios rectores de la postura asumida por la Corte en el tema que nos ocupa. Como el lector podrá observar, en este caso, no coincidimos parcialmente con aquellos defensores a ultranza de la visión oficial de la Suprema Corte de Justicia. En realidad, haciendo uso del derecho constitucional de libre expresión de las ideas y de la facultad de disenso, expresamos nuestro interés en sintetizar el debate que ha suscitado la resolución sobre anatocismo, manifestando nuestra propia interpretación de la resolución sobre anatocismo e invitando con respeto a los lectores a formarse una opinión al respecto.

Recordamos a Voltaire: “yo podré desaprobarte lo que usted diga, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo”. Por ende, se podría aceptar relativamente la manifestación de la corte, en voz de su entonces presidente, el licenciado José Vicente Aguinaco, el cual sostenía: “Los ministros no pueden ser juzgados, toda vez que se limitaron a aplicar la ley”. Podríamos coincidir, de manera parcial, con esta afirmación pensando, en primera instancia, que, en efecto, la Corte podría haber aplicado fielmente las leyes.

Sería muy difícil que algún otro cuerpo colegiado en este país superara la responsabilidad de la máxima autoridad judicial en la aplicación celosa, puntual, al pie de la letra, de las leyes. No se han apartado un ápice de su cumplimiento. Sin embargo, reflexionemos. Usemos la inteligencia de nuestro cerebro y corazón conjuntamente. ¿Es correcta esta aplicación de las leyes? ¿Es congruente? Sí, desde cierto punto de vista, es correcta. Sí, siguiendo cierta ideología, esta aplicación parece ser congruente.

Como han señalado diversos juristas y académicos que sostienen una visión crítica de la resolución del 7 de octubre de 1998,³ la Suprema Corte ha hecho valer correcta, congruente e impecablemente las leyes, pero las leyes del mercado recomendadas por la ideología neoliberal, las leyes del encaje que Don Quijote previniera en sus consejos a Sancho, y las leyes de la selva y el capitalismo salvaje descritas con tanto acierto por London y Kipling; todas estas leyes han sido aplicadas, excepto las leyes del Estado de Derecho emanadas de nuestra constitución. Según estas opiniones, la Suprema Corte de Justicia ha aplicado, a rajatabla, las leyes del mercado, con una rigidez única, que ningún cuerpo colegiado en cualquier época o nación del mundo podría superar. Y debemos preguntarnos: ¿Es ésta una decisión final, sin medio de impugnación alguno? Legal e históricamente, ¿hay antecedentes para, simplemente, aceptar esta resolución y un destino histórico estigmatizado por esta difícil decisión de la Suprema Corte?

Recordemos una frase célebre de fecha 25 de junio de 1767 del Marqués de Croix en la que comanda, para los habitantes de la Nueva España: “de una vez para lo venidero deben saber los súbditos del gran Monarca que ocupa el trono de España, que nacieron para obedecer y no para discutir, ni para opinar en los altos asuntos del gobierno”.⁴ ¿Será posible la tentativa de aplicación de esta fórmula nuevamente a la sociedad mexicana, ubicada en los albores del siglo XXI?

Crítica y disenso respetuosos

Con estos antecedentes, reconociendo que sólo somos un grano más de arena en la inmensa e infinita playa del universo, y de

³ Nos referimos a las opiniones de juristas y académicos como Emilio Krieger, Ignacio Burgoa, Jesús Trápaga, y diversos abogados de la Barra de abogados, la Unión de Juristas de México y de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), entre otras organizaciones, y más de medio centenar de abogados postulantes con los cuales hemos discutido y tomado nota de sus opiniones acerca del tema de este estudio.

⁴ Cf. Daniel Cosío Villegas, *Historia mínima de México*, México, Colmex, 1994, p. 84.

nuestro país, y aceptando que sólo somos profesores de universidad, ciudadanos comunes entre más de cien millones de mexicanos, nos preguntamos: ¿Tendremos la posibilidad de “juzgar” a la Suprema Corte, como algunos juristas, excesivamente conservadores, nos han sugerido? ¿Quiénes somos nosotros para atrevernos a emitir una opinión adversa en contra de una compleja resolución procesalmente inimpugnable de la Suprema Corte? ¿Quiénes somos nosotros para criticar esta resolución de la corte y disentir respetuosamente, desde nuestro nicho académico, nuestra modesta trinchera universitaria, e intentar discrepar en forma civilizada con el máximo tribunal de México?

Sin abandonar la conciencia de nuestra condición académica, ciudadana y política, haremos uso de nuestros derechos constitucionales y atenderemos a una expresa invitación del entonces presidente de la corte para expresar la voz crítica (crítica científica, positiva y bien intencionada) de la academia en los asuntos que resuelva la Suprema Corte, y expresaremos un disentimiento respetuoso como universitarios sobre diversos aspectos de la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 7 de octubre de 1998. Tal actitud nos demanda nuestra vocación de intelectuales y juristas comprometidos con el estudio objetivo, veraz y crítico de los problemas nacionales de México.

Un ejercicio mayéutico

Recordemos una frase de Diderot, quien señala:

el entendimiento tiene sus perjuicios; los sentidos, su incertidumbre; los instrumentos, su imperfección. Los fenómenos son infinitos; las causas, ocultas; las formas, quizá transitorias. No tenemos, contra tantos obstáculos como encontramos en nosotros y que nos pone la naturaleza, más medios que una experiencia lenta y una reflexión limitada. Son éstas las palancas con las cuales la filosofía se ha propuesto levantar el mundo.⁵

⁵ José Blanco (ed.), *Voltaire y Diderot, obras escogidas*, Barcelona, Océano, 1990, p. 239.

Procedamos ahora, utilizando una adaptación de la mayéutica, en un método socrático,⁶ a propiciar diálogos por escrito sobre el tema que nos ocupa, basándonos en un sistema de preguntas y respuestas. Al final, por supuesto, podrán formularse diversas preguntas no incluidas en este breve diálogo que el lector considere necesarias, recordando que este ejercicio mayéutico sólo pretende profundizar la posibilidad de un mejor y más amplio debate acerca de esta polémica resolución del 7 de octubre de 1998, sabiendo que entre sus efectos ha condenado prácticamente a los deudores a pagar los pactos de anatocismo establecidos en los contratos de crédito bancario y, en consecuencia, ha facultado a los bancos a negociar, presionar, exigir y, en su caso, embargar a un número potencial mayor de nueve millones de deudores, que representan aproximadamente una cartera vencida mayor de 36 mil millones de pesos, en teoría.⁷ Por supuesto, si los deudores no pueden pagar, los bancos pueden embargar. Quizás, en este último supuesto, los bancos se transmuten en gigantescas inmobiliarias. Tal vez también puedan aplicar descuentos porcentuales o “quitas” de entre 10 y 50 por ciento de los créditos, quedando todo sujeto a su amplio arbitrio y aparentemente inimpugnable —después del 7 de octubre de 1998— discrecionalidad. Una pregunta que proviene de los críticos de la resolución sobre anatocismo surge en este momento. Toda vez que la Suprema Corte ha declarado legal la práctica de la usura en México: ¿Cuál será la postura de otras instituciones en el país? Por ejemplo, ¿la Iglesia (que siempre ha constituido un factor de poder en México) aceptará sin discusión alguna esta decisión, aun sabiendo que en la Edad Media la usura fue condenada por esta institución? ¿Qué posición tomarán los congresos federal y locales?, ¿los sindicatos, las universidades e instituciones de educación superior? ¿las organizaciones de colonos? ¿las organizaciones campesinas? ¿Se agudizarán y radicalizarán los movimientos sociales en México y los conflictos sociopolíticos por esta decisión de la corte y otras

⁶ Eduardo, García Máynes, *Teorías sobre la justicia en los diálogos de Platón*, México, Porrúa/UNAM, 1988.

⁷ Datos proporcionados por El Barzón y diversas organizaciones de deudores, citados también en la revista *Proceso*, en los núms. 1145 y 1146 del mes de octubre de 1998.

medidas de política económica paralelas en nuestro contexto actual? Estas últimas preguntas no podrían ser contestadas, quizás, en este momento. Sin embargo, por su importancia, deben anotarse como temas de reflexión futura. Pasemos ahora a nuestro diálogo por escrito, anotando las preguntas fundamentales que han surgido sobre este tema, basándonos en el método socrático.⁸

DIÁLOGO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LA RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DEL 7 DE OCTUBRE DE 1998

*La pertinencia de la resolución de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación*

¿Fue correcta, en términos técnico-jurídicos, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco del Estado de Derecho actual en México? No, de acuerdo con las visiones más críticas, la resolución de la Suprema Corte de Justicia fue incorrecta jurídicamente e insensible social y políticamente, como a continuación se sintetiza. Vulnera el Estado de Derecho establecido en la constitución; primeramente, transgrede, la función constitucional básica de la Suprema Corte de Justicia de velar por la defensa de la Constitución y la aplicación de los preceptos constitucionales; viola disposiciones constitucionales y disposiciones de orden público (es decir, la ley), y erosiona la confianza que el pueblo mexicano (en quien reside esencialmente la soberanía) debe tener en la función constitucional del Poder Judicial. Asimismo, debilita el principio de división-distribución de poderes,⁹ al subordinarse la Suprema Corte de Justicia al Poder Ejecutivo¹⁰ y, aún más, provoca inestabilidad social y política al subordinarse el máximo tribunal federal a los dictados particulares de grupos financieros privados, como son los bancos.

⁸ E. García Máynez, *op. cit.*

⁹ Elisur, Arteaga, *Derecho constitucional*, México, Oxford University Press/Har-la, 1998, p. 38.

¹⁰ León Cortiñas-Peláez (dir.), *Introducción al derecho administrativo*, México, Porrúa, 1994.

*Consideración de diferentes alternativas posibles para la resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

¿La decisión tomada por la Suprema Corte de Justicia fue la única alternativa posible o existían otras vías aceptables? Existían otras vías aceptables. De acuerdo con las posturas más críticas (como las de los dirigentes de las organizaciones de deudores), la decisión de la Suprema Corte de Justicia constituye, por desgracia, una de las decisiones más arbitrarias e injustas en la historia del derecho moderno en el mundo. Al respecto, nosotros consideramos que la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que tomó una decisión técnico-jurídica específica, pudo elegir entre diversos caminos para orientar su decisión. Mencionemos algunos de ellos: a) dejar la decisión de los conflictos en manos de los tribunales para que decidieran conforme a los criterios constitucionales y legales, y su sano y autónomo criterio, proporcionando sólo directrices básicas, objetivas e imparciales; b) resolver la controversia señalando que las prácticas de anatocismo son inconstitucionales e ilegales, rechazando las prácticas usurarias, atendiendo a las reglas de interpretación de los contratos, declarando nulos aquellos que contravinieran la constitución y la ley (en particular la civil), y propiciando la negociación entre las partes; c) no resolver la supuesta controversia de tesis, dejando de ejercitar la facultad de atracción, permitiendo que los tribunales fueran resolviendo de modo paulatino los litigios planteados ante los mismos, respetando las normas constitucionales y legales; d) adoptar una posición de justicia salomónica, decidiendo con prudencia, sabiduría, imparcialidad y objetividad los principales puntos litigiosos planteados ante los tribunales. Esto hubiera implicado establecer líneas de interpretación que permitieran la nulidad de los contratos ilegales e imposibles de cumplir por los modelos financieros aplicados, la modificación conveniente y reestructuración prudente de ciertos créditos, y en diversos casos, la negociación conforme a derecho de aquellos contratos que presentaran problemas especiales. Era posible sugerir distintas fórmulas de negociación de los créditos. Bastaba respetar la constitución y nuestro marco legal, y los principios generales del derecho, y el buen sentido y sensibili-

dad comunes para dictar una resolución más justa sobre los problemas del anatocismo.¹¹

Parcialidad o imparcialidad de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿La Suprema Corte de Justicia decidió, como se ha difundido popularmente, “en favor de los bancos y en contra de los deudores”? ¿Puede imputarse parcialidad a la decisión de la Suprema Corte de Justicia? Como es conocido, en derecho es posible adoptar criterios interpretativos para justificar cualquier postura, por encomiable o criticable que ésta sea.

En el pasado, y tenemos memoria histórica, se han justificado jurídicamente la esclavitud (Roma), la servidumbre y las castas sociales (la época feudal en Europa y la época de la Colonia en México), el genocidio (el nazismo en Alemania e Italia; y la dictadura en Chile, en tiempos de Pinochet), y muchos otros casos en que se han desarrollado, por abogados y otros profesionales cuya brillantez técnica está fuera de juicio, sesudas, enjundiosas y hasta pseudocientíficas argumentaciones en favor del poder arbitrario y, por lo tanto, en contra de la justicia y de los derechos humanos. Ciertos juristas parecen haber olvidado el necesario humanismo y heroísmo social indispensable para impulsar el cambio social, ininterrumpidamente, tema en el que ha reflexionado con amplitud Charles E. Wizansky Jr.¹² Técnicamente, señalan las posturas críticas, la Suprema Corte de Justicia y los abogados de los banqueros pueden alegar, en teoría, que la corte no decidió en favor de los bancos.

Sin embargo, parecería evidente para cualquier observador cuidadoso que la corte adoptó un criterio parcial, injusto y no apegado

¹¹ Véase la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de octubre de 1998, del expediente 31/98, sobre contradicción de tesis con relación al anatocismo.

¹² Cf. Charles E. Wizansky, Jr., “Anatomía del heroísmo”, *Reflexiones de un juez, la función judicial, la ética y el derecho* (...), 1967, pp. 281, 288.

do a la racionalidad de la legislación mexicana existente y aplicable. Por desgracia, la Suprema Corte de Justicia decidió convertirse en lo que en círculos forenses se conoce como una especie de "abogado del diablo", al defender a los poderosos (las instituciones financieras) con independencia del derecho y la justicia más elementales de los débiles (los deudores).

*Funciones jurisdiccionales y políticas
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

¿Cuál es la función jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia y cuál es su función política? La función de la corte es resolver conforme a derecho y a la justicia los litigios que se presentan ante ella, haciendo respetar tanto los principios de acceso y administración expedita de justicia como el Estado de derecho y la supremacía de la constitución, respetando el principio de división-distribución de poderes. La función política de la Suprema Corte de Justicia es actuar como lo que constitucionalmente se define que es: un poder público, autónomo, garante y representativo de la soberanía del pueblo y respetuoso de la constitución política que nos rige.

*La posibilidad de impugnar la resolución de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación*

¿Existe algún recurso judicial o acción en contra de la resolución de la Suprema Corte de justicia? Desafortunadamente, no hay algún recurso judicial o medio de impugnación en contra de la decisión de la Suprema Corte de Justicia en nuestro sistema jurídico, dentro del cual constituye una decisión que no contempla la existencia de medios de impugnación judicial (quizás sólo restaría una acción ante tribunales internacionales, con las dificultades procedimentales y de aplicación de las normas y sentencias internacionales consabidas). En realidad, en el sistema interno jurídico-político mexicano, sólo la acción del Poder Legislativo y una

intervención decisiva del Poder Ejecutivo podrían resolver de manera sustancial los problemas generados por la resolución de la corte.

A pesar de ello, de acuerdo con las visiones críticas, es factible el juicio político previsto en la constitución a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, por la posible violación a los derechos humanos y garantías individuales de los gobernados y, en su caso, la consecuente vulneración del marco constitucional que nos rige.

Asimismo, es posible considerar, formalmente, según las mismas fuentes, la posibilidad de la renuncia de los ministros de la Suprema Corte que tomaron esta resolución en comento, reconociendo los mismos su responsabilidad y asumiendo una postura de mayor dignidad republicana y ciudadana.

Nosotros opinamos que las dos últimas alternativas tienen pocas posibilidades de prosperar, toda vez que mecanismos reales y formales de nuestro sistema político-jurídico actuarían en su contra. Es un asunto político fundamentalmente. Sólo la acción concertada de la sociedad civil, grupos sociales y partidos políticos podrían ofrecer acciones civiles y políticas que obligaran a los ministros a dimitir. Por supuesto, esta resolución judicial es, por el momento, inimpugnable en términos judiciales, pero no en términos civiles y políticos. Además, aun desde el punto de vista jurídico, el derecho se transforma, atento al continuo e inexorable proceso de cambio social,¹³ y los particulares pueden continuar litigando en contra de los bancos, intentando que el Poder Judicial reflexione y cambie sus criterios (opción difícil, pero no imposible). El derecho no es estático, ni permanente, o inmutable. Como la sociedad, y con la sociedad, cambia en forma constante.¹⁴

Respecto de la posibilidad de la renuncia, planteada por las visiones críticas, de los ministros de la corte, es un asunto que teóricamente podría proceder. Sin embargo, dadas las condiciones del sistema político en el sexenio 1994-2000, la posición política

¹³ Eduardo Novoa Monreal, *El derecho como obstáculo al cambio social*, México, FCE, 1975.

¹⁴ Eduardo Torres Maldonado, cap. 1, "Peculiaridades y limitaciones del derecho económico", *Tiempo compartido*, México, UAM, 1992, pp. 21-44.

del presidente de la República, y la dominación mayoritaria del partido en el poder en el Senado, sería muy difícil que la renuncia les fuera aceptada, en este tiempo.

Una posibilidad más es la acción legislativa del Congreso de la Unión con el fin de corregir los defectos y anacronismos indudables de las leyes y resolver los conflictos planteados por la vía más idónea en estos casos: la vía legislativa. Otra alternativa es la acción del Ejecutivo, propiciando negociaciones de los créditos que estimen, sobre bases reales, el monto de las deudas y en las cuales no se perjudique a los deudores, o incluso, puede pensarse en la emisión de un decreto de expropiación de los bienes en conflicto, sin descartar otras posibilidades.

*Responsabilidad jurídica o política de los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

¿Existe alguna responsabilidad de los ministros de la Suprema Corte de Justicia respecto de la resolución adoptada? Sí. Hay una responsabilidad constitucional política prevista, y ética¹⁵ y, quizás más importante, una responsabilidad republicana e histórica ante los mexicanos. Dirigentes de El Barzón y de la Barra de Abogados presentaron denuncias públicas por responsabilidad política constitucional y legal en contra de los ministros de la Suprema Corte, por la resolución del 7 de octubre de 1998. Quizás los ministros puedan alegar con todo derecho, que ya no pueden ser juzgados legalmente por su decisión judicial. No obstante, el juicio académico y profesional, histórico y social, y ético, no se puede evitar. La historia ya está en marcha y es inevitable analizar cuidadosamente los procesos iniciados y pendientes de resolución.

¹⁵ Ludwig Wittgenstein, *Conferencia sobre ética*, México, Paidós/LCE-UAM, 1997.

*El sistema de nombramiento de los ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

Históricamente, ¿cuál ha sido el papel del Poder Judicial en la vida política de México? ¿El sistema actual de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia y de otros integrantes del Poder Judicial es el único o el más idóneo? ¿Existen otros mecanismos posibles para la integración del Poder Judicial, atendiendo a la historia y evolución del derecho político y los sistemas constitucionales? ¿Qué lecciones históricas tenemos en México? Al respecto, destaquemos algunos aspectos: *a)* con muy pocos episodios relevantes en nuestra historia (como en el caso del Poder Judicial que representaba Juárez, en los tiempos de la Reforma y la república restaurada),¹⁶ el Poder Judicial en México ha desempeñado, en muchas ocasiones, un papel secundario y subordinado en relación con el Poder Ejecutivo, y, con frecuencia ha tenido un papel político menos trascendente que el Poder Legislativo, en especial en los tiempos de dictaduras (presidencias de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y los 71 años de “dictadura perfecta” del PRI). *b)* el sistema actual de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial en México no es el único y, tal vez, no es el más idóneo, por lo que valdría la pena explorar otras vías. *c)* existen otros mecanismos de integración del Poder Judicial en diferentes países (los jueces pueden ser nombrados con la intervención de distintos agentes sociales y políticos). Ahora bien, los jueces también pueden ser selectos¹⁷ (como los nombramientos del Poder Legislativo), como ocurrió a mediados del siglo XIX en México, y como sucede en otros países. Es tiempo de reflexionar acerca de las formas más adecuadas de integración del Poder Judicial y sobre la función político-constitucional del mismo. Proponemos que los integrantes más relevantes del Poder Judicial (jueces, magistrados y ministros) sean nombrados sobre la base de un sistema

¹⁶ Daniel Cosío Villegas, *Historia mínima de México*, México, Colmex, 1994, p. 114; véase también Francois-Xavier Guerra, *Del antiguo régimen a la Revolución*, tomo I, México, FCE, 1995, pp. 52-58.

¹⁷ León Cortiñas-Peláez, *Poder Ejecutivo y función jurisdiccional*, cf. “Apuntes de Battle” (1913), punto 7, México, UNAM, 1982, p. 35.

mixto de elección de los más honestos y selección de los más capaces, atendiendo a criterios y experiencias históricas nacionales y comparativas con otros países, que sean aplicables a la realidad específica de nuestro país.

Cuestionamiento de la votación de la resolución

¿Por qué se dice, popularmente, que votaron en favor de la resolución 8 ministros, y otros 4 votaron en contra? ¿Quiénes son estos ministros? En realidad, tal opinión es incorrecta. No debe decirse que "8 votaron a favor y 4 votaron en contra". En algunas cuestiones y puntos específicos de la resolución comentada existió, ciertamente, disenso parcial de parte de algunos ministros del pleno, a través de observaciones específicas, pero la resolución del 7 de octubre es muy extensa y compleja (no casualmente sino, al parecer, deliberadamente, pues la complejidad y extensión es deliberada y abrumadora) y debe revisarse con detenimiento cada punto de la resolución con el fin de tener un criterio más apropiado. En lo que no cabe lugar a dudas es en el hecho de que no hubo decisión unánime, que sí hubo diferencias, y que algunos integrantes de la corte comprendieron mejor que otros el problema y expresaron algunos disensos interesantes que valdría la pena rescatar. Por supuesto, el disenso parcial en las observaciones de algunos ministros de la corte no cambia el sentido ni modifica el resultado final de la resolución y la responsabilidad es compartida por todos los ministros.¹⁸

*La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en el marco de la división de poderes*

En relación con la división-distribución de poderes, ¿qué sugiere la resolución del 7 de octubre de 1998 de la Suprema Corte de Jus-

¹⁸ Cf. Juventino B. Castro, *La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta*, México, Porrúa, 1998.

ticia? Sugiere que la Suprema Corte de Justicia, en este caso específico, de acuerdo con las visiones críticas, parecería haber renunciado en forma parcial a su función constitucional como el poder público soberano, eligiendo en este cambio subordinarse de manera voluntaria al Poder Ejecutivo, en cierto grado, y lo más grave, al parecer, a las peticiones unilaterales de los grupos financieros y bancarios. Esta aparente subordinación es ya parte de los anales de la historia del derecho mexicano¹⁹ y mundial, y es urgente que se estudien reglas claras para una recomposición y renovación de los ministros que integran el máximo tribunal de nuestro país, en un futuro cercano. En suma, la decisión en comentario de la corte parece asumir, desde esta perspectiva crítica, una naturaleza ilegal, anticonstitucional, antiética e incongruente con el compromiso básico de la constitución mexicana, el Código Civil, y, sobre todo, con el contrato social derivado de la Revolución de 1910, los principios fundamentales del humanismo y de los derechos humanos. Es prudente reflexionar al respecto, analizando las diversas posiciones sobre este tema.

Discusión acerca del "golpe de Estado" en 1994 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación

¿Qué origen tienen los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia? ¿Podría presumirse parcialidad respecto de sus decisiones? ¿Debieron excusarse algunos o todos ellos de conocer y resolver acerca de los asuntos planteados en la resolución? ¿Quién era, en ese momento, el presidente de la Suprema Corte de justicia? En sus orígenes históricos, la corte tuvo 11 ministros y desde fines de 1994 retornó a este número. Para hablar del origen y la composición de la actual Suprema Corte de Justicia debemos remontarnos al cercano año de 1994. Recordemos que, para 1994, la corte estaba compuesta por 21 ministros con la categoría de ministros numerarios. La Suprema Corte funcionaba en cuatro salas (civil, laboral, penal y administrativa). Existía, además, una sala

¹⁹ Cf. Emilio Rabasa, *La constitución y la dictadura*, México, Porrúa, 1998.

auxiliar que atendía diversos asuntos. El presidente no formaba parte de alguna sala en especial, sino que presidía el pleno. La reforma de fines de 1994 y principios de 1995 redujo a 11 el número de ministros que integran la Suprema Corte de Justicia. Es decir, disminuyó el número de miembros de la Suprema Corte prácticamente a la mitad de su antiguo número. Hoy en día, la Suprema Corte funciona en dos salas que resuelven, fundamentalmente, cuestiones constitucionales (aunque una de ellas se dedica a la atención de asuntos civiles y penales y la segunda a la atención de asuntos administrativos y laborales). El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia preside tanto el máximo tribunal como el Consejo de la Judicatura. La corte sesiona en pleno o en salas, en público o en privado, atendiendo a la naturaleza e importancia del litigio constitucional a resolver.

Ahora bien, como resultado de las reformas de fines de 1994, en México nos enfrentamos a un curioso fenómeno que consistió en la virtual “desaparición” de la Suprema Corte de Justicia por aproximadamente tres semanas. Hablamos de un estado de recomposición de la corte o de virtual “inexistencia” que es totalmente inusual en las prácticas republicanas (sólo existen dos antecedentes históricos en México), que sin duda afectó la independencia, funciones y composición del Poder Judicial, y que dejó sin cabeza al cuerpo del Poder Judicial (se preveía en el artículo 6 transitorio de las reformas de 1994-1995 que la última comisión de administración de justicia se encargaría del desempeño de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la corte “jubilada”, en tanto que se establecían e instalaban el Consejo de la Judicatura y la renovada Suprema Corte de Justicia). Esto se debió a que los anteriores 21 ministros de la corte conservaron sus cargos antes de que se llevara a cabo el nombramiento de los nuevos integrantes. En realidad, sólo dos ministros de la corte conservaron sus cargos, siendo los 19 restantes ministros, jubilados. En la prensa, se llegó a mencionar que se trataba de un “golpe de Estado a la Suprema Corte” y que “el Poder Judicial había desaparecido” (las salas y el pleno “desaparecieron” el 1 de enero de 1995, en virtud de la entrada en vigor del decreto de reformas). Tales expresiones, opinamos, parecieran exagerar la dimensión de las

medidas propuestas e instrumentadas por iniciativa del Ejecutivo federal. No se puede negar, sin embargo, que la forma en que fueron desarrolladas afectó de modo negativo la imagen e independencia del Poder Judicial y generó tres semanas de "vacío judicial".²⁰ También, es innegable que el Ejecutivo pudo renovar (merced a la propuesta de una lista de 18 candidatos para elegir 11) al Poder Judicial con integrantes nuevos, que presumiblemente le permitirían mayor flexibilidad y armonía con las políticas a impulsar durante su administración presidencial.²¹

Por supuesto, en estricto sentido, no se puede decir que los actuales ministros actúan con parcialidad respecto de las políticas del Poder Ejecutivo. Pese a ello, la reciente composición de la Suprema Corte de Justicia en 1994 nos lleva a considerar que pueden existir más nexos o sentimientos de simpatía o agradecimiento entre los actuales ministros que entre aquellos que fueron jubilados, debido a la integración de la lista de 18 candidatos a ministros de la corte (en la primera designación de ministros, a raíz de la reforma de 1994-1995, el Ejecutivo no propondría ternas al Senado, sino una lista de 18 candidatos), que finalmente fue propuesta por el Ejecutivo al Senado. Debe recordarse que la "reforma integral del Poder Judicial" fue un lema de campaña, es decir, un tema netamente político, del entonces presidente de la República, y que, por último, se instrumentó a fines de 1994. En síntesis, el presidente Zedillo jubiló a los anteriores integrantes de la Suprema Corte y dio un virtual "golpe de Estado" a la corte, propició la inexistencia de la misma durante tres semanas anárquicas, y "creó una Suprema Corte" con nuevos ministros, con dos excepciones, con obvias implicaciones jurídicas, políticas y sociales: el resultado fueron ministros leales a las políticas presidenciales en turno.

²⁰ A. Pérez Carrillo, "Reforma del Estado y Suprema Corte de Justicia de la Nación", en *Diálogo y Debate de Cultura Política. La Reforma al Poder Judicial*, año 2, núm. 7, México, Centro de Estudios para la Reforma del Estado, A.C., enero-marzo de 1999.

²¹ Sergio García Ramírez, *Poder Judicial y ministerio público*, México, Porrúa, 1997, p. 66.

¿Debieron excusarse los ministros?

Se ha dicho que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su presidente, debieron excusarse del conocimiento de los asuntos motivo de la resolución del 7 de octubre de 1998, debido a que, entre otras cosas, los mismos se habían beneficiado de procesos de reestructuración de créditos con la banca (específicamente con el Banco Internacional), y que, por lo tanto, tal acto podría indicar parcialidad hacia la banca.²² Asimismo, se ha mencionado que algunos funcionarios tuvieron nexos profesionales con instituciones bancarias antes de su nombramiento como ministros, lo cual podría inclinar su juicio hacia los criterios de los banqueros debido a simpatías políticas y compromisos ideológicos, personales o profesionales. De hecho, es cierto que dos ministros de la Suprema Corte fungieron como los principales defensores de los bancos expropiados en septiembre de 1982 por el entonces presidente López Portillo en su último informe.

El caso del licenciado Aguinaco, quien sería posteriormente presidente de la Suprema Corte, es ejemplificativo. El licenciado Vicente Aguinaco Alemán, a principios de la década de 1980 (al igual que otro ministro de la corte, el licenciado Sergio Salvador Aguirre Anguiano), se distinguió como líder del grupo de abogados que encabezó la defensa judicial de los bancos que “expropiara” y “nacionalizara” (más bien “estatizara”) López Portillo. Aguinaco Alemán compartió créditos con el licenciado Ramón Sánchez Medal en el libro *El fraude a la constitución*. Asimismo, en esta defensa, participó el licenciado Fabián Aguinaco Bravo, hábil litigante e hijo del ex presidente de la corte. Como nos relata *Proceso*,²³ estos abogados figuran entre los principales defensores de diversas instituciones que se ampararon contra la resolución presidencial de López Portillo (entre ellas figuraban Bancomer, Serfín, Cremi, Confía, Banamex, Comermex y otras más).

En aquel entonces, los abogados defensores de los banqueros perdieron los amparos. Al perder en la última instancia, recurrie-

²² Véanse los artículos de Agustín Ambríz en la revista *Proceso*, núms. 1145 y 1146, octubre de 1998.

²³ *Proceso*, núm. 1146, 18 de octubre de 1998, pp. 16-17.

ron a la publicación de desplegados —pagados, al parecer, por los dueños de bancos expropiados— para manifestar su desacuerdo y elogiar a los dos ministros que se dignaron emitir una opinión contraria a la decisión de la corte de entonces (y declararse en favor de los bancos). Estos dos ministros fueron Alfonso López Aparicio y Atanacio González Martínez. Los abogados representantes de los bancos expropiados, Aguinaco Alemán y Sánchez Medal, reconocieron a estos dos ministros mencionados como emisores de “brillantísimos, fundados y valientes” votos en contra de la mayoría, toda vez que estos dos votos fueron opositores a la “mayoría silenciosa” de 15 ministros que decidió finalmente los casos. Al respecto, se cita en *Proceso* lo siguiente, transcribiendo la versión de un documento ya histórico, que reproduce la versión de los abogados de los bancos expropiados:

La sesión pública del pleno de la Suprema Corte de Justicia[...]para resolver el recurso de reclamación en el amparo que como abogados patronos interpusimos el señor Vicente Aguinaco Alemán y yo[...]. Constituye, sin discusión ni duda alguna, el asunto de mayor trascendencia social y política de que hasta ahora hayan conocido los tribunales en la historia de nuestro país.

Al efecto, sólo puede decirse que existe un estado de derecho cuando todas las autoridades del país en ejercicio de sus funciones no puedan contrariar la Constitución[...]. Pero ese Estado de Derecho desaparece por completo cuando las autoridades, para tratar de aparentar que no violan la constitución, reforman a ésta para acomodar el texto de ellas a los actos y arbitrariedades que han perpetrado de antemano.

Acusa: [...] la silenciosa mayoría de quince ministros que votó en contra de los brillantísimos, fundados y valientes votos de ustedes dos [les dice a Alfonso López Aparicio y Atanacio González Martínez] en esta sesión memorable, no sólo se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la cuestión anterior, sino que se declaró incompetente para resolverla.²⁴

²⁴ Antonio Jáquez, “Aguinaco Alemán, presidente de la Suprema Corte, defendió en 1983 a los banqueros expropiados y perdió un amparo”, en *Proceso*, núm. 1146, 18 de octubre de 1998, p. 16.

Además, encontramos lo que en derecho constituye, prácticamente, una confesión de la vinculación personal de Aguinaco Alemán con el presidente Zedillo, a continuación.

Aguinaco Alemán ha confesado recientemente que aceptó ser ministro de la corte" [...] porque se lo pidió el presidente Zedillo, pero tacha de falsas las versiones que sostienen que por ese motivo se tuvo que modificar lo relacionado con el tope máximo de edad —tiene ahora 79 años— para poder ser integrante del pleno.²⁵

Existen, por lo tanto, según las fuentes citadas con anterioridad, fundadas razones para estimar como posible la parcialidad de los ministros de la corte, en especial, de algunos de ellos por haberse beneficiado de una reestructuración anticipada de sus créditos bancarios y por sus vínculos personales y profesionales con ciertos miembros de la élite política y financiera del país.

El intento de justificación del presidente de la SCJN

Aguinaco se justifica, en el siguiente texto, respecto de estas suposiciones de posible parcialidad, diciendo que: "Acerca de la circular, en la que informé a los funcionarios del Poder Judicial que el Banco Internacional había concedido reducciones en el pago de sus intereses en sus respectivos créditos hipotecarios"²⁶ lo hizo en términos de sus facultades legales.

La circular en comento decía lo siguiente:

Como es conocido de todos ustedes, las circunstancias financieras por las que atraviesa nuestro país, han provocado graves desequilibrios en las finanzas personales de todos los mexicanos.

Su impacto negativo ha sido especialmente importante en las economías de aquellos que se comprometieron al pago de créditos con la banca comercial en general y con el Banco Internacional en particular.

²⁵ Agustín Ambriz, en *Proceso*, núm. 1148, 1 de noviembre de 1998, p. 26.

²⁶ *Loc. cit.*

Con el propósito de conseguir condiciones más favorables para aquellos integrantes del Poder Judicial de la Federación que tienen relaciones crediticias con esta institución bancaria, se procuraron acercamientos con altos funcionarios de dicha institución.

Como consecuencia de esas pláticas, me complace mucho informarles que se han obtenido nuevas condiciones para los créditos que tienen contratados los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, aplicables de manera retroactiva al mes de diciembre pasado, cuando los efectos de la crisis aún no se hacían patentes. De entre esas condiciones destaca la que consiste en aplicar la tasa de interés que regía en el mes de diciembre para lograr el cálculo de intereses en cada crédito y mantener esa tasa en adelante hasta que las condiciones de mercado no indiquen otra cosa. Asimismo, el banco se comprometió a hacer los ajustes necesarios para adecuar los intereses generados de diciembre a la fecha, para que se calculen conforme a la tasa congelada y acreditar los pagos correspondientes.

Reitero a ustedes las seguridades de mi consideración más distinguida. Vicente Aguinaco Alemán. Mayo de 1995.²⁷

*Solicitudes de juicio político contra los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación*

Considerando que existía una notoria inconstitucionalidad e injusticia en la resolución de la corte del 7 de octubre de 1998, algunos profesionales y organizaciones sociales y profesionales procedieron a la iniciación de trámites de juicio político en contra de los integrantes de la corte. Tal fue el caso de integrantes destacados de la Barra de Abogados. Por ejemplo, el licenciado Javier Gómez Coronel, presidente de la Barra de Abogados, inició los trámites para un juicio político en contra del pleno de la corte, toda vez que las inusuales facilidades que les ha otorgado la banca para reestructurar sus créditos y el sentido de la resolución del 7 de octubre hacen presumir parcialidad y compromisos previos en favor de los bancos

²⁷ *Ibid.*, pp. 26-27.

por parte de los ministros de la Corte.²⁸ Como prueba, se ofrece la circular de mayo de 1995 del presidente de la corte, que señala que Bitar reducirá los intereses de las deudas de los integrantes del Poder Judicial que hubieran contratado créditos. La denuncia respectiva se fundamenta en el artículo 146, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En concreto, dicha fracción establece que los integrantes del Poder Judicial contemplados en la ley están impedidos para conocer de asuntos en los que mediara la aceptación de presentes o servicios de alguno de los interesados.

Asimismo representantes de El Barzón presentaron denuncia solicitando la acción legal del Poder Legislativo en contra de los integrantes de la corte, por lo anteriormente descrito, con criterios coincidentes con los de Javier Gómez Coronel.

Al respecto, el presidente de la corte señalaba a fines de 1998, en relación a la resolución del 7 de octubre, que existía justificación para que no se juzgue a los ministros con severidad, porque éstos se habían limitado en forma exclusiva a interpretar la ley existente; diciendo que el juez “sólo aplica la ley”, señalaba Aguinaco que “los ministros sólo aplicamos la ley y por eso no se nos puede juzgar”. Aguinaco se refiere, con estas justificaciones, al juicio político que promovieron algunos legisladores federales y miembros de organizaciones profesionales en virtud de la decisión del 7 de octubre; en particular, en lo relativo al anatocismo y que tuvo eco en diversos medios de difusión en México.

Contexto socioeconómico y político de la resolución

¿En qué contexto socioeconómico y político se ubica la decisión de la Suprema Corte de Justicia? En el contexto de la globalidad,²⁹ la modernización³⁰ de fines del siglo XX y principios del siglo XXI y,

²⁸ *Loc. cit.*

²⁹ Octavio Ianni, *Teorías de la globalización*, Siglo XXI Editores, México, 1999.

³⁰ George Soros, *La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro*, México, Plaza & Janés, 1999. Véanse, también, Jean-Marie Guéhenno, *El fin de la democracia*, Barcelona, Paidós, 1995; Aldous, Huxley, *Nueva visita a un mundo feliz*, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

sobre todo, del neoliberalismo.³¹ En el contexto de la crisis de poder de un sistema presidencialista y un partido político hegemónico.³² En el contexto de un proceso de profundos cambios sociales de fines e inicios de siglo y del que, por desgracia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, con la resolución sobre el anatocismo, parecen colocarse del lado de las fuerzas más conservadoras y criticables. La decisión de la corte sugiere que los ciudadanos nos enfrentamos, fundamental y desgraciadamente, a uno de los casos más rígidos de neoliberalismo judicial en México y América Latina en sus grados extremos con la resolución del 7 de octubre de 1998. Los ministros del Poder Judicial parecen haberse revelado, en el caso específico de esta resolución, más neoliberales que los Friedman y aún más neoliberales que los propios organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial (instituciones que ya han reconocido, por cierto, los problemas derivados de los excesos del neoliberalismo).

Situación de los "deudores"

¿Cuál es la situación actual de "los deudores"? ¿Quiénes son los deudores? ¿Cuál es el universo de deudores? La situación actual de los deudores es, en pocas palabras, de indefensión, incertidumbre y vulnerabilidad. Curiosamente, los deudores, en México, ya somos todos. No son sólo deudores aquellos que se ven forzosamente colocados en esa categoría por la desgracia de haber confiado en una institución bancaria y haber arriesgado su patrimonio adquiriendo, a través de un crédito hipotecario, una vivienda y patrimonio familiar y que fueron defraudados (ésa es la palabra técnico-jurídica correcta: fraude, y no simplemente "usura"). Debe

³¹ Milton y Rose Friedman, *Free to choose*, Nueva York, Avon, 1980; Immanuel Wallerstein, *Después del liberalismo*, México, Siglo XXI, 1996; Sergio García Ramírez, *Poder Judicial y ministerio público*, México, Porrúa, 1997; Romo Guillén, *La contrarrevolución neoliberal*, México, era, 1997.

³² Enrique Krauze, *La presidencia imperial. ascenso y caída del sistema político mexicano (1940-1996)*, México, Tusquets, 1997; Daniel Cosío Villegas, *El sistema político mexicano*, México, Joaquín Mortiz, 1982.

comprenderse que diversos indicadores sugieren que los deudores somos todos los ciudadanos mexicanos por el problema conjunto de los créditos hipotecarios, la aprobación del Fobaproa, el múltiple “rescate” de los bancos y los “neobanqueros”, y el monto de la deuda pública. En términos generales, todos y cada uno de los mexicanos —y los mexicanos por nacer—, somos deudores en general. Ahora bien, deudores en especial, para el caso que nos ocupa, del anatocismo y créditos relacionados, pueden variar de 1.2 millones de deudores a 10 millones de deudores (según las fuentes y criterios a considerar).

CONSECUENCIAS JURÍDICAS Y NO JURÍDICAS DE LA RESOLUCIÓN

¿Cuáles son las consecuencias, jurídicas y no jurídicas, de la resolución de la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué relación guarda la decisión de la Suprema Corte de Justicia con los temas de justicia, humanismo, ética del Poder Judicial, respeto a los derechos humanos, protección de las garantías individuales, defensa y salvaguarda de la constitución, mantenimiento del orden y respeto al orden público, hermenéutica jurídica y los postulados de la Revolución mexicana? Las respuestas a estas primeras preguntas deberán responderse por los mexicanos en el corto, mediano y largo plazos. En realidad, este trabajo es una tentativa de respuesta general a estas preguntas formuladas primeramente en diversos foros y seminarios profesionales. Pensamos que estas preguntas son contestadas a lo largo del desarrollo de este escrito con el fin de abrir un debate más profundo sobre el mismo.

Posibles acciones de los “deudores”

¿Cuál ha sido, y será, la postura de los deudores que no podrán pagar sus deudas con los bancos? En cuanto a la postura de los deudores que no podrán pagar las exorbitantes e injustas deudas con los bancos, esta pregunta la deben responder fundamental-

mente los propios deudores y la deben sintetizar los representantes de organizaciones de deudores. Pese a ello, existe una amplia gama de posturas posibles: *a)* la más grave de ellas, por desgracia, en diversos casos desesperados, ha sido el suicidio. No tenemos datos precisos, pero sabemos que hubo cientos de personas que tomaron la vía más desesperada y éste es ya un indicador gravísimo. *b)* Problemas de salud (psicosomáticos), la depresión, la abulia y la indiferencia, seguir pagando sin cuestionar los mecanismos y consecuencias. Esta postura representa un gran porcentaje de los deudores. *c)* Ofrecer sus inmuebles y propiedades como “dación en pago”, o participar en los esquemas de “renta inmobiliaria o hipotecaria” que incluye la decisión de pago, son comunes, lo cual refuerza la posible nueva función de las instituciones bancarias, que se transforman, en muchos casos, en gigantescas instituciones inmobiliarias, con el aval de la Suprema Corte. *d)* La negativa de aceptar las condiciones impuestas por las instituciones bancarias derivadas de la decisión de la corte (remarcando que las medidas de presión y de fuerza, como los embargos, se han incrementado e intensificado), participando de manera creciente e intensiva en acciones civiles y políticas de las organizaciones de deudores (a pesar del momentáneo repliegue por el descontento con la decisión de la corte). *e)* Aceptar negociaciones inequitativas impuestas por los bancos.

Postura de las organizaciones de “deudores”

¿Cuál es la postura de las organizaciones de deudores con respecto a la resolución de la Suprema Corte de Justicia? ¿En qué términos pueden negociar con los bancos? Ésta constituye, también, una respuesta que deben proporcionar las organizaciones de deudores. Los términos para negociar con los bancos son diversos y complejos y no determinados. Los deudores fueron colocados en una posición muy desventajosa por la decisión parcial e injusta de la corte. Aquí, las decisiones requieren una estrategia general y tácticas y negociaciones particulares, caso por caso. La decisión de la Suprema Corte de Justicia destruyó, estratégicamente, según

las posiciones críticas, todas y cada una de las tácticas de defensa legal de los deudores, provocando la indefensión, vulnerabilidad e incertidumbre de los mismos y la estupefacción de sus abogados. Por ello, se afirma por la enorme mayoría de los abogados asistentes a diversos foros profesionales que la Suprema Corte de Justicia ocupó el lugar de los defensores legales de los bancos.

Postura de las instituciones financieras

¿Qué postura guardan los bancos respecto de los deudores, con posterioridad a la resolución de la Suprema Corte de Justicia? No existe una postura uniforme. Las políticas y prácticas varían de acuerdo a las distintas instituciones bancarias. Es sabido, sin embargo, que antes de la resolución del 7 de octubre existieron diversas medidas de presión de los bancos para obligar a los deudores a pagar, reestructurar o negociar sus deudas conforme a las condiciones que los bancos imponían. Las llamadas amenazadoras y prepotentes, por ejemplo, se daban a cualquier hora del día o avanzada la noche, y en cualquier día de la semana. Las actitudes de los gestores y representantes de los bancos podrían ser amables en un principio y, después, eran, incluso, amenazantes. Asimismo, son frecuentes los comunicados por escrito de supuestos bufetes jurídicos y “conciliadores” en favor de los bancos. Al acudir los clientes al banco a solicitar los estados de cuenta, los mismos sólo se autorizaban a cuentagotas, con meses de anticipación, y únicamente por periodos de tres meses. Los bancos ocultaban, maquillaban y retrasaban la información al deudor. En pocas palabras, hoy esas prácticas se han intensificado. Los bancos saben que tienen “la sartén por el mango, y el mango también”. Lo cierto es que la Suprema Corte de Justicia, al proteger, tutelar y defender jurídica, económica y políticamente a las instituciones financieras con la resolución sobre el anatocismo, hizo crecer la arrogancia, prepotencia, unilateralidad y autoritarismo de los bancos para tratar con los clientes-deudores. Como una de las consecuencias, al negar a los deudores la posibilidad de impugnar las acciones arbitrarias y autoritarias de los bancos, los

deudores se hallan con la denegación del acceso constitucional a la justicia. De antemano, saben que los bancos tienen la batalla legal ganada si ellos iniciaran una acción judicial en contra de los mismos. Por lo tanto, existe, como resultado de la resolución del 7 de octubre de 1998, una acción que teóricamente repuntaría como una especie de denegación del acceso a la justicia,³³ una crisis de confianza hacia la Suprema Corte de Justicia, y una enorme crisis de credibilidad y de confianza en los bancos. Al cerrarse las vías jurídicas, los deudores acudirán, al parecer, de acuerdo con lo manifestado por diversas organizaciones, a vías no jurídicas (políticas, sociales, culturales) para intentar defender sus derechos. La única esperanza es el Poder Legislativo, si es que éste comprende la gravedad de la situación y decide actuar en representación adecuada de la soberanía que constitucionalmente tiene (sobre todo los diputados con conciencia social). Y, en caso de que no existiera conciencia social de los legisladores, quedaría el camino abierto a la acción de la gente, del pueblo, de la ciudadanía, de los movimientos sociales.

Estrategias de presión y negociación de las instituciones financieras

¿Qué estrategias de negociación piensan impulsar los bancos con respecto a los deudores que no puedan pagar o que se nieguen a pagar? Todas las imaginables y posibles, que no alteren el orden jurídico y social. Esto significa, sin duda, que los bancos llevarán a cabo acciones de hecho (y éstas son las más preocupantes) y derecho para obligar a los deudores a reestructurar, pagar o negociar sus deudas. También, están recurriendo a la brevedad posible a aceptar, en los casos en los que les es conveniente, las daciones en pago de los inmuebles u otros bienes que puedan garantizar el pago de las deudas. Por desgracia, no existe la menor sensibilidad social ni política, en este momento, por parte de las instituciones bancarias, del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo para tratar de

³³ Mauro Capeletti y Bryant Gart, *El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos*, México, FCE, 1978.

manera conveniente este asunto. El Poder Legislativo, sorprendentemente, se ha mantenido paralizado e incapaz de responder con eficacia y prontitud al respecto. Un gran número de embargos se están procesando y muchos ya se realizaron, con la consecuente violencia "legalizada" que los desahucios implican. Vale la pena destacar que estos actos son semilleros de enorme descomposición social y raíces de donde pueden brotar actos de protesta, movilizaciones e, incluso, no es descartable la explosión de actos de violencia, como han señalado representantes de El Barzón. Las instituciones bancarias pueden convertirse en gigantescas inmobiliarias rematando los bienes de los deudores, consumando lo que pueden considerar algunos como "el gran negocio-fraude del siglo", todo en virtud de las consecuencias jurídicas de la resolución de la Suprema Corte.

Existen además, por supuesto, propuestas derivadas del aprovechamiento del capital político que esto entraña para los partidos políticos. En especial, la elite en el poder ha tomado la delantera en muchas propuestas, en virtud de sus nexos con el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los banqueros. De esta forma, se hacen propuestas de negociaciones con los deudores que implicarían "quitas" de porcentaje variable. Al parecer, hipotéticamente, esto pudo ser preparado con antelación para otorgarle un capital político determinado al Partido Revolucionario Institucional en tiempos de elecciones presidenciales. Existen, también, algunas propuestas de algunos partidos de oposición al respecto. No obstante, los resultados no son todavía predecibles. Lo que nos parece inaceptable es que los diputados —sobre todo los de oposición— no hayan analizado con más cuidado la decisión de la corte y sus consecuencias jurídicas, políticas y sociales, y no la hayan rechazado, toda vez que es indudable que la misma traerá efectos muy negativos social y políticamente. Asimismo, es asombroso cómo diputados con intereses políticos futuristas han aceptado, con un conformismo apabullante, la decisión de la corte. Esto es un precedente muy negativo para la independencia y papel estratégico del Poder Legislativo en el futuro de la República en México. Los panistas y el grupo del presidente Fox, al parecer, han apoyado los intereses de los banqueros. El PRD y sus líderes

se han visto muy tímidos, o bien, han “concertacionado” los intereses de los deudores por ganancias políticas de grupo o individuales.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Y DEFENSA DE LOS “DEUDORES”

¿Qué estrategias de negociación pueden seguir los deudores? En primer lugar, no actuar de modo individual, a menos que tengan una excelente asesoría profesional de abogados no corruptibles, competentes y conocedores de estos asuntos. En segundo término, afiliarse a organizaciones de deudores u organizaciones ciudadanas. Los partidos políticos deben ofrecer opciones serias de asesoría en ese sentido. En tercer lugar, no tomar decisiones precipitadas, no regalar su patrimonio, ni reestructurar bajo presiones. En cuarto, defender su dignidad personal y no permitir tratos arbitrarios por parte de los bancos. En quinto lugar, es posible la negativa del pago o reestructuración como medida de negociación, con el propósito de generar condiciones menos abusivas (toda vez que los bancos exigen la reestructuración en UDIS), siempre y cuando se tenga apoyo de organizaciones de deudores. Este último aspecto es muy delicado, pues debe tomarse tal decisión como medida extrema y tener adecuado respaldo y asesoría, evitando caer en el marco de la ilegalidad. En sexto término, debe proponerse en todo momento el pago justo, y nada más, de la deuda. O bien, en su caso, la dación en pago o la renta hipotecaria puede ser el último paso, con la asesoría apropiada. Séptimo, no perder de vista el contexto general de su caso. Éste no es un problema particular, sino general, de grandes alcances y repercusiones nacionales.

Contexto socioeconómico y relación del anatocismo y el Fobaproa

¿Existe alguna relación entre la resolución de la corte y la negociación del Fobaproa? ¿En qué contexto social y económico se ubican

ambos asuntos? En nuestra opinión, pueden estar estrechamente vinculados bajo un modelo político imaginario e hipotético que puede bosquejarse brevemente. De hecho, podemos suponer que los tiempos políticos para la negociación de la resolución de la corte sobre anatocismo y el Fobaproa³⁴ pudieron ser cuidadosamente calculados y premeditados por elites del partido en el poder, en “concertación” con otros partidos y grupos políticos y económicos. El objetivo político podría ser, nos parece, negociarlos en tiempos cercanos, pero separados, intentando que ambos se aprobaran a la brevedad posible y con los menores problemas políticos y sociales. Los dos asuntos son parte evidente de la agenda económica del Poder Ejecutivo, que sugerirían haber sido planeados cuidadosa y previamente, con varios objetivos. Entre éstos se encontrarían, continuando con este ejercicio intelectual: hacer recaer el costo de la crisis económico-financiera detonada en 1994 sobre el común de la población mexicana, relevando de cualquier responsabilidad a los responsables de las instituciones financieras; salvar las instituciones en crisis, los bancos y casas de bolsa, al capital especulativo y, con ellas, en realidad, salvar a los dueños y responsables de su manejo. Es decir, se pudo haber planeado un rescate bancario con fondos públicos, al estilo del rescate carretero. Otro objetivo hipotético podría ser manejar el capital político de ambos problemas (el Fobaproa y la resolución sobre anatocismo) a través del partido en el poder, como alternativa de “transición democrática”, para que éste pudiera ganar mayor credibilidad, popularidad y fuerza política para la carrera presidencial. Así, hipotéticamente, si un partido político (PRI o PAN) “soluciona” de manera aceptable esos dos grandes conflictos, (o bien, el “PRIAN”, o la elite neoliberal en su conjunto), asegura mejor capital político para su candidato a la presidencia, puede ser recompensado en forma adecuada por el capital financiero y especulativo que puede corresponder, en agradecimiento, los favores recibidos en ambos asuntos. Otro objetivo derivaría, en este modelo político hipotético, de la aplicación de los programas neoliberales y, supuestamente, adquirir también prestigio internacional

³⁴ Andrés López Obrador, *Fobaproa: expediente abierto*, México, Grijalbo, 1999.

como el país donde los deudores son forzados, a cualquier costo, a pagar sus deudas para garantía del capital. Sin embargo, estas últimas ideas de la elite que hoy en día gobierna México son absolutamente erróneas, toda vez que la decisión de la Suprema Corte y la pretendida resolución del Fobaproa que propone el PRI y parecen avalar otros grupos políticos (PAN) son medidas radicalmente injustas, con un altísimo costo político y social, y que económicamente tendrán un efecto devastador sobre el mercado interno y los ya pobres y míseros bolsillos de la clase trabajadora y la clase media mexicanas. El costo del neoliberalismo es muy alto. Es un suicidio masivo, nacional, mantener el “mejor” programa neoliberal del mundo y con la mayor protección del capital especulativo y “golondrino”, y los salarios más bajos internacionalmente. Incluso, las mismas instituciones que recomendaron y condicionaron con sus préstamos financieros la adopción de medidas neoliberales en los países no industrializados han dado marcha atrás y han admitido los graves problemas sociales, insolubles dilemas políticos y contradictorios efectos económicos que el neoliberalismo ha provocado en lo que se conocía como tercer mundo (hoy, incluso, se habla ya de un cuarto mundo). El propio papa, S.S. Juan Pablo II, en su visita de 1998 a México, se vio obligado a condenar el “neoliberalismo a la mexicana”.

*Alternativas viables de solución a los conflictos
derivados de la resolución*

¿Qué alternativas viables de solución existen para estos conflictos? ¿Hay, en realidad, tales alternativas? ¿Cuál es la función y papel de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en este contexto? ¿Cuál es el papel de los profesionales y académicos en estos debates? Esto es algo que sólo la ciudadanía puede ayudarnos a definir. Nosotros sólo podemos expresar una modesta opinión y fomentar que los lectores reflexionen sobre estos problemas, preocupados colectivamente por el bien común de México. Sí existen alternativas viables, si atendemos a la necesidad de repensar el modelo de desarrollo que estamos siguiendo y las con-

secuencias económicas, culturales, políticas y sociales del mismo. Es importante no sucumbir tan ingenuamente a las necesidades del mercado internacional y atender nuestros problemas internos, nuestro mercado y sociedad nacional. La sociedad mexicana no debe orientarse de modo exclusivo a la atención de los asuntos macroeconómicos y a la exportación indiscriminada de mercancías (reconociendo que ambas esferas son indispensables, pero que la racionalidad de la política económica debe cambiar). La atención de nuestros problemas nacionales es prioritaria. No debemos ser “candil de la calle y oscuridad de la casa”.

Los espejismos de la globalización y los supuestos encantos del neoliberalismo deben ser desmitificados.³⁵ Al parecer, de nuevo estamos cambiando espejitos y cuentas de colores por oro y plata. No olvidemos que el bienestar de los seres humanos, de los varones y mujeres de un país, es el primer fin del desarrollo económico. A fin de cuentas, eso es humanismo. La defensa de la soberanía nacional y la lucha por la dignidad humana y la mejor calidad de vida de los mexicanos debe ser el asunto número uno en nuestra agenda de prioridades. Empleo, salud, vivienda, alimentación, educación, seguridad y justicia son aspectos que hay que atender con urgencia. Por otro lado, la función de los tres poderes es, simplemente, actuar como tales, responsable, sabia y prudentemente, respetando sus respectivas esferas y coordinando sus mejores esfuerzos para resolver en conjunto los problemas que enfrentamos.

El papel de los profesionales y académicos y, sobre todo, de las universidades (y de las universidades públicas) es propiciar el debate académico de los problemas, sugerir alternativas de solución y participar respetuosa, pero firmemente, en los procesos de cambio social que estamos viviendo.³⁶ Estamos en un momento y tiempo históricos decisivos; nuestra generación, o nuestras generaciones, tienen una enorme responsabilidad que no deberá ser soslayada. Obviamente, el panorama es complejo y difícil, pero ya es tiempo de participar en dichos procesos.

³⁵ L. Cortiñas-Peláez, *op. cit.*, pp. 42-43; I. Wallerstein *op. cit.* G. Soros, *op. cit.*

³⁶ Max Weber, *El político y el científico*, México, Colofón, 1997.

ÉTICA, JUSTICIA Y “NEOLIBERALISMO” JUDICIAL

*Postura de los señores ministros
y opiniones críticas*

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia han afirmado, respecto a la filosofía, lógica y ética que guía su criterio para haber emitido la resolución del 7 de octubre de 1998, que los mismos se limitaron a “aplicar la ley” y a respetar los principios del Estado de Derecho. Su postura técnica, lógica, filosófica y ética puede leerse en el contenido de la misma resolución del 7 de octubre y en diversos comunicados y entrevistas públicas que han concedido a los medios de comunicación. La postura de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es, en esencia optimista, al parecer basada, entre otros criterios, en la escuela del “realismo judicial”, aparentemente en la lógica kelseniana³⁷ y en otras teorías más, y autojustificativa de la ética asumida. Nosotros no ponemos en duda la convicción y el derecho que asiste a los ministros de la corte de defender y justificar sus puntos de vista. Sin embargo, ha sido frecuente que, en diversos foros profesionales y en diferentes espacios académicos, se critique la postura de los ministros de la Suprema Corte en el caso del anatocismo. **El propio presidente de la Suprema Corte ha invitado a la academia a expresar opiniones críticas respecto de la actuación del Poder Judicial. Y es en aras de esa invitación que escribimos y presentamos el presente trabajo. Así, como en muchos problemas, el presente caso tiene sus luces y sombras.** La visión oficial, optimista y autojustificativa de los ministros de la Suprema Corte, —insistimos— es muy respetable y necesaria para entender dicha resolución. No obstante, vale la pena analizar las distintas versiones y criterios que han alimentado otras versiones, entre ellas las sustentadas por una postura contraria a la oficial y que no adoptarían una postura optimista al respecto. Como un ejercicio intelectual, llevemos a cabo una revisión de las posturas críticas que se apoyan en referencias literarias y filosóficas con una visión ética distinta y

³⁷ Hans Kelsen, *Teoría general del derecho y del Estado*, México, UNAM, 1995.

fundadas en consideraciones ético-científicas.³⁸ Retomamos diferentes opiniones de más de tres docenas de juristas y académicos que participaron en foros profesionales y académicos sobre el anatocismo.³⁹

La ética "neoliberal"

Al parecer, la decisión de la Suprema Corte de Justicia del 7 de octubre de 1998 ha sido estimada por diversos académicos,⁴⁰ como una de las manifestaciones más evidentes del neoliberalismo judicial a escala mundial y parece inspirarse, además, en las recetas económicas de los "Chicago Boys", los Friedman,⁴¹ Hayek, y los economistas que propiciaron el "Milagro chileno".⁴² Con el fin de ilustrar mejor estas opiniones, revisaremos los principales personajes literarios que han sido mencionados por académicos, juristas, líderes de organizaciones de deudores, periodistas y analistas del tema. Hacemos una referencia general a los mismos toda vez que nuestro único interés es académico y destacar las diferentes alegorías culturales y literarias que usaron las personas señaladas para caracterizar el tema en comento. En nuestra revisión, inclui-

³⁸ M. Capeletti y B. Garth, *op. cit.*; Albrecht Wellmer, *Ética y diálogo. Elementos del juicio moral en Kant y en la ética del discurso*, Barcelona, Anthropos-UAM, 1994; Ludwig Wittgenstein, *Conferencia sobre ética*, México, Paidós/ICE-UAM, 1997; Fernando Savater, *El valor de educar*, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1997; F. Savater, *Ética como amor propio*, México, CONACULTA/Grijalbo, 1991; M. Weber, *El político y el científico*, México, Colofón, 1997.

³⁹ V. gr; los organizados por el Conapod en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, por el Seminario de Desarrollo Económico del Departamento de Derecho de la UAM en la Casa del Tiempo y otro más en la UAM Azcapotzalco y eventos profesionales en distintos hoteles en la ciudad organizados por organismos del gremio, así como un desayuno organizado por la Barra Latinoamericana de Abogados en el hotel Ma. Isabel Sheraton con el doctor Ignacio Burgoa Oríguela, por mencionar algunos.

⁴⁰ Juristas de diferentes corrientes políticas e ideológicas, como Emilio Krieger, Ignacio Burgoa, Jesús Trápaga y otros, han manifestado su opinión en este sentido.

⁴¹ Milton y Rose Friedman, *Free to choose*, Nueva York, Avon Books, 1981.

⁴² Eduardo Torres Maldonado, *Tiempo compartido*, México, UAM, 1992, pp. 39-44; I. Allersstein, *op. cit.* G. Soros, *op. cit.*

mos algunos personajes bíblicos, interpretando la *Biblia* como literatura, por lo que las citas no implican, bajo ningún concepto, la adopción de dogmas o adoctrinación religiosa o ideológica alguna. Pasemos, pues, a esta síntesis de opiniones, haciendo énfasis en la revisión literaria y filosófica de las citas para entender mejor la ética y la "moral"⁴³ que, según esta visión no oficial, ha alimentado la Resolución sobre Anatocismo de la Suprema Corte.⁴⁴

Reflexiones sobre diversos aspectos jurídicos y culturales relativos a la Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Desde un punto de vista jurídico, filosófico, literario y una visión crítica, no oficial, tendríamos que concluir, en este ejercicio intelectual de recopilación de diversas opiniones sobre el tema, que la ética prevaleciente en la resolución del 7 de octubre de 1998 comentada en este trabajo podría ser muy similar a la de diferentes personajes literarios, como los siguientes: el de la ética farisea, que alimenta el espíritu del Caín de la *Biblia* (por el egoísmo que lo lleva al homicidio de su hermano); la ética del Tartufo de Molière (por el engaño del amigo, al que Tartufo hace donar sus bienes, intenta seducir a su esposa y, después, no duda en traicionar a su benefactor, intentando el embargo de sus bienes); la ética del usurero Shylock, de Shakespeare (el usurero Shylock pide la aplicación literal y rígida de las leyes para cortar una libra de carne de su deudor Antonio, exigiendo al juez Belorio que aplique las leyes venecianas estrictamente); la moral podría ser muy similar a la de la abuela desalmada del cuento de Gabriel García Márquez *La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada* en donde la desalmada abuela prostituye a Eréndira para hacer negocio y sobrevivir a su manera; la ética de Mr. Hyde ante el

⁴³ A. Wellmer, *op. cit.* también véase I. Wittgenstein, Ludwig, *op. cit.*

⁴⁴ Queremos insistir en nuestra postura de respeto institucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el respeto personal que profesamos hacia sus ministros, resaltando que este estudio es un ejercicio académico que intenta rescatar las impresiones generadas por la resolución sobre anatocismo citada.

Dr. Jekyll, la genial obra de Stevenson (por su transformación y conversión en un ser del mal, aniquilando el bien que representaba el respetable Dr. Jekyll); la ética del Fausto y del Zorro Reineke de Goethe (por su diabólica habilidad de los personajes para engañar, convencer, dañar y manipular al rey y a toda la corte, y al pueblo, y aun así aparentar ser dignos, justos, y poseedores de las más grandes virtudes, siempre apegados formalmente a la ley); podrían tener la moral de los perversos ancianos representantes del espíritu de Tezcatlipoca y ser portadores de espejos negros y, entonces, ser los enemigos y ancianos embaucadores de Quetzalcóatl, a quien hacen perder el juicio; exclusivamente desde esta perspectiva crítica, la ética asumida podría ser similar a la de Mr. Scrooge, el célebre personaje navideño de Dickens; con esta lógica hipotética, se ha mencionado que se podría abrir la caja de Pandora de la sociedad mexicana de modo irreflexivo, y, abrir, también, el horizonte y el tiempo a los 4 jinetes del Apocalipsis, sin esperanza de apertura del séptimo sello. Es evidente que, desde esta visión crítica de la ética, quizá aplicable al caso de la resolución del 7 de octubre de 1998, se podría convertir a la Suprema Corte en un lugar en donde, hipotéticamente, en vez de aplicar leyes de justicia y del Estado de Derecho, se aplicaran las leyes del mercado, las leyes del encaje y las leyes de la selva, beneficiando de manera exclusiva los intereses de los mercaderes. Sin duda, en el caso de que esta visión crítica fuera comprobada como veraz en el futuro, con el paso del tiempo, alguien se sentiría tentado a expulsar a los mercaderes del templo, siguiendo la alegoría bíblica. Respecto de la expulsión de los mercaderes, la *Biblia* dice: “[...]entrando en el templo, [Jesús] comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo; volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas[...]. Y les enseñaba, diciéndoles: ‘¿No está escrito? ¿Mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes? Pero vosotros la tenéis hecha una cueva de bandidos’”.⁴⁵ Podría ser, también, que desde esta óptica no optimista y no oficial, la moral de la corte, en su decisión sobre el

⁴⁵ Véase la “Expulsión de los vendedores del templo”, en *Biblia de Jerusalén*, Bilbao, Desclée de Brower, S.A., p. 1448.

anatocismo, fuera psicológicamente más influida por el impulso de *tanathos* (representación de la muerte y el mal) antes que por *eros* (representación del amor, el bien y la vida) de acuerdo con Freud y Erich Fromm.⁴⁶ Por último, podría interpretarse, desde la lógica señalada, que en la resolución del 7 de octubre de 1998 se podría adoptar una filosofía política que algunos han llamado maquiavélica,⁴⁷ erróneamente aplicada porque, en vez de favorecer al "príncipe" y al sistema político, se vulneraría la parte más importante de un Estado de Derecho: la confianza en las instituciones y la legitimidad y legalidad de la actuación de los poderes públicos. De comprobarse en el futuro la veracidad de esta lógica negativa, podría decirse por los defensores de esta visión crítica que tal Resolución dictada por los ministros de la SCJ los haría, más que portadores de un mensaje de paz y de justicia social, heraldos de un mensaje judicial que corroería los cimientos de la *cohesión social* en nuestro país; y, en caso de no aplicar la constitución y la ley sabia y expeditamente en la administración de justicia, como es su deber constitucional, con esta resolución sobre anatocismo, los ministros de la Suprema Corte podrían convertirse en portadores de un mensaje de inestabilidad, parcialidad e injusticia social. De ser acertada esta visión crítica, es probable que se haya sembrado ya, con esta resolución y con otras medidas de política económica, una de las semillas infortunadamente fértiles de la revolución social mexicana del siglo XXI. Y esto, por supuesto, desde esta perspectiva crítica, no sería justo, constitucional, legal, necesario, ni correcto. Como se observa, la percepción de los críticos sobre los considerandos éticos y literarios que pudieron alimentar la resolución de la corte en comentario, es muy aguda. Corresponde al lector juzgar sobre su pertinencia, certeza o veracidad.

⁴⁶ En tal caso, se ha dicho, que en vez de anatocismo se podría hablar de "tanatocismo".

⁴⁷ Nicolo Maquiavelli, *The prince (great books of the western world 23)*, Nueva York, Encyclopaedia Britannica, 1970.

*Nuestra opinión respecto de la resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*

Nos parece que, con independencia de la postura que se adopte al respecto (la oficial de la Suprema Corte o la crítica de juristas y académicos), es tiempo de cambiar, de cambiar primero nosotros, en una revolución interna y pacífica, e institucional, para así cambiar a nuestro México. Y es tiempo de participar en los asuntos públicos porque los mexicanos no nacimos para obedecer ni para callar, ni para ser pasivos ante la injusticia. Nacimos para participar en la vida de nuestra comunidad y en sus diversos asuntos de gobierno. Aunque nuestra participación se limite, en este momento, con humildad profesional, a un discurso jurídico desde un espacio académico, universitario y profesional y a una modesta voz ciudadana, que se concreta a estudiar diferentes lógicas, éticas y perspectivas para analizar soluciones a nuestros grandes problemas nacionales. En ese sentido, nosotros consideramos que la Suprema Corte de Justicia, en su resolución sobre anatocismo, no adoptó la postura jurídica y racionalmente correcta, conforme a la interpretación de la legislación mexicana aplicable (en particular el Código Civil), beneficiando con su resolución a la parte más poderosa y a la que obtendría un lucro indebido con motivo de las controversias relativas al anatocismo. En consecuencia, al no ser correcta la racionalidad ni la técnica jurídica usada por la Suprema Corte, en el caso específico de esta resolución, se ha llegado a una decisión injusta en perjuicio de millones de mexicanos convertidos en deudores y en detrimento del propio sistema jurídico político mexicano y del sistema de mercado e interés financiero de los mismos banqueros, que intentaron (en forma errónea) defender tal decisión judicial.

EPÍLOGO

Factores reales de poder y la Constitución de 1917

Nuestra constitución organiza —todavía— un sistema de economía mixta, de capitalismo híbrido, en donde se establece la división de poderes y la protección del capital y la propiedad privada es parte (con las garantías de igualdad, libertad y seguridad) de los postulados constitucionales fundamentales. Pero es cierto, también, que establece un constitucionalismo social, democrático, en beneficio del pueblo, como parte del proyecto original de la Constitución de 1917, que debemos impulsar, aplicar y hacer efectivo.⁴⁸

Quisiéramos afinar este análisis recordando las palabras del célebre constitucionalista Lassalle, quien nos ha dicho que una constitución no es una simple hoja de papel, sino la suma de los factores reales de poder que imperan en un país. Lassalle definía los factores reales de poder diciendo que “los factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad son esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son”.⁴⁹

Posteriormente, Lassalle describe los diferentes factores de poder en una sociedad, define la monarquía, la aristocracia, la gran burguesía (recordemos que analiza la Prusia de mediados del siglo XIX), a los *banqueros*, la conciencia colectiva, la cultura general, y la pequeña burguesía y la clase obrera. Analicemos lo que afirma respecto de estos dos últimos factores de poder:

Imaginémonos ahora que el gobierno, inclinándose a proteger y dar plena satisfacción a los privilegios de la nobleza, de los banqueros, de los grandes industriales y de los grandes capitalistas, decidiera privar

⁴⁸ D. Cosío Villegas, *El sistema político mexicano*, México, Joaquín Mortiz, 1982; también véanse L. Cortiñas-Peláez, *Fundamentos de derecho económico*, México, Porrúa, 1998; E. Torres Maldonado, “Proyecto constitucional, economía mixta y los inicios de la ingeniería constitucional del neoliberalismo en México. El periodo 1982-1988”, *Alegatos*, núm. 41, México, UAM-A, enero-abril, 1999, pp. 79-86.

⁴⁹ F. Lassalle, *¿Qué es una constitución?*, México, Colofón, 1999, pp. 18-19.

de sus libertades políticas a la pequeña burguesía y a la clase obrera. ¿Podría hacerlo? Desgraciadamente, señores, sí podría, aunque sólo fuese transitoriamente; la realidad nos tiene demostrado que podría...

Pero, y si se tratara de despojar a la pequeña burguesía y a la clase obrera, no ya de sus libertades políticas solamente, sino de su libertad personal; es decir, ¿si se tendiera a declarar personalmente al obrero o al hombre humilde, esclavo, vasallo o siervo de la gleba, de volverle a la situación en que vivió en muchos países durante los siglos lejanos, remotos, de la edad media?, ¿prosperaría la pretensión? No, señores, esta vez no prosperaría, aunque para sacarla adelante se aliasen el rey, la nobleza y toda la gran burguesía. Sería inútil. Pues, llegadas las cosas a ese extremo, ustedes dirían, nos dejaremos matar antes que tolerarlo. Los obreros se echarían corriendo a la calle, sin necesidad de que sus patrones les cerrasen las fábricas, la pequeña burguesía correría en masa a solidarizarse con ellos, y la resistencia de ese bloque sería invencible, pues en ciertos casos extremos y desesperados, también ustedes, señores, todos ustedes juntos, son un fragmento de constitución.⁵⁰

Conciencia del Poder Judicial y disidencias en la SCJN

Por supuesto, existen excepciones y relativizaciones que podemos hacer. La primera de ellas es que no todas las decisiones de la Suprema Corte han sido de esta naturaleza,⁵¹ y que existen visiones optimistas y críticas (ambas respetables) de la resolución de la Suprema Corte de Justicia. La segunda, el Poder Judicial Federal es mucho más amplio y poderoso que la propia Suprema Corte. Existen magistrados y jueces de distrito que, a pesar de ser subordinados jerárquicamente de los ministros de la Suprema Corte, defienden, también, como los ministros, su profesionalismo, su imparcialidad, su integridad personal. Estamos convencidos de

⁵⁰ *Idem.*

⁵¹ Compárese la recopilación de 75 decisiones judiciales que, como ejemplo del excelente y profesional trabajo jurisdiccional y técnico-jurídico han realizado los ministros de la Suprema Corte, en la publicación siguiente: Suprema Corte de Justicia, *75 decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación* (novena época), México, Suprema Corte de Justicia, 1998.

que en la conciencia de muchos de ellos existe un gran pesar por la decisión adoptada por los ministros y su presidente de la Suprema Corte en turno. La tercera es que la resolución del 7 de octubre no obtuvo la unanimidad del pleno. Existieron tres voces disidentes en puntos parciales de la resolución. A pesar de que los 11 ministros validaron la resolución en comento, podemos suponer que algunos de ellos tuvieron ciertos problemas para apoyar sin reservas la decisión liderada por el presidente José Vicente Aguinaco. Por supuesto, esta disidencia parcial no cambió el sentido ni los efectos de dicha resolución, pero al menos nos indica que hubo un ápice de conciencia social en algunos de los ministros. Al respecto, pueden consultarse algunas opiniones aisladas de ministros como Juventino V. Castro.⁵²

*Aún es tiempo. Confianza en México, su gente, su historia,
su cultura y su Constitución Política de 1917*

Por otro lado, debemos subrayar, que la existencia, vigencia, respeto y defensa de la constitución es lo que garantiza nuestra capacidad y oportunidad de convivencia pacífica, segura, moderna y civilizada, y la existencia y estabilidad de nuestra novísima cohesión social.⁵³ La vulneración de nuestra constitución, de nuestro pacto o contrato social originario, representaría exactamente lo contrario, y nos ubicaría, histórica y necesariamente, en una disyuntiva: una nueva revolución, y quizás, una nueva constitución.⁵⁴ Existen vías

⁵² Juventino Castro, *La mutación estructural del derecho en México*, México, Porrúa, 1998; J. B. Castro, *La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta*, México, Porrúa, 1998.

⁵³ Elisur Arteaga, *Derecho constitucional*, Oxford University Press/Harla, México, 1998.

⁵⁴ Véase Edgar Bodenheimer, *Teoría del derecho*, México, FCE, 1994; L. Cortiñas-Peláez, *Fundamentos de derecho económico*, México, Porrúa, 1998; Yehezkel Dror, *La capacidad de gobernar, informe al Club de Roma*, México, FCE 1996; Alejandro del Palacio, *Neoliberalismo y revolución. Crisis y necesidad de cambio*, México, Claves Latinoamericanas, 1995; Eduardo Novoa Monreal, *El derecho como obstáculo al cambio social*, México, FCE, 1975; Abelardo Villegas, *Violencia y racionalidad*, México, UAM, 1985; Giovanni Sartori, *Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*, México, FCE, 1996.

pacíficas y vías violentas para los cambios sociales. Todos deseamos la paz y esperamos que la violencia no sea la única salida que le dejen al pueblo, a la vuelta de la rueda de los siglos y de los ciclos históricos (1810-1910-¿2010?),⁵⁵ tal y como hemos señalado en diversos círculos académicos y, por lo tanto, coincidimos con los planteamientos críticos de algunos juristas y dirigentes sociales en este caso exclusivo de la resolución de la corte sobre el anatocismo.⁵⁶ Es tiempo de corregir nuestro destino y tomar en nuestras manos las riendas de nuestra propia vida. Sin embargo, en el marco de un realismo viable y optimista, y en el sentido más laico y filosófico, como se decía en la antigüedad, “que Dios nos bendiga” si no sabemos hacer frente a los huracanes y terremotos económicos, políticos, culturales y sociales que, en el naciente siglo XXI, enfrentaremos los mexicanos y muchos pueblos del mundo como resultado de la aplicación indiscriminada de las leyes salvajes del neoliberalismo y de la aplicación irracional de las leyes del mercado y las leyes del encaje. Tenemos confianza en México, esperanza en las nuevas generaciones de mexicanos así como una firme convicción laica y racional, basada en la formación científica, en que al final sabremos salir adelante de muchas tormentas, arribando a puerto seguro nuestra nave nacional, haciendo valer la constitución, el contrato social y la República que nos dio vida como nación independiente y soberana. Esperamos que el Poder Legislativo asuma su responsabilidad en el caso que nos ocupa en este trabajo, con propuestas legislativas específicas, como se demuestra en el anexo I, del tomo I, de esta obra científica colectiva,⁵⁷ y que el

⁵⁵ Consideramos en estas reflexiones finales la posibilidad de que, de acuerdo a las teorías de la repetición de los ciclos históricos, así como en 1810 se suscitó la revolución de Independencia, y en 1910 la revolución social, en virtud del actual desarrollo potenciado del neoliberalismo, pudiera ser factible el advenimiento de una tercera revolución social para México.

⁵⁶ V. gr. el caso de los dirigentes de El Barzón, el caso del doctor Ignacio Burgoa, juristas del Departamento de Derecho de la UAM y de la Barra Latinoamericana de Abogados, y dirigentes de la Barra de Abogados como Javier Gómez Coronel, así como los integrantes de la Unión de Juristas de México.

⁵⁷ Concretamente, nos referimos a la posibilidad de que el Poder Legislativo reforme las leyes correspondientes, regulando estrictamente la figura del anatocismo, prohibiendo el abuso de las instituciones financieras para con los deudores, y estableciendo la protección

Poder Judicial y el Ejecutivo, y las instituciones financieras, rectifiquen su posición al respecto, por el bien de la nación, el desarrollo, la paz y la prosperidad de la ciudadanía y el pueblo de México.

BIBLIOGRAFÍA

- Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, *Proceso, autocomposición y auto-defensa*, México, UNAM, 1970.
- Ambriz, Agustín, "Con su fallo, la Suprema Corte se propone 'permitir todo' a los bancos, tras disfrutar de intereses 'congelados'", *Proceso*, núm. 1146, México, 18 de octubre de 1998.
- "Vicente Aguinaco hace un balance de su cuatrienio en la Suprema Corte de Justicia. 'Nuestras actitudes podrán satisfacer a unos y a otros no, pero la labor del juzgador es ésta: dar el derecho a quien lo tiene y negarlo a quien no lo tiene'", *Proceso*, núm. 1146, México, 18 de octubre de 1998.
- Annas, Julia, *An introduction to Plato's Republic*, Oxford, Clarendon Press, 1981.

jurídica necesaria para aquellos que adquieran una casa habitación a través de un crédito bancario. Al respecto, véase la propuesta legislativa que realizamos Rebeca Pujol y Eduardo Torres, para legislar sobre la figura del anatocismo en el Distrito Federal, para el foro convocado por los tres poderes del Distrito Federal, con el fin de discutir y aprobar el Anteproyecto del Nuevo Código Civil para el Distrito Federal, presentado ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, el 5 de febrero del año 2000, titulada Proyecto de Reformas al Título Quinto, Capítulo II, "Del mutuo con interés", artículos 2393 al 2397, y aprobada por unanimidad en el foro respectivo. Debe comentarse que, no obstante la aprobación de este proyecto, el mismo finalmente no fue turnado para la votación final de los diputados de la Asamblea Legislativa toda vez que el grupo de asesores jurídicos de este parlamento, encargado de revisar los trabajos finales del foro, decidió archivarlo ante las amenazas y componendas propuestas por los banqueros, en el sentido de que si se aprobaba la propuesta para regular al anatocismo, los bancos no otorgarían un solo crédito para conjuntos de vivienda popular, tema que por razones electorales era neurálgico para el clientelismo potencial de algunos diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. (Véase el capítulo segundo del volumen II de esta obra, titulado "La resolución sobre anatocismo y la ruptura del contrato social"). Es posible, también, consideramos, que el Poder Ejecutivo tomara algunas acciones específicas (v.g., *la expropiación de los bienes en conflicto*) para proteger a los deudores en sus derechos básicos, otorgándoles las garantías legales y necesarias a las instituciones financieras.

- Arteaga-Nava, Elisur, *Derecho constitucional*, México, Oxford University Press/Harla, 1998.
- Bianco, José, *Voltaire y Diderot. Obras escogidas*, "Interpretación de la Naturaleza", Selección y Estudio Preliminar por José Bianco, vol. XXII, Barcelona, Océano, 1990.
- Bodenheimer, Edgar, *Teoría del derecho*, México, FCE, 1994.
- Borges, Jorge Luis, *Nueva antología personal*, Barcelona, Bruguera, 1980.
- Burnet, John, *Greek philosophy, Tales of Plato*, London, MacMillan.
- Brun, Jean, *Platon et l'Académie*, Trosième Edition, París, Press universitaires de France, 1966.
- Cappeletti, Mauro y Brian Garth, *El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos*, México, FCE, 1978.
- Castro, Juventino, *La mutación estructural del derecho en México*, México, Porrúa, 1998.
- , *La Suprema Corte de Justicia ante la ley injusta*, México, Porrúa, 1998.
- CEPAL (Luis Ratinoff y Dennis Goulet), *Educación, ética y economía en América Latina*, México, JUS-Centro Lindavista, 1998.
- Cervantes-Saavedra, Miguel, *Don Quijote de la Mancha*, España, Folio, 2 vols., 1999.
- Cosío- Villegas, Daniel, *El sistema político mexicano*, México, Joaquín Mortiz, 1982.
- Cortiñas-Peláez, León, *Poder Ejecutivo y función jurisdiccional*, cf., "Apuntes de Battle (1913)", punto 7, p. 35, México, UNAM, 1982.
- , "Jurisdicción administrativa y tecnocracia judicial", capítulo en el libro colectivo *Homenaje al Doctor Eloy Lares Martínez*, 2 vols., Caracas, Instituto de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1984.
- , "De la concepción autoritaria y de la concepción democrática en el derecho administrativo", México, *Alegatos*, núm. 20, UAM/A, 1992.
- , "Democracia, totalitarismo y neoliberalismo en la ciencia del derecho administrativo", *Revista de Ciencias Jurídicas*, núm. 72, Costa Rica, Colegio de Abogados, 1992, pp. 9-52.

- , "Separación o división de poderes: respecto del parteaguas entre administración y jurisdicción", *Alegatos*, núm. 38, México, UAM/A, 1998, pp. 5-32.
- , *Fundamentos de derecho económico*, México, Porrúa, 1998.
- Crossman, R., *Plato today*, Londres, Unwin Books, 1971.
- Palacio, Alejandro del, *Neoliberalismo y revolución. Crisis y necesidad de cambio*, México, Claves Latinoamericanas.
- Dror, Yehezkel, *La capacidad de gobernar*, Informe al Club de Roma, México, FCE, 1996.
- "Expulsión de los vendedores del templo", en *Biblia de Jerusalén*, Bilbao, Desclée de Brower, S.A.
- Franklin, Benjamín, *El libro del hombre de bien*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1941.
- Guerra, Francois-Xavier, *México: del antiguo régimen a la revolución*, México, FCE, 1995.
- Lassalle, F., *¿Qué es una constitución?*, México, Colofón, 1996.
- López-Narváez, Froylán, "El supremo juez de la Suprema Corte", *Proceso*, núm. 1145, México, 11 de octubre de 1998, p. 31.
- Friedman, Milton y Rose, *Free to choose*, Nueva York, Avon, 1980.
- Fuentes, Carlos, *Por un progreso incluyente*, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1997.
- , *El espejo enterrado*, México, FCE, 1992.
- García-Maynes, Eduardo, *Teorías sobre la justicia en los diálogos de Platón*, México, Porrúa/UNAM, 1988.
- , *Introducción a la lógica jurídica*, México, Colofón, 1987.
- García-Ramírez, Sergio, *Poder Judicial y ministerio público*, México, Porrúa, 1997.
- Gracian, Baltasar, *El arte de la prudencia*, España, Diez Fernández, 1995.
- Gómez-Lara, Cipriano, *Teoría general del proceso*, México, UNAM, 1974.
- Goethe, Johann W., *Obras completas*, vol. I, México, Aguilar, 1991.
- Guéhenno, Jean-Marie, *El fin de la democracia*, Barcelona, Paidós, 1995.
- Guillén, Romo, *La contrarrevolución neoliberal*, México, Era, 1997.
- Havelock, Eric A., *The Greek concept of justice. From its shadow in homer to its substance in Plato*, Cambridge, Harvard University Press, 1978.
- Hirsch-Weber, Wolfgang, *La política como conflicto de intereses*, Madrid, Tecnos, 1972.

- Hobbes, Thomas, *Leviathan, or, matter, form, and power of a commonwealth ecclesiastical and civil*, Nueva York, Encyclopaedia Britannica, 1952.
- Höffe, Otfried, *Estudios sobre teoría del derecho y la justicia*, (Biblioteca de Ética, Filosofía, del Derecho y Política, 19), Barcelona, Fontamara, 1997.
- Humbert, Jean, *Socrates et les petits socratiques*, París, Presses universitaires de France, 1967.
- Huxley, Aldous, *Nueva visita a un mundo feliz*, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.
- Ianni, Octavio, *Teoría de la globalización*, México, Siglo XXI, 1999.
- Jáñez, Antonio, "Aguinaco Alemán, presidente de la Suprema Corte, defendió en 1983 a los banqueros expropiados... y perdió un amparo", *Proceso*, núm. 1146, México, 18 de octubre de 1998, p. 16.
- Kelsen, Hans, *Teoría general del derecho y del Estado*, México, UNAM, 1995.
- Las mil una noches* (Sepan Cuántos 136), México, Porrúa, 1997.
- Maquiavelli, Nicolo, *The Prince*, Nueva York, Encyclopaedia Britannica, 1970.
- Mariel, Yolanda, *El tribunal de la Inquisición en México*, México, Porrúa, 1984.
- Montesquieu, Charles de Secondat, *Grandeza y decadencia de los romanos*, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1942.
- Molière (Juan Bautista Poquelin), *Obras inmortales*, Madrid, EDAF, 1978.
- Montemayor, Carlos, "El derecho a la dignidad", *Proceso*, núm. 1147, México, 25 de octubre de 1998, pp. 36-37.
- Novoa-Monreal, Eduardo, *El derecho como obstáculo al cambio social*, México, FCE, 1975.
- Paz, Octavio, *Lo mejor de Octavio Paz. El fuego de cada día*, México, Seix Barral, 1998.
- Pérez-Carrillo, Agustín, "Reforma del Estado y Suprema Corte de Justicia de la Nación", en *Diálogo y Debate de Cultura Política. La Reforma al Poder Judicial*, año 2, núm. 7, México, Centro de Estudios para la Reforma del Estado, A.C., enero-marzo de 1999.

- , “El anatocismo visto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿Solución correcta?” *Alegatos*, núm. 41, enero-abril de 1999.
- Rabasa, Emilio, *La constitución y la dictadura*, México, Porrúa, 1998.
- Rabasa, Emilio y Gloria Caballero, *Mexicano: ésta es tu constitución*, México, Porrúa/LVI Legislatura, Cámara de Diputados, 1997.
- Ricken, Friedo, *Ética general*, Barcelona, Herder, 1987.
- Robledo, Edgar, *La vida de Belisario Domínguez*, México, SEP, 1987.
- Rodell, Fred, *¡Ay de vosotros abogados!*, Buenos Aires, Depalma, 1994.
- Rodríguez, Antonio, *El Quijote, mensaje oportuno*, México, FCE/CREA, 1984.
- Russell, Bertrand, *A history of Western philosophy*, Nueva York, Simon and Schuster, 1945.
- Sartori, Giovanni, *Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*, México, FCE, 1996.
- Alfonso Sastre, *La batalla de los intelectuales. Nuevo discurso de las armas y las letras*, Buenos Aires, Clacso, 2005.
- Savater, Fernando, *El valor de educar*, México, Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, 1997.
- , *Ética como amor propio*, México, Conaculta/Grijalbo, 1991.
- Shopenhauer, Arthur, *El arte de tener razón*, Madrid, EDAF, 1996.
- Soberanes-Fernández, José Luis, *Los tribunales de la Nueva España. Antología*, México, Porrúa, 1980.
- Soros, George, *La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro*, México, Plaza&Janés, 1999.
- Suprema Corte de Justicia, *75 decisiones relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1998.
- Tena-Ramírez, Felipe, *Leyes fundamentales de México 1808-1997*, México, Porrúa, 1997.
- Torres, Eduardo “La ingeniería jurídica de las constituciones, los modelos económicos y la evolución del derecho procesal constitucional”, en *Derecho Procesal Constitucional*, 4a. ed. México, Porrúa, 2004, pp. 541-597.
- , “Proyecto constitucional, economía mixta y los inicios de la ingeniería constitucional del neoliberalismo en México: el

periodo 1982-1988", en *Alegatos*, núm. 41, UAM-A, México, 1999, pp. 79-86.

———, *Tiempo compartido en México*, México, UAM, 1992.

Eduardo Torres y Jaime Ramirez (coords.), *Reforma del Estado, políticas públicas y problemas socioeconómicos del México contemporáneo*. México, UAM, 2001.

Villegas, Abelardo, *Violencia y racionalidad*, México, UAM, 1985.

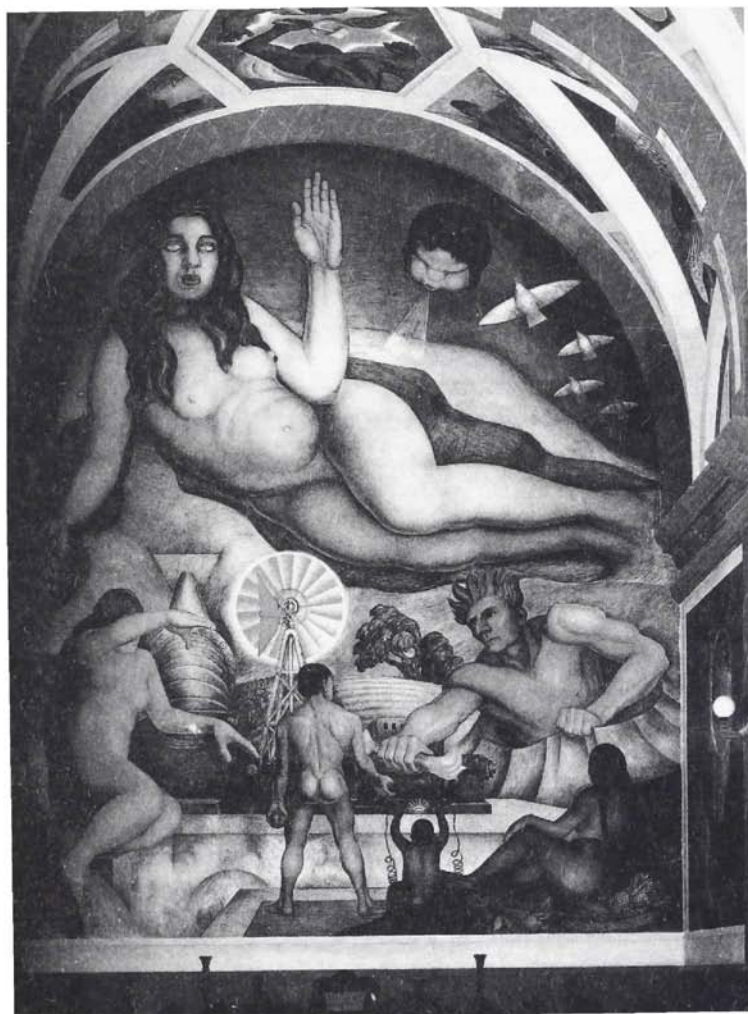
Wallerstein, Immanuel, *Después del liberalismo*, México, Siglo XXI, 1996.

Weber, Max, *El político y el científico*, México, Colofón, 1997.

Wellmer, Albrecht, *Ética y diálogo. Elementos del juicio moral en Kant y en la ética del discurso*, Barcelona, Anthropos/UAM, 1994.

Wittgenstein, Ludwig, *Conferencia sobre ética*, México, Paidós/ICE-UAM, 1997.

Wizansky, Charles E. Jr., *Reflexiones de un juez. La función judicial, la ética y el derecho (...)*, 1967.



⇨ *"La tierra fecunda"*, 1927. Diego Rivera. Capilla Riveriana de la Universidad Autónoma de Chapingo, México. Archivo fotográfico Torresagaton. Crestomatía.

Anexo 1

Propuesta legislativa presentada por el Dr. Eduardo José Torres Maldonado y la Maestra Rebeca Pujol, para el Anteproyecto del Nuevo Código Civil para el Distrito Federal, presentada ante la Comisión de Justicia, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I Legislatura, el 5 de febrero del año 2000, y aprobada por unanimidad en el foro respectivo.

Proyecto de Reformas al Título Quinto, Capítulo II, "Del Mutuo con interés", artículos 2393 al 2397.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

LAS REFORMAS AL TÍTULO QUINTO, Capítulo II, "Del mutuo con interés" del Código Civil, actualizan y modernizan las normas que regulan las relaciones sociales producidas o por producirse por la celebración de contratos de mutuo con interés, de acuerdo a los cambios socioeconómicos experimentados al final del siglo XX, y atendiendo a la evolución de las relaciones socioeconómicas que se previenen para el siglo XXI.

Estas reformas al contrato civil de mutuo con interés no sólo regulan el presente y futuro de las relaciones jurídicas en torno a esta figura, sino que también toman en cuenta el pasado histórico-jurídico, que sigue vigente con las directrices y mandatos de interpretación jurídica contenidas en la Exposición de Motivos del Código Civil de 1928. Estas reformas pretenden, concretamente, resolver y bien orientar cualquier problema de interpretación de

las normas que regulan al contrato de mutuo con interés, evitando anomías y proporcionando bases para orientar la interpretación judicial contemporánea.

Retomamos, modernizándolo, el pensamiento capital de la Exposición de Motivos del Código Civil de 1928, para resaltar su pertinencia y vigencia, consistiendo este pensamiento capital en: "Armonizar los intereses individuales con los sociales, corrigiendo el exceso de individualismo que impera en el Código Civil de 1884". Es decir, los intereses individuales deben armonizarse con los intereses sociales, evitando los excesos del liberalismo del siglo XIX, o bien, actualizando a la época contemporánea este pensamiento capital, evitando los excesos del neoliberalismo de fines del siglo XX y principios del siglo XXI.

Como bien establece la Exposición de Motivos de 1928, el Estado debe intervenir con prudencia para regular los excesos del mercado y garantizar en un marco de libertad, la justicia, la equidad, el desarrollo y la paz social. La intervención sabia y equilibrada del Estado en la vida económica y social, desmitificando las fórmulas mágicas de las doctrinas del exceso intervencionista gubernamental, por un lado, y por otro lado, del modelo liberal del pasado siglo XIX, así como más recientemente, del modelo neoliberal del presente, que consideran al *laissez faire et laissez passer*, y a la creencia esotérica de la *invisible hand* como la fórmula infalible para regir las relaciones sociales, debe orientarse por criterios científicos, racionalidad objetiva y conciencia humanista. La creencia en esta "mano invisible" que aparentemente regularía los problemas sociales basada en el supuesto equilibrio de la oferta y la demanda como criterios rectores de la economía y la sociedad, se ha revelado como una falacia sumamente peligrosa y nociva para el bienestar colectivo e individual y la armonía social. Por lo tanto, reorientar adecuadamente la acción equilibradora del Estado en la sociedad y la economía es requisito indispensable para terminar con las peligrosas creencias y prácticas financieras y mercantiles que lesionan gravemente los intereses de la colectividad y que en otros tiempos han provocado el surgimiento de revoluciones sociales en México y en el mundo.

Reactivando el principio de solidaridad y evitando favorecer el individualismo liberal mercantil y el neoliberalismo financiero y mercantil a ultranza, adecuamos nuestras normas y estructuras sociales para mejor resistir y prever los embates negativos de la globalización. Muchos de los principios doctrinarios que orientan a la globalización, en buena parte, son similares a los vetustos criterios del Código Civil de 1884, y propician criterios y prácticas antagónicas a los mandatos de interpretación de la Exposición de Motivos y al contenido del Código Civil de 1928. Es trabajo del Poder Legislativo contemporáneo resolver este antagonismo de principios, procediendo a reactivar, actualizar y mejorar aquellos principios jurídicos y sociales que nos legaron la Constitución de 1917 y el Código Civil de 1928, retomando los aspectos positivos de la globalización y estableciendo criterios claros para resolver los problemas que los aspectos negativos del neoliberalismo provocan en las sociedades contemporáneas.

La intervención del Estado debe, sin embargo, ser prudente y adecuada. Deben evitarse, especialmente, los excesos del neoliberalismo cuando, en aras de un supuesto equilibrio de mercado, la intervención estatal se orienta a favorecer a los grupos económicos y financieros más poderosos, rompiendo el supuesto poder regulador de la "mano invisible" que la misma doctrina neoliberal pregonaba, permitiéndoles obtener a los grupos más poderosos lucros excesivos a costa de los más vulnerables económicamente. En estas reformas se reactivan y modernizan, por lo tanto, los principios de solidaridad y justicia social y la sabia intervención estatal a través de la acción legislativa, que nos permiten conciliar el desarrollo económico y la justicia social, en un marco de libertad de contratación, equidad e igualdad, tomando en cuenta tanto los intereses individuales como los intereses sociales.

En este orden de ideas, en estas reformas se precisan ciertos criterios reguladores de la libertad de contratación en contratos de mutuo con interés, sobre todo en tratándose de los llamados pactos de anatocismo, simulaciones, y todo acto jurídico que lesiona drásticamente la libertad contractual, contraviniendo las normas existentes en el Código Civil vigente y los principios de su Exposición de Motivos, que expresamente establecen limitaciones cate-

góricas de orden público e interés social a los abusos, lucros indebidos y engaños de una parte, que vulneran los principios rectores del libre albedrío y la sana voluntad de las partes para contratar.

Atendiendo a la herencia histórico-social de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Exposición de Motivos y al texto del Código Civil de 1928, se actualizan y revitalizan los principios de socialización del derecho y fin social del mismo, con el objeto de restablecer las bases jurídicas para que, en lo futuro, los intereses específicos de un grupo social no prevalezcan injustamente sobre los intereses y bienestar de la sociedad en su conjunto. Permitir que las fuerzas del mercado rijan indiscriminadamente las relaciones sociales y que la ley del más fuerte, avalada por la "mano visible" del Estado, impere en los contratos y litigios, es retornar a tiempos atávicos y a criterios decimonónicos civilistas, cuyos excesos de hecho y de derecho fueron una de las causas de la Revolución de 1910.

Respetando y asumiendo el principio de división de poderes en una República, es tarea, obligación y potestad del Poder Legislativo regular los desequilibrios manifiestos y latentes que se produzcan en las relaciones jurídicas con motivo de cambios socioeconómicos, cualesquiera que sea su fuente de origen. El derecho debe ser un medio de cambio, prevención y evolución social y no simplemente una técnica de control, sanción y retroceso social. Los cambios jurídicos deben, además, tomar en cuenta la realidad nacional, antes que simplemente imitar acríticamente modelos de política económica y jurídica ajenos a la identidad, la cultura y la forma de ser histórico-social de los mexicanos. El derecho mexicano, analizando objetivamente los espejismos y falacias de la globalización, debe tomar de influencias externas únicamente aquellos elementos positivos que fortalezcan la idiosincrasia de la gente mexicana y refuercen sanamente la competitividad de sus ciudadanos, instituciones y empresas, atendiendo tanto a las necesidades de su mercado nacional como a las demandas del mercado exterior, privilegiando ante todo la salud de su economía y sociedad nacional.

En virtud de que los pactos de anatocismo han ocasionado serios conflictos jurídicos que desequilibran la paz social, por la aplicación injusta e irracional de los principios neoliberales mercantiles y fi-

nancieros a las relaciones sociales, provocados por aludidas anomías en el Código Civil, es menester que el parlamento se avoque a su función legislativa de elaborar normas generales, abstractas e impersonales, que regulen los contratos de mutuo con interés para subsanar cualesquier anomia o duda posible en el sistema jurídico mexicano, proporcionando a los particulares, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo reglas jurídicas claras y precisas en la materia.

Las presentes reformas sobre el contrato de mutuo con interés tienen por objeto, consecuentemente, restablecer la paz social y la seguridad jurídica en las relaciones socioeconómicas, regulando las situaciones específicas y concretas de los pactos de anatocismo y los contratos de mutuo con interés, que han provocado peligrosos e indeseables conflictos sociales. La finalidad principal del legislador es restablecer el equilibrio en las relaciones contractuales, en un marco de libertad, seguridad, fraternidad, solidaridad social, equidad, justicia, igualdad, libre albedrío contractual, y respeto a la propiedad y al derecho de los ciudadanos a adquirir una casa-habitación, procurando el bienestar familiar, social e individual en un marco de justicia social, que impulse el desarrollo económico y fortalezca los principios rectores y la viabilidad del Estado de Derecho en México.

TEXTO FINAL DE LA PROPUESTA
PARA EL “ANTEPROYECTO DE NUEVO CÓDIGO CIVIL”¹

Propuesta legislativa

Artículo—.- Las disposiciones contenidas en los artículos de este Capítulo II, del mutuo con interés, son de orden público e interés

¹ Éste fue el texto final, modificado y aprobado, de una de las diversas propuestas presentadas por el doctor Eduardo Torres y la maestra Rebeca Pujol, ante el foro convocado por los tres poderes del Distrito Federal, y que formó parte del documento “Anteproyecto de Código Civil del Distrito Federal”, en el año 2000. Esta propuesta se anexa, simplemente, de manera ejemplificativa, respecto de la posibilidad de legislar sobre el complejo tema del anatocismo, entendiendo que la misma es perfectible y puede ser mejorada.

social, por lo tanto, son irrenunciables y en consecuencia cualquier estipulación en contrario, se tendrá por no puesta. Cualquier disposición en contrario a lo establecido en este capítulo, en los contratos de mutuo con interés, se entenderá como nula, debiendo el juez del conocimiento, de oficio, proceder a la declaración de nulidad. Con independencia de la denominación o forma que se le dé al contrato, cuando éste contenga los elementos del contrato de mutuo interés, se regirá exclusivamente por las normas de este capítulo. Es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en dinero, ya en géneros.

Artículo—. Cuando uno de los contratantes en los contratos de mutuo con interés que tenga por objeto la adquisición de casa habitación sea un particular y el otro contratante sea una institución bancaria o financiera, se aplicará exclusivamente la legislación civil, con exclusión de cualquier otra disposición en otros ordenamientos jurídicos.

Artículo—. bis. El interés es legal o convencional. El interés legal es el nueve por ciento anual. El interés convencional es el que fijan los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, deberá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.

En caso de pactarse interés convencional, y en atención a que el mutuo con interés es un contrato sinalagmático, el interés pactado debe ser cierto y determinado, o determinable en su caso, fijando ambas partes un porcentaje máximo para el cobro de dichos intereses convencionales, evitándose en todo momento un lucro indebido, en perjuicio de la persona física.

En el caso del contrato de mutuo con interés que tenga por objeto la adquisición de casa habitación, cuando el juez civil advierta que existe un lucro indebido en términos del párrafo anterior y el artículo 17 de este ordenamiento, declarará de oficio la nulidad absoluta del contrato.

En el caso de que el contrato de mutuo con interés no satisfaga los requisitos mencionados en el Artículo—, el contrato de mutuo

con interés, será nulo de pleno derecho, debiendo declarar de oficio el juez civil dicha nulidad.

Quedan prohibidos para la celebración del contrato de mutuo con intereses, los contratos de adhesión, unilaterales y leoninos.

Artículo—.- El contrato de mutuo con interés que tenga por objeto la adquisición de casa habitación a que se refiere el artículo—, deberá contener al menos los siguientes requisitos:

I. Consentimiento, que comprende el entendimiento y la aceptación expresa por escrito del particular, del contrato respectivo.

II. Viabilidad del financiamiento que contendrá la especificación de:

- a) Un modelo financiero claro, preciso y determinado, que establezca los procedimientos para determinar los pagos a capital e intereses que se pacten en el contrato de manera entendible para el común de la gente.
- b) El modelo financiero deberá ser avalado por un estudio previo y específico, contable, financiero y matemático, realizado por perito en la materia designado a elección y satisfacción del particular.
- c) El peritaje señalado en el inciso anterior deberá concluir si el modelo financiero propuesto en el contrato de mutuo con interés es viable o no. El modelo financiero será viable cuando su cumplimiento sea posible en términos de su pago, procedimientos, intereses, plazos y tomadas en consideración las posibilidades económicas del particular adquirente de la casa habitación.
- d) En caso de que el contrato de mutuo con interés no satisfaga los requisitos mencionados con anterioridad, el contrato de mutuo con interés, será nulo de pleno derecho.

III. El valor del inmueble objeto del contrato deberá corresponder al valor declarado en el contrato, que deberá ser acreditado mediante avalúo de perito en la materia, a satisfacción expresa del particular.

Artículo—.- bis. Queda expresamente prohibido en el caso del contrato de mutuo con interés, que tenga por objeto la adquisición

de casa-habitación, la utilización de medidas o unidades financieras fijas o variables que sean utilizadas para calcular los pagos e intereses del contrato y que representen un perjuicio para el particular. En todo caso, deberán observarse los criterios previstos en el artículo _ _ _ de este ordenamiento jurídico.

Se prohíbe la apertura de líneas de crédito adicionales al contrato de mutuo con interés, no solicitadas, no entendidas o no autorizadas expresamente por escrito por el particular.

Bajo ningún concepto podrá pactarse, con independencia de la denominación o forma que se le dé al contrato, la capitalización de intereses, o de intereses sobre intereses en el caso de una ampliación de crédito. Toda ampliación de crédito se entenderá como un nuevo contrato sujeto a las disposiciones de este título, capítulo y ordenamiento jurídico.

Artículo—.- Si se ha convenido un interés más alto que el legal, el deudor, después de seis meses, contados desde que se celebró el contrato, puede reembolsar el capital, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con dos meses de anticipación y pagando los intereses vencidos.

En los contratos de mutuo con interés, que tengan por objeto la adquisición de casa-habitación, cuando las partes hubieren establecido un interés excesivo, los jueces evitarán dicho interés y el consecuente lucro excesivo de una parte en perjuicio del particular, y en caso de duda deberán reducirlo al interés legal. En todo caso, se estará a lo dispuesto a los artículos _ _ _ _ _ y _ _ de este ordenamiento, teniendo el particular el derecho de ejercer la acción de nulidad del contrato, o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de daños y perjuicios, durante un periodo equivalente a la mitad del tiempo pactado para el pago del crédito, contado a partir del momento en que conozca del lucro excesivo en su contra.

Artículo—.- Las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.

Son nulos los contratos o convenios que establezcan o impliquen capitalización de intereses o capitalización de interés sobre interés, o cualquier variante del anatocismo. Se entiende por ana-

tocismo o interés compuesto los pactos o convenciones en los cuales se conviene pagar intereses sobre intereses, es decir, la capitalización de los intereses correspondientes a un préstamo con el objetivo de lograr que, a su vez, los intereses mencionados produzcan otros intereses. El anatocismo debe entenderse como una forma de usura y lesión de la voluntad que persigue un lucro indebido, por lo que es de orden público e interés social declarar su nulidad absoluta. De oficio, el juez que advierta que existe pacto de anatocismo en el contrato deberá dar vista al ministerio público e iniciar el incidente criminal en el juicio.

En todo caso, cuando un particular incumpla con los pagos contratados, únicamente incurrirá en mora, prohibiéndose estrictamente la capitalización de intereses sobre intereses o cualquier modalidad del anatocismo de acuerdo a lo dispuesto en este capítulo.

Juzgar a la Suprema Corte, Vol. I.
El caso de la Resolución sobre Anatocismo
y sistema financiero en México,
se terminó de imprimir en junio de 2008.

La edición e impresión estuvo al cuidado de:
SM, Servicios Gráficos, tel. 5341 7480,
sm.serviciosgraficos@gmail.com

La edición de 500 ejemplares,
en formato media carta de 264 páginas,
fue impresa en offset
sobre papel cultural de 90 gramos
y sus terminados en rústica cosida.

- Ordenar las fechas de vencimiento de manera vertical.
- Cancelar con el sello de "DEVUELTO" la fecha de vencimiento a la entrega del libro

- Ordenar las fechas de vencimiento de manera vertical.
- Cancelar con el sello de "DEVUELTO" la fecha de vencimiento a la entrega del libro



2895841

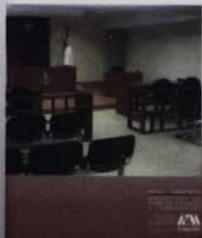
UAM
KGF787
J8.8
v.1

2895841

Juzgar a la Suprema Corte

Primer Congreso Nacional sobre Formación Jurídica

Agustín Pérez Carrillo
Coord.



**Primer Congreso Nacional
sobre Formación Jurídica**
Agustín Pérez Carrillo (Coord.)


alegatos

67



Alegatos No. 67

ADMINISTRACIÓN
DERECHO
ECONOMÍA
HUMANIDADES
SOCIOLOGÍA



Pensar es juzgar. Si la función del intelectual es decir la verdad, la del jurista es luchar por la justicia. Esta lucha por la verdad, la justicia y la libertad es parte histórica del proceso de conquista de la felicidad de la Nación. Las ciencias sociales tienen tanto o más valor que las ciencias nucleares. La autopercepción de la Corte y la percepción de la ciudadanía suelen en nuestros días diferir profundamente. ¿Qué garantías constitucionales viola la resolución sobre anatocismo? ¿Cómo se instrumentaron legal, financiera y económicamente los créditos usureros y fraudulentos con intereses sobre intereses sobre los ahorradores? ¿Por qué una sentencia o resolución judicial errónea, inconstitucional, ilegal, inhumana e ilegítima, como la del anatocismo, fue impuesta por la élite del poder judicial? ¿Qué hicieron *de iure* y *de facto* los banqueros, y sus abogados y sus notarios, y los jueces, para exigir de cualquier forma el cumplimiento de los contratos de anatocismo? ¿Por qué se suicidaron diversos "deudores"? ¿Es posible "juzgar a la Suprema Corte" y evaluar al poder judicial?

Eduardo Torres